

INDIOS, MILITARES
E IMAGINARIOS DE NACIÓN
EN EL ECUADOR DEL SIGLO XX

INDIOS, MILITARES
E IMAGINARIOS DE NACIÓN
EN EL ECUADOR DEL SIGLO XX

CECILIA ORTIZ B.



Indios, militares e imaginarios de nación en el Ecuador del siglo XX

Cecilia Ortiz B.

1a. edición: Ediciones Abya-Yala
Av. 12 de octubre 14-30 y Wilson
Casilla 17-12-719
Telef: 2506-251 / 2506-247
Fax: (593 2) 2506-255 / 2506-267
e-mail: editorial@abyayala.org
[http://: www.abyayala.org](http://www.abyayala.org)

Diseño, diagramación
e impresión: Ediciones ABYA - YALA

ISBN 10: 9978-22-619-2
ISBN 13: 978-9978-22-619-3

FLACSO ISBN 10: 9978-67-112-9
FLACSO ISBN 13: 978-9978-67-112-2

Impreso en Quito-Ecuador, junio, 2006

Tesis presentada para la obtención del título de Maestría en Ciencias Sociales con
especialización en Ciencia Política de FLACSO, Ecuador en diciembre de 2004

Autor: Cecilia Ortiz Batallas

Tutor: Fredy Rivera Vélez

AGRADECIMIENTO

Este trabajo de investigación es el resultado de los estudios que realicé para la obtención del título de Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política en FLACSO, Ecuador. Conté con el apoyo económico del Proyecto de Financiamiento de Becas del Programa de Políticas Públicas y Gestión de FLACSO-Ecuador, con recursos del Fondo de Solidaridad, por lo que dejo constancia de mi agradecimiento.

Lo hago igualmente, con el Dr. Adrián Bonilla, Director de FLACSO-Ecuador, por su interés para que esta publicación se hiciera realidad, y con los profesores Fredy Rivera, tutor del trabajo; Felipe Burbano de Lara y Carlos de la Torre, integrantes del tribunal de calificación. Expreso mi gratitud, del mismo modo, a Salomón Cuesta quien realizó una detenida lectura de la versión final y aportó con sus observaciones y comentarios.

El levantamiento de la información lo realicé básicamente en las Bibliotecas del Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la Hemeroteca de la PUCE, en la Biblioteca de Autores Ecuatorianos Aurelio Espinosa Pólit y en la Biblioteca de FLACSO, agradezco el apoyo brindado por el personal de estos repositorios, especialmente a Alex Álvarez de FLACSO. Los generales José Gallardo Román, Homero Berrazuela y el Coronel Patricio Haro aportaron con sus opiniones y conocimientos en el campo de estudio en las entrevistas que les formulé,

que se recogen en este trabajo, quiero agradecerles sinceramente en esta oportunidad.

Expreso mi gratitud a la editorial Abya Yala; a Alicia Torres, del Programa Editorial de FLACSO, y a Antonio Mena, quienes tuvieron a su cargo la edición y portada del libro. Finalmente, agradezco a Juan, Martina y Alegría por su comprensión para conmigo en este proceso de producción intelectual que acompañaron y alentaron con la calidez y el amor que se requieren para culminar los proyectos que se inician.

Quito, abril de 2006

“...el mundo es menos ‘dado’, y tiene de modo creciente que ser construido. Pero ésta no es solo una construcción del mundo, sino que a través de ella, los agentes sociales se transforman a sí mismos y se forjan nuevas identidades...”

Ernesto Laclau, 1990

ÍNDICE DE CONTENIDOS

<i>Introducción</i>	11
<i>Capítulo I:</i>	
• Instrumentos teóricos: ‘Lo militar’ frente a ‘lo indígena’	21
<i>Capítulo II:</i>	
• Un proyecto civilizatorio con enfoque defensivo.....	55
<i>Capítulo III:</i>	
• La modernización del agro y la integración de los indios en la comunidad imaginada: un proyecto de largo aliento	105
<i>Capítulo IV:</i>	
• La respuesta indígena: la integración como opción política....	153
<i>Capítulo V:</i>	
• Indígenas e imaginarios de nación: el discurso militar de fin de siglo	201
<i>Capítulo VI:</i>	
• Reflexión final	243
<i>Bibliografía</i>	249

INTRODUCCIÓN

Las condiciones históricas, sociales, políticas, económicas y estructurales del país determinan el rol preponderante que tienen los militares en la construcción de la cultura política¹, de las formas que adoptan el Estado y la nación en Ecuador. En los elementos constitutivos de la mentalidad militar se identifican muchas de las concepciones que fundamentan su accionar en la construcción de la comunidad que imaginan (Wallerstein y Balibar, 1986) y las formas de penetración que implementan en las sociedades en las que operan para difundir su *militarylore* o su *ethos* particular (Loveman, 1999; 1997).

La participación directa de los militares en las decisiones que desde el deber ser son de incumbencia exclusiva del sector civil responde al constante estado de desarticulación interna que viven los ‘decisiones’ civiles de la política que aceptan el tutelaje de la democracia que se arrogan para sí los militares con miras a “controlar el conflicto” (Fitch, 1977).

Con una percepción de la realidad que hace analogía con la guerra, esta visión de indispensabilidad la heredan los militares de las corrientes del prusianismo que los profesionalizan desde las primeras décadas del siglo XX (Rouquié, 1981; 1984) y que se complementan desde la década de los 50 en escuelas militares estadounidenses que difunden la Doctrina de Seguridad Nacional en el contexto de la Guerra Fría (Fitch, 1977), ambas influencias ideológicas resultan coincidentes y refuerzan la concepción sobre sí mismos que desarrollan los militares en Ecuador, a más de sus propias percepciones sobre el medio que los ro-

dea (Loveman, 1999). Estos principios los adquieren en espacios de formación exclusivos para ellos que los dotan de una visión particular de la realidad y de un espíritu de cuerpo (Goffman, 2001).

En Ecuador, los militares están presentes en la esfera política a lo largo de toda su historia republicana, con honda influencia en la sociedad civil, en la construcción de imaginarios en torno al Estado y la nación, a la defensa y a la guerra, al significado de ciudadanía. Son actores protagónicos y antagónicos en la definición de la cultura política ecuatoriana con una participación que se ve legitimada por el resto de la sociedad por su calidad de defensoras de la soberanía nacional.

Las cúpulas militares alcanzan el poder tras golpes de Estado que justifican en la “incapacidad de gobernar” de los políticos civiles (Loveman y Davies, 1997; Fitch 1977); y si no ocupan el Ejecutivo, intervienen tras bastidores para “cuidar de la integridad nacional”, aunque tras la retórica se escondan intereses que no siempre busquen el beneficio de la colectividad sino otros, individuales y corporativos.

Para los militares, el poder de la nación depende de su unidad interna y sus niveles de productividad, progreso y desarrollo, sólo así pueden garantizar una acción efectiva en términos de la defensa; sin embargo, Ecuador es un país que se caracteriza a lo largo de la historia por las asimetrías y disimetrías sociales, la fragmentación política y diversidad étnica, con grupos humanos alejados de este imaginario nacional. Desde el punto de vista militar, los indios son los causantes del estancamiento del país y su discurso hacia ellos, desde principios de siglo, denigra la condición de los indígenas como analfabetos en su mayoría, salvajes, primitivos, que adoran a dioses extraños, y viven en relación de dependencia de la hacienda, explotados por los dueños de la tierra, en malas condiciones de salubridad. Son vistos como ‘miserables’ que periódicamente han dado muestras de una inconformidad que puede volverse incontrolable y atentar contra el orden interno.

Desde esta perspectiva, mal pueden los indios contribuir al incremento del poder nacional ni en cuanto a su economía, peor aún para la defensa y las exigencias de la guerra. Los militares, por tanto, se arrojan para sí la misión de construir la nación que imaginan, enmarcada en un proyecto nacional societal unitarista y homogéneo. Con este objetivo implementan una serie de estrategias civilizatorias integracionistas dirigidas a los habitantes del sector rural tanto indígenas como campesinos.

Las FF. AA. no están solas en esta empresa, desde sus perspectivas, la Iglesia, la izquierda y otros activistas del desarrollo nacionales y extranjeros coinciden en algunos de estos ideales e implementan estrategias similares, tendientes a integrar a los indios para adaptarlos en su imaginario de nación. A lo largo de todo el siglo trabajan con los indígenas a favor de la educación, la organización, la formación de líderes e introducen cambios que modifiquen su *habitus* por considerarlo disfuncional al proyecto. En este contexto, las FF. AA. cuentan con ventajas comparativas dadas por su condición de defensoras de la Patria que legitima su presencia entre el resto de la sociedad y permite que su proyecto alcance niveles de hegemonía. Condicionada por distintas realidades epocales, la acción civilizatoria de las FF. AA. y del resto de fuerzas políticas presenta distintos momentos en su intensidad que se desatan con mayor fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando Ecuador se inserta con mayor celeridad en el sistema capitalista internacional, pero que halla antecedentes en las acciones previas de militares modernizadores y de otros actores que comparten estas aspiraciones.

Los indios por su parte, van dando respuesta a los estímulos que reciben a lo largo de todo el siglo, aunque no sea siempre la que esperen sus ideólogos que los miran como adscritos al campo y sin aspiraciones políticas. Pese a sus expectativas homogeneizadoras, las élites de poder aplican políticas de la diferencia que desembocan en la elaboración, por parte de los indígenas, de un proyecto propio de integración societal que en esencia no se aleja del de sus ideólogos originales, al demandar igualmente un trato diferenciado bajo ciertas limitantes: el derecho a conducir sus propios procesos, el respeto a su indianidad, el derecho a la tierra en la que han habitado sus ancestros y a los recursos que ella produce, e incluyen entre sus demandas otras que involucran al resto de la sociedad nacional. A inicios del siglo XXI los niveles de organización política que registran los impulsan a eclosionar en la escena pública/política como un actor que se ha ganado espacio entre las élites de poder ¿Cuál es la ingerencia real de las FF. AA. en este proceso? es la pregunta que pretende contestar esta investigación y para responderla se identifican las formas de penetración que consiguen los militares en la sociedades indígenas.

¿Qué relevancia presenta la temática de estudio? El rol de los militares, como uno de los actores que direcciona el proceso de transfor-

mación de los indios en grupo de presión política en Ecuador, es un tema poco explorado en los ámbitos académicos. Este trabajo aspira a llenar de alguna manera ese vacío al vincularse con una cuestión vigente en la coyuntura actual, cuando la participación de los militares y de los indígenas en la esfera política toma roles protagónicos en la historia ecuatoriana a inicios del siglo XXI. Visualiza la problemática de análisis desde una perspectiva histórica que apunta a entender los desenlaces del presente a partir de la trayectoria que cumplen en su andar por el pasado, como partes del mismo esquema que se inscribe en la inserción del país en el proceso de modernización global.

El supuesto de partida para este trabajo es que las FF. AA. no son una entidad cohesinada y unitaria, como se la ha visto tradicionalmente y como los militares están empeñados en proyectar. En esta investigación, la institución se asume como diversa en su interior y con marcadas tendencias individuales y de grupo por parte de sus miembros; sin embargo, comparten entre sí un *militarylore* que las dota de un espíritu de cuerpo que se activa en circunstancias que pueden comprometer su integridad tanto grupal como institucional.

Los niveles de penetración societal que consiguen son verificables en las respuestas que dan los miembros de la sociedad a sus estímulos y en las coincidencias que se verifican entre éstos con relación a las estrategias de intervención. El proyecto nacional societal de los militares responde a los lineamientos del nacionalismo multicultural (Selmeski, 2002) que parte de unir lo diverso con base en la tolerancia de ciertos rasgos de la cultura indígena, y la exclusión de otros que resultan disfuncionales al esquema original. Sin embargo, esta propuesta se reacomoda de acuerdo a las respuestas que reciben en el proceso por parte de los indios.

Las vías de modernización que aplican los militares y el resto de élites, que pese a buscar la integración operan a partir de una política diferenciada hacia el mundo indígena, provocan una respuesta de los indios que toma un carácter identitario que apela al reconocimiento de derechos por su condición de ‘diferentes’ (Hobsbawm, 1991), por su calidad de minoría étnica, con niveles de organización, distintos tipos de recursos, repertorios, participación y organización que les han creado oportunidades políticas (Tilly, 2000; Calhoun, 1999).

La contrarréplica por parte de los militares conlleva una política de cooptación de las iniciativas indígenas con una visión corporativis-

ta que crea espacios de representación para determinados grupos de interés (Frank, 1993) e intenta así frenar el proceso de politización de los indios.

Los contextos metodológicos

La investigación aplica el análisis de discurso como metodología de trabajo a partir del estudio de fuentes documentales y de entrevistas a informantes calificados, particularmente desde el campo militar, acerca de los eventos que se auscultan. El análisis documental parte de los años 20 y llega hasta fines del siglo pasado e inicios del presente, de esta manera se proyecta una visión histórico-comparativa de la intervención militar en el proceso de integración de los indígenas con el resto de la sociedad ecuatoriana. Parte de una perspectiva de larga duración que permite establecer las continuidades y discontinuidades de la relación entre indios y militares a lo largo del siglo XX, expresadas a través de sus discursos y los hechos históricos que los acompañan.

Se recogen testimonios y puntos de vista diversos sobre el tema que nos ocupa. Se perciben, a través del diálogo con sus protagonistas, los lineamientos en los cuales los militares basan su proyecto nacional, a partir de las visiones de la defensa, seguridad y desarrollo y cómo enfocan a los indios en este proceso. Se analizan las características que toma la nación que imaginan los militares, así como sus percepciones en torno al indio y la relación que se da entre estas variables.

Los períodos a los que se circunscribe esta propuesta cuentan con material impreso que aglutina el pensamiento militar sobre los aspectos sociales que se relacionan con el plano defensivo. Existen publicaciones periódicas de tinte corporativo; boletines de información, revistas, etc.². Se toman en cuenta trabajos de investigación de miembros de las FF. AA. cursantes del Postgrado en Seguridad y Desarrollo que anualmente se ofrece en el Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN³- y que dan luces sobre la problemática planteada. Otro instrumento válido en este sentido, lo constituye la opinión de actores que participaron directamente en los momentos que aborda la presente investigación, o que ofrecen su punto de vista sobre hechos pasados, inscritos en el ámbito de lo militar.

No se adopta un criterio de periodización específico sino que se aplica una división temporal que se adapta a los niveles de presencia y

ausencia militar en el Poder Ejecutivo. Un primer momento cubre toda la primera mitad del siglo XX cuando no se dan estadías continuas de los militares en esta instancia de poder. Ello sí ocurre entre las décadas 60 y 70 que aparecen como un segundo bloque, para terminar con los últimos 20 años, tras el retorno a la democracia.

Si bien las ramas de las FF.AA. son la Fuerza Aérea, el Ejército o Fuerza Terrestre y la Armada, el presente trabajo enfatiza en las acciones desplegadas, a favor del desarrollo, particularmente por el Ejército, al ser ésta una de sus funciones específicas. En todo caso, tanto la Armada como la Fuerza Aérea mantienen programas de contenido social.

Si bien el análisis tiende a generalizar a los habitantes del campo como 'indígenas', ello no quiere decir que se desconozca que el sector agrícola también esté compuesto por otros grupos no indios, sin embargo, las políticas civilizatorias están orientadas a los indios y éstos en su mayoría habitan en el campo. Son los indígenas a quienes se busca integrar por sus diferencias culturales, no fenotípicas. Se toman los casos particulares de los habitantes de la Sierra y desde los 60, se analiza el proceso ocurrido en la Amazonia donde la situación adquiere visos diferentes por la explotación petrolera y la ocupación de estas zonas como si fueran deshabitadas con miras a la defensa en la frontera.

Las vías de entrada y los argumentos

El trabajo se estructura con base en 6 capítulos. En el primero se exponen los instrumentos teóricos que fundamentan la comprensión de 'lo militar' frente a 'lo indígena' y 'lo civil'. Se identifican las líneas de interpretación que se han trazado sobre esta misma temática para los casos latinoamericano y ecuatoriano y se delimita el perfil de la presente propuesta de investigación. Se analizan ciertos conceptos que emanan del mundo militar para comprender cómo se concibe su accionar, en el contexto de la construcción del *militarylore* latinoamericano y ecuatoriano.

El segundo capítulo rebusca en los discursos de los militares que emanan desde la primera mitad del siglo XX, los lineamientos básicos que dan forma al accionar castrense a favor del desarrollo y la construcción nacional a lo largo de todo el período de análisis. Tales lineamientos son el legado de los procesos de profesionalización experimentados por los oficiales ecuatorianos a cargo de la Misión Militar Chilena y de la Mi-

sión Italiana durante el siglo XX temprano. Proyectan una percepción de sus roles en la sociedad sobre la guerra, la defensa y la seguridad interna para preservar la integridad de la nación. En un segundo momento se identifican las continuidades y discontinuidades de este discurso a partir de la década de los 50, cuando en el contexto de la Guerra Fría, reciben las influencias de la Doctrina de Seguridad Nacional que llega de Estados Unidos como parte de las políticas de Seguridad Hemisférica. Se verifica la versatilidad de la que dotan los militares a sus concepciones sobre la seguridad, la defensa y la constitución de la nación imaginada, que se ajustan a los cambios tanto internos como externos.

La intervención de otros actores del desarrollo en relación de sinergia situacional con los militares es el punto que se analiza en el capítulo Tres. Se inscribe en la aplicación de la reforma agraria, entendida como un proceso de largo aliento que no se refiere sólo a las leyes que se emiten con este fin expreso durante las dictaduras militares, y arranca a fines de los años 40. Se identifican los *modus operandi* integracionistas que se aplican desde distintas tendencias hacia los indígenas que trabajan muchas veces de manera conjunta con los militares. Aquí se demuestra que la influencia norteamericana en las estrategias de aculturación indígena tiene fuerte presencia en las formas de intervención que aplican los activistas del desarrollo, incluidos los militares, que operan en el país hasta la actualidad.

El cuarto capítulo se adentra en la respuesta que dan los indígenas a los impulsos que reciben con fines integracionistas. Éstos comienzan a tomar una definición étnica-identitaria desde la segunda mitad del siglo XX, con una organización que pretende dejar de lado las influencias de otros actores. Si bien por un amplio margen temporal son ‘voces en *off*’ en este escenario –están pero de forma desarticulada– ello no anula su presencia de una u otra forma en el imaginario nacional y como problema que preocupa a las élites no indias con anterioridad al período republicano. Hacia los años 80, los indios alcanzan una etapa fructífera en su proyecto de inserción en el esquema político dominante que halla desde inicios de los 90 su mayor expresión, y trae la demanda de reconocimiento de sus nacionalidades, para lo cual aplican repertorios de protesta (Auyero, 2003) y dan muestras de contar con recursos que definen la presencia de un ‘movimiento’ indígena.

Este factor alarma a las FF. AA. que construyen un nuevo enemigo interno y enfrentan la situación desde una visión que mantiene

las tendencias integracionistas de tinte preventivo, pero con mayor intensidad. Ello provoca formas de relacionamiento entre indios y militares inéditas en la historia nacional. En este período en la Constitución de 1998 se reconoce el carácter pluricultural y multiétnico del Ecuador. La participación de los indios con cierto sector de las FF.AA. en el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000, se percibe como el colofón de cerca de 100 años de aplicación de políticas integracionistas.

En el capítulo se identifican, en las alteraciones que se producen en la linealidad que hasta entonces habían mantenido los contextos tanto internos como externos, la situación de crisis que enfrentan las FF. AA. como resultado de la firma de la paz con el Perú y los cambios de timón que se producen en su política desarrollista, cuando la interlocución entre indios y militares pasa a darse entre pares.

En el Capítulo Cinco se analizan varios elementos del discurso militar que han sido constantes a lo largo del período de estudio, con el apareamiento de nuevos sesgos que fortalecen la idea de la aceptación de la multiculturalidad como respuesta a la nueva actitud que demuestran tener los indígenas. En los albores del siglo XXI, una alianza entre indios, ex militares y militares en servicio activo sube al poder vía elecciones, acto seguido esta alianza se rompe ante la marginación de la que son objeto los indios y sus allegados de las decisiones de poder. Se muestra así la utilización de la que son objeto los indios en esa coyuntura, cuyo movimiento se ve debilitado. Cabe preguntarse finalmente si la interferencia de los militares en ámbitos que les competen a los civiles, para conseguir beneficios corporativos e individuales, no los convierte también en una amenaza que se cierne contra la integridad de la nación y el quebrantado orden interno que dicen defender.

En el Sexto Capítulo se exponen las conclusiones a las que se llegan después de este análisis que se ancla en la larga duración, y se buscan otras vertientes de investigación que se abren a partir de ésta.

Notas

- 1 La cultura política involucra actitudes, valores, creencias, ideales y experiencias que predominan en una sociedad, en torno a visiones hacia lo político, la percepción que tiene la gente sobre los sistemas políticos y sobre su propio papel en lo político (Cfr. Salman, 2003: 23).

- 2 La cantidad de publicaciones y formas de intercomunicación al interior de la institución castrense son una medida de su grado de modernización (ver Fitch, 1977).
- 3 El IAEN fue establecido en 1972 durante la administración militar de Guillermo Rodríguez Lara. Realiza posgrados anuales en Seguridad y Desarrollo que están dirigidos tanto a militares como a civiles.

INSTRUMENTOS TEÓRICOS: 'LO MILITAR' FRENTE A 'LO INDÍGENA'

La nación –como entelequia que nace con la modernidad– es un objeto que se construye en el proceso y como tal, está sujeto a las variaciones dadas por las condiciones históricas, socioculturales y políticas de las sociedades en las que opera. En Ecuador, los militares han tenido un rol definitorio en este proceso, dado por su misión de construir la nación unitaria como objeto de defensa.

El estudio de las estrategias civilizatorias aplicadas hacia los indios demuestra los imaginarios de nación que proyectan las élites, los militares para el caso que nos ocupa, para volverlos funcionales a un proyecto de nación homogénea en el que constituyen la pieza 'que no calza'. Este proceso se inscribe en un largo margen temporal, por lo cual se lo estudia como un objeto de análisis de larga duración, que puede observarse a lo largo de todo el siglo XX.

Líneas de interpretación

Entre las investigaciones que se dedican al estudio de las FF. AA. es un lugar común observar las causas de la intervención en política del sector castrense que, pese a constituir una situación no contemplada para un sistema democrático, forma parte del *habitus* de las democracias latinoamericanas. Los estudios acerca de las relaciones cívico-militares en Ecuador y América Latina concuerdan en visualizar a los militares como actores protagónicos en las sociedades en las que operan, destacan la condición eminentemente política que muestra tener la participación militar a lo largo de la historia de las repúblicas. Han si-

do objeto de extenso estudio, “sus políticas, respeto o (falta de él) para la democracia, respeto (o falta de él) para los derechos de los ciudadanos...” (Selmeski, 2001a); se resalta particularmente el rol que han jugado como mediadores en las relaciones establecidas históricamente entre el Estado y la sociedad, en su condición de garantes de una democracia que ha requerido de su tutelaje para pervivir (Loveman, 1999).

Entre las distintas perspectivas revisadas para fundamentar el presente estudio se encuentran diferentes propuestas de análisis. Cada una de estas tendencias ofrece sesgos particulares de interpretación a la presencia militar en la sociedad que se ajustan a sus distintas posiciones de sujeto. Entre los analistas que ubican sus enfoques desde la izquierda, en torno a las políticas de desarrollo que adoptan los gobiernos de facto con el objeto de implantar la Reforma Agraria tanto durante la Junta Militar de Gobierno (1963-1966) y a lo largo del régimen Nacionalista Revolucionario (1972-1976), se identifica, por un lado, la tendencia a interpretarlas como carentes de planes institucionales en términos de la dirección del Estado. Desde esta perspectiva, los militares resultan incapaces de actuar por sí solos, son una suerte de títeres cuyos hilos son movidos por actores externos, tanto al país como a la institución castrense. Agustín Cueva plantea que en los períodos dictatoriales los militares actúan no solo con una tendencia anticomunista, dictada por la Doctrina de Seguridad Nacional, sino “conforme a los planes de la Alianza para el Progreso” (Cueva, 1981: 78).

Para Alejandro Moreano son un instrumento de la burguesía, que les delega su proyecto modernizador a inicios del siglo pasado, “y es el ‘placismo’ el hecho político que encarna un proyecto definido impuesto en el Ecuador desde 1948” (Moreano, 1991: 193)¹. Según esta tendencia de análisis, los gobiernos militares (1963 y 1972) se adhieren a esta propuesta y actúan a instancias de los tecnócratas internacionales al servicio de Plaza y del Imperio. En este escenario “Galo Plaza ha sido quien ha conducido el carro del Estado ecuatoriano [...]” (Moreano, 1991:193). En todo caso, según manifiesta este autor, los militares son quienes “consumaron la crisis irreversible del sistema de hacienda” (Moreano, 1991).

Comparten opiniones sobre la participación de los militares análisis que se ubican desde la academia sin representar necesariamente alguna posición ideológica determinada. Desde esta óptica, las FF. AA. constituyen “meros agentes de intereses de clase” y ello como resul-

tado de un complejo campo de relaciones e influencias “ideológicas, políticas y económicas, que se ejercen sobre las FF. AA. o sobre alguna de sus ramas” (Varas y Bustamante, 1978: 21). Así, la intervención de las FF. AA. en política es interpretada como un desplazamiento del conflicto político civil al interior de los cuarteles (Varas y Bustamante, 1978: 24)².

En esta misma perspectiva académica, se encuentran los trabajos de Bertha García quien realiza un importante aporte con su estudio sobre la participación militar en la dictadura de la década de los 70: “Militares, economía y lucha política: Ecuador en los años 70” (1987), que constituye una fuente de consulta obligada para quien busque adentrarse en la participación de los militares en un momento clave de la penetración de las ideas desarrollistas en Ecuador. Este estudio demuestra que el proyecto militar de 1972-1976 cuenta con el apoyo decisivo de la tecnocracia civil mentalizadora de la política de desarrollo con miras a la redistribución social de los nuevos recursos petroleros. Priman en última instancia, los intereses corporativos de los militares, que en el plano social consiguen consolidar su visión integradora. A través del estudio de los contextos político, económico y social de la década de los 70, García identifica la fuerza que adquiere la presencia militar, supeditada a la Doctrina de Seguridad Nacional, que afirma la hegemonía de Estados Unidos.

La línea de análisis de García, en su producción posterior, enfatiza además, en lo que concierne a las relaciones cívico-militares en distintos momentos de la historia ecuatoriana, con importantes acercamientos hacia la definición del rol que juegan las FF. AA. en el país y sus responsabilidades en torno a la defensa³, y las distintas formas que toma su discurso político militar. Entre las variadas conclusiones a las que llega destaca que la participación de las FF. AA. en política, pese al carácter corporativo de la institución, no mantiene un sesgo monolítico, lo que evidencia que los militares actúan por sus propios intereses en los ámbitos intra y extrainstitucionales.

Entre los políticos que observan la participación de las FF. AA. desde una dimensión del poder, se define una posición que celebra los procesos de profesionalización atravesados por los miembros de las FF. AA. en Ecuador, en la medida que de esta manera han superado el caudillismo que respalda intereses de los grupos tradicionales de poder. La participación de las FF. AA. en política es vista, desde este ángulo, co-

mo la figura que adopta periódicamente el poder político en Ecuador y se destaca la capacidad decisoria que han tenido los militares y su influencia en la configuración del Estado ecuatoriano; sin embargo, no deja de mencionar que han sido los ejecutores de “ciertas políticas concebidas por los tecnócratas” (Hurtado, 1977: 177).

De todas las tendencias analizadas hasta el momento, solo los trabajos de García y Varas y Bustamante obedecen a estudios sistemáticos sobre el tema militar, los demás adhieren la problemática a desarrollos macro que, para el caso ecuatoriano, no pueden dejar de mencionarla.

También en el plano académico se ubican los estudios de Brian Loveman y Alain Rouquié quienes se detienen en la incidencia militar en América Latina. A través de un marco teórico apropiado para abordar la problemática, Loveman (1999; 1997) atribuye la permisividad que muestran las sociedades latinoamericanas a la interferencia militar en aspectos que van más allá de la defensa, a las condiciones históricas, sociales, políticas, económicas y estructurales de estas naciones. Identifica la estrecha relación que establecen los militares con el resto de las élites. Para esta elaboración, el autor se ubica en el centro de un amplio referente histórico que abarca los siglos XIX y XX y da cuenta de las dinámicas pasada y contemporánea que adoptan las relaciones entre los militares, el Estado y la sociedad latinoamericanos. Loveman se adentra en los elementos constitutivos de la mentalidad militar para identificar los fundamentos de muchas de las acciones en las que emprenden a favor de la nación e interpreta por esta vía las peculiares formas que adopta la conformación de los estados latinoamericanos.

En la década de los ochenta, los planteamientos Alain Rouquié (1981;1984) aportan desde una perspectiva histórica, a descifrar la amplitud de significados que alcanza la presencia militar en América Latina y la inserción de su *ethos* en las estructuras de poder de los distintos países. Si bien este autor profundiza en la situación de los militares en Argentina y en el Cono Sur, aborda con acierto el caso latinoamericano en general y por ello muchos de sus planteamientos aportan significativamente en el presente trabajo.

John Samuel Fitch (1977), produce un estudio seminal para entender el proceso político que cumplen los golpes militares de Estado. En su trabajo “The Military Coup d’Etat as a Political Process, Ecuador 1948-1966”, toma a los militares ecuatorianos como estudio de caso, prueba la intervención en política de las FF. AA. de forma indirecta, en

la toma de decisiones para respaldar o defenestrar a distintos gobernantes civiles, o de forma directa, a través del golpe de Estado como estrategia para gobernar desde el Poder Ejecutivo e imponer sus puntos de vista, con miras a regular el conflicto en el momento al que se circunscribe. A diferencia del resto de trabajos que se revisan, el de Fitch se aleja de una perspectiva que parte del deber ser y de los roles a los que se restringe la participación de las FF. AA. en la sociedad.

Fernando Bustamante, por su parte, a más de auscultar esta problemática desde la perspectiva de la participación en política de las FF. AA., tanto ecuatorianas como latinoamericanas desde sus orígenes, interpreta los nexos y cambios que mantienen las relaciones civiles y militares en torno a la construcción de la democracia como paradigma moderno de organización societal, la institucionalidad estatal, y su significación en la cultura política a lo largo de la historia nacional. Sus reflexiones se proyectan desde distintos y sugerentes ámbitos, que confirman la preeminencia de lo militar en la sociedad nacional. Aunque su base analítica sea débil en cuanto a los datos empíricos que la sustentan, este autor llega a conclusiones cuyo aporte es muy importante en el conocimiento de esta temática.

La influencia, directa o indirecta, de las FF. AA. en los cambios que se provocan en el espectro político ecuatoriano de fin de siglo, concretamente en la constitución del movimiento indígena en Ecuador, constituye un tema poco explorado en nuestro medio. El trabajo de Fidel Falconí (1991) resulta clave para entender los alcances que tiene la participación de los militares en la coyuntura del levantamiento indígena de junio de 1990, que define el rumbo que toma la política de los militares frente a los indígenas cuando aparecen fortalecidos organizativamente. Dimensiona la reacción que tal situación provoca entre las cúpulas castrenses durante aquella coyuntura, e identifica las estrategias militares para impedir la consolidación de la propuesta indígena, para lo cual aborda a actores protagónicos en esos momentos. Resalta entre sus conclusiones que, pese a que se puedan establecer similitudes con el funcionamiento político desde lo civil, los militares tienen formas de acción diferenciadas, privativas de una institución estatal altamente burocratizada y profesionalizada, “que defiende intereses corporativos estamentales” y por esta vía explica la influencia de los militares frente a los indígenas en Ecuador (Falconí, 1991: 11).

Los trabajos de Brian Selmeski (2000; 2001; 2002) abordan el problema de las relaciones cívico-militares en Ecuador, con una interpretación interdisciplinar que involucra principalmente a la antropología y la ciencia política para estudiar la participación militar en ámbitos que rebasan las funciones tradicionales de las FF. AA. Con una definición teórica particularizada al tema de estudio, ausculta las relaciones que se establecen entre indios y militares y entre los indios, el Estado y el resto de la sociedad a partir de la práctica del Servicio Militar Obligatorio. Fundamenta su interpretación en amplia bibliografía que aborda la problemática militar desde distintas perspectivas y la combina con su trabajo etnográfico realizado en la Brigada Galápagos, localizada en la provincia de Chimborazo, la de mayor población indígena del país, y desarrolla un estudio comparativo con la misma problemática para el caso boliviano. Uno de sus principales aportes radica en que identifica los imaginarios de nación de las FF. AA. en Ecuador y el tipo de nacionalismo que apuntan a constituir con el sector indígena, al que define como “nacionalismo multicultural” (Selmeski, 2001:1).

En cuanto a los autores militares que analizan la presencia de las FF. AA., si bien no se menciona ninguno con particularidad en este punto, se observa en general que proyectan una autopercepción en la que se refleja el *militarylore*, un *ethos* que se define por la defensa de la Patria como fin último de sus acciones (Loveman, 1999; Rouquié 1984). Desde su retórica particular, los militares se ven a sí mismos como la “columna vertebral de la Nación”, y en esta medida su presencia condiciona la permanencia del Estado y la nación a lo largo del tiempo. Así, desde sus distintas visiones sobre la defensa, su acción se amplía a diversos ámbitos que involucran los espacios sociopolítico y económico del país.

Esta diversidad de visiones se involucra, para el caso de los autores que analizan la problemática ecuatoriana, con aspectos que tienen que ver con la construcción de la cultura política en Ecuador que ve esta presencia militar con sesgos determinados. Salvo Falconí, Selmeski y Fitch, ninguno de los demás autores percibe a los militares como portadores de un proyecto societal propio y autónomo de las otras élites políticas, económicas o tecnocráticas.

García y Bustamante ocupan un lugar intermedio, García porque se sirve de amplia documentación y contacto directo con los protagonistas de esas coyunturas y es así como desarrolla su análisis para

llegar a las conclusiones que se exponen y Bustamante porque parte de una línea apegada a la academia para sus reflexiones, que ve a los militares tanto como instrumentos de otros intereses y también como actores capaces de mantener autonomía con una influencia de carácter situacional.

Loveman, Selmeski, Rouquié y Fitch disminuyen los sesgos deterministas hacia los militares porque parten de propuestas con aparatos teóricos específicos que trascienden la problemática local y permiten visualizar a las FF. AA. como actor social y político imbuido en actividades castrenses, con una presencia omnipresente en las sociedades latinoamericanas.

Por lo demás, la literatura que aborda el tema político en general, para el caso ecuatoriano, ha invisibilizado la dimensión real de la presencia de las FF. AA. en Ecuador, con la consiguiente limitación de la producción intelectual en torno a esta problemática que ha merecido, en general, poca atención especializada.

La propuesta de análisis del presente trabajo

A partir de la lectura de los estudios acerca de las relaciones cívico-militares en Ecuador, que se refuerza en el análisis del discurso militar, a más de un amplio margen temporal -que define a su vez, distintos momentos en la historia de la configuración societal ecuatoriana-, se propone en este trabajo, en lo que tiene que ver con los impulsos a la modernización del agro y la consiguiente integración del indio a la sociedad dominante, que si bien los militares actúan en estos procesos bajo la influencia de distintos condicionantes internos y externos -cuya profunda influencia no se pretende discutir- sus formas de intervención, no son el resultado de las ideas de otros actores que 'les dan pensando', sino que parten desde su posición de sujeto que involucra distintas esferas: individuales y colectivas como ciudadanos-miembros de una entidad corporativa que se debe tanto a sí misma como a la comunidad en la que opera.

No son instrumentos de otros sectores de poder, sino que actúan con ellos en una situación de sinergia o de alianzas políticas situacionales, sin perder su propia independencia corporativa. Comparten con estos sectores imaginarios de nación cuya construcción ponen en práctica ya sea individual o conjuntamente, pero desde una posición privi-

legiada que les confiere su condición de defensores de la integridad nacional. Cuentan con autonomía frente al tema indígena porque parten de sus particulares percepciones de la realidad, que se originan, en gran medida, en su proceso de profesionalización militar -que data de principios del siglo XX y continúa a lo largo de la centuria con distintas influencias- así como de sus propias vivencias. Por paradójico que parezca, los militares en Ecuador son parte de una institución corporativa con intereses particulares que no se orienta necesariamente en bien de la nación que defienden.

La visión expuesta se complementa con otras percepciones relacionadas con las temáticas del desarrollo y la integración de los indios en la sociedad nacional que enfocan el resto de proyectos que se implementan desde la sociedad civil con fines integracionistas dirigidos concretamente a los indígenas y se identifican las relaciones de sinergia funcional que se establecen entre las FF. AA. y el resto de activistas del desarrollo, tanto nacionales como extranjeros. Todas estas acciones, a más de factores externos e internos, dan como resultado la inserción de los indios entre las élites de poder a fin de siglo.

Lo militar en las culturas políticas latinoamericanas

¿Dónde se asienta la diferencia entre lo militar y lo civil?

El rol de defensores de la colectividad que cumplen los militares les confiere la diferencia con respecto a lo civil, y les otorga primacía. Así, las concepciones de defensa y seguridad hallan estrecha relación con el ámbito militar y sus particularidades en cuanto a su concepción del mundo y el manejo del poder. Por ello, las FF. AA. constituyen actores políticos clave, cuya acción se ve históricamente legitimada por la propia sociedad civil y sus distintos estamentos. Ello toma relevancia en el caso ecuatoriano, donde la presencia constante de la amenaza de guerra con el Perú a causa del diferendo limítrofe, genera el protagonismo de su cuerpo militar y la necesidad de la defensa y despierta el patriotismo de muchos de los jóvenes que se enrolan en el Ejército⁴. Esta situación es connatural a la historia republicana del Ecuador hasta finales del siglo XX.

Las funciones que desempeñan las FF. AA. desde sus diferentes ramas, se adaptan con facilidad a los cambios que se operan en su espacio

de influencia en los distintos contextos históricos⁵. Su presencia -multi-funcional y diversa- concuerda con la imagen que tienen de sí mismas, y con su razón de ser que es la defensa de la Patria frente a las amenazas internas y externas (Loveman, 1999: xi; Rouquié, 1984). Lo militar presenta una serie de particularidades. En el cuartel, los soldados adquieren líneas de comportamiento que los marcan: una masculinidad específica, disciplinas cotidianas, una forma de hablar definida, rasgos particulares de control del cuerpo, de la mirada, elementos que les confieren una identidad propia que los define como individuos y como grupo que se sostiene con visiones compartidas del mundo que lo rodea (Cfr. Adams, 1993; Arkin y Dobrofsky, 1990; Cuesta, 2002; Gill, 1977; Goffman, 2001; Katz, 1990; Moncayo, 2000; Selmeski, 2002).

Parte de la diferencia de lo militar frente a lo civil radica en la formación que reciben los primeros al interior de las que Goffman (2001: 19) conceptúa como “instituciones totales”, donde los internos experimentan una ruptura con las barreras que separan de ordinario tres ámbitos de la vida,

Primero, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad [...] esta actividad se lleva a cabo en compañía inmediata de gran número de otros, a quienes se da el mismo trato y se requiere que hagan juntos las mismas cosas [...] todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas [...] (Goffman, 2001: 53).

Quienes conviven en “instituciones totales” son objeto constante de control del cabal cumplimiento de las tareas encomendadas; atraviesan por procesos de despojo de su yo, con un sentimiento de desposeimiento, que viola la intimidad; “una institución total podría compararse con una escuela de perfeccionamiento social [...]” (Goffman, 2001: 53). Estos rasgos característicos que definen a los militares a través de su formación castrense, son conceptuados por Loveman (1999) como el *militarylore*. Allí se inscriben los discursos formales e informales, los actos, doctrinas, tradiciones, mitos, símbolos, formas de ver el mundo, cuya existencia implica un *ethos* característico de este subgrupo. Condensa los elementos culturales con rasgos definidos que desarrollan los militares, una suerte de subcultura⁶, un tejido simbólico que determina las pautas propias de su comportamiento tanto individual como de grupo.

A través de la Instrucción Militar -preparación para a defensa de la Patria- los cadetes adquieren nuevas formas de comportamiento, un cambio que compromete al individuo desde su integralidad. Basado en una reeducación cargada de símbolos y resignificaciones de sus entornos externo e interno, en un marco disciplinado, planificado y jerárquico y con un orden establecido característico de ese universo. La instrucción militar incluye las normas de todo un lenguaje corporal, lo que se denomina el ‘porte militar’. Se dan readaptaciones de la fonética: entonación de la voz; la proxémica: la distancia que debe mantenerse entre una persona y otra; la cinética: los gestos, la posición en firmes, los hombros echados hacia atrás, la cabeza levantada, la mirada al infinito, sacar el pecho, todos estos son movimientos preestablecidos. Allí se aprende a dar órdenes, éstas serán cortas, fuertes. A dar órdenes se aprende también con la obediencia. La pulcritud y el aseo son condiciones de la convivencia en los cuarteles, cuyo incumplimiento está sujeto a una serie de castigos con códigos determinados (Cuesta, 2002: 8).

El *militarylore* latinoamericano enfatiza en el compromiso de los soldados: defender a la Patria de las amenazas externas y controlar el orden interior -amenazas internas-, visto como una misión inherente a la naturaleza humana y a los estados nación. Como parte de esa misión, al militar se le inculca en las escuelas de oficiales, clases (tropa) y durante la conscripción, argumentos de superioridad moral y física con respecto a la población no militar. Dada la preponderancia de lo militar, algunas de estas características -o *militarylore*- influyen histórica, económica y socioculturalmente en las sociedades en las que se desenvuelven, en cómo se representan a sí mismas y cómo representan a sus naciones⁷.

El ‘militarylore’ de las Fuerzas Armadas latinoamericanas

Loveman (1999) encuentra que el *militarylore* de las FF. AA. en América Latina halla sus más remotas raíces en la influencia ibérica, que se traslada hasta América a través de la conquista española. En ese contexto, los militares fueron considerados sacerdotes-guerreros, que enfrentaron a los enemigos del cristianismo. Ellos fusionan el hecho de la conquista con la subordinación religiosa y cultural de los pueblos sometidos, y ejercen formas propias de autoritarismo⁸. Parte de ese *ethos*

militar imperial también lo constituyen los mitos fundacionales de la nación católica española, e instituciones creadas por España para la conquista y la administración de sus imperios⁹.

Otro de los componentes fundamentales del *militarylore* latinoamericano se encuentra en los principios castrenses legados por las misiones europeas que se asientan en distintos espacios del subcontinente desde la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX, con el objeto de profesionalizar y modernizar a las FF. AA. de estos países, a instancias de los gobiernos centrales¹⁰. En las etapas previas al proceso de profesionalización de las FF. AA. latinoamericanas, las milicias que defienden las nuevas repúblicas independientes carecen de una profesionalización ad hoc. Es decir, salvo ciertos casos que se ubican entre los oficiales de mayor gradación, no habían atravesado por un proceso de instrucción militar ni de formación en los temas inherentes a las estrategias de defensa, al manejo de las armas o al ‘arte de la guerra’ (Clausewitz, 1973).

Las raíces de esta realidad se remontan al período colonial cuando, hasta la primera mitad del siglo XVIII, la Corona española se encarga de desmilitarizar América con el fin de neutralizar cualquier brote independentista (Lynch, 1975; Bustamante, 1993). Entre tanto, los ejércitos realistas estaban liderados por representantes de las élites de la nobleza española, desconectadas de las élites criollas de América Latina. Lo descrito toma un nuevo rumbo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII cuando la Metrópoli opta por el reclutamiento de jóvenes americanos para defender las colonias españolas, especialmente frente a la nueva amenaza encarnada en el imperialismo inglés. Se trata de miembros de las élites criollas locales, jóvenes que se dejan tentar por la serie de prebendas que ofrece el servicio militar -similares a las que ostentan los metropolitanos-, se enrolan en la filas del ejército colonial como “cadetes y [obtienen] su grado militar, sea en virtud de servicios personales o familiares prestados a la Corona, sea adquiriéndolos con dinero...” (Rouquié, 1984: 58). Es decir que la adscripción a lo militar es vista como oportunidad de ascenso social porque por esta vía consiguen igualarse a los peninsulares y ‘españolizarse’.

En virtud del fuero militar, a partir de las Reformas Borbónicas, el ejército colonial aparece como un organismo independiente del Estado, una institución “autorregulada” (Rouquié, 1984). Ello explica la relación atávica que lo militar mantiene con el fuero, que incide de dis-

tintas formas en los procesos políticos. Este hecho se fusiona con la misión específica de las FF. AA., adaptada y matizada con los procesos históricos y socioculturales de cada país. Pese a que muchos autores defienden la idea de que el fuero dota a los militares de la autonomía prepotente y dominante, para Rouquié (1984), es poco probable que éste hubiese tenido influencia sobre el militarismo posterior. Sin embargo, se exponen aquí porque se perciben las semejanzas del fuero colonial con los privilegios que en un *continuum* han mantenido los militares: un tratamiento específico con relación al que recibe el resto de la sociedad civil, como es el caso de su sistema excluyente y exclusivo de justicia militar, además de algunas otras prebendas que los aventajan frente a la sociedad civil, y los colocan en un horizonte conceptual que halla coincidencias con el colonial de fueros y distinciones.

Los movimientos libertarios latinoamericanos en su primera etapa (1809-1815)¹¹, son protagonizados por milicias carentes de la experticia bélica (la defensa y el ataque) y sin entrenamiento previo en otros enfrentamientos armados¹². Se entiende así que fueran vencidas por las tropas realistas españolas y suplantadas, para una segunda y última etapa del proceso de independencia (1815-1820), por otros cuerpos militares descendientes de los estratos inferiores al de los criollos. En estas etapas los estados esperaban ser construidos políticamente, y en cuanto al imaginario de nación, éste se visualiza conformado a partir de enclaves productivos relativamente autónomos por su condición autárquica y aislados, pensados desde perspectivas locales (Quito, Bogotá, Cuzco), a través de sus propias experiencias coloniales, que aún no involucran lo nacional en sentido moderno.

Las milicias independentistas, salvo los oficiales, generales de origen aristocrático o algunos de sus lugartenientes, se constituyen por voluntarios de diversa procedencia entre quienes no halla antecedente una formación militar o el afianzamiento de algún tipo de lealtad. Se trata de ejércitos “improvisados o incipientes” (Rouquié, 1984; Lynch, 1975). Los grados de oficial se otorgan por las habilidades que vuelven aptos a determinados individuos para el manejo de las armas y a veces, por sus capacidades bélicas, no se relacionan con la lógica de una carrera militar sino que se los asume por privilegio¹³. Con estos antecedentes, se constituyen formas de liderazgo situacional adaptadas a un momento histórico, con las características específicas del sistema económico y político y una percepción de clase determinada por su condición de élite.

La profesionalización de los ejércitos latinoamericanos

El auge de la modernización -profesionalización- de los ejércitos latinoamericanos, bajo un determinado estilo -del cual fueron portadoras las FF. AA. alemanas, italianas, francesas, españolas, chilenas-, se produce a fines del siglo XIX y continúa en el siglo XX. En esos momentos las élites locales aspiran a la modernización de las economías latinoamericanas, acción que resulta “inconcebible sin el monopolio estatal de la violencia y la formación de un nuevo tipo de ejército” (Rouquié, 1984: 64). Este cambio en las que hasta los procesos independentistas fueron colonias españolas en América, tiene por garantes a quienes se benefician de ello: los exportadores de materias primas.

Así, los gobiernos latinoamericanos se interesan en profesionalizar a sus ejércitos en una tendencia modernizante, y se los reorganiza en concordancia con “las instituciones más prestigiosas del momento” (Rouquié, 1984: 57). A este sector de las élites le favorecería tener de su lado ejércitos que colaboraran en la formación y fortalecimiento de estados nacionales inspirados en modelos europeos, de manera que respaldaran su hegemonía y evitaran enfrentamientos entre distintas facciones de la sociedad (Cfr. Bustamante, 1993). Se expresa así el carácter funcional, imbricado “con el nuevo papel de las periferias latinoamericanas en la economía mundial” (Rouquié, 1984: 88), que conlleva la profesionalización de los militares latinoamericanos.

Por otro lado, perfeccionar profesionalmente a los militares en ese contexto era importante si se toman en cuenta las motivaciones de carácter internacional, como las constantes fricciones entre países vecinos, resultado de sus afanes de expansión territorial. Quienes analizan la profesionalización de estos ejércitos apelan también, como otro de los detonantes de este proceso, al interés de las grandes potencias de aquella época (1880-1920): Italia, Alemania, Francia e Inglaterra, por conseguir consumidores de su producción industrial bélica, que se publicita a través de las misiones militares que se asientan a lo largo del territorio latinoamericano (Bustamante, 1993; Loveman, 1999)¹⁴.

Este proceso de formación profesional acarrea consigo la aparición de un nuevo militar ‘de carrera’, con “un buen grado de autonomía que forma parte de un ejército de tinte moderno, institución totalizadora que aspira a la autosuficiencia” (Bustamante, 1993). En este *ethos*, los militares toman conciencia de la importancia - y superioridad- de su rol

en las sociedades en que se desenvuelven, son ellos los llamados a poner su contingente y capacidad al servicio de la Patria, frente a la poca aptitud de los políticos y administradores del sector civil para trabajar a favor de la sociedad (Rouquié, 1984: 57; Hurtado, 1977). En determinadas circunstancias, los proyectos civiles chocan con el proyecto militar, y provocan fricciones que se resuelven en los espacios de convergencia que consigan establecer entre sí las élites civiles y militares, y en las alianzas que sean capaces de establecer.

Los militares se profesionalizan en América Latina, con base en un sistema de enseñanza que da paso a una homogeneización del cuerpo de oficiales, que se respalda en este proceso de socialización secundaria (Adams, 1993)¹⁵. Su formación en una situación de aislamiento relativo con respecto a la sociedad civil, provoca una sola ética militar y un espíritu de cuerpo (Goffman, 2001). La oficialidad europea que llega al subcontinente para modernizar tanto a los ejércitos como a las armadas nacionales, supervisa reformas a leyes militares, establece escuelas y academias, introduce nuevos currículos y doctrinas, éticas, tácticas y estratégicas; infunde entre sus adiestrados valores comunes, destrezas técnicas y estándares profesionales. Las entidades militares que se pretende generar, constituyen organizaciones verticales que funcionan al interior del Estado y no fuera de él, tampoco paralelas o contrarias a éste (Loveman, 1999).

Al inicio de la década de 1900 los oficiales y soldados latinoamericanos vestían uniformes, utilizaban armas, marchaban [...] al estilo español, francés, alemán, ellos compartían un *militarylore* europeo (Loveman, 1999: 63)¹⁶. (la traducción es de la autora).

La profesionalización de las Fuerzas Armadas ecuatorianas

Los primeros intentos de profesionalización castrense en Ecuador, se registran hacia la primera mitad del siglo XIX. Pese a que fuera un proyecto carente de sostenibilidad, cabe mencionar como antecedente que en la década de 1830, el presidente Rocafuerte crea el primer Colegio Militar. En 1869, en el período garciano, se promueve una reforma castrense y se crea para el efecto la Escuela Práctica de Cadetes con el objeto de transformarla posteriormente en un Colegio Militar (Muñoz Borrero, 1974: 76); bajo el mandato presidencial de este

modernizador, algunos militares reciben instrucción en Francia y Alemania, en donde se entrenan bajo la dirección de ejércitos prusianos. El General Francisco Javier Salazar Arboleda, Ministro de Guerra y Marina de García Moreno, es para su época el único militar formado en academias francesas y se encarga de la formación de jóvenes militares (Tobar Donoso, 1930).

Si bien García Moreno se apoya en la Iglesia con fines de control social, ello no obsta para que se preocupe por la formación de su personal militar para la defensa, desde su visión particular; serían los Hermanos Cristianos a quienes el Presidente delegue la formación de los cadetes (Muñoz Borrero, 1974: 76)¹⁷. Esta congregación francesa fue ‘importada’ por García Moreno para la creación de escuelas primarias para varones distribuidas en distintas ciudades del país. Los miembros de la congregación influyen preponderantemente en la educación ecuatoriana, a través de su método pedagógico *la conduit*, que se refuerza en la disciplina y el castigo para sus enseñanzas, con una presencia que rebasa el período garciano. El Hermano Miguel de las Escuelas Cristianas ocupa posteriormente el cargo de Salazar Arboleda en la Dirección de la Escuela de Cadetes (Muñoz Borrero, 1974). Más tarde, serían los jesuitas alemanes profesores de la Escuela Politécnica creada en esa misma administración, quienes reciban la responsabilidad de la formación castrense (Tobar Donoso, 1930).

En Ecuador, su ingreso en la ‘era económica’ orientada al aprovechamiento de materia prima “para tributar a la industria de países centrales, requiere del mejoramiento de las comunicaciones y la construcción de un Estado” (Rouquié, 1984: 64). Esta forma estatal que aparece a fines del siglo XIX e inicios del XX, se configura según los intereses de las clases dirigentes agroexportadoras -comerciantes, agricultores y financieros-, afincadas especialmente en la Costa. Sus integrantes inciden en la conformación de un ejército profesional con el objeto de “prevenir y reprimir una posible radicalización militar como otra que ya tuvo lugar y que provocó la insurrección del General Concha en Esmeraldas” (Bustamante, 1993: 8). Se busca generar cambios en el sistema de caudillismo dominante, que provoca mucha inseguridad ciudadana con los consiguientes desajustes en las expectativas de los potenciales inversionistas.

Existe la tendencia a relacionar los intereses de grupo de los militares con su extracción de clase; los soldados ecuatorianos, por lo ge-

neral, provienen de los sectores sociales medios, lo cual según ese análisis, provoca que prime una visión que surge de la lógica de la clase media, en su forma de ver el mundo (Fitch, 1977; Varas y Bustamante, 1978; Nunn citado por Fitch, 1977). No debe perderse de vista sin embargo, que la profesionalización del soldado construye lealtades al Estado y a la nación antes que a la extracción de clase. El principio básico de las FF. AA. modernas es la lealtad al Estado y no se constituye en una clientela del caudillo que más bien es la que se busca anular porque representa una amenaza contra el Estado, y la vía para superarla es la defensa de la Constitución y/o los principios básicos de soberanía nacional con militares profesionalizados.

Con esta finalidad, en 1902, “llega al país la Misión Militar Chilena contratada por el gobierno del General Eloy Alfaro” (Muñoz, 1949: 175), con el objetivo de orientar las funciones militares a la defensa de la nación -sin que participen en política-. Chile inicia un proceso similar en 1885, a través de la contratación de misiones alemanas y de la estadía en Alemania de un buen número de sus oficiales; de esta forma ese país difunde, a través de sus misiones, la tendencia que Rouquié denomina “prusianismo de segunda mano” (1984: 96). Por otro lado, después del triunfo de Chile frente a Perú en la Guerra del Pacífico, el prestigio de las FF. AA. chilenas está en su apogeo¹⁸.

Los fundamentos conceptuales del accionar de las Fuerzas Armadas latinoamericanas

En el contexto de su formación y ejercicio profesionales, el pensamiento de los militares latinoamericanos y, por ende ecuatorianos, adquiere rasgos definidos que contienen las bases sobre las que construye su discurso y fundamenta su acción y explica la forma que toma su participación en la sociedad. A continuación, se analizan los contenidos de estas bases conceptuales.

La nación y el Estado

La nación constituye el estilo con el que la modernidad imagina a la comunidad (Anderson, 1991; Balibar y Wallerstein, 1986). Entre las propuestas del origen de esta idea aparecen dos claramente diferenciadas: el primordialismo¹⁹ y el constructivismo. Para el primero, el surgi-

miento de la nación no puede ser entendido fuera de los márgenes de la etnicidad. En esta tendencia existe al mismo tiempo, una división interna: la clásica y la sociobiológica. Los vínculos primordiales que generan la nación, en la segunda división, se remiten a los lazos de sangre, raza, lengua, religión, costumbres, narrativas eficientes, etc., y se concibe la existencia de un ‘mitomotor’ de carácter fundacional que define la identidad grupal. El esencialismo, en el que se enmarca el primordialismo, puede conducir a la exclusión causada por el racismo, pues reconoce como miembros de su grupo a quienes se hallen en condiciones de pureza de sangre para delimitar claramente el parentesco y por consiguiente la adscripción grupal.

Para los constructivistas, ante la figura política de la autodeterminación que integra el aparato conceptual de la modernidad, se presenta la expectativa en torno al derecho a un destino propio. Se considera que el cambio social está precedido de transformaciones de tipo material: económico, tecnológico, etc. La nación, desde esta visión, es fruto de una construcción, puesto que quienes la crean parten de una necesidad objetiva y práctica, es decir que hallan en este hecho un sentido instrumental, y por tanto, la nación sería fruto de un proyecto político.

Los militares modernos tienen como tarea mantener la integridad de la nación desde los puntos de vista sociopolítico, territorial, administrativo y gubernamental para dar respuesta a las situaciones bélicas de carácter internacional e intervenir en contextos que afecten la integridad de la República (Loveman, 1999: 68). Este concepto se adapta a las necesidades políticas y de control en los distintos momentos de las historias nacionales.

Los conceptos franco-germanos de la “nación en armas”²⁰; la idea de que las barracas son la “escuela del nacionalismo” (Cfr. Rouquié, 1984); la noción de que las FF. AA. constituyen el agente de cohesión entre Estado y ciudadanía, se difunden entre la oficialidad militar latinoamericana a través de la influencia europea. Un *militarylore* que se fusiona con las experiencias locales y se adapta a los requerimientos de defensa y seguridad específicos de cada país; ello explica que los militares determinen las necesidades que configuran las formas de actuación de las FF. AA. a fin de defender la integridad nacional.

Si bien los cuerpos militares se definen como apolíticos y seculares, ellos, paradójicamente se forman en esquemas políticos y cuasi

religiosos (Loveman, 1999) -y en muchos casos religiosos-, hecho que responde a que la profesionalización militar no sea solo estratégica sino también geopolítica; en esta medida, también están imbuidos en nociones de ideológicas e ideologizadas que los llevan a construir a sus enemigos en función de discursos específicos.

La nación, razón de ser de las FF. AA., se concibe como una “comunidad culturalmente definida, y ese es el valor simbólico más elevado de la modernidad, posee un carácter cuasi sagrado al que iguala sólo la religión” (Llobera, 1996). En el medio militar el culto a la Patria -léase ‘la nación’- sustituye parcialmente al culto a las representaciones de carácter religioso; para Loveman la religión por un Dios da paso a la religión por la nación²¹. El nacionalismo, desde esta perspectiva, implica un culto a la nación que, así entendida, es unitaria y homogénea, como condición para la efectividad de las estrategias de la defensa.

Quedan delimitadas a breves rasgos, distintas entradas conceptuales para entender el carácter de la nación que conjuga las distintas vías de comprensión de esta temática desde el mundo militar. Se explican en adelante las concepciones que se producen sobre el Estado.

Si la nación es percibida como una comunidad limitada y soberana, ello implica la existencia de un centro de poder nacional capaz de defender esa soberanía: el Estado. La soberanía moderna se sostiene en un tipo Estado que opera sobre un territorio legalmente demarcado que encierra vida, territorio, decisiones, planes, recursos que defender (Loveman, 1999). Los cuerpos militares profesionalizados son parte inherente a ese Estado y -como se observa a lo largo de este trabajo- su misión central -desde el plano conceptual- radica en la defensa del frente externo y el mantenimiento del orden interno de la nación, en determinadas situaciones.

La noción de Estado científico coincide con la idea del constructivismo. Parte de la variante étnica como generadora de la nación (Cfr. Smith, 1993). Esta forma de Estado homogeneiza a la población nacional con fines de dominación y control, para lo cual utiliza técnicas y métodos científicos. El Estado científico tiene como fin la intervención planificada y de esta manera se convierte en gestor de la modernización de las naciones.

Un Estado se vuelve necesario ante la formación de un mercado que requiere del impulso de la clase burguesa, de ahí que la formación de una economía capitalista y de un Estado nacional sean aspec-

tos inherentes a un mismo proceso. Por otro lado, esta economía en formación va definiendo un ámbito territorial, establece diferencias entre las estructuras productivas y homogeneiza intereses de clase que, en tanto constituyen el fundamento material de la nación, contribuyen a otorgar al Estado un carácter nacional (Oszlak, 1999: 10; Torres Rivas, 1977).

A través de sus FF. AA., el Estado ejerce el monopolio legítimo de la violencia para enfrentar cualquier desafío que pueda amenazar su carácter de entidad política soberana (Cfr. Loveman, 1999: xi; Weber, 1977[1922]; Von Treitschke, 1996)²².

El Estado como complemento de la nación, es un ente unitario, homogeneizante e integrador; es una “relación social [...] la instancia política que articula un sistema de dominación social. Su manifestación material es un conjunto interdependiente de instituciones que conforman el aparato en el que se condensa el poder y los recursos de la dominación política” (Oszlak, 1999: 6)²³. En este esquema, el Estado está en manos de la élite de poder, “una clase dominante que se encuentra obligada a organizarse en un plano universal [que] adquiere una forma nacional para dar históricamente a sus intereses una forma general” (Torres Rivas, 1977: 88).

La geopolítica como instrumento para entender el Estado y la nación

Entendida como “la ciencia que estudia y analiza la realidad geográfica y los factores históricos, sociales, económicos, que influyen en la vida y evolución del Estado, con el propósito de obtener conclusiones políticas que beneficien al poder nacional” (Cpfg. EM. R. Espinosa, 1989: 78), las propuestas de la geopolítica, uno de los fundamentos de la formación castrense latinoamericana, difunden una visión de la nación que se relaciona con un todo orgánico, al que es indispensable proteger íntegro, evitar su desmembramiento (Hepple, 1992; García, 1997). En geopolítica se supone que la nación ocupa todo, que su interior debe ser homogéneo, porque todos conformamos una misma nación, y ello nos dota de una condición de igualdad que se condensa en el Estado-nación.

Desde la metáfora orgánica que aplica la geopolítica, todos los seres vivos nacen y se expanden, en este sentido, es inevitable la presencia de amenazas, que se originan en los otros seres que crecen y al hacerlo,

restan espacio a los demás. Entre los militares ecuatorianos²⁴, la identidad nacional se relaciona con el territorio, y allí se arraiga el discurso dominante, el mito histórico que conforma tal idea de identidad nacional, pues no solo el pensamiento militar revela esta visión, también en los textos escolares que se difunden a través de la educación ecuatoriana se refleja una misma idea de identidad nacional, basada en una percepción territorial que se traduce en discursos contrarios al Perú, enemigo histórico hasta la firma de la paz, en 1998. “En los textos, el conflicto de 1941 entre Ecuador y Perú, se reduce a la traición, prepotencia y ambición expansionista del vecino del sur” (Samaniego, 1999: 284), idea que se sostiene igualmente en el ámbito militar.

Estas tendencias hallan contactos con la perspectiva ‘terrigenista’, que relaciona al hombre con el suelo, la ecuatorianeidad como constructo elaborado desde los sectores dominantes, se asienta sobre dos grandes mitos, el “mito del señorío sobre el suelo” que se sustenta en la riqueza natural del Ecuador, cuyo agreste paisaje, su “loca geografía” resultan “indomeñables” para el hombre originario de los Andes, no así para el conquistador español. El otro, lo constituye el “mito de la raza vencida” integrada por los indios que no logran dominar a la naturaleza, ni a las conquistas incásica y española, tampoco al expansionismo peruano (Sylva, 1995: 14).

Ambos factores mencionados en las líneas precedentes hallan relación con la metáfora orgánica de la geopolítica. En este sentido, los estados nación son “seres sensibles y racionales tal y como lo son los hombres” (Pinochet, 1981 citado por Hepple, 1992: 145), y se toma como un hecho demostrado a través de los siglos, que los estados “nacen, crecen, decaen, y, a veces mueren [...] si un Estado no equilibra o supera el poder nacional de sus vecinos, éstos lo destruyen o absorben...” (Spfg. EM. R. Espinosa, 1989: 79), y para hacerlo comienzan por tomarse territorios.

Esta misma metáfora sufre readaptaciones que se hacen presentes especialmente a partir de los años 50 y 60 con la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que se desarrolla en el contexto de la Guerra Fría (1953-1989)²⁵.

...la decadencia de los estados obedece, más que a causas foráneas, a continuas disensiones internas, que debilitan el Estado hasta hacerlo morir [...] la Seguridad Nacional debe velar no solo por la in-

tegridad física [...] sino también por su salud integral, evitando su degeneración y decadencia... (Spfg. EM. Raúl Espinosa, 1989: 79).

La DSN confiere una nueva ideología de la que se hallan impresos los regímenes militares que gobiernan Ecuador entre las décadas de los 60 y 70. La metáfora orgánica coloca el centro de su atención en los países vecinos y en la frontera, con un desarrollo intenso del ‘núcleo vital’, el control de las ‘arterias’ de transporte²⁶, y un fortalecimiento cultural de la nación como condiciones de supervivencia del ‘organismo estatal’, ante las amenazas externas de otros individuos en expansión. Durante la Guerra Fría a la metáfora del Estado como órgano viviente le asechan nuevas amenazas de carácter interno – el cáncer – la posible subversión comunista, capaz de atacar desde el interior, a un enemigo que al rebasar las fronteras, puede devenir en enemigo interno por la debilidad de la nación.

Se refuerza así la noción del Estado como un organismo que necesita desarrollo interno para evitar su desintegración, y ello confiere a la visión de las élites militares una teoría general sobre el Estado adaptada a su visión de la realidad, que las dota de un sitio de mando socialmente legitimado en todos los ámbitos de la vida política y económica; todo ello en nombre de la seguridad del ‘organismo’, frente a las amenazas internas y externas. En esta autopercepción de indispensabilidad militar se inscriben las estrategias para mantener el control sobre las áreas estratégicas de la economía que garantizan para sí los militares en el proceso de retorno a la democracia liderado por ellos, al finalizar la dictadura 1976-1979.

El nacionalismo multicultural

Desde el Estado, llegan al resto de la sociedad los símbolos que la aglutinan al dotar a sus asociados de un sentido de pertenencia a un grupo determinado, los “componentes ideales de la nacionalidad que aseguran el control ideológico de la dominación” (Oszlak, 1999: 10). Este proceso necesita de una “fuerza político-militar integradora” (Torres Rivas, 1977: 93), portadora de las concepciones sobre la nación. La nación que imaginan los militares busca no sólo la igualdad jurídica de los asociados, sino que apunta a la pérdida progresiva de la diferencia de todos los elementos que por ello puedan resultar distintivos y diso-

ciadores. El nacionalismo es una práctica que procede a establecer identidades a través de la “inclusión de lo supuestamente homogéneo y exclusión de la diferencia” (Muratorio, 1994a: 17).

Esta concepción está fuertemente marcada por las experiencias de construcción nacional de ciertos países europeos (Francia, Inglaterra y Alemania) entre los que la perdurabilidad de rasgos distintivos daba muestras de retraso feudal que sólo el Estado central y sus élites podían racionalizar y normatizar de maneras compatibles con un ejercicio del poder orientado al desarrollo progresivo de la civilización (Bustamante, 1993). Bustamante propone que las bases de la lealtad y el sentido de pertenencia de individuos y colectividades hacia el Estado pueden resultar lesionados en sociedades en las que primen la diferencia y la diferenciación. “Tal concepción va asociada, por lo general, a una idea de que la nación encarna un modo singular, único y específico de vida y sentimientos de costumbres y civilización (Bustamante, 1993: 13). La nacionalidad como adscripción a la nación, se caracteriza por mantener un concepto jacobino al considerar a la política y al Estado como constituidos sobre la base de la igualdad y la homogeneidad (Bustamante, 1993). Se trata de un imaginario político marcado por el centralismo y el iluminismo, pero también por la “intolerancia y desprecio” hacia lo socialmente diferente (Bustamante, 1993). ¿Cómo combinar esa aspiración de construcción nacional en una realidad como la ecuatoriana con una sociedad que se sustenta en la desigualdad y la diferencia sociales?

En la relación que se establece entre indios y militares en Ecuador republicano, la intolerancia y desprecio hacia lo indio por su condición de diferencia, atraviesa por distintos momentos que culminan en un cambio de actitud hacia los indios por parte de los militares, que se traduce en tolerancia. Estos momentos están sujetos a situaciones de índole socioeconómica y política globales y locales y a los procesos de construcción identitaria individuales y colectivos que viven tanto indios como militares. El cambio de actitud de los militares hacia los indios se construye en la interacción histórica que se provoca entre ambos grupos. Imbuidos en la modernización de la nación y en una construcción societal mestiza que obvie la diferencia, los primeros, y los segundos como objetos de la acción de construcción nacional y receptores directos de esa influencia, con respuestas que resultan alternativas a la nación imaginada inicialmente por las élites no indias, militares para el caso que nos ocupa.

El proyecto de nación mestiza, unitaria y homogénea parte sin embargo de bases que mantienen un trato que no es homogéneo y es más bien diferenciado para los indios y provocan, a lo largo del proceso, una respuesta desde este sector de la sociedad en la que demandan también el respeto a la diferencia y al reconocimiento de otras posibilidades de constitución nacional que no se fundamenten en la homogeneidad sino que constituyan una unidad sin perder de vista la diversidad.

A fines del siglo XX las estrategias militares de integración nacional ceden paso a la aceptación de la diferencia bajo límites determinados y a la posibilidad de constitución de una ciudadanía diferenciada, lo que Selmeski (2002) denomina “nacionalismo multicultural” que consiste en la aceptación parcial, no total, de la diferencia entre los ciudadanos. Este estilo de tolerancia, sin embargo, no pierde tampoco su carácter civilizatorio. Es decir que los militares, una vez que asimilan que la homogeneización como se había planteado en etapas anteriores, no es viable en Ecuador, reconocen la diferencia de los indios, siempre y cuando encaje con su modelo de nación (Crnl. C. Mendoza, 1996). De esta manera, defienden el statu quo con base en sus propios recursos (Rouquié 1984), que involucran una visión corporativa. Como otra cara del mismo proceso, los indios no siempre ofrecen resistencia a la imposición, pero también demarcan sus condiciones.

Lo que en el presente trabajo se entiende como nacionalismo multicultural, es captado como “neoindigenismo” cuando se conceptúa a tal categoría como la tendencia que postula la pluralidad o diversidad sociocultural de las formaciones nacionales a partir de un sobre-dimensionamiento de la civilización india como proyecto societal global (Rivera, 1998: 60).

Progreso y desarrollo, defensa y seguridad

Los miembros de las instituciones armadas, como hijos de la modernidad (Loveman, 1999), devienen bajo la influencia de los procesos de profesionalización, en gestores concientes de la modernización de sus países, con una visión que acoge a lo moderno como sinónimo de progreso, desarrollo económico, civilización, avances tecnológicos (transporte, comunicación, industrias) y científicos, en un marco

de disciplina, unidad y orden internos, factores que se convierten en rasgos sobresalientes del *militarylore* latinoamericano.

Cuando se habla de modernidad, se hace referencia a las características del pensamiento moderno, contenido principalmente en los fundamentos iluministas de la Revolución Francesa, que parten de las premisas de igualdad, libertad y fraternidad como fórmulas básicas para la convivencia social. La modernización es la puesta en práctica de esta filosofía y para el caso militar, implica la formación de ejércitos regulares, y el paso de sus miembros por procesos de formación que valoren la consecución del progreso de los pueblos como parte del poder de una nación en constante estado de alerta bélica.

El progreso -modernización- que se traduce en tecnología desde el ámbito castrense, halla coincidencia con los requerimientos bélicos; la guerra trae consigo lo último de estos avances dado el incremento constante de tecnologías que se provoca en el mundo de las armas. Las armas nucleares, por ejemplo, pasan a definir la “guerra moderna” (Crnl. EM. R. Andrade, 1993), y por ello este tipo de guerra previene y disuade pues no concuerda con el ataque directo o violento, por las consecuencias funestas que puede traer para la supervivencia de la humanidad. En este sentido, la prevención conlleva el acercamiento de los militares al resto de la sociedad, el conocimiento y estudio de la nación y sus particularidades económicas, sociales y políticas, con miras a defender sus posesiones estratégicas: industria, economía y recursos naturales, en caso de emergencia bélica y movilización nacional.

En esta lógica defensiva el progreso de las naciones requiere de gobiernos efectivos, si los gobiernos civiles no dan muestras de esa efectividad, -en sus manos- la Patria está expuesta a una situación de riesgo permanente; los que están conscientes de la situación por su misión específica, son los militares. Ello explica en parte, porqué en momentos históricos determinados, las FF. AA. latinoamericanas aumentan su distanciamiento de las viejas aristocracias²⁷, por su escasa capacidad para orientar a sus países hacia procesos modernizadores²⁸.

La adaptación de las realidades americanas a una cultura europea, vista como lo positivo -por su adelanto-, en contraposición a lo local, percibido como caduco y por tanto objeto de cambio y aculturación, lleva a cuestionar a los militares modernos las condiciones de retraso y falta de civilización de las sociedades a las que tienen que defender.

El desarrollismo militar

Una nueva etapa de formación profesional se provoca entre las FF. AA. latinoamericanas a partir de la difusión de las políticas de seguridad hemisférica adoptadas por los países del continente a raíz de la Guerra Fría. Con el impulso de los gobiernos estadounidenses, se impone en América Latina la Doctrina de Seguridad Nacional.

[...] Estados Unidos, como parte de su política de defensa hemisférica difunde la doctrina de la seguridad nacional, en la cual la seguridad es concebida como requisito para la estabilidad y el orden internos (Schirmer, 2001: 317).

Ello implica una visión macro, que involucra a todos los miembros del Estado y lo atraviesan de manera integral (física, alimentaria, militar, defensa civil, etc.); el rol específico tradicional de los militares: defensa externa y control del orden interno, toma una nueva dimensión, en la que el orden interno se amplía y pasa a ser sinónimo de ‘seguridad nacional’, concepto entendido, a su vez, como la “*condición social* que debe ser creada y preservada como base del bienestar, progreso y perfeccionamiento de la colectividad nacional” (Gral. V. Aulestia, 1969: 10) (Las itálicas corresponden al original) y hallan más bien estrecha relación con la noción de desarrollo, de allí que se las trate como ‘desarrollistas’. En este nuevo concepto, seguridad y defensa se acercan y se distancian. La forma de la defensa se adapta al tipo de utilidad que dan los estados y la sociedad a sus FF. AA., “dentro de un conjunto de decisiones nacionales asumidas desde una visión eminentemente política...” (García, 1997; 1987: 33; Cfr. Selmeski, 2002).

Se entiende así que forme parte de este *militarylore* que los militares incidan directamente en la toma de decisiones referentes a las amenazas que enfrenta la nación, las definan y que sean ellos quienes opten por las medidas de seguridad que deban tomarse para impedir la desintegración de la nación (Cfr. Helpple, 1992; Escudé, 1999; Vaca, 1999). En Ecuador, los objetivos nacionales permanentes, que son la guía para “toda acción política a nivel nacional” (Dobronsky, 2000: 33) que se relacione con la integración de la sociedad, la equidad en lo económico, político, social y cultural, definición que en un Estado democrático incumbe a toda la colectividad, han sido establecidos regularmente por las FF. AA.

Según Max Weber [...] es la voluntad ciudadana soberana la que se delega en la autoridad del Estado, el mismo que para ejercerla, esto es la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, detenta el monopolio legítimo de la fuerza [...] (Cfr. García, 1987).

Si bien se involucra a la defensa con la seguridad, los militares tienen clara la raíz defensiva de su misión, y la seguridad es vista como condición de la defensa. En el sentido defensivo de este esquema, progreso y desarrollo son fuentes de poder nacional y el subdesarrollo representa el contradiscurso por atentar contra la integridad nacional, también fuente de poder. Se provoca una alianza entre seguridad y desarrollo, lo que explica que los militares 'desarrollistas' se volcaran a liderar estos procesos desde distintos aspectos: político, económico y cultural, y que a su vez optasen por una modernización intrainstitucional; se trata de etapas de un mismo proceso.

Las escuelas estadounidenses de perfeccionamiento militar, operan desde este mismo país, o desde espacios de otras naciones comprometidas en los mismos principios²⁹. Los contenidos que se imparten en estos centros de aprendizaje castrense rebasan el tema de la defensa armada -frente externo- e integran conocimientos de Sociología, Economía, Geopolítica, Realidad Nacional, Administración Pública -frente interno-, elementos que ofrecen a sus receptores una nueva dimensión de sus sociedades y de los países vecinos. Ocurre lo mismo en la interacción con sus maestros y compañeros de clase, que los acerca a otras realidades y nuevas experiencias; allí se involucran los militares latinoamericanos en otro momento de su etapa de profesionalización y adquieren mayor conciencia de la importancia de su participación en el desarrollo de sus naciones, como otra de las misiones que están abocados a cumplir, para defenderlas.

Que el ideario militar latinoamericano se viera influenciado por la DSN, no implica que dejase de lado el *militarylore* mediterráneo portado por las misiones europeas (o de influencia europea), porque ambas comparten matrices similares en cuanto a la concepción del mundo que se mezclan con las visiones de planificación para la guerra y la defensa; más bien se provoca una congruencia entre estas formas de entender la defensa, la seguridad y el progreso que tampoco contienen distanciamientos esenciales entre sí, lo cual viabiliza su funcionalidad mutua y establece un *continuum*. En cuanto a su

aplicación resultan sinérgicas, lo cual se constata en los discursos militares. Por otro lado, se ponen en evidencia los significados cambiantes que mantienen las concepciones sobre las que se basa el accionar militar.

Las élites civiles y militares

A inicios del siglo XX Vilfredo Pareto (1902 en Galindo, 1995: 357) habla de élite cuando hace referencia a una clase elegida por razones morales o civiles para guiar a un pueblo. El uso contemporáneo del término hace referencia a una élite política o de poder lo cual equivale a

Un estrato superior bastante pequeño, compuesto por fracciones de una o más clases sociales capaces de ejercer directamente y por medio de las estructuras de gobierno, o de manera indirecta, mediante varios instrumentos de dominio, un poder político o una influencia considerablemente desproporcionada respecto a su consistencia numérica (Galindo, 1995: 357).

En la categoría de élites se inscriben, así mismo, los altos mandos de las FF. AA., los altos funcionarios estatales o el estrato superior de quienes se dedican a la política como profesión. Élite civiles y militares ocupan un mismo espacio en las sociedades, comparten carta de nacionalidad con el resto de sus miembros; sin embargo, mientras las élites militares participan de un mismo *ethos*, las élites civiles se caracterizan más bien por su diversidad interna, lo cual en muchas ocasiones las conduce a enfrentamientos de intereses (tanto entre sí como frente a su contraparte militar), pese a que coincidan en otros aspectos. Sin que ello quiera decir que entre las élites militares dejen de producirse diferencias de intereses; sin embargo, en contraste con los civiles, los militares en general, se identifican entre ellos por el espíritu de cuerpo que se cultiva a través de la formación y la vida en los cuarteles, pero también tienden a la defensa de sus intereses particulares, lo cual provoca divisiones internas.

Un sector de las élites civiles conforman la 'oligarquía'. Como prácticas oligárquicas se entienden la excesiva influencia de los grupos de poder económico en el sistema político desde sus representaciones en la sociedad civil, sin pasar por la mediación de los partidos políticos organizados (Argones, 1985: 77). Como parte de su tradición política,

las FF. AA. ecuatorianas mantienen un discurso antioligárquico que se fundamenta en la incapacidad de este sector para promover la modernización de la sociedad y un proyecto concreto e integrador de nación. Desde el punto de vista militar, en Ecuador, las oligarquías se han compuesto históricamente por grupos económicos carentes de un proyecto nacional que busque ampliar el mercado interno a través del desarrollo y diversificación de las inversiones, en otras palabras, sin una concepción democrática liberal del Estado ni de las relaciones de éste con la sociedad civil. Tampoco se interesan en conformar partidos que medien entre los sectores subalternos y el Estado, al que controlan en forma determinante, lo cual implica que mantengan al país en situación de caducidad y retraso.

Las élites militares conforman un grupo diferente por su carácter de guardianas de un sistema de democracia protegida que forma parte de la cultura política latinoamericana (Loveman, 1999: XIV; García, 2002). Su condición de élite implica, por su propia lógica, que el sistema político que proponen resulte excluyente (Rouquié, 1984).

Cuando ocupan el Poder Ejecutivo, generalmente en situaciones de crisis provocadas por la propia dinámica que adquiere el conflicto político -en el que participan civiles y militares-, interactúan, negocian y compiten con el resto de élites políticas en el juego por el poder (Rouquié, 1984). Así, cuando las élites civiles acuden a las FF. AA. en demanda de arbitrio, legitiman este rol central y la relación entre civiles y militares adquiere una doble faz³⁰, en la que la lealtad militar al modelo dominante resulta “condicional a la capacidad de desempeño político de las élites hegemónicas” (Bustamante, 1998), como se muestra a lo largo de la historia política ecuatoriana.

Las élites militares defienden el statu quo de acuerdo a su propia lógica corporativa; es decir que mantienen las relaciones con otros grupos de poder, sin perder de vista que lo que les confiere su condición de élites es su rol de defensores de la Patria, cuya “columna vertebral” la constituyen las FF.AA. (cohesionadas). Constituyen por tanto otro grupo de presión, con organización autónoma y objetivos trazados³¹. Ello define el tipo de relación que desarrollan con las otras élites en el poder³². A lo largo del siglo XX, en que se enmarca el presente análisis, surgen una serie de proyecciones sobre este tema, conducentes a entender los intersticios de esta relación de fuerza entre élites civiles y militares.

Indios y militares

Ya desde la Colonia, y previos los movimientos independentistas, las autoridades de la época evidencian sus temores frente al Otro –los indios– (Cfr. Prieto, 2004). Ello, entre otros factores, vuelve necesaria la preparación militar así como la participación de los miembros del Ejército en la administración pública (Loveman, 1999: 18). Tras la idea del progreso como fuente de modernización y de la nación única y unitaria –integradora y homogeneizante– yace también un proyecto civilizatorio a través del cual se busca integrar a todos los miembros de la sociedad bajo un mismo enfoque de nación y de cultura³³.

En este escenario, la población indígena representa un desafío para los militares. Al tratarse de grupos humanos con una identidad étnica diferente, su ‘Otro étnico’ que no concuerda con su proyecto nacional enfocado desde la homogeneidad y el progreso, entendidos como “mestizaje” (Gallardo, 1998). Son percibidos más bien como los causantes del estancamiento y retraso del país (Cfr. Sánchez, 2001) y concebidos como objetos de redención y aculturación, con el fin de integrarlos a la sociedad dominante. Los indígenas pasan a ocupar la categoría de amenaza interna³⁴ para la paz, la unidad y la buena marcha de la construcción de la nación civilizada, ante el estado de fragmentación que provoca su diferencia; así, los militares desarrollan estrategias y tácticas para fortalecer a la nación guiados por una imagen unitaria, a través de fórmulas que favorezcan el paso a la homogeneización indígena, que se van adaptando a los cambios identitarios de este sector y a las necesidades coyunturales de la construcción nacional bajo su propia óptica.

Esta forma de percibir lo indio ha sido compartida históricamente por los militares con otros grupos ubicados, asimismo, entre los sectores dominantes de la sociedad ecuatoriana. Es el caso de los liberales y conservadores³⁵ o de la izquierda ecuatoriana que tampoco ha presentado otra posición frente al tema indígena (Cfr. Páez, 2001; Rivera, 1998), al igual que la Iglesia. Esta misma idea se ha transmitido de generación en generación a través de los textos escolares que se difunden en la educación media y básica (Cfr. Ortiz C., 2000).

Como lo cita Loveman (1999) para el caso peruano, un militar expresa, luego de la presencia de los militares franceses en las misiones de formación: “déjennos educar a los indios [...] y tendremos ciudada-

nos, una vez que tengamos ciudadanos nosotros tendremos una nación...” (Loveman, 1999: 73-74). El militar chileno, capitán Tobías Barros en 1920, recela de la presencia “campesina” en los cuarteles por tratarse de “gente que acarrea taras heredadas de los indios caracterizados por una astucia natural y una malicia difíciles de medir...” (Loveman, 1999: 74)³⁶. En Ecuador, cuando se defiende la necesidad de implementar el Servicio Militar Obligatorio SMO, se argumenta que “con esta educación el conscripto iría a las haciendas y exigiría al patrón habitaciones que estén de acuerdo con su nuevo modo de vivir” (Larrea, 1928: 300), tómesese en cuenta que han sido los indios, históricamente, quienes han prestado su mano de obra en los trabajos de la hacienda serrana³⁷.

Una de las estrategias integracionistas, el SMO -que se aplica desde 1938 en Ecuador- busca otorgar el estatuto de ciudadanía a todos quienes pasan por esa experiencia de socialización secundaria, especialmente los indígenas, una vez que reciben los lineamientos de la “moral militar” (Moncayo, C. 2000). El discurso militar ecuatoriano proyecta las distintas percepciones de los militares frente a los indios, que concuerdan con sus visiones de la defensa. Ya para 1928, el capitán de Caballería Salomón Larrea opina que “El cuartel, reuniendo un porcentaje considerable de elemento masculino, está en condiciones excelentes para satisfacer la falta de cultura del pueblo, llevando a la mente de los analfabetos, la ilustración y el desarrollo de sus facultades” (1928: 300), es decir que el SMO es visto como un complemento de la escuela para el pueblo.

Los militares se conciben a sí mismos como redentores de los indios. Sus discursos proyectan sensibilidad frente a la situación de explotación en que viven, y se les atribuyen valores que infunden respeto frente a su Otro étnico; sin embargo, este discurso es, al mismo tiempo, una motivo para adjudicarse roles que remedien la situación de estos connacionales y justifiquen su presencia en acciones que van más allá de la defensa del frente externo.

...dueños originales de la tierra en que vivimos [...] Ellos también son la Patria; logremos que trabajen por ella, después de que reconozcamos y hagamos los primeros pagos de esta sí enorme deuda social. No es un problema ideológico sino vital (Armendáriz, 1990: 28).

Se atribuye a los indígenas una condición de minoridad, al ser captados como objeto de dirección, para quienes los no indios deben crear un Estado de bienestar "...promover el desarrollo integral [...] Apoyar a los indios en la agricultura..." y dotarlos de servicios básicos: infraestructura educativa, de salud, alimentación, etc. (Armendáriz, 1990: 29), acciones que se inscriben en la misión de los militares para con la Patria. Los militares adoptan una posición paternalista, en donde ellos son los padres redentores de los menores.

En la generalidad del período de estudio, aparecen quienes asocian a los indios con la ecología y subestiman su posibilidad de participación política, pues se los percibe como seres 'primitivos', "vírgenes de conocimiento político..." (Orellana, 1990: 30-31) el que, por lo tanto, estaría reservado sólo para las 'mentes superiores' de los no indios. Esta misma situación de retraso los vuelve proclives a involucrarse en acciones subversivas, ante las circunstancias de abandono en que han vivido (Gral. P. Moncayo, 1990 : 28), arrastrados por otros grupos que traen ideas extrañas y que los manejan, como el populismo o la izquierda con sus influencias sediciosas frente a estos indios pacíficos (Armendáriz, 1990). Conforman una masa inconforme de gente que va a la ciudad y si se organizan es porque los respaldan sectores políticos determinados, contrarios al orden (Crnl. de Policía J. A. Pazmiño, 1976: 82).

Toda esa construcción que se elabora sobre los indios, vistos como inferiores y carentes de voluntad propia, justifica la presencia de los militares como fuerza civilizatoria y modernizadora, generadora de progreso desde el cuartel. Por otro lado, por sus funciones atinentes al tema de la defensa, los militares conciben que ellos "conocen más que nadie" -quizá puedan equipararse con los integrantes de la Iglesia-, la realidad indígena, porque con ellos han desarrollado "una relación de larga data" (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003).

El pensamiento militar de las décadas 80 y 90, evidencia la reacción corporativa que produce la nueva situación de los indios, una vez que se visibilizan los resultados de las estrategias de integración ejercidas por las élites y aplicadas en décadas anteriores, a más de otros factores, y muestra cómo se ven obligados a readaptar sus concepciones de civilización y homogenización en vista de hallarse frente a un indio diferente, organizado, politizado con el mismo estilo de los 'no indios'. Se plantea así, un nuevo concepto de tolerancia ante la nueva distribución que toman las fuerzas sociales en la nación *no* imaginada.

En el presente capítulo, el discurso militar cuenta con una serie de fundamentos que pretenden visualizarse a lo largo de estos párrafos. En los apartados que le continúan se analizan las adaptaciones que sufre este discurso en concordancia con las situaciones históricas que se producen y la respuesta que reciben del sector civil de la sociedad, particularmente de los indios para el caso del presente estudio.

Notas:

- 1 Se refiere al presidente Galo Plaza que gobierna de 1948 a 1952. El estilo de desarrollo buscado por Galo Plaza se enmarca en una tendencia “desarrollista-agraria” (Varas y Bustamante, 1978: 32) y acoge los apoyos de Estados Unidos para enrumbar al país por las vías de la modernización.
- 2 En un análisis similar, que se aplica para el caso latinoamericano, Varas (1978: 1), se manifiesta en este mismo sentido. Este autor explica la participación de las FF. AA. en política por la falta de capacidad de las fracciones de los sectores dominantes para construir alianzas estables, lo cual las lleva a buscar en las FF. AA. el elemento de poder que no consiguen en los campos ideológico y político. Estos grupos logran influir en el sector castrense y lo empujan a involucrarse a su favor.
- 3 En los trabajos de García, como en los de Fitch (1977), cabe destacar el enorme respaldo empírico que da soporte a sus avances en la comprensión de las relaciones cívico-militares en Ecuador.
- 4 Esto fue ratificado por los militares en servicio activo y pasivo que fueron entrevistados en el marco del presente trabajo.
- 5 Este hecho es reconocido por distintos autores que operan tanto desde los ámbitos académicos (Rouquié, 1984; Loveman, 1999; Diamint, 1999; para el caso ecuatoriano ver: Bustamante, 1995, 1999, 2003; Varas y Bustamante, 1978; García 1987, 1997, 1999b, 2003, como desde los ámbitos de la opinión pública (Ortiz, J., 2002; Ortiz, G., 2002).
- 6 No quiero expresar con ello que se trate de una cultura inferior, entiéndase como subcultura a las prácticas diferenciadas de un grupo que convive con otros en el seno de uno mayor, una cultura dentro de otra.
- 7 Para el caso ecuatoriano, cfr.: García, 1997; Bustamante, 1993; Cuesta, 2002; para el caso israelita Ben-Ari, 2002; para otras realidades latinoamericanas Schirmer, 1999; Rouquié, 1984; Moncayo, 2000; Gill, 1997; Quintana, 1997.
- 8 Halla sus antecedentes y características posteriores en las guerras de reconquista. Se trató de un enfrentamiento religioso, dinástico, civil, entre feudos familiares de batallas territoriales y familiares, de conflictos étnicos y culturales y de disputas políticas locales y regionales.
- 9 Las glorias conseguidas en las guerras los dotaron de privilegios y fueros especiales, dada esta tradición guerrera que une lo religioso con lo militar (Loveman, 1999: 1).
- 10 Cfr. Loveman, 1997; 1999, Rouquié, 1981; 1984; Bustamante, 1993; Schirmer, 2002; Diamint, 1999.

- 11 Esta periodización ha sido tomada de Lynch (1975)
- 12 Quienes se enlistaron en los ejércitos coloniales lejos se hallaban de recibir el impulso del espíritu militar relacionado con la defensa, como el que mantienen las FF. AA. que se conocen actualmente. Se trata de un ejército “holgazán y carente de gloria para obtener los privilegios y exenciones reconocidos por la *real cédula*. El resultado: capitanes de salón, coroneles de opereta [...] La carrera militar abre el camino al título de nobleza. Pero esos hijos de buena cuna no poseen el menor ascendiente sobre una tropa reclutada a la fuerza entre las heces de la sociedad: ejército de vagabundos y rufianes que desertan a la mejor oportunidad para convertirse en salteadores de caminos...” (las *itálicas* corresponden al original) (Rouquié, 1984: 59).
- 13 Cfr. Ayala, 1983; 1994; Loveman, 1999; Hurtado, 1977.
- 14 Bien podría decirse que las misiones militares extranjeras compitieron en el *marketing* de sus armas y para ello generaron clientes entre las naciones latinoamericanas.
- 15 La socialización secundaria, para el caso militar, implica que a un individuo, a más de la formación que ya recibe en el medio que lo rodea regularmente (la casa, la escuela), se lo dote, en las escuelas militares, de un nuevo patrón de comportamiento y atraviése por una suerte de reeducación.
- 16 ... By early 1900s Latin American officers and soldiers wore uniforms, bore arms, marched and drilled in Spanish, French and German style. *They shared de European's militarylore...* (Loveman, 1999: 63)
- 17 Hacia 1891 el Colegio Militar del Ministerio de Guerra contaba con 26 cadetes (Ver Ortiz y Crespo, 1998).
- 18 Se inscriben también en esta tendencia Colombia, Venezuela y El Salvador.
- 19 Para el análisis del primordialismo me he basado en Jaffrelot (1993).
- 20 La idea de la “nación en armas” tiene sus orígenes en la Revolución Francesa, cuando los ejércitos dejan de servir al soberano y pasan a defender a la Nación. La nación en armas implica que los jóvenes en edad adecuada pasen por el servicio militar obligatorio, para así contar con soldados-ciudadanos -el ejército de reserva- dispuestos y formados para la defensa, en el momento en que las condiciones de la Patria así lo demanden (Cfr. Rouquié, 1984).
- 21 El Ejército ecuatoriano, por ejemplo, es entregado a la advocación de la Virgen de Mercedes, considerada como su Patrona. Aldo Meneses (1996) halla profundas coincidencias entre el integrismo católico y la cosmovisión de los militares latinoamericanos.
- 22 En América Latina se conceptúa lo militar de acuerdo a las características básicas de las FF. AA. modernas y las premisas de las relaciones civil-militares que se desarrollaron simultáneamente con la aparición de los estados nación modernos en Europa.
- 23 Sobre el tema ver también Torres Rivas, 1977; O'Donell, 1977.
- 24 Para el caso ecuatoriano ver: Altamirano, 1991; 1999; Mendoza, C. 1996; Dirección de Inteligencia de la Fuerza Terrestre, 1998; para el caso argentino ver: Escudé, 1999.
- 25 Cfr. García, 1997; Mendoza, 1996; Altamirano, 1991; Schirmer, 2001; Loveman, 1999.

- 26 Entre las Leyes de la Geopolítica consta la Ley Unificadora y Expansiva de las vías de comunicación, en ella se entiende que las rutas naturales, terrestres o marítimas, favorecen la expansión de los núcleos neohistóricos. La falta de vías de comunicación de un país, afecta negativamente a la unidad nacional, de allí el interés de los militares por construir las y por formarse profesionalmente como ingenieros civiles (Cpfg.EM. R, Espinosa, 1989: 80).
- 27 Como ocurre en Perú y Ecuador en la década de los 70.
- 28 Ello explica los movimientos de tendencia socialista y antioligárquica que lideran los militares entre 1920-1930, en México, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil (Loveman, 1999).
- 29 La zona del canal de Panamá, Argentina o Brasil.
- 30 Ello explica que regularmente los políticos civiles acuden al arbitrio de las FF. AA. en casos en que el manejo del poder; cuando “la cosa se les va de las manos” (Militar guatemalteco. Cfr. Schirmer, 2001: 102).
- 31 Desde el ‘deber ser’.
- 32 Entre los militares se ponen en práctica relaciones endogámicas entre sus miembros y familiares. Entre las décadas de los 70 y 80, por otro lado, el ingreso a las FF.AA. ha sido visto como oportunidad de ascenso social.
- 33 Cfr. Rouquié, 1984; Larrea, 1928; Bustamante, 1996; Enloe, 1974; Selmeski, 2001b; Vicuña, 1987; Diamint, 1999.
- 34 Parte de una lógica castrense relacionada con las ideas de la defensa y seguridad radica en la constante construcción de amenazas y enemigos, la heterogeneidad en este caso, resulta parte de un peligro al que hay que combatir en defensa de su proyecto de nación unitaria (Cfr. Mendoza, 1996; Dirección de Inteligencia de la Fuerza Terrestre, 1998; Dobronski, 2000; García, 1997).
- 35 Cuya percepción con respecto a lo indígena, ha sido analizada para los períodos ubicados en los albores del siglo XX (Ortiz, C. 2001a y 2001 c). Los discursos emblemáticos de liberales y conservadores acerca de los indios se expresan en: Moncayo A., 1923; Peralta, 1812; González Suárez, 1881; 1904 [1911]; 1980; 1913; Jijón y Caamaño, 1980[1929]).
- 36 Pese a que Chile reviste particularidades cabe complementar estas afirmaciones con el caso que se menciona.
- 37 Y también en la plantación costeña en los contextos de los *boom* cacaoero y bananero que provocan la migración de la Sierra a la Costa.

UN PROYECTO CIVILIZATORIO CON ENFOQUE DEFENSIVO

En este segundo capítulo se buscan los antecedentes del pensamiento militar que marcan las líneas de acción de las FF. AA. a lo largo del siglo XX. Un primer sondeo nos remite a la primera mitad del siglo XX donde se encuentran los orígenes del ‘pensamiento militar moderno’ que transmiten a las FF. AA. latinoamericanas las misiones militares de raíz europea, hecho que para el caso ecuatoriano se produce desde las primeras décadas del siglo XX.

Las misiones militares chilena (1902) e italiana (1922) impregnan en el *militarylore* ecuatoriano formas de interpretar el mundo con rasgos religiosos, nacionalistas y antipolíticos. Sus miembros están destinados al servicio de la Patria y están dispuestos a morir por ella (Loveman, 1997; 1999). Se identifican los rasgos sobresalientes de ese discurso en lo que tiene que ver con la conformación societal unitaria y homogénea vista como factor de poder de la nación, a la luz de documentos producidos por militares, que cubren la primera mitad del siglo XX, desde la década de 1920 en adelante, cuando ya se pueden registrar los contenidos de los primeros aprendizajes legados por las misiones extranjeras tanto en la retórica como en las acciones que emprenden los militares desde su posición de poder.

En un segundo momento se da paso al análisis del discurso integrador de las cúpulas castrenses durante las dictaduras en las décadas de los 60, 70 y en las subsiguientes cuando logran llevarse a la práctica una serie de ideales militares que afloran en la etapa anterior, y se buscan las conexiones que se establecen entre el pensamiento ‘sigloveintiuno’ temprano, imbuido en las ideas de la modernización, identificada como progreso, con aquel de los militares de la segunda mitad del siglo

XX, cuando la modernización toma la forma de desarrollo. El ejercicio propuesto resulta interesante, una vez que en la segunda de estas etapas, aparece una nueva influencia de profesionalización castrense, llegada desde Estados Unidos, con sus políticas de seguridad hemisférica en el contexto de la Guerra Fría, que también trae un fuerte contenido civilizatorio con fines defensivos que involucra las nociones de la seguridad nacional. Se analizan las características que toma el discurso militar referido al proceso de desarrollo agrario en Ecuador, particularmente en cuanto al tratamiento que dan las FF. AA. a los indios, con fines desarrollistas.

Interesa demostrar que el pensamiento militar de la primera mitad del siglo XX traza el contenido de la acción posterior de la institución castrense con respecto a la sociedad indígena y su modernización y que lo que provocan las nuevas influencias es un reacomodo de los mismos planteamientos, con la intensificación de ciertos elementos que resultan funcionales al proyecto nacional militar que se va gestando.

Se propone que ambas son etapas de un mismo proceso de modernización nacional y que la aplicación de estas propuestas, expuesta a la luz de los hechos, permite proyectar a futuro los resultados y las características que éstas le confieren a la sociedad ecuatoriana guiadas por un imaginario moderno de nación. Este proceso toma sus mayores impulsos en las décadas del auge desarrollista y otorga un nuevo orden a la redistribución de las élites políticas en Ecuador, entre las que las indígenas consiguen hacerse espacio. Desde otra perspectiva, se observan las transformaciones que se provocan en el discurso de las FF. AA. hacia los indios, en sus afanes integradores enmarcados en las propuestas reformistas y las políticas que se implementan desde el Estado militar con el fin de introducir al agro y los habitantes del campo en procesos de modernización.

El tema del desarrollo agrario que acarrea consigo la integración indígena, convoca a buena parte de las fuerzas sociales con alguna influencia en el ámbito nacional; en esta medida, las FF. AA. no actúan de forma independiente al interior de las sociedades en las que están inmersas; sin embargo, los militares juegan un rol definitorio en cuanto a los giros que toma el modelo de desarrollo en el país, ¿cuál es su forma de accionar frente a los indios? y ¿cómo pueden proyectarse estas acciones en la constitución de procesos posteriores, concretamen-

te en la conformación y consolidación del movimiento indígena ecuatoriano? Éstas constituyen las preguntas clave que contesta en el capítulo Dos.

El soldado ecuatoriano en la modernidad: la primera mitad del siglo XX

En las líneas que continúan se exponen, con base en recursos testimoniales, el pensamiento de algunos representantes del mundo militar de la primera mitad del siglo XX, en los que se delinearán sus aspiraciones de constitución societal a favor de la defensa, sus imaginarios de nación y de construcción de ciudadanía. Estos discursos develan, asimismo, sus temores ante la fragmentación que caracteriza al Ecuador y que dificulta la existencia de la nación fuerte y unida como objeto de defensa. Se estudia también la percepción que proyectan los militares de sí mismos y las funciones que conciben deben cumplir en la construcción de la nación como fruto de la modernidad y los roles que cumplen en este escenario frente a la guerra, la defensa y la seguridad interna que preserva la integridad nacional.

La presencia multifuncional y diversa del soldado moderno

En los Ejércitos antiguos de mercenarios, cuando las instituciones políticas consagraban el poder absoluto, el Oficial, miembro de un Ejército de propiedad particular, vivía naturalmente al margen de la vida social del país. Los intereses del soberano, y por ende, los de su Ejército personal, no eran los de la colectividad y entonces el Ejército constituía un órgano aislado, de ninguna influencia social (Capt. C. Guerrero, 1924: 234).

La tradición organizativa de los cuerpos armados premodernos -léase premodernos- se había caracterizado por servir al rey como soberano, pero ante el establecimiento del régimen democrático, el Ejército, “también institución política”, había de convertirse en “nacional y democrática” (Capt. C. Guerrero, 1924).

Según lo expresan estas líneas, las FF. AA. nacionales encarnan a la modernidad, son el resultado del ordenamiento del mundo bajo este ideal. Con la vigencia de lo moderno se provoca lo que podría denominarse una ‘democratización de la soberanía’ al ser ésta transferida al

pueblo; de ahí que los ejércitos modernos fueran considerados, a partir de esta tendencia, ejércitos nacionales; habían dejado de brindar servicios privados a un soberano para deberse a una colectividad, para la defensa de la soberanía nacional (que se transfiere a el pueblo, en el que se incluyen), de donde se desprende la vocación democrática y política en servicio del Estado moderno de los militares.

En ese nuevo escenario, la defensa constituye un esfuerzo colectivo; la ‘guerra moderna’, no incumbe sólo a los cuerpos armados, sino a toda la sociedad, “exige de un país en lucha, la fusión íntima con su Ejército, constituyendo con él un solo todo: la nación en armas” (Capt. C. Guerrero, 1924).

[...] en la vida política y social de los pueblos [...] por más extraordinario que sea su amor al orden, por evidente que sea su aspiración a la conquista pacífica del progreso y cultura de su suelo y de sus hombres, están expuestos a la agresión de otros estados de mayor riqueza y potencialidad militar, que deseando acrecentar sus dominios y adquirir riqueza [...] imponen sus abusos no por medio de tratados entre diplomáticos, sino por el fuego que arrojan las bocas de los cañones (Tnte. de Caballería S. Larrea, 1928: 296).

Desde este ángulo, el ámbito de la defensa amplía su significado y dota de nuevos cometidos a sus gestores. Deriva de allí la “función social” y “política” del militar, más aún en Ecuador, donde no existe esa “nación unida” y homogénea, que exige el nuevo esquema. En Ecuador, no sólo hay diversidad de razas (indios, descendientes de europeos, europeos, negros, etc.), “sino también cierto antagonismo entre provincias y pueblos, que impide formar la Patria Grande, próspera y unida...” (Capt. C. Guerrero, 1924: 236). La capacidad de cohesión interna de la nación que define su calidad unitaria -otra de las condiciones de la nación moderna-, constituye buena parte del poder nacional frente a las amenazas, y será “en el Ejército en donde se realice la unidad de la nación”, que se fomenta a través de un contacto afectivo con la Patria -por parte del soldado-, de su capacidad de entrega y del sostenimiento del orden ciudadano (Capt. C. Guerrero, 1924: 236).

El ‘amor patrio’ es, en este contexto, un factor que tiene honda repercusión en la unidad y en el poder que puede adquirir un Estado, el Ejército tiene su acción más genuina en el fomento de esta actitud, en la educación cívica del pueblo porque “el alma de la institución es el culto a la Patria [...]” (Tnte. de Caballería S. Larrea, 1928: 296). Ante la

ausencia de nación: “[...] todo está por hacerse en Ecuador, después de 107 años de vida autónoma [...]” (Gral. L. Larrea Alba, 1932. Cfr. Paz, 1938: 142)¹, la institución armada se ve ante la misión de ‘construir’ la nación que aspira a defender, y para combatir la fragmentación existente, parte de las tareas militares se destina a fomentar la unificación nacional desde una perspectiva integral; es decir, que involucre la construcción de una cultura nacional.

Entre los elementos que definen una vida comunitaria armónica se cuentan: “la incorporación del indio y del montubio a la vida civilizada mediante la educación, la elevación económica, la forjadura espiritual, la protección de las leyes.” (Gral. L. Larrea Alba, 1932. Cfr. Paz, 1938: 142), un ideal de cultura que gira en torno a la institucionalidad estatal. Para la primera mitad del siglo XX, el fraccionamiento del país, que se materializa en el regionalismo y la diversidad étnica, es un problema que se aspira a solucionar con base en un proyecto de homogeneización, cuya puesta en marcha estaría en manos militares, porque forma parte del fortalecimiento de la Patria para su defensa.

La defensa de la Patria implica que el “soldado moderno” se prepare profesionalmente y estudie para conocerla y amarla intensamente, “para que pueda animar a sus soldados del mismo sentimiento”, enseñándoles en qué consiste la Patria, cuáles son los elementos morales y materiales que la constituyen, y en qué se diferencia de las “otras patrias”. De ser así, el soldado está capacitado para defenderla con su vida en caso de guerra, ya no como algo abstracto sino como algo que palpa. Ello le permite ser “buen ciudadano” y “buen patriota” fuera del cuartel (Capt. C. Guerrero, 1924).

La educación es otra de las prioridades en este esquema; como requisito para acelerar el desarrollo nacional, el Gral. Larrea Alba recomienda la fundación de escuelas rurales destinadas a los campesinos de la Costa y a los indios de la Sierra, el elevamiento de su nivel educativo con mejor formación para los maestros y que éstos sean nativos de las mismas zonas en las que enseñan. Con ello se garantiza su llegada al “alma del pueblo”, con la obtención de mejores resultados en el “mejoramiento espiritual de estos seres abatidos por incomprensibles olvidos y quebrantados por enormes injusticias, nadie como los maestros salidos de su propia condición”; la educación “redime del oscurantismo almas que tienen el mismo derecho que nosotros a vivir una vida de cultura y civilización” (Gral. L. Larrea Alba cfr. Paz, 1938). Desde este

punto de vista, se vuelve indispensable una nueva enseñanza normal, de orientación eficiente y extensiva a la formación de maestros indígenas, capaces de llenar los inmensos vacíos que conlleva el problema educativo en Ecuador.

Se demanda del “soldado de la Patria” una función “social y cívica como ciudadano, funcionario de una categoría especial”, porque el “soldado moderno” mantiene una “calidad superior” con relación al resto de ciudadanos, dadas las “condiciones favorables” con las que cuenta, y porque dispone de los medios de acción indispensables. Los militares, por otro lado, se hallan revestidos de la autoridad que “confieren al Oficial las leyes y reglamentos militares” con un ambiente favorable, en el cuartel, que “encauza al individuo” en una desinteresada labor. Además, el grado le confiere prestigio, “que puede ser inmenso si al él se le añaden ciertas superioridades intelectuales y morales” (Gral. L. Larrea Alba cfr. Paz, 1938).

En el rol social del soldado moderno se estrecha la relación que se aspira mantenga con el resto de la ciudadanía en su calidad de coordinador de la responsabilidad colectiva de la defensa, porque “el Ejército debe ser la fragua en que se forje la unidad nacional” (Capt. C. Guerrero, 1924: 235).

El progreso, paradigma de la nación moderna, constituye el factor de poder nacional, en cuya realización el oficial está obligado a contribuir con la proyección de las instituciones militares sobre la vida ecuatoriana, como potencia constructora del desarrollo social y educativo, capaces de aportar espiritual y materialmente a la ciudadanía. Avances tecnológicos, técnicos y viales como signos de progreso y capacidad unificadora para “facilitar el intercambio interno y externo” y la integración de quienes habitan “en las tierras más distantes de la civilización”. Desde el siglo XX temprano, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército es la dependencia de las FF. AA. destinada a la construcción de carreteras, y se dedica con especialidad a las que enlazan a la Amazonia con el resto del país, tanto porque ya se concibe que en esa región está el futuro económico del Ecuador, como porque se ven a los caminos como medios de consolidación nacional: “afirman nuestra ecuatorianidad” (Gral. L. Larrea Alba cfr. Paz, 1938).

Bajo estos principios, en 1946 a raíz de la derrota militar de Ecuador frente a Perú en 1941, se inaugura la vía Baños-Puyo, como

muestra del interés de las FF. AA. por la integración nacional, y para conseguir, además, la posesión efectiva por parte de Ecuador de las tierras amazónicas para obviar “la disputa secular con nuestro vecino” (Tnte. Crnl. O. Serrano, 1946: 9). Las carreteras, por otro lado, constituyen medios de control de la población por donde atraviesan, y ello explica también el interés de las FF. AA. por ampliar su ingerencia.

Se captan como favorables al progreso, la implantación de estaciones meteorológicas y termopluviométricas en el regadío, en la sanidad vegetal, en el análisis químico de la tierra de “pan sembrar” para la adecuación de cultivos; en la maquinaria agrícola, “en la extensión de vialidad rural, antes que nada” (Gral. L. Larrea Alba cfr. Paz, 1938). Se propone que el Estado propicie la dirección técnico-económica para el fomento de la agricultura, las industrias y el comercio y reformas legales con “nuevas formas jurídico-sociales”. La reforma agraria, vigente como aspiración ya para entonces, se concibe como estrategia para la distribución coherente de la tierra.

[...] limitación de la propiedad rural frente a las necesidades colectivas de producción y de consumo; intensificación de regadío y distribución de las aguas; experimentación agrícola y adecuación de cultivos a la esencialidad química de la tierra e identificación climática (Gral. L. Larrea Alba, cfr. Paz, 1938: 156).

Forman parte de las preocupaciones castrenses de la época la construcción de vivienda rural en condiciones de salubridad e higiene; la protección a las comunidades indígenas y la búsqueda de solución a sus problemas económicos; la creación del seguro social campesino, indemnizaciones por invalidez, desocupación y muerte; el mejoramiento de salarios; la elevación de la calidad nutricional de la dieta campesina, todo ello como parte de una política de Estado. Para la implantación del apoyo técnico y la distribución equitativa de tierras, se piensa en la organización de la población rural en “cooperativas de producción y consumo” (Gral. L. Larrea Alba, cfr. Paz, 1938).

El proyecto nacional militar de la primera mitad del siglo XX, se enmarca en los que se consideran lineamientos de la modernidad, bajo los signos de la cohesión y el orden. Se orienta desde el plano defensivo, ante la constante amenaza de “desaparecer después de poco tiempo como nación americana”, frente a las ambiciones de los países vecinos. El estado constante de alerta bélica se justifica con la presencia real

de la amenaza externa que representan las aspiraciones peruanas por acrecentar sus fronteras sobre suelo nacional².

Desde esta misma perspectiva, los militares defienden a la Patria de otras amenazas que la asechan desde el interior de sus fronteras: “la rutina y los intereses creados” (Gral. L. Larrea Alba cfr. Paz, 1938), y se elabora un discurso antipolítico (contrario a los políticos), por su inoperancia para gobernar y la desconfianza que provoca lo corrupto de sus actos. Las FF. AA. son las llamadas a regular la situación a través de la acción enérgica de gobiernos militares:

El Ejército ecuatoriano nuevamente se pone de pie y reta a quienes han tomado al país como hacienda o industria lucrativa; expulsa de los sitios de administración a todos los que no supieron responder a los dictados del honor y de la moral; deja vacantes todos los puestos donde debe imperar la honradez y el patriotismo para llenarlos con hombres que hubieran dado crecidas muestras de que para ellos la Patria vale más que sus ambiciones personales [...] (Gral. Alberto Enríquez, 1937. Cfr. Coral, 1988: 188).

La puesta en práctica de las intenciones modernizadoras en las primeras décadas del siglo XX

A más de todo el andamiaje institucional y legal, con cuya emisión auspician la modernización integral del Estado, los militares “julianos” en 1925³, en su programa de gobierno dan muestras de la importancia que reviste implementar leyes que tiendan a “dignificar la raza indígena” (Tcrl. EM. F. Velasco, 1990: 29). Con una tónica similar, en julio de 1937, durante la Jefatura Suprema del General Enríquez Gallo (1937-1938), se emite la Ley de Organización y Régimen de las Comunidades Indígenas, en la que se reconocen los derechos de la vida cívica y administrativa de caseríos, barrios, comunas y parcialidades indígenas, sin reconocimiento jurídico hasta aquella fecha. Esta Ley se complementa en el mismo año, con el Estatuto Jurídico de las Comunas y las leyes de Control de Trabajo y Desocupación y de Cooperativas con el objeto de regular la migración campesina a las ciudades.

La preocupación por la educación de los indios se expresa cuando en enero de 1938, el mismo General Enríquez ordena por decreto, que “todo hacendado, propietario, arrendatario o patrón rural,

en el perentorio plazo de 2 años, contados desde la expedición de este Decreto, deberá dar preparación elemental a sus trabajadores del campo, de edades entre los 8 a 21 años” (Cfr. Tcrn. L. Burbano, 1991: 41). En la Ley de Educación Primaria y Secundaria, dictada en mayo de 1938, se dispone que:

Los propietarios de haciendas o predios agrícolas cuyo avalúo catastral esté comprendido entre los 100.000 y 500.000 sucres, pagarán un impuesto anual de 600 sucres destinados a la creación y mantenimiento de escuelas rurales... (Cfr. Tcrn. L. Burbano, 1991: 41).

Se prevé en la misma Ley la enseñanza del kichwa para los futuros maestros rurales. Al expedirse el Código del Trabajo, durante esta misma administración, se determina la fijación del jornal que debe recibir el *huasipunguero* y se define la duración de la jornada laboral en el campo, además de los descansos que le corresponden por obligación. Se determinan los derechos del *huasipunguero* a disponer de agua para su uso y de su familia, la leña, la caza, la pesca, los pastos para mantener su ganado, sin que se permita que el patrón obligue a sus peones a venderle los animales que posee (Cfr. Tcrn. L. Burbano, 1991: 41).

También durante la administración del Gral. Enríquez se emite la Ley de Servicio Militar Obligatorio (SMO), en enero de 1938⁴. Disposición esperada con avidez, como lo atestiguan las opiniones que se expresan a su favor, que resaltan por lo regular, el beneficio que su aplicación traería al país, al preparar de mejor manera a la mano de obra indígena, que se proyecta en la retórica como “rústica e ignorante”.

Entre los diversos medios que el Estado cuenta para disciplinar al pueblo, aparece el Ejército como el más eficaz puesto que con el Servicio Militar Obligatorio que lleva al cuartel ciudadanos de todas las clases sociales [...] el pueblo adquirirá buenas costumbres y buen modo de vivir [...] los episodios de nuestra historia que se aprenden en el SMO, despiertan la mente del rústico, del ignorante... (Tnte. de Caballería S. Larrea, 1928: 302).

Con las enseñanzas del SMO se contaría con trabajadores “más conscientes disciplinados, morales, ordenados y más amantes de la tierra en la que ellos y su familia gozan de bienestar” (Tnte. de Caballería S. Larrea, 1928: 302). También se garantiza así su permanencia en sus

tierras de origen cuando se manifiesta que con la nueva educación que reciben en el SMO, “de regreso a la hacienda, exigirían al patrón habitaciones acordes con su nueva forma de vida” (Capt. C. Guerrero, 1924: 300). Se trata, por tanto, de alterar el *hábitus* del indio para integrarlo en un nuevo esquema cultural, sin retirarlo de sus zonas tradicionales de asentamiento; proceso que se estructura a partir de una visión defensiva de la Patria.

El problema indígena halla solución, en esta medida, a través del SMO, en donde se forma al “pueblo en armas”. Pese a su carácter universal, la orientación que se le da se concentra, en buena parte, en el tema indígena porque son los indios quienes requieren ser integrados en pos de la unidad nacional. La situación de este sector frente a la defensa demanda ciudadanizarlos, lo que equivale a crearles vínculos con la nación, darles una educación cívica porque ellos, es decir “las tres cuartas partes de la población ecuatoriana, quién sabe si nunca han oído pronunciar la palabra Patria” (Cpt. C. Guerrero, 1924: 235). De esta manera, los conscriptos, en el SMO, entran en contacto con la Patria, y generan buena disposición para defenderla.

Con fines defensivos, confiere a los jóvenes una experiencia de adscripción nacional para formar el ejército de reserva en caso de enfrentamiento armado, una escuela de formación cívica, en donde el conscripto puede conocer lo diverso de la realidad nacional e identificarse como miembro de un grupo humano reunido en beneficio de la nación a la que se ve integrado, a través de esta institución. El SMO es visto como fuente de homogeneización con objeto de rescatar a las sociedades atrasadas y conducir las por el camino de la “civilización y el progreso” (Capt. C. Guerrero, 1924: 298). “donde los conscriptos entran analfabetos y salen aprendiendo a leer y escribir” (Gral. L. Larrea Alba. Cfr. Paz, 1938: 297).

Queda expuesto así un perfil del *militarylore* en las primeras décadas del siglo XX, que resume los fundamentos del pensamiento militar en esos años fundacionales, el rol que cumplen en la conformación de un imaginario moderno de nación y cómo se integra en éste la problemática indígena. Se evidencia su estrategia de defensa de la nación, como espacio que se halla en constante peligro de desaparecer ante las constantes amenazas que lo asechan, lo cual implica el concurso de la ciudadanía coordinada por los militares, en una actitud de alerta constante, de ‘guerra total’.

La formación del soldado moderno en Ecuador

Los personajes que emiten las opiniones que ilustran las páginas anteriores, son miembros del Ejército que atraviesan procesos formativos dirigidos por la Misión Militar Chilena que opera en el país desde 1902 hasta 1908, aproximadamente. Esta Misión de raíces prusianas, confiere una preparación ‘moral’ a las tropas ecuatorianas, las disciplina, y las dota de lealtad, de honor militar, abnegación, carácter, que pone en práctica a través del espíritu de cuerpo, y el amor al compañerismo (Nunn, 1997: 33) (traducción de la autora). Las FF. AA. prusianas son altamente politizadas, no necesariamente en el sentido de una participación directa en política, sino porque se trata de entidades corporativas, leales al Estado y la nación más que a una administración o gobierno específico, “ellas fueron ingredientes poderosos y vitales del proceso político [...] y al mismo tiempo, estaban involucradas en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas latinomericanas” (Nunn, 1997: 33) (traducción de la autora)⁵.

Entre los oficiales nacionales de la primera mitad del siglo pasado, se guarda gran admiración hacia las experiencias alemanas y chilenas, en especial por su capacidad de inserción en el medio social. El Capitán Salomón Larrea (1928: 299) expresa que habría que emular al Ejército alemán en la medida que se ha convertido en una “gran escuela de administración pública”. Relata también las gratas impresiones de su reciente visita a los cuarteles chilenos, donde se alfabetiza a los conscriptos.

Una descripción de las características positivas que confiere a los militares ecuatorianos su formación prusiana, es detallada por un representante de los mandos medios de las FF. AA. ecuatorianas, años más tarde, de la siguiente manera:

La cualidad sobresaliente de esos hombres consistía en sacrificarse, en servir al Ejército y a la Patria, manteniéndose siempre en segundo término, excepto en el momento de encontrarse bajo el filo del machete y de las emboscadas del adversario. Esos soldados eran discípulos de la mejor misión militar que ha tenido el Ecuador, la Misión Militar Chilena (Tnt. Crnl. E.M J. Muñoz, 1949: 181).

En los momentos en que emanan los discursos analizados en páginas anteriores, los militares ecuatorianos reciben las corrientes traídas por la Misión Italiana, que llega al país en 1922 y refuerza entre los

estudiantes sus concepciones acerca de la ‘guerra moderna’, aportadas previamente por la misión chilena. La Misión Militar Italiana difunde muchos de los elementos de las políticas corporativas inspiradas en varias fuentes: liberales, socialistas, comunistas y fascistas; los cuadros orgánicos que acogen aquellas propuestas desarrollan e implementan su interpretaciones propias al respecto.

Desde Italia llegan al Ecuador amplios planes didácticos, que se transmiten a través de cursos especiales de infantería, caballería, artillería, ingenieros, sanidad, aviación, Academia de Guerra, y además, cursos de perfeccionamiento para los jefes egresados de la Academia. Interpretan las experiencias de la Primera Guerra Mundial y, al mismo tiempo, aprenden el lenguaje militar para redactar órdenes de operaciones, la doctrina moderna del empleo de armas automáticas, historia militar europea, organización, estrategia, logística, táctica y fortificación (Tnt. Crnl. E.M J. Muñoz, 1949: 183). Como parte de su gestión en Ecuador, los militares italianos implantan una nueva estructura y orientación a la Academia de Guerra, en donde se forman los oficiales de Estado Mayor. Posteriormente, en la década del 70, la Academia de Guerra instruye a los oficiales en temas concernientes a la participación de las FF. AA. en el desarrollo socioeconómico del país (Crnl. EM. R. Andrade, 1973: 29).

El General Enríquez Gallo, quien recibe instrucción de ambas misiones que en el imaginario de la época forma hombres “que trabajan abnegadamente a favor de la seguridad de la Patria, en medio de la indiferencia de la gente, a la vez que modelan el alma ecuatoriana” (Coral, 1988: 46), imagen que proyectan los militares de sí mismos a través de sus discursos. Enríquez lleva a la práctica de muchas maneras la instrucción que recibe. A más de las acciones descritas hasta ahora, mientras fuera encargado del poder entre 1937 y 1938 establece la Escuela de Ingenieros del Ejército con profesores de la Politécnica Nacional del Ecuador e instructores italianos, allí los militares reciben el entrenamiento que los vuelve aparentes para la construcción de obras públicas, entre las que sobresalen las vías y carreteras.

El Gral. Luis Larrea Alba ocupa el poder momentáneamente en 1931, a más de haber pasado por la formación militar que ofrecen las misiones extranjeras, se halla vinculado con los nacientes movimientos de izquierda socialista en Ecuador. Es interesante anotar que los ensayos de este personaje se encuentran en los órganos de difusión interna

de las FF. AA. hasta la década de los 70, ello permite identificar la línea constante de su pensamiento, tendiente al mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos con la búsqueda de formas modernas de integración y homogeneización, a fin de construir la nación fuerte y cohesionada.

La participación de los militares como fuerza que cuestiona el orden establecido durante los 20 y 30, toma sentido en un contexto de crisis como el que caracteriza a aquella coyuntura ante la “depreciación monetaria creciente y el impacto de la misma sobre los grupos de ingresos fijos, como resultado de la crisis cacaotera” (Páez, 2001: 43), agrabada por la problemática global en la que sobresale la crisis de la depresión en los años 30. Estas circunstancias traen como resultado condiciones igualmente críticas, en las que se inscribe la época, que han sido interpretadas como la “crisis de lealtad”, acompañada por otra, de “autoridad paternal”, que afectan “a los estratos artesanales, indígenas y campesinos” (Maignashca, 1988).

La situación que pone en evidencia las debilidades estructurales del Estado ‘bancocrático’ en Ecuador, recibe una respuesta por parte de las FF. AA. que dan muestras de su presencia con un comportamiento que se vuelve habitual a lo largo del siglo, cuando el Ejército, representado por los oficiales de media y baja gradación, cuestiona el modelo “liberal-oligárquico” de dominación, con la asonada militar que protagoniza y que pasa a la historia como la ‘Revolución Juliana’. El Captn. Carlos Guerrero, Mayor para 1925, quien recibe entrenamiento de la Misión Italiana, sería quien, “acompañado por 8 oficiales y 50 soldados del Batallón Pichincha” deponga al presidente de turno Gonzalo Córdova (Espinosa, 1998: 120).

La ‘Revolución Juliana’ implementa lo que ha sido visto como un “incipiente proyecto de modernización estatal” (Páez, 2001: 49). Incipiente o no, tras aquel evento se ponen en práctica una serie de políticas tendientes a la modernización del Estado ecuatoriano, con preferencia en el manejo centralizado de la política económica que hasta tanto funciona sin regulaciones y se conduce especialmente por los bancos de Guayaquil, particularmente, que fungen de emisores de moneda. Se crean el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, se emite la Ley de Bancos, entre otras medidas tendientes a una institucionalización del país en el manejo monetario.

Los militares ecuatorianos heredan también de las misiones que los profesionalizan, las líneas básicas de pensamiento de la geopolítica en cuanto a la elaboración de modelos de desarrollo interno y a la construcción de enemigos internos y externos; toman espacio allí las doctrinas de seguridad nacional más agresivas que se aplican pasada la Segunda Guerra Mundial, que se analizan en líneas posteriores. En esta medida, las misiones propugnan entre las FF. AA. locales, las bases para la imposición posterior de gobiernos de facto (Loveman, 1999: 97). Se puede afirmar, por tanto, que la formación que reciben los militares ecuatorianos a través de las misiones extranjeras, durante la primera mitad del siglo XX, prepara el terreno para la implantación de las propuestas de la Doctrina de Seguridad Nacional, que se adaptan a las necesidades que, en opinión de los militares en esas coyunturas, son las más apremiantes, ante la situación constante de crisis social en que se mantiene el país.

El tiempo del desarrollismo: militares, defensa, seguridad y desarrollo

El período se conoce como ‘desarrollista’ porque desde los estratos de poder se trabaja por introducir a la sociedad de aquella época en procesos de desarrollo desde distintas vías. En lo que tiene que ver con el agro serrano, a partir de 1948 las élites en el poder aplican políticas tendientes a la consecución del desarrollo agrario.

Quienes estudian el contexto histórico-político en el momento de arranque del desarrollismo en Ecuador, relacionan la coyuntura con una etapa de ‘estabilidad política’, por su contraste con la anterior: 1925-1948, cuando 23 gobiernos alternan durante 23 años. Desde 1948 se suceden en el poder Galo Plaza (1948 a 1952); Velasco Ibarra (1952-1956) y Camilo Ponce (1956-1960). Esta situación es atribuida a las condiciones económicas del país, que vive para entonces el *boom* bananero. Aunque con mayor fuerza en la administración placista, los tres mandatarios apoyan la implantación de estrategias de desarrollo nacional, objetivo para el cual se dan una serie de pasos, entre otros: se establecen estrechas relaciones con la Alianza para el Progreso; se aplican las propuestas de la CEPAL; se trabaja a favor de la modernización del Estado con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; se catapultan distintos procesos tendientes a la modernización del campo con

el aporte de la tecnología y el asesoramiento de misiones extranjeras que apoyan las mismas finalidades; se reorienta la economía ecuatoriana hacia la producción y no solamente hacia el problema monetario⁶.

Se da paso a la discusión en torno a la aplicación de la reforma agraria; se acelera la construcción de obras públicas: vías de comunicación, locales escolares, medios de comunicación. En 1954 se crea la Junta Nacional de Planificación -JUNAPLA-, entidad a la que se encarga el planteamiento de los planes de desarrollo nacional. Todas estas transformaciones dinamizan al sector de tecnócratas e intelectuales de clase media, segmento social que gana mayor peso y presencia en la conducción estatal (Cueva, 1981: 68).

Sin embargo, la estabilidad política sujeta a las condiciones económicas del país (Fitch, 1977; García, 1987), resulta vulnerable y se ve debilitada ante la baja de las exportaciones de banano y el descenso de los precios del cacao y del café, situación que se vuelve crítica hacia 1961, cuando “el efecto de los términos de intercambio con respecto a 1955 representa una disminución de 636 millones de sucres en el poder de compra de las exportaciones” (Banco Central del Ecuador. Cfr. Cueva, 1981: 73). Cabe recalcar que cuando se habla de ‘estabilidad’ para describir el ambiente político de la época, no se aspira a definir un escenario carente de tropiezos, se trata más bien de un período salpicado por el enfrentamiento político civil mediado por la presencia militar y por los desacuerdos que se provocan al interior de las FF. AA. o entre esta institución y el poder civil.

El conflicto político al interior de los cuarteles pone en evidencia la poca cohesión de las FF. AA., con facciones que saltan de un bando a otro y a través de revueltas y asonadas en las que participan, para imponer sus intereses por la fuerza en combinación con políticos civiles (Fitch, 1977: 40 y ss.). Otro motivo de conflicto radica en la amenaza constante que representa la indefinición de límites fronterizos con el Perú. Con la derrota frente a ese país (1941), queda la sensación de insipiente para la defensa de parte de las FF. AA. ecuatorianas. A raíz de una protesta de los miembros de la Academia de Guerra en demanda de equipos bélicos y recursos económicos, el presidente Plaza (1956) clausura temporalmente aquellas instancias de formación militar y promueve que sus alumnos saliesen a centros de educación castrense de Estados Unidos y otros países ubicados en América Latina, para conseguir una mejor preparación ante un eventual enfrentamiento con

el Perú. Fitch (1977:138) especifica que el 55% de 90 oficiales entrevistados por él fueron enviados a formarse fuera del país.

La Junta Militar de Gobierno, una nueva intervención política institucional de las FF. AA. (1963-1966)

Tras derrocar al presidente Carlos Julio Arosemena Monroy⁷, motivada especialmente por la simpatía que muestra al gobierno comunista de Cuba y por los conflictos de gobernabilidad que enfrenta, la cúpula militar protagoniza una nueva intervención institucional luego de la Revolución Juliana de 1925. El nuevo gobierno de facto que se declara en el poder el 11 de julio de 1963, se conforma por Ramón Castro Jijón, contralmirante de Marina; Luis Cabrera Sevilla, teniente coronel del Ejército; Guillermo Freire Posso, coronel de la Aviación, y por el General Marcos Gándara Enríquez, Director de la Academia de Guerra y Senador Funcional por las FF. AA.

Un acto de ‘salvataje’ a la Nación

En aquella coyuntura -que bien podría analogarse con otras no sólo las FF. AA. se ven a sí mismas como el único actor capaz de enfrentar el caos; desde el sector civil, carente de una respuesta democrática ante la situación de crisis de gobernabilidad, se comparte tal posición, se aspira a que los militares ocupen el Poder Ejecutivo en pos de conseguir el orden interno con la separación de Arosemena del poder. En junio de 1963, voceros del Partido Conservador y varios artículos de prensa⁸ llaman abiertamente a la intervención militar, y recuerdan a las FF. AA. su histórica obligación constitucional hacia la Nación (Fitch, 1977: 61).

En el mes que precedió al golpe, todos los editoriales de El Universo fueron críticos con el gobierno, mientras que la reacción editorial frente al golpe militar fue de entusiasmo (Fitch, 1977: 63) (traducción de la autora)⁹.

La Junta Militar asciende al poder con el beneplácito de la Iglesia Católica, los grupos de poder económico, el gobierno de Estados Unidos y la “clase media ilustrada” (Espinosa, 1998: 178). Como objetivo a corto plazo busca regular la situación interna del país y en el lar-

go plazo se impone como meta modernizar al Estado, lo cual implica romper con el orden “oligárquico-terrateniente” (Cueva, 1981; García, 1987; Martz, 1988)¹⁰. Asume el mando en un tono de severa crítica a la acción de los políticos; persigue, en esa perspectiva, superar las desviaciones de sus prácticas tradicionales. Opta por prescindir de los viejos políticos y anuncia que su objetivo principal se llevaría a efecto con estadistas, tanto militares como provenientes de la joven tecnocracia emergente, de quienes se rodea para gobernar (Cfr. Fitch, 1977). Desde el Congreso, “ni siquiera se habían propuesto abordar” muchos de los temas de reforma planteados por los militares (Gral. M. Gándara, 1980: 179).

Con afanes desarrollistas y modernizadores introduce distintas reformas: del Estado, de las estructuras agrarias y de la institucionalidad vigente. Durante esta administración se expiden, entre otras: la Ley de Reforma Agraria y Colonización, “la Ley de Compañías de Comercio, la transformación de la Comisión de Valores en Corporación Financiera Nacional” (García, 1987: 102). Los militares en el poder ponen especial atención en el desarrollo de la industria y con esta finalidad entablan relación con la fracción industrial e impulsan políticas desarrollistas para conseguir un crecimiento nacional hacia dentro, que acompañe a la consolidación del Estado.

Aspiran a trabajar en el marco de la planificación y con este fin emiten el Plan Nacional de Desarrollo¹¹. El conjunto de leyes que se expiden en esta administración aporta con algunos de los basamentos para constituir el marco jurídico institucional que demanda la forma de desarrollo a que aspiran los militares reformistas, no sólo en ésta, sino en administraciones posteriores.

La fusión con el pueblo del soldado moderno

¿Qué características de este pensamiento militar moderno ‘siglo-veintino’ temprano se perciben en los discursos que despierta entre los militares su participación en la configuración de su imaginario de nación en períodos posteriores? En la segunda mitad del siglo, si bien se dan cambios en el contexto internacional, especialmente en términos de las fuerzas políticas que protagonizan los procesos de dominación, el contenido del discurso modernizante desde los ámbitos militares no desaparece de escena y logra plasmarse en acciones concretas.

La problemática social del país, no está ausente de la retórica militar en esa coyuntura, y se introducen reformas en el plano socioeconómico, que desde el punto de vista de los militares golpistas, “Ecuador requería urgentemente”. Lo hacen también para restablecer la democracia en busca de una mayor participación popular y con el objeto de que los gobiernos constitucionales consiguieran mayor estabilidad (Cfr. Espinosa, 1998: 178). Los esfuerzos de la Junta por conseguir progreso y desarrollo se centran en los ámbitos industrial y social, se menciona con insistencia la necesidad de implementar cambios estructurales que favorecieran esta visión, entre ellos la emisión de la Ley de Fomento Industrial.

Desde la percepción de sí mismos, los militares conocen la realidad de los ecuatorianos, al constatar la pobreza en la que se debaten las mayorías, hasta en los más distantes rincones de la Patria, apreciación que es compartida por otros miembros de la institución castrense hasta la actualidad:

Yo por la carrera he llegado a estar en casi toda la república, Arenillas, Sta. Elena, Celica, Cariamanga, Zamora, Quito, un periplo completo por la Amazonia y pude sentir lo que es la Patria [...] (Gral. Homero Berrazueta, entrevista de noviembre, 2003).

Por otro lado, los estudios que realizan -para conocer a la Patria que defienden- refuerzan su formación y vocación política, los dotan de una visión completa de los principales problemas que afectan a los ecuatorianos, y provocan entre los militares una reacción crítica de la problemática nacional, que los convierte en los llamados a “rectificar la situación” (Cfr. Fitch, 1977: 139). En todas estas alocuciones se deja ver el sentido antipolítico de este discurso, rasgo que les sirve de justificación para ser ellos quienes se preparen académicamente a favor de la Patria.

A más de las materias meramente militares, un curso básico, se reciben materias relacionadas con el desarrollo y con la vivencia propia del país: realidad nacional, economía, macroeconomía, microeconomía, ciencias de la educación. Allí se entera uno de como está el país, los principales problemas de la población; y cada tres años, las promociones nos concentramos al estudio a más de las ciencias militares, con el desarrollo y la situación propia del país (Gral. Homero Berrazueta, entrevista de noviembre, 2003).

Defensa, seguridad y desarrollo, la adaptabilidad de estos conceptos

El desarrollo socioeconómico como centro de atención, preocupación que entre los soldados nacionales ya se deja sentir desde principios de siglo, se ve resignificado en el ámbito castrense por las doctrinas anticomunistas; una de éstas, la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), busca en su nivel operacional, “neutralizar, contrarrestar o poner fin a la amenaza de la subversión” (Gral. V. Aulestia, 1969: 10).

Estos nuevos aprendizajes se transfieren a los soldados latinoamericanos a través de distintos centros de formación profesional ubicados a lo largo del continente: Estados Unidos, Panamá, Brasil, Argentina (Fitch, 1977: 143) o Israel, nación que busca consolidarse como tal y se enfrenta a una serie de enemigos por lo que articula al pueblo al ejército profesional y lo prepara para la guerra. Con esta influencia, la misión de defensa de los militares adquiere un nuevo giro al desplazarse hacia el ‘frente interno’; si la *defensa* implica la oposición a las amenazas externas, la *seguridad* se orienta hacia el control del orden interno, como garantía para la supervivencia nacional.

Seguridad nacional es la garantía relativa que un estado puede proporcionar a la Colectividad Nacional que rige, mediante acciones políticas, económicas, psico-sociales y militares, para el logro y preservación de sus objetivos nacionales [...] la finalidad primordial y cardinal [...] *garantizar la supervivencia de la nación* (Gral. (r). V. Aulestia, 1969: 9-16) (Las itálicas corresponden al original).

Las amplias atribuciones que el concepto de seguridad nacional confiere a los militares, les abre la posibilidad de intervenir en las políticas de Estado, durante gobiernos militares o civiles. Desde esta visión, la seguridad entra en alianza con el desarrollo cuando se argumenta que “sin seguridad no hay desarrollo”; el desarrollo como estrategia de contención, pasa a considerarse garante del orden interno.

De esta manera, cuarenta años después, la “función social” (Capt. C. Guerrero, 1924) deviene “estrategia preventiva” contra el subdesarrollo, que puede dar cabida al comunismo (Crnl. E.M R. Andrade, 1973:14 y ss.)¹². El aislamiento y falta de civilización de los indios se visibilizan como peligrosos para la conservación del orden interno y por esta vía, para la pervivencia del statu quo. La cohesión y el orden internos, también importantes a nombre de la unidad en la primera

mitad del siglo, son vistos más tarde como estrategias de disuasión frente al enemigo: el comunismo.

La lucha contra el subdesarrollo involucra indefectiblemente al sector indígena, por la situación de retraso que mantiene frente a la visión desarrollista de los militares. De allí el afán, por parte de las FF. AA., por erradicar la pobreza característica de los habitantes de las zonas agrícolas que podrían simpatizar con las propuestas comunistas.

Se les ayudaba en las mingas para construir casas comunales, para reparar la capilla, puentes, carreteras, una serie de pequeñas actividades para agua entubada, letrinas, o sistemas simples de alcantarillado, es decir, trabajar continuamente con la gente, y en eso se puso mucho esfuerzo (Gral. José Gallardo, entrevista de noviembre de 2003).

La novedad que introduce la DSN en las relaciones de la institución con el sector civil es la noción de seguridad que alerta sobre una nueva amenaza, un enemigo interno: el comunismo, que tiene en la mira a los sectores vulnerables por sus condiciones de pobreza y subdesarrollo, y de allí su interés por fomentar el desarrollo en el sector.

El énfasis desarrollista que dotan a su “función social” los militares de la Junta de Gobierno toma forma, se legitima y se justifica a través de la DSN y el resto de condiciones que la hacen realidad. Al tomar el tema indígena como un problema de seguridad nacional, las FF. AA. afirman las condiciones de autonomía frente a las interferencias de los políticos civiles. Aplican sus estrategias integradoras de acuerdo a su propia lógica militar, de donde nace su interés porque el tema constase en la Constitución. Desde sus esferas de poder, la Junta garantiza el contacto militar futuro con la colectividad, como fuente de seguridad a través del desarrollo, y desde esta perspectiva, continúa con su línea de construcción de un proyecto nacional societal. La Junta prepara el terreno al estructurar el marco legal para garantizar y legitimar su función social bajo los lineamientos de la DSN, que encaja con las aspiraciones militares de reestructuración nacional, materializadas en acciones de desarrollo.

Por otro lado, las políticas norteamericanas de seguridad hemisférica ofrecen en esos momentos la infraestructura técnica para que ello se volviera viable. El apoyo económico que llega a manos de los militares con estos fines, tiene relación directa con el presupuesto nacional. La vinculación con el desarrollo se encuadra también en razones

económicas: mientras más acciones se implementan mayor es el presupuesto que se destina para el efecto y que es manejado por las FF. AA. de forma privativa. Esa relación se modifica después de 1998, una vez firmada la paz con el Perú, cuando se cuestiona todo gasto militar, una vez superada la atávica situación de alerta a la que la amenaza de guerra somete históricamente al Ecuador.

Con el apoyo directo de Estados Unidos, que se implementa a través de distintos pactos de defensa hemisférica, los militares latinoamericanos se alinean en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional que se resume en la fórmula defensa+seguridad+desarrollo pero que, al mismo tiempo, permite a los soldados ecuatorianos contactos con otras realidades latinoamericanas en las que la propuesta toma sus propias formas regionales. La interacción con militares de otros países provoca intercambios de experiencias y conocimientos plenamente positivistas basados en los resultados obtenidos¹³. Esta formación amplía el horizonte militar, así como la importancia de la profesionalización entendida como perfeccionamiento y autonomía para ejercer las funciones defensivas (Huntington, 1995: 19). Por otro lado, la relación con otras experiencias cercanas vuelve factible reproducirlas o adaptarlas a sus propias realidades; en otras palabras, los militares se apropian de estas propuestas y las ajustan a sus intereses, lo cual las independiza en cierta forma de la influencia de sus ideólogos originales.

*La fusión con el pueblo del soldado moderno
que se traduce en la 'acción cívica'*

La función social que los soldados 'sigloventino' tempranos ven como parte de la razón de ser de las FF. AA., se materializa a través de las tareas de acción cívica de los militares desarrollistas de los años 60. Mediante Decreto Ejecutivo, en julio de 1962, se crea la Dirección General de Acción Cívica de las Fuerzas Armadas con la misión de planificar, organizar y ejecutar obras de carácter comunitario. Con ella se aspira a mejorar el nivel social, cultural y económico de las "clases menos poseídas del país", habida cuenta que en el imaginario militar ecuatoriano, "los indios son los más pobres entre los pobres" (Gral. J. Gallardo, entrevista de noviembre de 2003). A su vez, se trata de una estrategia para "elevar la reputación de la institución militar" (Tcrnl. Ing. L. Dávila, 1971:115).

Como lo muestra el Tcrnl. Dávila, si bien la acción cívica se orienta al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores deprimidos, constituye también una estrategia de *marketing*, para los militares que no sólo tienen que ser buenos sino parecer buenos, pues el reconocimiento constante de la sociedad hacia las FF. AA. garantiza la permanencia de la institución. Al constituir los marginados del país la población objetivo de la acción cívica, y dado el componente étnico de la condición de marginalidad en Ecuador¹⁴, el prestigio de la institución se eleva frente a los indios y se legitima así su presencia entre ellos.

En 1964, desde la cúpula militar, se gestiona en las instancias pertinentes el reconocimiento de sus acciones a favor del desarrollo en el ámbito constitucional. El senador funcional por las FF. AA., Gral. Gustavo Banderas Román, impone el interés de las FF. AA. al abogar ante la Asamblea Constituyente para que se introdujera en la sección correspondiente del articulado de la nueva Carta Política, la frase: “y cooperarán con el desarrollo socioeconómico del país” (Cfr. Vallejo, 1991: 30). Así lo reconoce la Constituyente de 1967, en cuyo Art. 248, consta: “La ley determinará la colaboración que sin menoscabo de su misión fundamental, deba prestar la fuerza pública al desarrollo económico y social del país” (Molina, 1993: 59). Ello faculta a las FF. AA. a involucrarse con el resto de la sociedad en acciones favorables al desarrollo, sin importar si se dan en regímenes civiles o militares, y les garantiza una fórmula de penetración social con fines de seguridad, que en la retórica militar equivale a defender la cohesión interna de la nación.

A través de la Doctrina de Acción Cívica, que había llegado desde Norteamérica hasta los institutos militares y los cuadros de oficiales¹⁵, y apoyados en la Alianza para el Progreso (Cfr. Martz, 1988: 19), los militares participan con la sociedad civil en campos como la educación, con la dotación de material didáctico¹⁶, construcción de locales escolares, equipos y espacios deportivos, mobiliario escolar; equipo pesado para obras de gran infraestructura. Con el programa “Alas para la Salud” de la Fuerza Aérea se cubren las zonas más aisladas en temas de salubridad, con campañas de vacunación; dotación de agua potable, vialidad, para facilitar el acceso a las poblaciones muy apartadas de los centros urbanos.

Al amparo de esta visión desarrollista la acción cívica introduce al Estado a las zonas más apartadas del país vestido de militar, con ma-

yor fuerza desde la década de los 60. Entran en contacto con la población que habita en las zonas de mayor ausentismo estatal asentadas en todas las regiones, en que se incluyen los páramos y las selvas amazónicas. Según un miembro de la institución, la finalidad de la acción cívica fue la de estrechar los lazos de unión entre los ciudadanos civiles y militares (Trnel. L. Dávila, 1971: 115).

Entre el resto de activistas del desarrollo que buscan integrar a los indios, las FF. AA. mantienen una situación de superioridad, al constituir la única entidad capacitada para conseguir el cambio desde su propia perspectiva, pues cuenta con el personal, los medios que demanda la acción cívica, el conocimiento de las necesidades y formas de trabajo planificadas. Ello nos remite nuevamente a los planteamientos de los antepasados de los militares desarrollistas, que conciben entre las misiones del soldado de la Patria un rol “social y cívico como ciudadano, funcionario de una categoría especial” porque cuenta con los “medios de acción” y la convicción política de realizarlo (Cptn. Guerrero, 1924).

Una nueva lectura del pensamiento del Cptn. Guerrero (1924) que la equipara con los planteamientos de sus sucesores en la década de los 60, deja entrever cómo el soldado moderno se fusiona con la colectividad para provocar la unidad nacional como condición para el desarrollo, hecho que confiere poder a la nación y la fortalece contra los enemigos. En esa medida, la acción cívica retoma el principio de la guerra moderna en la cual la defensa constituye un *esfuerzo colectivo*, que no incumbe sólo a los cuerpos armados, sino a toda la sociedad, “exige de un país en lucha, la fusión íntima con su Ejército, constituyendo con él un solo todo: la nación en armas” (Cptn. Guerrero, 1924). Cabe aquí la figura del soldado moderno que en el paradigma de la guerra moderna de la segunda mitad del siglo XX, no ataca o defiende por la vía de las armas sino con la “prevención” y la “disuasión” (Crnl. EM. R. Andrade, 1973), lo que implica la coparticipación con la sociedad. De esta manera también se consiguen espacios para el control social que mantiene el orden interno, es decir la seguridad.

Según Bertha García (1997), la acción cívica fue la base de la política social de la Junta Militar y señala a sus protagonistas, al fin de la década de los 60, “una nueva vocación: las tareas del desarrollo”. La “vocación” no era nueva, la propia autora reconoce que los militares

en los años 20 ya se perfilan como una fuerza activa que ejerce una suerte de control político (García, 1997); la función social asumida como contribución al ‘progreso’, ya se concibe con anterioridad por los militares como misión profesional y es en el período desarrollista cuando el pensamiento de los militares que les anteceden llega a consumarse en la realidad.

Las nuevas dimensiones del Servicio Militar Obligatorio

El contacto con la colectividad que caracteriza al soldado moderno, lo involucra con una nueva modalidad de servicio militar que se instaure en la década de los 60, la Conscripción Agraria Militar Ecuatoriana (CAME). En ese contexto se instruye a los conscriptos en las “técnicas agrarias y colonización, que los capacitan como elemento útil al desarrollo nacional” (Crnl. R. Andrade, 1973: 33).

[...] casi en su generalidad, se les fue dando una formación militar, compartida con la formación agrícola para que puedan trabajar en el campo, y no sólo que se les daba una formación, sino que una vez concluido el SMO se les entregaba una parcela de tierra para que puedan cultivarla y desarrollar también las fronteras, hacer presencia física en las fronteras, lo que se denominó ‘fronteras vivas’. Se debe recordar que el país estaba en un momento muy difícil, en las relaciones con Perú (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre de 2003).

El programa se inspira en la experiencia israelí¹⁷, que se adapta al caso ecuatoriano para enfrentar a los movimientos subversivos que podían aflorar en la zona rural ecuatoriana. Desde el punto de vista militar, durante la década de los 60, su participación debe darse desde cuatro ámbitos: prevenir, combatir, negociar y asesorar. Prevención y disuasión devienen roles fundamentales de la profesión militar moderna, si antes estaban encargados a los políticos, desde una visión de la guerra moderna también lo están a los militares, porque no interesa aplicar la violencia sino evitarla (Crnl. R. Andrade, 1973: 4-5), quienes manejan la violencia legítima son los militares.

Así, la CAME es vista “como primer puntal para mejorar las condiciones socioeconómicas de los grupos marginados” (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003). A más de servir como estrategia

de prevención frente a la amenaza del comunismo, la CAME es aplicada simultáneamente como estrategia de defensa del frente externo, ante una posible agresión peruana; en sí es una forma de trabajo multifacética ante los distintos objetivos que aspira cubrir. Se colonizan tierras consideradas como deshabitadas y acto seguido, se dota de pertenencia sobre estas tierras a sus beneficiarios. Si el sistema se aplica en la zonas de frontera, soluciona el problema de despoblamiento que las vuelve vulnerables a la invasión peruana.

Al llevar a la acción colonizadora a zonas de interés económico y militar en el sector fronterizo, el Estado está asegurando su patrimonio territorial, está haciendo participar a una parte de la población marginada, obligándola a mejorar su hábitat e incorporando a la zona productiva nuevas y ricas zonas [...] (Crnel. V. Estrada, 1979: 70).

Por esta vía se forman 'fronteras vivas', vallas humanas, para lo cual se convoca a los habitantes de las distintas zonas –indios y no indios–, con fines de defensa territorial, enfocada desde la posesión efectiva de una extensión de tierra por parte de sus beneficiarios. Reciben, de esta manera, una nueva condición de pertenencia nacional con la propiedad del suelo que trabajan y garantizar así la permanencia en el campo de estos pobladores, además de darles la oportunidad de recibir educación, capacitación para el trabajo agrícola y entrenamiento militar.

Sólo educando a los colonos se puede concienciar plenamente a la población que tiene que organizarse en las fronteras, no únicamente para explotar la tierra, sino también para ejercer soberanía en esos rincones (Crnel. V. Estrada, 1979: 77).

En esta figura se entrelazan la defensa con la seguridad; la preservación del orden interno con el desarrollo, que se combinan igualmente con una figura de ciudadanización.

La fusión del hombre ecuatoriano con el suelo patrio es todavía muy débil. El patriotismo [nacionalismo]¹⁸ no es sólo un sentimiento romántico y platónico [...] el individuo más ama a su patria mientras más la posee, mientras mayores intereses espirituales y materiales tiene en ella [...] la gran mayoría del pueblo ecuatoriano [...] no tiene un terrón en qué arrimar su cabeza [...] (Tnte. Crnl. J. Muñoz, 1949: 221).

La Reforma Agraria, antigua aspiración castrense que se hace realidad

Para las décadas 60 y 70 desde la visión del desarrollismo, la adopción de medidas reformistas en el agro es vista como medio para provocar mayores niveles de productividad y eficiencia entre los trabajadores agrícolas. La primera Ley de Reforma Agraria (1964), busca eliminar las modalidades tradicionales de tenencia de la tierra y liberar mano de obra indígena de la hacienda, en la perspectiva de dotar de trabajadores a las empresas industriales (Varas y Bustamante, 1978: 63), generar mercado interno e integrar a los habitantes del campo en la lógica capitalista. Se busca instaurar un sistema más dinámico y modificar las condiciones de vida de la población agraria con la creación de mayores oportunidades de ingreso, educación, salud y de su adaptación al sistema 'occidental', lo que equivale a su modernización.

Entre los contenidos del Plan Decenal de Desarrollo (1963), se expresa la aspiración del gobierno por implantar la Reforma Agraria, proceso que recibe un amplio apoyo de la Alianza para el Progreso en las décadas del 50 y 60, entidad que cuenta con el beneplácito de la oficialidad, "...el programa de Alianza para el Progreso [...] es una de las muestras más elocuentes y objetivas del sincero afán norteamericano de contribuir al adelanto y desarrollo de estos países" (Gral. L. Larrea Alba, 1969: 127). Con la emisión de la Ley de Reforma Agraria, se cumple una larga aspiración mencionada por el Gral. Larrea Alba ya para los años 30, como se cita en líneas anteriores.

Al constituir una corriente generalizada, "la política norteamericana de impulsar reformas de las estructuras agrarias es adoptada por la mayor parte de gobiernos latinoamericanos como necesidad urgente" (Guerrero, 1983: 88). En todo caso, por más que los procesos de reforma cuenten con la aquiescencia estadounidense con fines de defensa hemisférica, las élites locales, entre las que se incluyen los militares, ya toman conciencia de esa necesidad por otras motivaciones relacionadas con intereses también defensivos pero con un carácter unitarista local, más aún en Ecuador donde la tierra está dividida en regiones que compiten entre sí (especialmente entre Costa y Sierra); así, pese al poder que ejerce Estados Unidos, las políticas pasan por la decisión de las élites locales y sus conveniencias. Ciertos hacendados entregan tierras a los *huasipungueros*, desde la década de los 50, con el afán de moderni-

zar las relaciones de trabajo en el agro. Cabe reiterar que el Gral. Larrea Alba, en los primeros años del siglo, se expresa positivamente ante la idea de aplicar reformas agrarias que permitan una mejor distribución de la tenencia de la tierra.

En los años 60, los militares apoyan al desarrollo desde una propuesta técnica, de allí que la Dictadura de los 60 sea vista como un “reformismo tecnocrático” (Varas y Bustamante, 1978: 63). Su acción porta la consigna clara de modernizar al país y de integrar a los habitantes del campo para conseguir la cohesión interna. En este objetivo, los militares confluyen con el resto de fuerzas sociales como una más, pero con una ventaja: la posibilidad de ejecutar su idea desde el amplio ámbito de acción que brinda el Poder Ejecutivo en un gobierno de facto, lo cual los libera de la presencia de un Legislativo inoperante (Gral. Gándara, 1980: 179). De hecho, la presencia de las cúpulas militares en el poder central viabiliza la emisión de la Ley, pero diseñada de acuerdo a sus intereses.

La continuidad del desarrollismo en un nuevo contexto de dictadura militar (1972-1976)

El contexto político previo

Entre 1966 y 1972 se registra un corto período de administración civil, mientras la cúpula militar se repliega a los cuarteles, debilitada una vez más en su interior, como siempre que ocupa el Poder Ejecutivo (Gral. José Gallardo, entrevista de noviembre de 2003), por la fragmentación que provocan entre sus filas las distintas tendencias políticas que se ponen de manifiesto en esas coyunturas. Se suceden dos gobiernos provisionales y uno constitucional, el de Clemente Yero y el de Otto Arosemena Gómez, que luego de un breve paso por la presidencia constitucional es sucedido por José María Velasco Ibarra en 1968, quien ocupa el solio presidencial por quinta oportunidad. En mayo de 1967 una Asamblea Constituyente emite una nueva Carta Magna¹⁹.

Entre tanto, se forman nuevas tiendas políticas que se desprenden del socialismo y el liberalismo, cuyos disidentes se juntan en la Izquierda Democrática. Del Partido Conservador surge la Democracia

Popular con militantes, provenientes de los sectores medios y medio altos de la sociedad, aspiran a la conformación de un proyecto basado en el desarrollo y en el fortalecimiento del sector industrial.

El quinto y último velasquismo, la antesala a 10 años de dictadura militar

Con distintas posiciones políticas durante sus gobiernos anteriores, José María Velasco Ibarra se declara entonces abiertamente ‘antioligárquico’, y pretende continuar con la política de respaldo al desarrollo industrial emprendida por los gobiernos anteriores²⁰; implementa acciones que restan poder a las élites tradicionales que, en respuesta, se ubican en la oposición. La imposición de medidas económicas para paliar la crisis fiscal despierta el descontento popular y el gobierno se debilita paulatinamente, debilidad que llega a extremos cuando el Presidente pasa por alto disposiciones constitucionales, y evita las interferencias del Congreso para apoyar con mayor fortaleza las políticas de desarrollo industrial. Hacia julio de 1970 la crisis generalizada no se deja esperar y Velasco Ibarra se declara dictador con un ‘autogolpe’ respaldado por las FF.AA. y por amplios sectores de ciudadanos. Este episodio no es visto sólo como antecedente inmediato de un nuevo período de participación directa de los militares en asuntos políticos, sino como el momento en que se efectiviza tal intervención:

[...] el apoyo de los militares a la dictadura velasquista marcó su entrada formal en la escena política como actores privilegiados. Este es un período de gran dinamismo en el cual tomaron forma las relaciones entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas con otros miembros del sector civil: intelectuales, políticos y tecnócratas, además de algunos representantes empresariales (García, 1987: 181).

En estas condiciones, gobierna hasta febrero de 1972 cuando se produce otra intervención castrense, a través de un nuevo golpe que se respalda en “no pocos políticos, especialmente conservadores, liberales, socialistas y socialcristianos que pidieron la intervención militar” (Tcrn. EM. F. Velasco, 1990: 77).

El nacionalismo revolucionario (1972 - 1976)

Las alianzas con el sector civil

El General de la Fuerza Terrestre Guillermo Rodríguez Lara pasa a desempeñar la primera magistratura en el contexto de un nuevo gobierno militar. Para este período dictatorial, los militares presentan mayor experiencia en la administración pública, adquirida especialmente durante su gestión en la Junta Militar de Gobierno (1963-1966), por la continuidad de su proceso de formación y por los contactos que establecen con el sector civil, especialmente con la tecnocracia que se aglutina en torno a la Junta Nacional de Planificación -JUNAPLA-.

El gobierno Revolucionario Nacionalista traza una línea de trabajo que se expresa en su “Filosofía y Plan de Acción” (Gobierno Nacionalista Revolucionario del Ecuador, 1972) y en el Plan Integral de Transformación y Desarrollo (JUNAPLA, 1972)²¹. Allí se especifican los pasos para modernizar al país desde los puntos de vista socioeconómico y político, con énfasis en el interés por “ampliar los márgenes de participación política hacia los grupos históricamente marginados” (García, 1987; Espinosa, 1998). Tales planes de acción constituyen la síntesis de un proyecto compartido entre facciones de ciertos grupos de poder: un sector de los militares y otro de los civiles que cuestionan los viejos liderazgos desde una posición que aparece como cargada de objetividad democrática.

En esta gestión tienen gran participación los miembros de la Armada Nacional que intervienen en el proceso. Los marinos reciben una formación intelectual de más alto nivel que las demás ramas de las FF. AA.: “En la Marina, se buscaba que los oficiales fueran capaces de resolver problemas. Se comenzó a estudiar un núcleo de ciencias sociales, realidad nacional, oratoria, planificación” (Cfr. García, 1987: 193).

Militares y tecnócratas hallan espacios de confluencia cuando la cúpula militar opta por profesionalizar a sus miembros, quienes asisten a centros de estudio dentro y fuera del país; la formación que reciben supera, para entonces, los ámbitos de la defensa y toman conocimiento de temas socioeconómicos. En Ecuador llaman positivamente la atención las propuestas de la dictadura del Gral. Velasco Alvarado en Perú, de modo particular sus concepciones de independencia y desa-

rrollo nacionales, justicia social y participación popular (Gorman, 1997: 303). La similitud de las tendencias del nacionalismo revolucionario en Ecuador con las políticas que implementan los militares en Perú, las hacen aparecer como 'peruanistas'. Desde un punto de vista allegado al Alto Mando Militar de la época, ello no significa que la experiencia ecuatoriana fuera una 'mala copia' de la peruana, ellos analizan la situación de cada uno de los modelos, pero establecen las diferencias con el caso ecuatoriano (Cfr. García, 1987: 246).

La posición antipolítica de los militares (1972-1976)

Para el caso latinoamericano, las dictaduras militares que ocupan los gobiernos de sus países entre las décadas de los 60 y 70 lo hacen con el objeto de poner fin al desgobierno ejercido por los políticos civiles. Optan por demostrar que sólo la desaparición de 'los políticos' y el establecimiento de gobiernos militares por largos períodos pueden ofrecer las bases para la modernización, el desarrollo económico y la estabilidad política (Cfr. Loveman y Davies, 1997: 3).

En Ecuador, los militares golpistas reconocen que las distintas transformaciones que implica el desarrollo requieren de estabilidad interna, condición que no puede conseguirse en el marco de gobiernos civiles que asumen el Ejecutivo carentes de políticas de Estado, institucionalidad y vocación por la Nación. El desempeño de los civiles se aparta de los principios de la planificación, con falta de continuidad en sus propuestas por lo corto de los lapsos que ocupan el poder (Cfr. Loveman y Davies, 1997).

La presencia de las FF. AA. en el Ejecutivo responde, una vez más, a la situación de caos que se generaliza en el país:

El irresponsable manejo de los asuntos del Estado [...] la presencia de un sistema democrático aparente, cuya aplicación ha sido irracional y no ha tomado en cuenta la realidad psico-social del pueblo ecuatoriano [...], los constantes fracasos de los gobiernos [...], la inmoralidad e ineficacia administrativas, la incapacidad e insinceridad de los partidos y grupos políticos para interpretar las aspiraciones del pueblo [...] los falsos valores y mitos políticos (Gobierno Revolucionario y Nacionalista del Ecuador, 1972: 1-2).

Las FF. AA. avizoran la ausencia de élites capaces de trabajar a favor de la nación ante la falta de interés de la que dan muestras por dis-

cutir alternativas de respuesta a cuestiones trascendentes, como la inclusión de Ecuador en la Comunidad Andina de Naciones²² o la estrategia de desarrollo para la era petrolera, que no consta en agenda durante la campaña política (García, 1987: 151). De allí que opten por tomar en sus manos el poder para enrumbar a la Patria por las vías del desarrollo en el marco de la justicia social y la industrialización.

*Las posición antipopulista como justificación
para el ascenso militar al poder*

El riesgo del triunfo del populista Asaad Bucaram en las elecciones siguientes representa para los militares, en Ecuador, el ‘peligro de aborto’ de la implementación del desarrollismo como proyecto nacional. Las FF. AA. resienten del populismo por constituir éste un “mosaico ideológico” sin una definición concreta, que lo vuelve peligroso por su capacidad de atracción hacia los sectores populares, pese a sus carencias estructurales (Cfr. García, 1987: 9; ver también Bustamante, 1988).

El partido populista Concentración de Fuerzas Populares -CFP-, que respalda la candidatura de Bucaram, pone en práctica una política caudillista, con programas poco explícitos y amplia capacidad de maniobra frente a otros partidos políticos; afianza su presencia entre los sectores populares, especialmente de la Costa. El antipopulismo de los militares va acompañado en el momento que nos ocupa, por un desprecio frente al origen social de Bucaram relacionado con su ascendencia libanesa que lo descalifica de toda posibilidad de acceder a la presidencia. Desde la visión de las FF. AA., Bucaram representa la figura de un tráfuga despatriado que aspira a ocupar el poder en Ecuador, pese a encarnar un populismo extranjero y extranjerizante, ajeno a la nación imaginada; optan por el golpe de Estado, entre otras causas, para obviar el temor de ascenso del populismo al poder vía elecciones.

El discurso antioligárquico del nacionalismo revolucionario (1972-1976)

La dictadura militar encabezada por Rodríguez Lara se declara nacionalista, porque plantea la independencia frente a “los grandes centros internacionales de decisión”. Mantiene una línea favorable a la defensa de los intereses de la nación y la ruptura con la dependencia

económica, en particular frente a Estados Unidos. Los intereses nacionales hacen referencia particularmente al tema petrolero y a los recursos naturales en general, al considerarse estratégicos para la economía, de la que también depende la integridad del Estado. El nacionalismo en este horizonte es ‘revolucionario’ porque pretende inducir a la nación en un proceso de cambio estructural desde los puntos de vista social, económico, político y también cultural que difunde y hace prevalecer los valores democrático-liberales en lo político, social e ideológico. Confía en la movilización social a través de la organización de los actores del cambio²³.

Las políticas de integración que se implementan tienen también ese mismo enfoque nacionalista. Para los militares la acción cívica en sí no es suficiente, sino que ésta debe basarse en el desarrollo nacional, y ello redimensiona la función social del militar y se intensifican programas que tienden a conseguirlo desde un punto de vista integral (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre de 2003).

Las FF. AA. sienten representar los intereses populares en oposición a la oligarquía porque su fin es el beneficio de la colectividad, a decir de uno de los protagonistas de aquellos hechos, se buscaba que el pueblo tomase las decisiones, y provocar una redistribución de la riqueza, objetivos que podían lograrse sólo en un gobierno de hecho como aquel. Interesaba a la dictadura desplazar a los agroexportadores que históricamente habían manejado la economía y la política nacionales (Cfr. García, 1987)²⁴.

Así, se autoconcibe como antioligárquica porque intenta romper con las prácticas tradicionales del continuismo de pocas familias con poder económico en el manejo político del país (Argones, 1985: 174), que impiden la modernización nacional; en este escenario, la oligarquía es la causa del estancamiento nacional y es por esto que los militares se arrojan la decisión de combatirla.

El desarrollismo de la dictadura 1972-1976

Progreso y desarrollo continúan en la mira como fuentes de poder nacional, desde la perspectiva militar, “el poder económico de un estado, su capacidad industrial y desarrollo tecnológico son determinantes para enfrentar las amenazas externas” (Vallejo, 1991: 8). Se considera que para acrecentar el poder económico es necesario “crear con-

diciones de bienestar material adecuado para las mayorías nacionales, mediante la explotación de los recursos naturales...” (Gral. EM. (r) L. Larrea Alba, 1971a: 16). Ello explica el afán del gobierno por controlar la producción petrolera y orientar su inversión. De acuerdo al proyecto militar, el producto del petróleo sería invertido en la consecución del desarrollo industrial.

La industria constituye el “área más dinámica de la economía”, avances que se complementan con el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico y la capacitación de mano de obra especializada (García, 1987: 220). Para fomentar el proceso de industrialización, aplican en lo económico un esquema de sustitución de importaciones.

En esta oportunidad, se mantiene la visión desarrollista para la modernización que sostuvo la Junta Militar, sin embargo, a partir de los 70 el Estado tiene la ventaja de contar con los recursos provenientes de la producción petrolera. Es durante esta administración cuando mayor estímulo reciben las políticas desarrollistas en el país, bajo “circunstancias nacionales e internacionales inéditas” (García, 1987: 15), con un presupuesto más holgado, su posición estratégica de gobierno de facto exime a los militares de cualquier intervención externa, particularmente de la que proviene del Congreso.

Sin embargo, si bien el repunte económico del país gracias a la producción petrolera, aparece como una circunstancia inédita, Argones (1985) llama la atención en cuanto al peso que han atribuido las interpretaciones de esa coyuntura al ingreso petrolero como factor de cambio. El autor critica que se lo aprecie como si tuviera ‘voluntad propia’, y más bien enfatiza en la orientación al desarrollo con que se invierten las nuevas remesas de dinero durante esa administración. Ello evidencia que más allá de los ingresos petroleros en sí, que entre 1972 y 1976 son más bien moderados, el producto del crudo se destina, en buena medida, a la consolidación de un proyecto nacional direccionado desde la cúpula militar, que impone su visión política desarrollista que es la que le confiere los resultados que alcanza. Es decir que los niveles positivos que se consiguen en el país en términos de desarrollo responden más bien a la voluntad política de los militares en el poder y no sólo a que contarán con los medios pertinentes.

Este autor lo atribuye a que los militares que acompañan a Rodríguez Lara, llegan con nuevos niveles de profesionalización, mayor conocimiento de la realidad nacional, en comparación con el que al-

canzan en otras oportunidades, y una acentuada visión desarrollista sobre el manejo del país y sus recursos. La estrategia de desarrollo planteada cuenta con fuerte intervención estatal; un Estado que controla la inversión de los fondos petroleros²⁵. La administración nacionalista revolucionaria ha sido vista como un “intento decisivo en la aceleración de la modernización capitalista de la sociedad ecuatoriana” (Argones, 1985: 71-72). En todo caso, no puede perderse de vista el sesgo inmediatista que caracteriza a las políticas emprendidas entonces, en su intento por suplir el rol incumplido por las élites civiles en lo que iba de historia republicana en Ecuador.

Por otro lado, el desarrollo del país y de su industria y la dinamización para el efecto de mano de obra desactivada, es un afán de la cúpula militar que tiene intereses en insertarse en éste y otros sectores de la producción nacional, así como en el control de las áreas estratégicas del país, que puja por obtener en los períodos dictatoriales; en esa medida, los impulsos que recibe el desarrollo nacional en esos momentos no se divorcian de los intereses particulares de los individuos, en este caso de los militares, lo cual explica también su participación en el desarrollo económico y social de Ecuador.

Un proyecto ‘humanista’ de construcción nacional

La tendencia ‘social-humanista’ que dice mantener el régimen dictatorial de Rodríguez Lara se concibe tal porque la finalidad de sus acciones se destina al “hombre ecuatoriano”, con una visión unitaria de la nación que los lleva a plantear la incorporación “del hombre a la comunidad, permitiéndole su desarrollo integral y su autorrealización”. La justicia social en que pretende basar su acción se traduce en “la erradicación de la subalimentación, del analfabetismo, las condiciones de vida infrahumanas, el aislamiento de la actividad productiva, del consumo y la cultura nacionales, para que tenga conciencia de sus deberes y derechos para con la Patria” (Gobierno Nacionalista Revolucionario del Ecuador, 1972).

Con un proyecto orientado a favor del desarrollo social los militares asumen, a inicios de los 70, “la tarea de modificar la situación de los sectores subalternos, como precondition para el proceso de modernización capitalista del Ecuador” (García, 1987: 158). Para integrar a los habitantes rurales se propone “un sistema que absorba productiva-

mente la mano de obra actualmente marginada, de tal forma que se propenda a la máxima ocupación”, un sistema en el que la acción del gobierno se dirija especialmente al “desarrollo de los recursos humanos, particularmente en aquellas áreas que han sido desatendidas” (Gobierno Nacionalista Revolucionario, 1972: 7).

Se busca conseguir el desarrollo con caminos y medios de comunicación, como fórmulas para superar la fragmentación del espacio nacional “con el aprovechamiento de los vastos recursos naturales, para llevar la cultura, la justicia y la liberación económica para los ecuatorianos que sufren graves condiciones de aislamiento” (Gobierno Nacionalista Revolucionario, 1972: 37). Con una constante mención a la falta de integración de las grandes mayorías, se involucra el tema indígena, identificado siempre entre los sectores marginados o no incorporados. Se propone su introducción en la economía de mercado, con este fin se legisla de manera que se renueven las fórmulas de consolidación nacional que incluyan a los indios.

El gobierno de Rodríguez Lara decreta una nueva Ley de Reforma Agraria en 1973, planificada con antelación, para cumplir con el objetivo de “incorporar a la economía de mercado a los vastos conglomerados humanos que hoy se encuentran marginados de los beneficios del progreso” (Gobierno Nacionalista Revolucionario, 1972: 8). La nueva Ley de Reforma Agraria provoca un nuevo reordenamiento societal, al liberar mano de obra indígena de la hacienda serrana para fortalecer el proceso de industrialización en el país; recoge los basamentos implantados por las administraciones anteriores e institucionaliza el cambio a través de la creación de la plataforma legal que posibilite este cometido y le confiera sostenibilidad futura. El gobierno militar funge así de mediador entre la sociedad y el Estado y contribuye al establecimiento de mecanismos políticos de acceso de los sectores sociales marginados -entre los que se encuentran los indios- a las estrategias de integración estatal con miras a su modernización, bajo una misma adscripción nacional (Cfr. García, 1987: 24).

En una línea de continuidad con las propuestas que datan desde la primera mitad del siglo XX, se propone fomentar la educación con la eliminación del analfabetismo en todas sus formas y en el menor tiempo posible, con la universalización de la escuela primaria. Se piensa en el desarrollo de la educación del campesino que “deberá ser debi-

damente planificado y complementado con actividades de desarrollo comunitario [...] que preserven la cultura rural y confieran técnicas adecuadas, tanto para el desarrollo social como para el aumento de la productividad” (Gobierno Nacionalista Revolucionario del Ecuador, 1972). Para cumplir con el objetivo de “erradicar el analfabetismo” (Tcrn. F. Velasco, 1990: 87), el Ministerio de Educación prepara maestros, para lo que cuenta con personal voluntario y conscriptos seleccionados para que trabajen en la alfabetización de adultos con técnicas específicas para este tipo de población (Crnl. R. Andrade, 1973: 38). Con base en un planteamiento de cambio de estructuras que facilite recursos al agro para conseguir su tecnificación, se difunde la educación rural técnica, se crea el Departamento de Educación de Adultos y Coordinación Educativa para el Desarrollo (Tcrn. F. Velasco, 1990: 87)²⁶.

Se mantiene al tema organizativo como fundamento para la implementación del desarrollo agrario. Con una conducción estatal se planifica la participación social desde una perspectiva orgánica. En el discurso militar de aquella coyuntura se hace referencia constante a la necesidad de articular a todos los sectores sociales, pero no como individuos sino como agrupaciones regularizadas: “esta participación se logrará usando los canales de las organizaciones de base [...] la organización popular será un instrumento de la política gubernamental, de manera que garantice un proceso de transformación total [...]” (Gobierno Nacionalista Revolucionario del Ecuador, 1972).

A partir de las organizaciones de base, de gran componente indígena, se analiza la realidad nacional²⁷, “con estudios sociales, actividades de grupo, a fin de que cada ecuatoriano se transforme individual y colectivamente en agente, sujeto y beneficiario de su propio cambio” (Crnl. R. Andrade, 1973: 42). Como acciones que deben emprenderse con miras a la consecución del desarrollo agrario en un marco organizado se enfatiza en “motivar, movilizar, capacitar y orientar a la población para el cambio social, político y económico, tendiente a la integración de la sociedad nacional” (Gobierno Nacionalista Revolucionario del Ecuador, 1972).

Para la recepción de predios entregados al tenor de la Reforma Agraria, y para la consecución de beneficios para el fomento agrícola se acude a la conformación de cooperativas agrícolas²⁸. El ‘sistema cooperativo’ es visto con buenos ojos como la alternativa para conseguir que

la explotación de las tierras aporte positivamente al desarrollo de la economía nacional mediante el cumplimiento de “planes de trabajo adecuados” y luego, con el empleo de un volumen más alto de recursos humanos (Gral. (r). L. Larrea Alba, 1971a: 20).

La distribución de la tierra se hará a personas naturales que genuina y directamente trabajen, así como a las empresas, cooperativas, asociaciones y otras organizaciones agropecuarias (Gobierno Nacionalista y Revolucionario, 1972: 8).

Si el cooperativismo ya se interpreta como una forma organizativa adecuada desde el ámbito militar en la primera mitad del siglo XX, gana reputación cuando por motivos de formación profesional, algunos miembros de las FF. AA. viajan a Israel, hacia los años 60, y observan las experiencias cooperativistas orientadas a la unidad de una nación compuesta por “comunidades provenientes de distintos países y culturas heterogéneas [...]” (Cap. de I. J. Merino, 1971: 126).

El ejército de Israel desarrolla un programa sobre la base del entrenamiento en kibbutz para las comunidades, y asisten algunos oficiales ecuatorianos, yo estimo que esto se da en el 65 aproximadamente [...] (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003).

Con este intercambio, que se continúa en la década de los 70, las cooperativas incentivarían a los propietarios de parcelas productivas a permanecer en el campo, sin el desplazamiento de sus habitantes a otras zonas del país, con el consiguiente abandono del trabajo agrícola; las cooperativas apoyarían a mejorar las condiciones de la vida rural y permitirían al Estado pautar los avances desarrollistas (Gral. L. Larrea Alba, 1971a: 20).

De estas maneras, se acentuarían planificadamente nuevas formas de articulación de los sectores indígenas y campesinos con el Estado, desde donde se emiten políticas complementarias tendientes a la protección de la mano de obra agraria con la instauración del Seguro Social Campesino, 1973:

El gobierno del Ecuador a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dio un paso fundamental en el desarrollo social de la nación al extender en la práctica los beneficios del seguro a la población campesina, mediante el decreto expedido a fines de marzo (Ministerio de Defensa Nacional, 1973b: 49).

Para fortalecer al agro, entre otras iniciativas, se convierte a la mano de obra del sector en objeto de crédito. Entre las políticas para sanear la economía, la dictadura 1972-1976 se propone aumentar y “democratizar el crédito al pequeño agricultor”, a fin de lograr “un crecimiento acelerado de la producción” (Gobierno Nacionalista y Revolucionario, 1972: 20). Vale recordar que la organización cooperativista y el crédito a los productores agrarios, así como la protección de esta mano de obra a través del seguro social campesino ya habían formado parte de las concepciones militares hacia las primeras décadas del siglo XX (Gral. L. Larrea Alba. Cfr. Paz, 1938), lo que deja entrever la continuidad en la línea de pensamiento y acción relativa a las políticas redistributivas que se implementan en este período.

Para Argones (1985), sólo a través de un régimen de facto como el de 1972 puede reunirse la suficiente fuerza para iniciar un proceso como el que se consigue durante la administración 1972-1976. Argones identifica en el régimen nacionalista revolucionario una de las pocas alternativas de modernización real en el horizonte político de su época. Sin embargo, arrastra la debilidad de cualquier proyecto de reforma que quisiera iniciarse: la sociedad y los actores a quienes dirige sus políticas públicas están altamente desorganizados y desactivados (Argones, 1985: 73); en esos momentos se intensifican los auspicios organizativos entre la población del campo y se muestra, una vez más, la urgencia que tiene este gobierno para cumplir con las aspiraciones integracionistas.

Los indios adscritos al campo en el discurso militar

Por tradición, el discurso militar republicano evidencia su convicción sobre la ‘vocación agrícola’ del Ecuador. Desde esta perspectiva, en los países subdesarrollados que se encuadran en una etapa de producción primaria, esta cuestión reviste “especial significado, por cuanto las actividades agrícolas son las más importantes” (Gral. L. Larrea Alba, 1971a: 19). Ello implica “volver los ojos al campo”, lo cual equivale a ‘volver los ojos al indio’, por constituir la mano de obra agraria (Crnl. R. Andrade, 1973).

El Ecuador, todos lo sabemos, ha sido y debe seguir siendo, un país fundamentalmente agrícola, su economía debe moverse a través de la producción del agro y la alimentación de su pueblo no puede si-

no estar basada en esta producción, pero lo que no puede continuar [...] es la antigua forma de trabajo y explotación agrícola (Crnl. R. Andrade, 1973: 54).

Se concibe desde el plano militar que la explotación agrícola tiene indudables ventajas al ponerse en práctica entre las grandes colectividades, “comenzando por la posibilidad de obtener una producción en gran escala con fines de comercialización exterior” (Gral. L. Larrea Alba, 1971a: 19). Constituye un punto importante, por tanto, asegurar la explotación económica de las tierras, procurando que su rendimiento corresponda a los esfuerzos empleados y a los capitales invertidos (Gral. L. Larrea Alba, 1971a: 18).

Una vez desmantelado el sistema de hacienda, se busca que la producción agraria recaiga en manos indígenas, lo cual amerita recondicionar las estructuras existentes y dotar a los habitantes del campo de instrumentos modernos para el efecto, incluida la tenencia de la tierra. Se aspira a la modernización económica e industrial del campo, con la tecnificación de la mano de obra y la mecanización de las faenas agrícolas.

Se confiere a los indígenas una adscripción al campo de manera connatural como una solución a los problemas económico y étnico, a través de la creación de la institucionalidad pertinente:

El IERAC trabaja para los campesinos y por la Patria. El IERAC procura: el desarrollo socioeconómico y cultural de los CAMPESINOS. Una mejor distribución de los ingresos. El desarrollo agrícola. Una mejor relación hombre-tierra. El aumento de la productividad agropecuaria (Ministerio de Defensa Nacional, 1973a: 70)²⁹.

Se legisla con estos objetivos, y de esta manera se pretende borrar lo indio ‘por decreto’ y se lo sustituye por una visión campesinista como estrategia de ciudadanía, una vez que ‘lo indio’ se relaciona con el atraso y ‘lo campesino’ con una suerte de ‘cultura rural’ que halla más sintonía con el imaginario militar de lo moderno que se ve reflejado en distintos espacios. El lema de la Conscripción Agraria Militar Ecuatoriana expresa que “no sólo es soldado el que lleva el arma al brazo en el campo de batalla, sino también quien hinca el arado en el suelo nacional para hacer Patria” (Guevara, 1967: 129). Así, el soldado y el pueblo participan en un objetivo conjunto de homogeneización social de los grupos subordinados.

La gestión del SMO, encargada a la oficialidad militar, se mantiene como otra experiencia relevante como estrategia de modernización en un sentido civilizatorio (Selmesky, 2002). Con los conscriptos, particularmente con los provenientes del sector rural, se promueve una experiencia de doble vía. Por un lado, pone en contacto a indios con militares como estrategia de acercamiento mutuo, y en esta interrelación los militares hallan oportunidad para difundir su *militarylore*, su idea de nación y sus concepciones sobre lo ético, al mismo tiempo que consiguen acercamientos con este sector de la sociedad.

Si el discurso militar de las primeras décadas del siglo XX concibe que en el SMO los soldados aprenden a amar a una misma Patria, adquieren una misma nacionalidad, toman contacto con la diversidad nacional, reciben formación en los parámetros de las “buenas costumbres”, los vuelve merecedores de un estatus menos ambiguo de ciudadanía, los capacita para actuar a favor del progreso y desarrollo nacionales (Cfr. Cptn. de Caballería S. Larrea, 1928), en la segunda etapa del presente análisis, el SMO continúa siendo visto como el espacio en donde la mano de obra del campo puede adquirir las destrezas tecnológicas y modernas para aplicarlas a la agricultura y en la conscripción “realizar una práctica provechosa”. A los conscriptos se los instruye en “técnicas agropecuarias y pequeña artesanía, entre otras” (Crnl. R. Andrade, 1973: 33)³⁰.

El Servicio Militar Obligatorio busca hacer de cada conscripto un ciudadano útil a sí mismo, a la comunidad y a la Patria, creando una conciencia moral y cívica que le permita ser un elemento actuante en la vida del país, y no únicamente un mero espectador (Crnl. EM. R. Andrade, 1973: 27).

El mestizaje como alternativa de integración a los indígenas

Hacia la década de los 70, se percibe entre líneas, un cierto cambio de tono en el discurso de los militares hacia los indígenas con relación al que se emite en décadas anteriores. Ya no se habla de la ‘condición miserable’ de los indios, que induce a los no indios, militares incluidos, a trabajar por la redención de esta ‘raza’ marginada; aquel se convierte, más bien, en una expresión del ‘orgullo indio’, en que la raíz

indígena mezclada con la no india dan un fruto homogéneo que es el que nos toca aprender a reconocer y amar.

El Plan de Desarrollo y la Ley de Reforma Agraria dejan entrever la orientación política y social del régimen y afianzan su articulación con los sectores subalternos del campo y la ciudad. La mención que del mundo indígena hace en sus discursos el General Rodríguez Lara, apunta a dar una idea de integración nacional en la que se devela un imaginario de nación socialmente homogéneo, que defiende la unidad en la diversidad, cuando declara que Ecuador es parte de América, continente “mestizo” en medio de una “homogeneidad fecunda” (Rodríguez Lara, 1973a:17). Con un discurso que redunda en los valores unitaristas, que interpreta la unidad del cosmos en sentido teleológico, Rodríguez Lara se siente “parte de una unidad ecológica poderosa, que es la América mestiza” (Gral. Rodríguez Lara, 1973a: 18). Ello proyecta una visión de la relación del hombre con la naturaleza, elemento que incluye el mito terrigenista de pertenencia al suelo patrio. Esta homogeneización está dirigida a controlar la parte indomeñable del Estado, que se reduce a lo indio, desde una visión de las élites no indias.

Rodríguez Lara retoma también el mito épico que acoge la ascendencia del elemento indio en la nación ecuatoriana, condicionado a su heroicidad pasada. Reconoce la permanencia histórica de la presencia indígena en la constitución de esta Patria; los ‘líderes indígenas’ mencionados constantemente, Quisquis, Calicuchima, Atahualpa o Rumiñahui, reciben igual homenaje que Pedro Vicente Maldonado, Miguel Ángel León o la “pléyade de escritores, periodistas, artistas, educadores, artesanos” (Gral. Rodríguez Lara, 1973a: 18). Téngase en cuenta que Rodríguez Lara emite esta alocución en la provincia de Chimborazo, la de mayor número de habitantes indígenas de la Sierra ecuatoriana, cuyos pobladores no indios han presentado tradicionalmente altos niveles de racismo contra el Otro. Expresa hallarse “sin desmayo en el peregrinaje por la unidad del pueblo ecuatoriano y su nivelación en la cultura” (Rodríguez Lara, 1973a: 18).

La “Patria mestiza” está representada en el cuartel, espacio en el que se reproduce a “la raza” con todos sus rasgos y clases sociales; “la raza”, así entendida, es única y sólo así puede “encarnar la unidad nacional para constituir uno de los más fuertes pedestales de edificio estatal”. “La raza” ecuatoriana constituye así la nación que se conjuga en el cuartel (Crnl. R. Andrade, 1973: 4).

Los planteamientos de educación para los indígenas hacen referencia a la necesidad de “preservar la cultura rural” y conferirles técnicas adecuadas, tanto para el desarrollo social como para el aumento de la productividad (Gobierno Nacionalista Revolucionario del Ecuador, 1972).

Ya se revela en ese contexto la identificación de elementos de la otra cultura que se pueden conservar, y otros que requieren excluirse, lo que para Selmeski (2001) involucra una visión de la nación con un contenido multicultural. Contienen estas manifestaciones una propuesta que da continuidad al indigenismo de las primeras décadas de ese siglo y que lo pone de manifiesto como expresión liberadora para afincar la ideología del mestizaje, propuesta que no es privativa de los militares sino que es compartida con otros sectores de las élites civiles³¹.

En esta etapa del proceso de constitución del sistema capitalista en Ecuador, la participación indígena es entendida como el paso de sus protagonistas por un proceso civilizatorio favorable a la configuración de una cultura homogénea fundamentada en la fusión de las distintas culturas que comparten el escenario nacional. Si bien la preocupación castrense por los indios tiene una temprana presencia en el discurso militar, las acciones desarrollistas de los 60 y 70 consiguen materializar las propuestas integradoras formuladas históricamente y se fortalecen en el transcurso del tiempo y los hechos. Una serie de circunstancias, entre otras, la posibilidad de gobernar autónomamente por respaldarse en un gobierno autoritario, permiten a la cúpula militar aplicar fórmulas para inducir a los habitantes indígenas del campo en una racionalidad capitalista, bajo la condición de desindianización o campesinización.

Cabe preguntarse entonces, ¿cómo interviene esta política desarrollista de integración, en la posterior transformación de los indios en sujeto político en Ecuador de fin de siglo? Dejo abierta la pregunta para contestarla a lo largo de este trabajo.

La transición entre la dictadura militar a la democracia (1976-1979)

Desde el 12 de enero de 1976, en Ecuador se viven aún tres años y unos meses de dictadura militar. Tras la caída de Rodríguez Lara, al nacionalismo revolucionario le relevan otras tendencias políticas con las que convive al interior de la oficialidad, que enmarcan la dirección

de la nación en un modelo 'derechizante', con relación al que cesa. El Consejo Supremo de Gobierno lo conforman los comandantes de cada rama de las FF. AA.: por la Armada, el vicealmirante Alfredo Poveda Burbano; por la Fuerza Terrestre, el general Guillermo Durán Arcentales; por la Fuerza Aérea, el general Luis Leoro Franco.

En los años del triunvirato, el espejismo de la 'bonanza petrolera' induce al endeudamiento externo del país que crece, al aprovecharse para acceder a créditos, especialmente con la banca internacional privada y en condiciones poco favorables para quienes adquieren la deuda, ubicados entre los sectores público y privado³². Se registran fuertes fugas de capital a través de la compra de bienes raíces, gastos superfluos o el salvataje bancario, que ocurre con el Banco la Previsora, para lo cual se contratan créditos con el Banco Central y se dan muestras de las alianzas entre cúpula militar y élites civiles económicas, en este caso.

En 1976 Ecuador se endeudó en 248 millones [de dólares], los años de mayor endeudamiento fueron 1977, 1978 y 1979. Sólo en 1978 fueron contratados préstamos por 1.132 millones de dólares [...] entre 1975 y 1980 para amortizar el capital y los intereses de lo recibido se debería haber destinado 61.5% del total de exportaciones ecuatorianas (Espinosa, 1998: 203-204).

A diferencia de Rodríguez Lara, quien logra cumplir con su aspiración programática de no recurrir al endeudamiento externo para cubrir los déficit presupuestarios (Argones, 1985: 67), el triunvirato militar acude al crédito internacional, a partir de 1976, a fin de cubrir las crecientes demandas de un Estado 'nuevo rico'. "La nueva política del triunvirato militar (1976-1979) deja sin vigencia algunos mecanismos importantes para el control del endeudamiento externo (como el comité de financiación externo)" (García, 1987: 308).

En su relación con la sociedad, la administración de los triunviros demuestra una posición autoritaria de 'mano firme', que busca disuadir cualquier brote subversivo. Ello se evidencia cuando el proceso de desmantelamiento de la hacienda provoca estragos entre la población del campo, que debe reorientar su relación de dependencia con el Estado, con efectos en cadena: el desempleo y la consiguiente migración campo-ciudad. Súmense a ello la agudización de la inflación, resultado de la fuerte inyección de circulante en la economía generada

por el petróleo. Estos factores estimulan la protesta popular que recibe respuestas autoritarias antilibertarias que se despliegan bajo un manto anticomunista, ya no de prevención, sino de represión y disuasión.

En esta medida, el paso hacia la democracia se cumple, no sin inconvenientes y afanes intervencionistas por parte de un sector de los altos mandos militares, quienes imponen una línea autoritaria que se radicaliza con la presencia del Gral. Bolívar Jarrín Cahueñas en la cartera de Gobierno, en sucesión del Gral. Levoyer. En esa coyuntura se escarmenta violentamente a quienes protestan o critican la acción del triunvirato, uno de estos hechos desemboca en el asesinato del candidato a la presidencia por el Frente Radical Alfarista, Abdón Calderón Muñoz, a manos de sicarios contratados por el Ministro de Gobierno, quien finalmente cumple una condena dictada por una Corte de Justicia Militar.

Las centrales sindicales y el magisterio convocan en 1977 a una de las primeras huelgas nacionales. En ese mismo año la represión aplicada por la Policía contra los zafreros del Ingenio Aztra, en la provincia de El Oro deja un saldo desconocido de muertos, indios de la provincia de Cañar en su mayoría. Se habla del asesinato de un dirigente campesino en el Chota, desalojos a campesinos en Chimborazo. Mons. Leonidas Proaño y a un grupo de 50 eclesiásticos católicos, reunidos en Riobamba para analizar la situación latinoamericana, son apresados por sospecha de subversión (Espinosa, 1998: 205)³³.

En el período transicional, sin embargo, permanecen temporalmente en puestos clave, elementos militares considerados de tendencia progresista -nacionalista revolucionaria-. Ellos son los generales Riche-lieu Levoyer y René Vargas Pazzos, quienes desde las carteras de Gobierno y Recursos Naturales presionan por mantener la filosofía nacionalista revolucionaria en el nuevo régimen.

Desde su espacio de poder, Levoyer facilita un retorno a la democracia de coparticipación entre civiles y militares al convocar a un plebiscito que oriente el nuevo rumbo democrático con la elaboración de una nueva Carta Constitucional –la fusión entre las FF. AA. y el pueblo–. En esa nueva Constitución se concede a los analfabetos el derecho al voto, se amplían así los alcances de la ciudadanía a mayorías hasta entonces marginadas, especialmente indígenas y campesinas. Desde la óptica militar se aplica así una de las normas de la Geopolítica, la Ley del Aumento de la Capacidad Ciudadana que es la “suma de patriotismo más cultura, más capacidad militar de un Estado; el crecimiento de

los estados debe ir precedido por un aumento de la capacidad ciudadana; en caso contrario se dará un paso en falso” (Cpfg. EM. R. Espinosa, 1989: 79).

Desde el Ministerio de Recursos Naturales, en cuyas manos está el manejo petrolero, se fortalece la nacionalización del crudo al conformar el consorcio CEPE-TEXACO y propiciar el funcionamiento de la Refinería de Esmeraldas. La política nacionalista busca por este medio, acogerse a la tradicional tendencia antioligárquica de las FF. AA., con la preservación de los bienes nacionales. Se enmarca en esta visión del poder militar sobre la sociedad la ampliación de los espacios de ingerencia militar, al introducirse reformas para garantizar la representación de la entidad en el control del manejo civil de áreas de la economía consideradas estratégicas: petróleo, electricidad, telecomunicaciones, industria, etc.³⁴, amparadas en la figura de la defensa de la integridad nacional y, por consiguiente, de su seguridad. Se busca colocar a las FF. AA., representantes de los intereses del Estado, en competencia con los de las élites civiles en la administración de los recursos petroleros, y evitar la ‘tentación’ de convertirlos en botín individual, como si ésta fuese una tendencia sólo de los civiles; ese control amplía el poder político de las FF. AA.

Pese a mantener una autoconcepción unitaria, que pretenden proyectar de sí las FF. AA. entre el resto de la sociedad, en su interior existen comunidad y diversidad de intereses y posiciones políticas (García, 1987). La diversidad es un sello inherente a las FF. AA. —como lo es a la nación—, y se sostiene en una práctica de la unidad en la diversidad, al ser una institución corporativa. Tiene microcorporaciones que están atravesadas por su pertenencia. Ello no inhibe a sus miembros de compartir intereses y actuar de modo conjunto con el resto de élites económicas y políticas mediados por sus simpatías y antipatías ideológicas que se resignifican dentro de los parámetros de su *militarylore*.

En el momento de la transición se transparenta esta diversidad, cuando entre los nacionalistas revolucionarios pesa una noción de mayor equidad entre civiles y militares en el manejo del poder, entre tanto la tendencia liderada por el triunvirato busca mantener el control. Entre el nacionalismo revolucionario y el proyecto del triunvirato se identifican dos estilos distintos de totalitarismo que comparten, sin embargo, una visión vertical sobre el orden y la institucionalidad.

El proyecto de modernización del agro en la dictadura del triunvirato

En lo relacionado con la modernización agraria, la política de reforma cambia con respecto a la propuesta anterior. En esta coyuntura dejan de expropiarse los latifundios cuya tierra permaneciera ‘ociosa’ por lo menos en un 80%; se favorece a los agroexportadores a través de la exoneración de impuestos. Para continuar con la colonización amazónica se crea el Instituto de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana -INCRAE-; esta política acarrea un doble efecto, si bien abre espacios de trabajo y habitación para los pobladores, particularmente para los campesinos ubicados en zonas ambientalmente deprimidas, mano de obra que se libera de la hacienda serrana; los habitantes de la selva amazónica debieron enfrentar la deforestación y desequilibrios en el ecosistema selvático a más de la ocupación de las tierras que habitan cíclicamente desde tiempos ancestrales, dada su forma de vida transhumante.

El acceso al crédito para el fomento agropecuario mantiene el énfasis en la organización de sus receptores, como condición para su entrega. Se piensa que sólo los vínculos organizativos permiten una orientación cierta del crédito, su control, un ahorro de recursos en la adquisición de insumos, una socialización de conocimientos tanto técnicos como administrativos y contables, y la valorización, en términos económicos, de la fuerza de trabajo familiar (Sylva, 1991: 47; Velasco, 1978: 38). La asociación de los productores “permitiría enfrentar colectivamente las exigencias de racionalidad que impone una tecnología no tradicional” (Velasco, 1978: 36).

La desarticulación del sistema de hacienda además, se vincula cronológicamente con la temática de la urbanización de las grandes ciudades, Guayaquil y Quito³⁵, pues es de la mano de obra que se libera de la hacienda y en un buen porcentaje pasa a alimentar la mano de obra necesaria para la entonces pujante industria de la construcción; además, el acelerado crecimiento de algunas ciudades intermedias las convierte en focos de atracción para la mano de obra campesina en esta industria, factor que se vuelve palpable desde inicios de la década de los 70 y continúa con su dinamismo en ese período.

La ampliación del puerto nuevo de Guayaquil, el coliseo de Ibarra, la terminal aérea de Esmeraldas [...] cofinanció además, la continuación de los proyectos de generación hidroeléctrica, la electrifi-

cación de la Costa, a más de escuelas, salubridad pública y el plan vial [...] (Espinosa, 1998: 204).

En lo referente a la administración de los fondos para el desarrollo agrario el gobierno militar pasa a compartir posiciones con la tecnocracia civil, cuando define que el apoyo económico a los agricultores fuese canalizado desde el Estado, a través del Banco Central del Ecuador, en cuyo interior se implanta el Fondo de Desarrollo Rural Marginal - FODERUMA- en 1977, que orienta su capital a aquella población del campo que no se halla en posibilidad de acceder a los medios económicos ante las condiciones que imponen las instituciones crediticias, con el fin de conseguir mejoras de su producción y en sus condiciones de vida.

Dotadas de presupuestos generosos las agencias estatales especializadas en 'desarrollo', dependientes de los ministerios y del Banco Central construyen locales en las parroquias y los cantones: escuelas rurales, centros de capacitación, dispensarios médicos, oficinas de teléfonos y de recursos hidráulicos [...] (Guerrero, 1995: 101)

De esta manera, las FF. AA. dejan encaminado el manejo estatal del crédito a través de agentes regulares creados en sus administraciones para el efecto. Con ello se apuesta a fortalecer la institucionalidad civil de manera que su proyecto halle sostenibilidad futura y tenga sentido su paso por el poder. El país transita así a la democracia, con un esquema construido con base en una concepción patrimonialista de la política y la cultura política que se traduce en la actitud de las élites de poder, las militares para el caso del presente análisis, que consideran que el patrimonio del Estado es suyo y manejable de acuerdo a sus intereses y no en bien del Estado en su conjunto.

Notas:

- 1 El pensamiento del Gral. Luis Larrea Alba que retomo en este segmento, forma parte de sus discursos entre 1931 y 1937 que fueran reproducidos por su coideario Clotario E. Paz (1938).
- 2 Esta situación pierde vigencia a fines de siglo, con la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Ecuador en 1998.
- 3 En julio de 1925, los mandos medios militares dan fin a 30 años de gobiernos liberales que habían gobernado al país acorde con los intereses de la banca guayaquileña. La asonada militar de julio de 1925 trajo consigo una serie de políticas tendien-

- tes a la modernización del Estado ecuatoriano, particularmente en lo que tiene que ver con el manejo centralizado de la economía nacional para lo que crearon el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, emitieron la Ley de Bancos, entre otras medidas que buscaban la institucionalización del país en este sentido.
- 4 Ya en 1902, el Gral. Eloy Alfaro había emitido una ley en este sentido, sin embargo, el Servicio Militar Obligatorio no llega a reglamentarse ni a establecerse, sino hasta la administración de Enríquez.
 - 5 “[...] they were vital and potent ingredients of the political process [...] at the same time they were involved in the training of Latin America’s armies...” (Nunn, 1977: 33).
 - 6 En el capítulo 3 hago un recuento más detallado de la participación de estas entidades de desarrollo en el proceso ecuatoriano en aquellos años.
 - 7 A más de este hecho, a ojos de los militares, Arosemena había conducido al país a una situación de caos político y desgobierno.
 - 8 Para respaldar su afirmación, Fitch (1977: 61) cita artículos de los diarios de mayor circulación nacional, desde la capital y el puerto principal. El 3 de julio de 1963, diario El Universo expresaba que si el Ecuador logra sobrevivir será porque las FF. AA. cumplen con su deber de servicio a la Patria, sin ser objeto de intereses políticos, porque la Institución ha devenido “guardiana del interés nacional”.
 - 9 [...] even in 1963, there was a substantial civilian pull in the form of direct appeals for military action [...] not surprisingly, opposition from the traditional élites was particularly intense. In the month preceding the coup every El Universo editorial dealing with the government was critical, while editorial reaction to the coup was enthusiastic (Fitch, 1977: 63).
 - 10 Iniciada por Galo Plaza desde 1948 y continuada posteriormente por Velasco Ibarra y Ponce Enríquez.
 - 11 El Primer Plan Nacional de Desarrollo se lanzó durante la presidencia de Galo Plaza a inicios de la década de los 50. La Junta busca trabajar más ordenadamente en un contexto en el que la planificación era vista como muestra de modernización.
 - 12 El Crnl. Andrade (1973) hace una relación entre las formas que va tomando la guerra y cómo las armas nucleares -la tecnología- pasan a definir la “guerra moderna”, en la que el combate ya no se da por la vía armada sino por la capacidad de disuasión y negociación de las élites civiles y militares. El campo de batalla ya no es solamente el frente de guerra.
 - 13 Militares ecuatorianos como el General Víctor Aulestia Mier, uno de los más influyentes en una fase del gobierno de Rodríguez Lara, publica algunos artículos en la “Revista de las Fuerzas Armadas”, en los años 70, que cito en el presente trabajo. Él se entrenó en Brasil, en torno a los principios de la DSN.
 - 14 Aquí se incluye a la población afroecuatoriana, aunque este sector no es objeto del presente análisis.
 - 15 Cfr. Crnl. Patricio Haro, noviembre de 2003.
 - 16 Más tarde lo hacen también con docentes militares que se forman en la Escuela Politécnica del Ejército -ESPE-, dependiente de las FF. AA.
 - 17 Como se expresa en líneas anteriores, en esa década los militares en Ecuador viajaron entre otros países a Israel, para prepararse profesionalmente.

- 18 El nacionalismo retóricamente expuesto como patriotismo implica la defensa a una misma patria por una condición de pertenencia hacia ella. Los militares en Ecuador, más que nacionalistas merecen ser vistos como populistas (Cfr. García, 2005). Habría que preguntarse si entre ellos el nacionalismo y el populismo resultan sinónimos en determinadas circunstancias.
- 19 Desde esa Constitución aparece expresamente que las FF. AA. darían respaldo al desarrollo nacional,
- 20 Entre otras, el Decreto 1001 que integra a los productores arroceros de la Costa en relaciones capitalistas de producción.
- 21 La parte filosófica fue estructurada por el sector armado del movimiento, encabezado por la Marina, y el plan de acción por el grupo de tecnócratas civiles (García, 1987).
- 22 En 1969, Velasco Ibarra apoya la firma del Tratado de Integración del Ecuador al Pacto Subregional Andino.
- 23 Estas ideas se retoman de la "Filosofía y Plan de Acción" (Gobierno Revolucionario Nacionalista, 1972).
- 24 En el "Anexo" del trabajo de Bertha García (1987) se reproducen *in extenso* las entrevistas que esta autora realizó a muchos de los protagonistas del gobierno militar (1972-1976). No se especifican sus nombres porque así lo explicita la Dra. García, a pedido de los entrevistados.
- 25 La producción petrolera llegó hasta los 200 mil barriles diarios (Espinosa, 1998).
- 26 Cabe recordar que los indígenas eran analfabetos en su mayoría.
- 27 Estas agrupaciones fueron concebidas como "círculos de estudio".
- 28 Esta propuesta organizativa ya había sido formulada hacia los años 30 por el General Larrea Alba, como se vio en líneas anteriores de este capítulo.
- 29 La Revista de las Fuerzas Armadas pone énfasis en la función a favor de los campesinos del Instituto de Reforma Agraria y Colonización, las mayúsculas constan en el original.
- 30 Recuérdese que la habilidad artesanal de indios y campesinos se potencia como una de las fórmulas para integrarlos en la economía de mercado, ya desde los años 40, como parte de las estrategias del enfoque de desarrollo de la comunidad, aplicado por la Misión Andina para el Ecuador.
- 31 Cfr. Prieto, 2004; Kingman, 2006; Muratorio, 1994 a y b.
- 32 Pese a que Argones (1985) pone énfasis en que en esta administración hubo un mayor cuidado con las inversiones estatales, Espinosa (1998) resalta que en 1973 hubo una inversión abultada en compra de armas para la defensa nacional; en todo caso, el endeudamiento fue considerablemente inferior al que se registra durante el triunvirato.
- 33 Las actitudes represivas por parte de los gobiernos militares ya se habían hecho presentes desde la administración de Rodríguez Lara, en su última etapa, una vez que los sectores campesinos resienten la falta de cumplimiento de sus aspiraciones con la aplicación de la reforma agraria y exteriorizan su protesta (García 1987). Sin embargo, en este período se intensifican.
- 34 La Dirección de Industrias del Ejército, con 30 años de funcionamiento hacia el año 2003, consta de las siguientes divisiones: comercializadora, de construcción, de

manufactura, agroindustrial. Tiene acciones en las siguientes empresas: Amazonas Hot S.A con el Hotel JW Marrott-Quito; Ómnibus BB, S.A; Maresa S.A; Flor y Campo S.A; Hoscaza S.A; Banco General Rumiñahui; Novacero Aceropaxi S.A; Ecuacobre FV S.A; CondorMine S. A; Minreal S.A. (Dirección de Industrias del Ejército, 2003).

- 35 Desde el Estado se generaron planes de vivienda de clase media y popular, y también lo hicieron las mutualistas y el seguro social, lo cual dinamiza la industria de la construcción que utiliza mano de obra indígena y campesina.

LA MODERNIZACIÓN DEL AGRO Y LA INTEGRACIÓN DE LOS INDIOS EN LA COMUNIDAD IMAGINADA: UN PROYECTO DE LARGO ALIENTO

En este capítulo se busca entender en qué medida la eclosión de los indígenas en la esfera pública como actores políticos a fines del siglo XX, en Ecuador, es el resultado del proceso de modernización del agro, que se potencia con mayor firmeza entre las décadas de los 60 y 70 y continúa en lo posterior, con el impulso de distintas fuerzas sociales, entre las que se cuentan las FF. AA. Ello, habida cuenta que los militares a más de ejercer una influencia indiscutible en la sociedad ecuatoriana, en esas coyunturas encabezan gobiernos de facto, y sus acciones se ven fortalecidas por las políticas norteamericanas de seguridad hemisférica, lo cual facilita que impriman a las sociedades en que gobiernan con su *militarylore*.

Como resultado de las políticas desarrollistas impulsadas en el período en mención, se dan procesos posteriores relacionados con cambios en la constitución societal ecuatoriana; sobresalen entre éstos, la conformación del movimiento indígena y la aparición de los indios como actores políticos, a fines del siglo XX, ¿Quiénes y a través de qué fórmulas buscan integrar al indio en el período desarrollista? La respuesta a esta pregunta permitirá conocer el peso específico que se puede atribuir a lo militar en la constitución del sector indígena como actor relevante en ese contexto sociopolítico.

Si bien en los años 1964 y 1973, bajo dos administraciones militares de facto, se emiten dos cuerpos legales con el objeto de modernizar las relaciones de producción tradicionales en el campo y la forma

de tenencia de la tierra, para los fines del presente trabajo, la reforma agraria es concebida como un proceso de largo aliento con una serie de implicaciones. Su primera etapa arranca a fines de la década de 1940 y llega hasta 1976, se inscribe en el que se ha dado a conocer como período desarrollista.

En ese contexto, las preocupaciones de los sectores dominantes gravitan en torno al tema de la consecución del desarrollo económico nacional estancado ante la persistencia de relaciones precarias de producción. Ocurre particularmente en el agro serrano, en donde prima una lógica tradicional de corte colonial anclada en el sistema de hacienda, a más de una diversidad de factores que incurren en esta misma situación y que se pretende renovar. Como resultado de este proceso, se provoca la conformación de lo que Pallares (1999: 171) identifica como una “nueva formación racial”: formas de subordinación que persisten, otras que desaparecen, “otras fueron reconstruidas, y nuevas fueron inventadas”. Es justamente el cómo de esa nueva conformación lo que se intenta establecer en el capítulo Tres.

El *boom* desarrollista de los 60 y 70 trae entre sus objetivos la construcción de una comunidad en la que los indígenas se integran al sistema dominante luego de atravesar por procesos de desindianización u homogeneización, no en términos fenotípicos, sino en cuanto a su adquisición de símbolos comunes ajustados al ideal de la nación y del Estado. En ese cometido participan simultáneamente diversidad de fuerzas sociales -civiles y militares-, actores que se involucran desde sus propias perspectivas y actúan condicionados por sus particularidades históricas. Se suman una serie de factores que inciden desde los ámbitos tanto externo como interno. Este conjunto de fuerzas sociales comparte imaginarios y discursos que se entrelazan, se acercan y se distancian en diferentes momentos.

Desde el ámbito militar, integrar a los indios a fin de construir la nación unitaria implica compartir con ellos los enemigos y la responsabilidad de la guerra (Cfr. Keegan, 1993; Clausewitz, 1973). Las FF. AA. cuentan, en esas coyunturas, con el poder de decisión indispensable para influir de forma definitoria en los cambios que buscan implementar; constituyen la fuerza social capaz de regular las iniciativas de las élites en general, de establecer alianzas con ellas o de potenciar sus sinergias en pos de este objetivo común. ¿Puede hablarse de la existencia de un grupo hegemónico liderado por los militares? De ser así, esa hegemomo-

nía se construye bajo la consigna de modernización del agro, lo cual plantea previamente “liberar a la nación de la hegemonía de los grupos políticos y oligárquicos tradicionales” (Trn. F. Velasco, 1990: 120). Implica asimismo, incorporar a los habitantes del campo al resto de la sociedad nacional.

Para buscar la respuesta a la pregunta del capítulo, se realiza una breve revisión de las formas de relación que se establecen con los sectores sociales objeto del desarrollo -indígenas y campesinos-, desde el Estado y desde distintos campos -gobiernos civiles de turno, Iglesia, partidos de izquierda y de derecha, élites civiles, organismos extranjeros de desarrollo- con miras a conseguir la modernización nacional/societal, a través de la integración de los indígenas al resto de la sociedad. Se analizan también, los primeros esbozos de respuesta que se provocan desde los indios a los impulsos civilizatorios de los que son objeto.

En términos espaciales se hace mayor mención a las acciones que inciden en torno a la hacienda serrana, región en la que mayor impacto tiene la Reforma Agraria; se trata tangencialmente el proceso que se registra entre las comunidades amazónicas, que también ofrecen una importante experiencia de consolidación de sus organizaciones que arranca con anterioridad a los años 60, y entra en auge en lo posterior, cuando la preocupación principal surge de los procesos de colonización que producen la alteración en la ocupación de la tierra por las sociedades ancestrales. No se incluyen en este estudio las circunstancias en la Costa, región que evidencia cambios interesantes, aunque las diferencias de su proceso no abarcan los objetivos del presente trabajo.

A partir de una lectura crítica de amplia bibliografía que desde distintas vías analiza el proceso de reforma agraria en Ecuador y que ha servido de insumo para elaborar las reflexiones que se presentan a continuación¹, se han obtenido puntos de vista que a más de variados, ofrecen miradas escalonadas a lo largo del tiempo, de una misma realidad; se analizan opiniones que ilustran el proceso, inmerso en una relación de fuerza, y ofrecen, a su vez, una visión comparativa que se enriquece con la amplitud del margen temporal.

Se complementan estos aportes con las opiniones de algunos de los actores de estos procesos, y con un breve recuento de las acciones que se despliegan desde el sector civil local, además de otras instituciones extranjeras, a favor de la integración de los indígenas; interesa lo-

calizar los hilos conductores que permitan identificar las alianzas y sinergias funcionales que se establecieron entre las FF. AA. y otros agentes o ideólogos del desarrollo.

El Otro étnico: la mirada hacia los indios desde los ‘no indios’

Los sectores que se conciben a sí mismos como ‘blancos’ o ‘blanco-mestizos’ han mantenido, históricamente una posición de menosprecio que denigra e inferioriza lo indio, lo considera anacrónico y primitivo, lo estigmatiza y racializa la diferencia. Los indios, habitantes del campo en su mayoría, son vistos como seres ‘miserables’.

[...]vidas de milagro, pero vidas negativas, las de estos trabajadores del agro ecuatoriano, que languidecen de miseria en medio de lo que producen, para holgura y grosera ostentación del señorío nacional (Gral. L. Larrea Alba, 1932 cfr. Paz, 1938:136).

Los militares muestran, a través de su discurso, que perciben al indio como un ser desprotegido y retrasado al que ellos son los llamados a rescatar de la situación en la que está sumido por la despreocupación de los gobiernos civiles, a través de su introducción en procesos de desarrollo, desde un Estado dirigista.

Esta visión en torno a los indios es compartida por los militares con el resto de élites nacionales, que los conciben como los causantes del estancamiento del desarrollo nacional, y se busca modernizarlos, inducirlos en una racionalidad capitalista, integrarlos al resto de la sociedad. En este proceso, las élites dominantes abordan el problema bajo distintas ópticas que se proyectan a través de sus discursos, entendidos entre éstos a las políticas frente a los indígenas desde sus distintos ámbitos de poder².

Estas mismas élites proyectan simultáneamente otra imagen opuesta a la anterior, que resignifica a lo indio y lo acoge como fuente de identidad nacional, bajo determinadas condiciones. Establece una separación entre los indios del pasado -héroes militares- y lo que queda de ellos, como efecto del colonialismo; si a los primeros hay que imitar, a los segundos redimir. Se resaltan las gestas de guerra de los ‘generales’ Quisquis, Calicuchima, Atahualpa, Rumiñahui -de raíces indígenas pero incas- (Selmeki, 2002) por su brava defensa ante los invasores españoles de un suelo patrio, que posteriormente sería tierra ecuatoriana.

Los industriales modernizantes serranos de fines de siglo XIX, por ejemplo, destacan que lo negativo de la conquista española radica en su desprecio por lo nacional y la cultura aborígen, al provocar la *degeneración de su base étnica* (Muratorio, 1994b) (las itálicas son mías). Si bien en el pasado previa la conquista, los indios fueron seres ejemplares, actualmente están fuera de batalla, sufren una ‘degeneración étnica’. Desde esa perspectiva, elaboran un mito fundacional que supuestamente se distancia de los modelos eurocéntricos al permitir una valoración de lo propio a partir de sus raíces que comparten, sin embargo, parámetros iguales a los europeos.

... la apropiación de la imagen del indio por parte de los españoles, criollos y mestizos durante la Colonia, la Independencia y la República, no solamente como figura redentora o mesiánica, sino también como símbolo en la constitución de la identidad y en la legitimación de las relaciones de poder imperial y local (Muratorio, 1994a: 11).

Se mantiene así un modelo indigenista que no ha dejado de estar presente, el *continuum* de esta política ha sido interpretado como un “nacionalismo multicultural” (Selmeski, 2000), una suerte de ‘nativismo’, en donde sólo partes de lo aborígen son aceptadas y lo demás excluido y visto como objeto de aculturación. En esta tendencia se recupera la importancia mítica de lo indio, gracias a sus héroes reificados, no a su denigrada condición presente. Se reviste a lo indio de un sesgo folclórico que destaca lo salvaje y primitivo y este elemento que en otras circunstancias es motivo de vergüenza, deviene motivo de orgullo. La “Historia del Reino de Quito” de Juan de Velasco es aprobada en la enseñanza escolar como texto de Historia y se oficializa así un mito que reproduce lo europeo y lo adapta a lo prehispánico, el título de la obra habla por sí solo (Cfr. Ortiz, C., 2000)³. Este doble discurso involucra también desde el sector castrense, el mito épico de lo indígena que enaltece la concepción que sobre sí mismos tienen los militares quienes, al considerarse descendientes de esta ‘casta de guerreros’, se ven como continuadores de esa misión defensiva de la Patria de la que son herederos directos.

Atahualpa, el Inca legendario que a nuestra historia la primera idea de nacionalidad ecuatoriana, fue un claro ejemplo de heroísmo de nuestros antepasados [...]

[...]ya aparecen en los versos del poeta la vida de ese indio temerario, su investida contra el barbudo conquistador, su amor a su tierra y su vida sacrificada son una noble herencia para el pueblo ecuatoriano... (Ministerio de Defensa Nacional, 1969: 3-4).

[...]el gran General indígena, ejemplo de generaciones ecuatorianas, por el valor, coraje y patriotismo con que defendió la tierra de nuestros antepasados (Subte. O. Moscoso, 1969: 96).

De ser un antivallero, su raigambre indígena pasa a una nueva condición de valor que legitima su presencia frente a lo nacional. La posición de poder de los militares viabiliza que el discurso se materialice en la realidad a través de estrategias civilizatorias que traen consecuencias que se evidencian con posterioridad.

En esta imagen de lo indio coinciden los liberales y conservadores, los militares, así como los pensadores y activistas de izquierda o los miembros de la Iglesia Católica. En términos del enfrentamiento político entre liberales y conservadores de principios de siglo, la imagen denigrada del indígena postconquista deviene en la de “peón semiótico” (Muratorio, 1994a), cuando las distintas tendencias políticas utilizan la deprimida situación de los indios para ‘echar en cara’ a sus adversarios la poca preocupación que han dado muestras por éstos en sus gobiernos de turno (Cfr. Ortiz, C., 2001c).

La crisis del agro serrano

Durante la segunda mitad del siglo XX, en Ecuador se agudiza la situación de pauperización de la sociedad ante la caída de la producción bananera, con la que se marca la “crisis del modelo agroexportador ecuatoriano” (Verduga, 1977: 94) y sobre todo, por las muestras de decadencia que por fin registra el sistema de hacienda, imperante desde la época colonial (Barski, 1982; Guerrero, 1983), que deja de ser funcional a las exigencias del capitalismo dominante.

La población del campo en la zona andina, indígena por excelencia y mano de obra de la hacienda serrana, arrastra desde la Conquista una situación de descomposición social. Las élites ven tal estado de los indígenas como alarmante porque trae consecuencias negativas para la estabilidad del país, ante sus altos índices de analfabetismo y pobreza y, sobre todo, porque en esas condiciones constituyen una mano de obra

estática que no contribuye al desarrollo nacional. Carente de servicios básicos, salud, educación; aislada también físicamente, por la falta de vías de comunicación, presenta altos niveles de migración a las zonas urbanas y a la Costa.

Mantienen además, un ambiguo estatuto de ciudadanía y una incierta pertenencia nacional. Hacia 1857, con la supresión del tributo indígena, los indios desaparecen de los registros y por lo tanto dejan de existir públicamente, pierden así la condición de protegidos del Estado y pasan a formar parte de los 'activos' de la hacienda (Guerrero, 1998: 54; 2000: 43). Excluidos del plano político, al margen del Estado nacional, y por ende, sin participación activa en esta instancia, lo denigrante de sus condiciones de vida y en general la situación del trabajador agrícola, no concuerdan con la noción de civilización a que obliga la lógica del mercado o alguna en la que primase la dignidad del ser humano:

[...] tienen el aspecto sucio, repugnante. No se lavan nunca. Caídos los pelos, con total descuido, por delante de la cara [...] Negros y carcomidos los dientes. El acento de su voz parece un lamento. Miran como perros maltratados. Viven ¡Señor! ¡cómo viven! En chozas del tamaño de una carpa o como topos, dentro de huecos cavados en la tierra. Explotados sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes después de vender sus cosechas, se largan a Quito o a Guayaquil [...] (Leónidas Proaño, 1954. Cfr. Bretón, 2001: 59).

Solamente hacia 1979, cuando se concede el voto a los analfabetos, luego de un proceso en el que de una u otra forma el Estado y otras instancias abogan por sus derechos, al finalizar diez años de dictaduras militares, aparecen nuevamente en los registros y se les atribuye condición de ciudadanía, se transforman entonces en población objetivo de campaña electoral y por tanto de la atención de los políticos interesados en captar votos.

Cuando los indios no eran aptos para la defensa nacional

Desde el ámbito militar, se emiten discursos compartidos con las élites (Chiriboga, L., 1939), en los que se expone la necesidad de integración indígena ante los constantes requerimientos defensivos de la nación, por la vecindad con el 'enemigo peruano'. Los indios, desde esta perspectiva, no pueden formar parte de la nación mientras no desa-

rollen capacidades para defenderla. Para integrarlos, desde esta visión, las FF. AA. serían las llamadas a civilizarlos y ‘mejorarles la raza’, para que consiguiesen derechos de ciudadanía, que se materializarían en el acto de la defensa de una misma nación.

El primer problema de la organización militar deberá ser pues, regenerar la raza en su aspecto biológico, de otro modo solo llevaremos al campo de batalla individuos incapaces de soportar las fatigas y sobre todo individuos incapaces de soportar la depresión moral y nerviosa de una guerra (Chiriboga, L., 1939: 619).

Se argumenta así a favor de la aplicación del SMO, como estrategia civilizatoria, porque “de un pueblo en pleno estado de decadencia biológica, no pueden esperarse virtudes morales, ni mucho menos cualidades militares” (Chiriboga, L., 1939: 619). Había que superar las “taras raciales”, contradictorias con un imaginario de nación burguesa con ejércitos “espartanos”, preparados física y moralmente para la guerra.

Ved pasar un batallón de conscriptos, y a excepción de pocos individuos (que por lo general son de raza blanca o mestiza) y observaréis la talla infantil de toda esa juventud de 19 a 20 años que ha sido llamada al Servicio Militar [...] una tropa casi enana y tarada con debilidades musculares [...] (Chiriboga, L., 1939: 611).

Se responsabiliza a estos soldados, “sin virtudes morales”, de las derrotas frente al Perú y se los acusa de deshonestar y avergonzar cobardemente el nombre de la nación,

[...] se han dejado ultrajar, tomar prisioneros, pisotear y asesinar por los peruanos, ¡sin tener como respuesta el menor gesto de hombría, ni el pudor del soldado! [...] ¡Pocos son los que en la soledad de la selva han contestado al insulto con el insulto, la bala con la bala, la bayoneta con el machete! (Chiriboga, L., 1939: 619).

Ante tales circunstancias, la integración del indio implica una estrategia de modernización nacional como parte de la construcción de la Patria en la que se contemple a todos los excluidos.

La modernización del agro

Con mayor fuerza a partir de la década del 50 (hasta el presente), una vez culminada la II Guerra Mundial, los contextos nacional e internacional se hallan impregnados de un *ethos* modernizador, visto

desde el desarrollo. La racionalidad económica moderna se caracteriza por la búsqueda de productividad máxima, generación de ganancias y creación de inversiones que provoquen acumulación permanente de riquezas, tanto individuales como nacionales (Dos Santos, 1999). En el ámbito local, militares, gobiernos civiles de turno, iglesias, partidos de izquierda, hacendados modernizantes, organismos de desarrollo, activistas de campo, entre otras fuerzas sociales, confluyen desde sus ámbitos de acción y desde sus visiones en torno a la modernización, en el objeto de provocar procesos de desarrollo⁴, particularmente en el agro serrano.

Hablar de modernización en Ecuador implica abordar el tema agrario dado su carácter precario, más aún si las arcas fiscales nacionales se nutren, para entonces, solamente de la producción agrícola para abastecer las necesidades del consumo interno y la exportación, y se cuenta con un elevado contingente de mano de obra indígena y campesina, cuyo potencial productivo se halla subutilizado. La existencia de relaciones de producción tradicionales⁵ aún vigentes, principalmente en la Sierra y la Amazonia que se refleja en las carencias tecnológicas; la falta de educación de la población; su estado de retraso, y la ausencia de una racionalidad acumulativa en el manejo agrícola, evidencian por otro lado, la caducidad del sistema de hacienda que echa por la borda la potencialidad económica nacional, que enfrenta cíclicas crisis de producción. Desde esta perspectiva, los factores mencionados impiden la transición hacia prácticas capitalistas que coloquen al país y su gente a tono con las demandas del orden global.

En la Costa, el *boom* bananero, que arranca a fines de la década de los 40 y culmina a mediados de los 50, provoca un cambio en las relaciones de producción, con una expansión del sistema salarial en sustitución de las formas precarias. Si bien persisten aún otras relaciones en la región, éstas serán parte del proceso de cambio; sin embargo, se puede afirmar que en el litoral el panorama agrario supera ya los sistemas tradicionales⁶ aunque se mantiene como una producción de carácter primario exportador.

En cuanto a los aspectos sociopolíticos de la modernización en el campo, se vislumbra la necesidad de conseguir cambios culturales en el mundo indígena para superar las condiciones de pobreza, analfabetismo y exclusión, y en esa medida, se ponen en práctica nuevas fórmulas para integrarlo a la sociedad nacional. Los programas de desarrollo

rural que se aplican desde la segunda mitad del siglo, se ajustan a distintos enfoques: de 1954 a 1963 el desarrollo de la comunidad, como estrategia de integración indígena y campesina, llega a la población rural con el Programa Andino para el Desarrollo de los Grupos Indígenas, introducido por Naciones Unidas⁷ a través de la Misión Andina para el Ecuador. Entre 1964 y 1975 se introducen propuestas de desarrollo rural, fundidas con metodologías del enfoque de desarrollo de la comunidad, que incluyen proyectos de desarrollo y colonización con miras al paso de los trabajadores agrarios a una tendencia capitalista (Sylva, 1991: 42-43).

Todas estas entidades cuentan, en su momento, con el respaldo del gobierno militar, y aquí cabe una digresión: en este contexto se prueba cómo la militar no constituye una entidad aislada, sino que comparte muchos elementos con el resto de la ciudadanía y de las élites políticas; con ellas interactúa con el fin de modernizar al indio a través de su integración a la sociedad nacional. Si bien las FF. AA. deben ser consideradas como un actor más en este escenario, no puede desconocerse que lo militar mantiene un fuerte peso institucional en comparación con el resto de fuerzas políticas que intervienen con este mismo fin, y ello se posibilita porque están insertas en el Poder Ejecutivo y en la trama del poder civil, lo cual las dota de gran capacidad de influencia. Como un *continuum* también en los años 60, Ecuador vive en un estado permanente de crisis política, situación ante la cual las FF. AA. juegan un permanente rol de mediación.

De hecho, en medio de esa inveterada crisis e inestabilidad políticas fueron las propias estructuras del aparato estatal -de hecho el ejército: los gobiernos militares- quienes mantuvieron la continuidad y la unidad del dominio político (Moreano, 1991: 88).

Ello imprime al proceso de conformación de la sociedad nacional ecuatoriana y del Estado, de una lógica militar -*militarylore*-, es decir que muchas de las especificidades de lo militar se transfieren a las características que adopta el Estado nación ecuatoriano en su proceso de conformación (Cfr. Ben Ari, 2002, que analiza el caso del Estado de Israel).

La influencia de agentes externos en los procesos de modernización del agro

La Guerra Fría y la política reformista

Los años que nos ocupan son momentos de reordenamiento global, producto de la situación política enmarcada en un contexto de Guerra Fría. La confrontación bipolar en el plano internacional, se traslada a la vida interna de los estados y las sociedades se fraccionan en grupos enfrentados entre sí.

El triunfo de la Revolución Cubana (1959) además, provoca la arremetida norteamericana entre los países del subcontinente pues Estados Unidos aspira a mantener su condición de superpotencia y fortalecerla, factor que impide hablar de autonomías, menos aún en países dependientes como los andinos (Dos Santos, 1999; Larrea, 1991).

Las fuerzas armadas tomaron partido por la defensa del Estado capitalista, justificado como el bastión de la cultura cristiana y occidental y se vieron alineadas frente a los otros enemigos declarados del comunismo [...] (Moncayo, P. 1993: 9).

Las políticas norteamericanas ponen énfasis en la introducción de modelos reformistas para prevenir la eclosión de opciones radicales -como las comunistas en Cuba- a favor de una mejor distribución de la riqueza, especialmente en los países andinos, e implementan estrategias de intervención que involucran fuertes inversiones a través de la participación de los distintos organismos de desarrollo o de ayudas directas y entrenamiento militar. Difícilmente algún país del hemisferio hubiera podido evitar sumarse a la agitación que ello provoca, en todos los órdenes.

Con fondos estadounidenses, se crean organismos internacionales de desarrollo para promover procesos en esta misma línea y conseguir así la modernización del agro, particularmente en la Sierra⁸, y contribuir a elevar las condiciones de vida de quienes dinamizarían este sector de la economía con su inserción en el sistema dominante. La administración Kennedy difunde así un *ethos* defensivo y, por ende militar, que trabaja contra dos frentes: la pobreza, causante de inestabilidad y de la expansión del comunismo y la difusión de las ideas subversivas que amenazan

la permanencia del statu quo⁹, y se aplica en los países latinoamericanos la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN).

El pensamiento desarrollista enmarcado en la línea de la DSN propone como estrategia de defensa contra la guerrilla comunista, propiciar procesos de desarrollo popular, comunicaciones e 'indoctrinamiento', lo cual no conlleva una participación de las FF. AA. solamente, pues la mejor manera de enfrentar a la guerrilla es evitarla (Rostov, 1997: 139); desde esta perspectiva, el subdesarrollo impide el crecimiento de estas naciones y les resta poder nacional. La DSN es un arma para combatirlo y se lo construye como enemigo interno, causante de la inseguridad, y como resultado se provoca la fusión entre seguridad y desarrollo¹⁰.

En este discurso, se involucran diversidad de elementos: económico, social, político, psicosocial, militar que afectan la capacidad de los países latinoamericanos para lograr sus objetivos nacionales permanentes, que para el caso ecuatoriano constituyen: integridad territorial, integración nacional, desarrollo y justicia social (Dobronsky, 2000). Los países latinoamericanos, particularmente los de la zona andina, se vuelven espacio de acción de distintos organismos de desarrollo que cuentan con el apoyo económico de Estados Unidos y traen formas determinadas de acción. Para el caso ecuatoriano, se pueden mencionar los siguientes:

Los organismos de desarrollo con aporte estadounidense

- El enfoque del desarrollo de la comunidad de la Misión Andina para el Ecuador

A inicios del proceso, el desarrollo rural para América Latina adquiere un enfoque centrado en las bases de lo que se conoce como desarrollo de la comunidad (Cfr. Sylva, 1991; Basrky, 1982; Bretón, 2001)¹¹. Estas propuestas toman ímpetu gracias a los apoyos ofrecidos por Naciones Unidas y otros organismos multilaterales; se calcula que hacia la década de los 50 existen programas de este estilo en más de 60 países de Asia, África y América Latina (Sylva, 1991).

En Ecuador, la Misión Andina trabaja entre las comunidades de la Sierra a partir de 1956¹², hasta fines de la década de los 70. La Misión Andina de las Naciones Unidas se transforma en 1963 en Misión Andí-

na del Ecuador. En ese año pasa a depender del Convenio de Integración del Campesinado entre el gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo; en 1970 se suma a las dependencias del Estado ecuatoriano, al adscribirse al Ministerio de Bienestar Social. Las fórmulas de acercamiento a las sociedades indígenas y las estrategias que se implementan en lo posterior, continúan con patrones similares a los propuestos por este enfoque.

Luego de definir la situación nacional con objeto de disminuir la desigualdad en el ingreso existente en las zonas de pobreza extrema, bajo el enfoque del desarrollo de la comunidad se trabaja en un doble sentido: por un lado, se dota a los individuos de instrumentos para interactuar con la sociedad dominante con el fortalecimiento de sus niveles de participación; por otro, se fomenta su organización comunitaria y la formación de líderes. Algunos de los cuadros dirigentes formados bajo estos auspicios, encabezan los procesos posteriores de consolidación del movimiento indígena en la Sierra ecuatoriana. Fue al tenor de la labor desplegada por la Misión Andina, que “la gente empezó a despertar y a organizarse de cara a hacer efectivas sus demandas en la época de la reforma agraria de 1964” (José Quinde, líder indígena de Tukayta, Cañar, Cfr. Bretón, 2001: 83).

Se ensayó y buscó en varias ocasiones la participación directa de los indígenas y de sus formas sociales, para evitar así el paternalismo que liquida esfuerzos, iniciativas y trabajo convencido y espontáneo [...] se formaron dirigentes, promotores, educadores, enfermeras de primeros auxilios y otros participantes indígenas en general en el proceso de trabajo, desde el encuentro de las necesidades, la planificación, ejecución y evaluación de los frutos que se fueron logrando en los diversos programas y proyectos [...] (Crnl. EM. N. Gudiño, 1991: 20).

Para fortalecer las formas de organización comunitaria, respaldar el desarrollo de la comunidad y su identificación con las leyes del Estado favorables a los indígenas, se busca dotarlos de una condición jurídica con énfasis en que “los campesinos tomaran mejor noción de los derechos otorgados por la Ley de Comunas, que se había expedido en 1937” (Bretón, 2001: 76)¹³. Se trabaja en la constitución de los cabildos¹⁴, con una concepción democrática y participativa, que impide se mantenga la situación anterior de los indígenas y campesinos de dependencia directa de los tenientes políticos, los hacendados y la Iglesia.

Ya desde la Conquista se adaptan formas ancestrales de organización indígena a la administración española para el control de la población americana. Desde la Misión Andina se fortalece la formación de cuadros dirigentes que canalizan la acción organizativa a través de las propias comunidades y no de la influencia de terceros (Barsky, 1982: 24).

Las estrategias de intervención de la Misión Andina

... Mediante cursos de formación para los miembros de los 'cabildos' se enseñan a los dirigentes métodos adecuados para permitirles encauzar el trabajo y los recursos de la comunidad hacia el bienestar social... (Bretón, 2001: 73).

Para volver provechosa su estrategia, los técnicos de la Misión se involucran directamente en la cotidianidad rural, al desplazarse los trabajadores sociales a vivir en las comunidades objeto de los programas; a través de esta convivencia se busca alterar los patrones etnoculturales, con la introducción de otros elementos externos para 'elevar' las condiciones de vida de la población, y la homogeneizan con la cultura dominante. Se cuestiona la aplicación de la medicina tradicional indígena, por ejemplo, y se trata de erradicarla, por considerarla primitiva, al igual que otros elementos fundacionales de la cultura andina. Se modifican las viviendas; se difunden la letrinización y nuevos esquemas de comportamiento sanitario (Barsky, 1982).

En el ámbito educativo este tipo de intervención toma el nombre de educación rural; sus métodos pierden de vista que entre indios y campesinos existen diferencias culturales y más bien parten de la necesidad de la castellanización para el aprendizaje, con la intervención de activistas desconocedores de las lenguas aborígenes (Cfr. Yáñez, 1996: 75).

Se introducen tecnologías favorables al incremento de los ingresos individuales y colectivos de la comunidad para intensificar la producción y favorecer el consumo industrial. Con la educación técnica se aspira a contribuir a que se potencien las capacidades ya existentes entre la población, para introducirla más sólidamente en la economía de mercado (Cfr. Barsky, 1982: 20). Es el caso de las artesanías se trabaja con técnicas de carpintería, para los varones, y con tejido y bordado para las mujeres, que pasan a producir para el comercio del folclor, y se

facilita así la comercialización de estos bienes a los que se les busca destino a través del turismo¹⁵. Con un contenido tecnocrático, se aplican prácticas demostrativas para introducir nuevas variedades de semillas, formas de cultivo, fumigación, desinfección, ganado de raza, pero a la vez se desechan formas de alimentación tradicional que habían nutrido ancestralmente a la población indígena con la introducción de nuevos patrones alimenticios que a la larga resultan negativos para la población¹⁶.

Se realizaron seminarios, cursos, mesas redondas y variados programas prácticos con los tenientes políticos y con otras autoridades civiles, maestros, párrocos, dirigentes de cooperativas, especialistas de los sectores agrícolas, ganadero de bienestar social, salud y otros más (Crnl. EM. N. Gudiño, 1991: 21)

Hacia 1961, se hallan cubiertas por la Misión las provincias de Chimborazo, Azuay, Cañar, Imbabura, Loja y Tungurahua y hasta 1963 se intervienen 70 comunidades; es decir, entre 130.000 campesinos e indígenas, que representan el 6% de la población rural para la época¹⁷. Si bien el enfoque del desarrollo de la comunidad se agota hacia 1965 y cambia de orientación por los escasos resultados que consigue con respecto a los objetivos inmediatos que se plantea, la Misión Andina llega con su influencia hasta las zonas más aisladas y abandonadas por el Estado. Sus premisas tienen efecto multiplicador y son implementadas también por otras entidades que se dedican a un trabajo directo con la población objeto de desarrollo y se difunde más de lo esperado.

Los planteamientos civilizatorios de la Misión Andina han sido interpretados como parte de una visión “neointigenista” (Cfr. Bretón, 2001: 20)¹⁸ que persigue un cambio integral del campo, a través de la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Habida cuenta del tiempo transcurrido desde la primera intervención de la Misión Andina y las tendencias que implementan las entidades de desarrollo que le continúan, puede ser vista como “el precedente directo de lo que han sido las líneas maestras de los programas de desarrollo rural integral impulsados por los países andinos, durante las últimas décadas” (Bretón, 2001: 20). Es decir que sus propuestas se consideran como el paradigma del desarrollo rural. Oswaldo Barsky plantea que:

Esta línea de acción de la Misión Andina contribuyó en ciertas zonas de la sierra a romper el aislamiento de los grupos indígenas, mejoró sus niveles de organización y promovió a líderes que jugarían posteriormente un papel importante en las movilizaciones campesinas desatadas a partir de las leyes de reforma agraria de 1964 y 1973, que afectarían a los sectores más atrasados de los terratenientes [...] (Barsky, 1982: 26).

El enfoque de desarrollo de la comunidad en la visión de las FF. AA.

La Misión Andina es bien recibida por los militares, se percibe desde su óptica que tuvo una función integral centrada no solamente en la población objetivo sino que también busca fomentar la aceptación al indio entre el resto de integrantes de la sociedad, de manera que superaran “el marasmo y conformismo”. Desde este punto de vista, el enfoque de desarrollo de la comunidad sirvió para “despertar la conciencia individual y colectiva de los indígenas, a favor del desarrollo y del progreso; la solución de necesidades, y de participar e intervenir con criterio propio” (Crnl. N. Gudiño, 1991: 20).

El enfoque de desarrollo de la comunidad se aplica en la formación de los soldados, a través de los propios activistas de la Misión Andina para el Ecuador. Se registra entre estas dos entidades una relación sinérgica que provoca resultados que pueden ser percibidos en la larga duración.

La Misión Andina trabaja con el objeto de preparar instructores, oficiales y tropa, mediante cursos especiales, conferencias, seminarios, etc., para motivar y capacitar al personal que cumple el SMO, en su participación en el desarrollo de la comunidad, formación de líderes del desarrollo, etc. Además, el diagnóstico y asesoramiento en trabajos en beneficio de la comunidad, y el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la MAE con el mismo fin (Crnl. Policía J. Pazmiño, 1976: 33).

- El Servicio Ambulante Rural de Extensión Cultural del Ecuador

Surgida de la experiencia mexicana, esta entidad se destina al impulso de la educación indígena y recibe el apoyo del presidente Galo Plaza en la década de los 50.

Los principales campos de trabajo fueron: alfabetización de adultos, educación sanitaria, educación artística, educación agropecua-

ria, bibliotecas ambulantes, forestación, rotación de cultivos, etc. (Crnl. N. Gudiño, 1991: 22).

Con esta estrategia se aspira a civilizar a los indígenas desde una visión integral que involucra todos los ámbitos de su cotidianidad, aseo, salud, alimentación con base en sus propios productos pero con nuevas formas de preparación, manejo del suelo, forestación, agricultura, mejoramiento de su vivienda “para conseguir una mejor protección y defensa del capital humano” (Crnl. N. Gudiño, 1991: 22). Se difunden valores cívicos y se dan a conocer las gestas de los héroes nacionales y locales.

- Los postulados de la Alianza para el Progreso en la modernización del agro.

Otra entidad de intervención constituida por Estados Unidos, como parte de sus estrategias de seguridad hemisférica, constituye la Alianza para el Progreso. Sus principios constan en la Carta de Punta del Este de 1961. En Ecuador, la Alianza para el Progreso toma distintas formas, una de ellas el Cuerpo de Paz; auspicia además, a instituciones que impulsan proyectos a través de los postulados del desarrollo comunitario, detallados en líneas anteriores. Entre sus propuestas, aplicadas como estrategia de prevención ante el temor frente a la difusión del comunismo, plantea la necesidad de introducir al subcontinente en procesos de reforma agraria, tendientes a la implantación de sistemas justos de propiedad de la tierra; éstos se complementarían con crédito, asistencia técnica y una adecuada comercialización de los productos. El proceso de reforma agraria que se pone en práctica en aquella época busca respaldar la industrialización de los países en los que se aplica.

Los objetivos de la política exterior del gobierno del presidente Kennedy que fueron implementados en los distintos países de la región a través de una gama de organismos, coordinados por la Alianza para el Progreso, se pueden resumir de la siguiente manera: acabar con los sectores dominantes más tradicionales con miras a reestructurar las relaciones de producción en el campo; dotar de formación y organización a los habitantes del campo con miras a fomentar procesos reformistas que evitasen la subversión armada; la adopción de medidas de reformismo estructural agrario, es decir de reformas que provocaran cambios en la organización del agro, para volverlo más productivo y más

eficientes a quienes lo trabajan; difundir sistemas más dinámicos y modificar las condiciones de vida de la población del campo con la creación de mayores oportunidades de ingreso, educación, salud y de su adaptación al sistema dominante (Cfr. Guerrero, 1983).

A través de este organismo se administran los fondos norteamericanos para la consecución del desarrollo en la subregión andina. Así, su influencia es superlativa en cuanto a la aplicación de políticas desarrollistas, como condición previa para ofrecer el apoyo. Se inscriben en este marco las leyes de Reforma Agraria y Fiscal, implantadas por la dictadura militar 1963-1966. A través de la intervención de este organismo, a partir de 1961, “la política norteamericana de impulsar reformas de las estructuras agrarias es adoptada por la mayor parte de gobiernos latinoamericanos como necesidad urgente” (Guerrero, 1983: 88). En Ecuador, los gobiernos de Carlos Julio Arosemena y la Junta Militar de Gobierno (1963-1966) se proponen resolver los problemas de subdesarrollo nacional a través de un reformismo moderado, que se endosa a la Alianza para el Progreso (Cfr. Fitch, 1977: 154).

La amplia acogida que tiene por parte de los distintos gobiernos de turno, se evidencia con fuerza durante el régimen de Plaza (1948-1952), quien introduce en sus haciendas el cambio del sistema tradicional a modelos más progresistas de producción y transforma a estos espacios en campos de experimentación de las nuevas propuestas de progreso; entrega tierra a los *huasipungueros* e introduce nuevas tecnologías: convierte las zonas destinadas hasta entonces para la agricultura, en pastizales para orientar al ganado a la producción lechera, entre otras (Barsky, 1982). De esta forma las estrategias norteamericanas de intervención se fusionan con los intereses locales.

La Alianza para el Progreso y los intereses militares

La Alianza del Progreso tiene buena aceptación desde el plano militar, por tratarse de un programa con fines antsubversivos y de apoyo a sus iniciativas desarrollistas, es vista como el “sincero afán norteamericano de contribuir al adelanto y desarrollo de estos países” que se inscribe en la política del “buen vecino” de Estados Unidos, con el ánimo de cooperar a la solución de los problemas que afectan al continente (Gral. EM (r) L. Larrea Alba, 1969: 127).

Se plantea el apoyo al programa porque sus realizaciones no dependen solamente de la ayuda estadounidense sino de los esfuerzos con los que se responda desde el ámbito local; por ello debe asegurarse la participación del sector privado, como factor significativo en las propuestas de la Alianza (Gral. EM (r) L. Larrea Alba, 1969: 127).

Las Fuerzas Armadas se habían fortalecido, como organización, desde la década de los años 60 en que asumieron funciones políticas; y especialmente desde 1963 cuando -como gobierno militar- impulsaron en el país las reformas modernizantes promovidas por la Alianza para el Progreso (García, 1987: 58).

- La visión desarrollista de la CEPAL

Otra de las influencias externas que recibe Ecuador con miras a la modernización es la ejercida en esta misma época por la Comisión Económica para América Latina -CEPAL-, organización regional de las Naciones Unidas, que se fundamenta en las propuestas de la teoría de la dependencia, que surge en América Latina entre las décadas de los años 1960-1970¹⁹.

Un primer diagnóstico realizado por los técnicos nacionales y extranjeros de la entidad destaca como factores retardatarios del progreso nacional, la ocupación en actividades primarias por parte de la población económicamente activa, el empleo de procedimientos primitivos, baja productividad, un crecimiento demográfico elevado, alta fragmentación del país desde distintos puntos de vista, desigual distribución de recursos, problemas en la capitalización de la economía, débil desarrollo industrial, entre otros factores que, en su conjunto, son vistos como los causantes del lento crecimiento económico ecuatoriano y por tanto, de su desarrollo insuficiente (Vicuña, 1987: 27).

En el diagnóstico sobresalen como factores negativos el carácter anacrónico de la explotación del trabajo rural y las formas dominantes de tenencia de la tierra, particularmente en la Sierra, como factores que frenan el desarrollo al constituir manifestaciones evidentes de la presencia de formas precapitalistas de producción. Los resultados de este diagnóstico sirven de fundamento para la toma de decisiones y aplicación de políticas de ese momento y posteriores, que afectan directamente las relaciones de producción en el campo.

Recomienda la superación de estos obstáculos, y pone énfasis en que “era el régimen de tenencia del suelo que dificultaba la asimilación

de la técnica, la deficiente actuación del Estado para adaptar y difundir esa técnica y la precariedad de las inversiones” (Barsky, 1982: 29). Se observa que la irracional distribución de la tierra afecta directamente a la productividad. Hacia la década de los 60, las concepciones de la CEPAL se orientan a plantear cambios en la estructura agraria a través de la implantación de reformas agrarias. Recomienda asimismo, acelerar el proceso de industrialización del país, a través de la presencia del Estado; se trata de invertir la relación del proceso productivo, lo cual implica en resumen:

... la modernización de la economía: diversificación y tecnificación, dinamización de la producción alrededor de la industria, redefinición de las relaciones económicas internacionales, crecimiento de la inversión extranjera y redistribución del ingreso... (Vallejo, 1991: 11).

Desde esta perspectiva, el Estado desarrollista es un Estado fuerte. En ese contexto interviene como ente planificador y dinamizador del crecimiento de la industria a través de una política proteccionista de sustitución de importaciones, que se complementaría con los avances técnico y científico.

La CEPAL en la opinión de los miembros de las FF. AA.

Los planteamientos de la CEPAL hallan buena acogida entre las estrategias desarrollistas que se aplican durante los gobiernos militares en Ecuador. El Ing. José Corsino Cárdenas, Ministro de Fomento durante el gobierno de la Junta Militar, es reconocido como un fiel representante del pensamiento ‘cepalino’, es él quien impulsa la formulación de la primera Ley de Reforma Agraria (1964). “En Ambos regímenes militares reformistas en el Ecuador [...] predominó un modelo amorigerado de la CEPAL para el desarrollo del país” (Fitch, 1988: 293).

Estas políticas toman mayor auge en el medio a partir de la década de los 70, en que el Poder Ejecutivo estuvo en manos de dos dictaduras militares. Ante la imposibilidad de mantener un crecimiento hacia fuera, la CEPAL plantea un crecimiento hacia dentro y recomienda actuar bajo los parámetros de la planificación y la implementación de cambios profundos en las estructuras sociales de la región (Cfr. Hurtado 1977: 273). La planificación es una de las formas de trabajo bien vistas

por los militares, al coincidir con las ideas de progreso. Muchos de los cambios que se operan en las décadas analizadas son el resultado de la aplicación de las recomendaciones de la CEPAL, que en esta medida, tiene influencia decisiva en las políticas que se adoptan para la transformación del agro serrano, para entonces y en lo posterior.

Como se puede observar, las entidades de origen estadounidense o aquellas que cuentan con su apoyo y que actúan a favor del desarrollo, hallan amplios espacios de congruencia entre sí y entre las concepciones desarrollistas en que se inspiran las políticas militares. Durante el régimen de Rodríguez Lara (1972-1976), pese a declararse nacionalista e independiente de la influencia internacional, se permite que operen con absoluta libertad entre las comunidades campesinas de la Sierra y la Amazonia, organismos de desarrollo con influencia religiosa evangélica como el Cuerpo de Paz y el Instituto Lingüístico de Verano.

Los nuevos organismos externos de intervención en décadas posteriores

Hacia la década de los 80, “por lo menos 40 entidades privadas procedían de los Estados Unidos”²⁰ (Sylva, 1991: 43). Desde 1973, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Banco Mundial -BM- orientan sus esfuerzos al desarrollo de los “pequeños granjeros del Tercer Mundo” (Sylva, 1991: 40). A través de su monetización, y con miras a insertarlos en el sistema de mercado, ellos aumentarían su producción y por lo tanto sus ventas, y tendrían mayor capacidad de compra de insumos técnicos y servicios. Los fondos del Banco Mundial con este propósito se multiplican hasta inicios de la década de los 80.

En resumen, puede decirse que los organismos internacionales para el desarrollo otorgan una forma definida a la serie de iniciativas que buscan la integración indígena. Las fórmulas que aplican dan respuesta a las necesidades de las fuerzas locales y posicionan su discurso de manera que tiene una gran influencia en los resultados posteriores.

Las influencias internas en la modernización del agro

Todo lo expuesto anteriormente en torno a la influencia de actores externos, particularmente estadounidenses, en el proceso de desarrollo ecuatoriano, quedaría insubsistente si no se pone atención a la participación de las fuerzas sociales internas que impulsan la inserción

de indígenas y campesinos en el sistema dominante, a través de la opción desarrollista que prima en ese momento.

Sin embargo, muchas de las reflexiones que se detienen en esta problemática tienden a atribuir a los actores internos -militares, gobernantes de turno, Iglesia, partidos de izquierda, terratenientes progresistas, activistas de campo- el rol de meros brazos ejecutores de la voluntad de intereses externos, o de la presiones políticas entre unos y otros. Sobre la actuación de las FF. AA. en la década de los 60 se ha manifestado, por ejemplo, que los militares, “no logran convertir a los cuarteles en una base de acción social independiente a la voluntad de las fuerzas sociales tradicionales” (Varas y Bustamante 1978: 114), punto de vista que se cuestiona a lo largo de este trabajo, y se propone más bien que los militares trabajaron conjuntamente con el sector civil motivados por intereses propios y comunes, tendientes a construir una base social que propicie el desarrollo agrario²¹.

Como se busca comprobar a lo largo de esta investigación, todos ellos intervienen activamente en los cambios que se producen en esos momentos y desatan otros posteriores, que forman parte de un mismo proceso, al que este trabajo reconoce como reforma agraria, el cual se halla liderado por las FF. AA., en las décadas 60-70 bajo una perspectiva de la defensa.

Estos actores, civiles y militares participan, y no lo hacen sólo en el ámbito de la ejecución de planes llegados desde fuera, sino que constituyen la contraparte nacional de las propuestas externas, con intereses y objetivos definidos. El discurso desarrollista convoca diversos intereses bajo ópticas similares y distintas a la vez, que se proyectan en la búsqueda de salidas a la falta de integración de indios y campesinos. Ante la ausencia de iniciativas del Estado central para la coordinación de estas actividades, serán estos organismos quienes agencien el desarrollo. Las fuerzas locales se nutren en el proceso y también viven modificaciones en la forma de ver el mundo y de sus concepciones sobre las estrategias de intervención²². Estos actores a su vez, están sujetos a distintas condiciones que funcionan también como detonantes de otros acontecimientos posteriores, de la eclosión de nuevos protagonistas sociopolíticos, que surgen en la esfera pública y de distintos reordenamientos que se producen en los escenarios del poder; esas alteraciones de la linealidad son las que en última instancia, definen el rumbo que toma el proceso de desarrollo ecuatoriano como tal.

Las fuerzas sociales que actúan por introducir a los indígenas en procesos civilizatorios lo hacen con base en “un tipo de representaciones paternalistas con variados matices”:

Los paternalismos son una serie de acciones y políticas concebidas para ser aplicadas a los ‘otros’, no suponen una consideración de las identidades y los intereses organizativo-históricos desde esos otros, sino que se fundamentan en una negación profunda de sus capacidades para determinar lo que es conveniente o no (Rivera, 1998: 59).

Así, resultan paternalistas las acciones desplegadas por las distintas entidades como la Iglesia, para redimir a los indios, o aquellas implementadas por la izquierda con miras a la construcción de la sociedad igualitaria sin explotación (Rivera, 1998: 59); o, las de los militares a favor del desarrollo desde un punto de vista defensivo.

La Iglesia Católica y el proyecto de modernización del agro

El rol civilizatorio que cumple la Iglesia Católica en América Latina ha sido analizado desde distintas visiones. Su razón de ser, la difusión de la religión, la convierte en instrumento de homogeneización de los pueblos americanos, bajo una misma creencia religiosa. Se los asimila a la religión católica y se intenta que abandonen sus formas de relacionarse con lo místico, por obsoletas, primitivas y diabólicas.

En oposición a la ingerencia de la izquierda con este mismo fin, en 1938, se crea la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos -CEDOC-, por cuyo intermedio se involucra con los sectores populares, y a partir de los años 60 con los campesinos, para lo cual crea la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas -FENOC-.

Urgida por el desarrollo y la justicia social, la tradición de agente de explotación del indio que caracteriza a la Iglesia Católica desde la Conquista, da un vuelco cuando en la década de los 60, adopta los lineamientos de una nueva tendencia de acción enmarcada en la Teología de la Liberación como opción de apostolado. En las décadas que nos ocupan, la Iglesia coincide con las tendencias desarrollistas del momento en sus puntos esenciales: una mejor distribución de la riqueza en la región, dadas las tremendas desigualdades que provoca la que opera en esos momentos y las alteraciones que ello pudiese generar en el orden social; acoge el crecimiento económico, y lo condiciona a que

fuese acompañado por el progreso social a fin de conseguir un desarrollo integral. Se aprecian las contribuciones de la técnica para conseguir el bienestar de la humanidad (Hurtado, 1977: 267). Hacia 1963, el Episcopado ecuatoriano, marca sus lineamientos de trabajo al respaldar la formulación de las reformas agraria, tributaria, y las propuestas desarrollistas del Estado y la teoría de la dependencia. Este pensamiento homologa desarrollo y liberación y reconoce la presencia de puntos de fricción en las relaciones económicas, sociales y políticas, frente a lo cual propone construir “una sociedad basada en nuevas relaciones sociales y de producción que liquide la explotación de unas clases sociales por otras y el sometimiento del país” (Hurtado, 1977: 271).

El Vaticano toma una nueva posición frente a sus feligreses y revisa las liturgias (y paraliturgias) para adaptar el dogma de la Iglesia a los nuevos requerimientos políticos y sociales que vive el mundo para entonces, de ese proceso resultan las reformas de los concilios Vaticano de 1964 y 1968. De allí aparecen nuevas formas de pensamiento en la estructura eclesial con la Teología de la Liberación con su opción por los pobres. Se registra una eclosión de trabajo en este ámbito entre los miembros de la Iglesia, muchos sacerdotes actúan con las comunidades campesinas en una suerte de militancia de izquierda y propician su organización.

La Iglesia, propietaria aún de grandes extensiones de tierra²³, opta por introducir la reforma agraria en sus haciendas, realiza los trámites legales en el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización -IERAC- y se da inicio al proceso de enajenación de sus haciendas para entregarlas a cooperativas agrícolas, de vivienda y huertos familiares, ello sucede especialmente entre los predios localizados cerca de la ciudades como Quito (Crnl. EM. N. Gudiño, 1991: 23).

Monseñor Leónidas Proaño -Obispo de Indios- resulta uno de los mejores exponentes de la nueva opción del sector progresista católico, la “Iglesia de los Pobres”, que tiene su base de operaciones en la provincia de Chimborazo, la de mayor población indígena del país. A fines de los sesenta vincula su acción pastoral a los intereses de los campesinos e indígenas. Proaño trabaja apegado a los principios del Desarrollo Comunitario,

Con equipos volantes, escuelas radiofónicas populares, cooperativas de ahorro y crédito, de reforestación y consumo, cursos sobre sindicalismo agrario cristiano, oficina de propaganda y preparación de

material; construcción de viviendas campesinas y edificios para los diversos programas que buscaban el desarrollo económico y social de los indios de la provincia (Crnl. EM. N. Gudiño, 1991: 24).

Brinda un decidido apoyo a la organización indígena, y estimula la formación de cuadros dirigentes en la Granja Escuela Tepeyac, donde se formaban líderes, y se constituye una célula de desarrollo en la provincia del Chimborazo.

Monseñor Proaño introdujo un programa novedoso de reforma agraria y desarrollo de las comunidades indígenas de su jurisdicción, mediante proyectos y acciones variadas e interesantes que debían responder al 'Plan de Desarrollo Integral' (Crnl. EM. N. Gudiño, 1991: 24).

Pallares (2000: 290) menciona el caso de Cacha, en esa misma provincia, donde el cura Modesto Arrieta trabaja con los indígenas y lo hace previo un análisis de las condiciones socioeconómicas del país, apoya la concientización de indios y campesinos acerca de las necesidades de organización de sus comunidades. Finalmente, hacia la década de los 80, Cacha constituye una nueva organización FE-CAIPAC y consigue su reconocimiento como parroquia (Pallares, 2000: 301).

En 1973 (en plena dictadura del Nacionalismo Revolucionario) surge en Ecuador la organización Runacunacap Riccharimui -ECUARUNARI-, apoyada por el movimiento Izquierda Cristiana y la Iglesia, es la primera organización indígena que tiene carácter nacional. El discurso de esta entidad ya involucra a la nación y a la modernidad, como contrarreplica al discurso terrateniente (Pallares, 1999: 166). En 1974 se forma una nueva agrupación, el Movimiento Indígena de Chimborazo -MICH-. A través de la Diócesis de Riobamba, se organiza la Escuela Radiofónica Popular que trasmite diariamente programas en kichwa y español²⁴.

Las misioneras Lauritas alfabetizan en kichwa y crean una escuela para la formación de líderes, lo mismo ocurre con otras congregaciones religiosas, como las de las franciscanas o salesianos, entre otras, como lo atestigua un militar que identificaba la participación compartida entre Iglesia y militares en sus zonas de influencia. Operan desde espacios similares y mantienen una misma población como objetivo:

Yo estuve de teniente coronel en Zamora [...] había una monja franciscana, María Teresa, que tenía escuela de formación de líderes. Entre los indígenas, saraguros de donde debieron haber salido muchos de los líderes, con fondos de la Iglesia del exterior, tenían escuela de primera, hospital de primera y formaron buenos líderes campesinos (Gral. Homero Berrazueta, entrevista de nov. de 2003).

Con un acompañamiento eclesial, funcionan también en el campo, a partir de la década de los 60, instituciones religiosas privadas como CESA o el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, que operan en Chimborazo, y en su afán por modernizar el agro y elevar las condiciones del indio como una cuestión de justicia social trabajan con comunidades marginales, canalizan recursos crediticios, ofrecen asesoría técnica, mecanización, construcción de infraestructura, etc. (Sylva, 1991: 57).

La participación de la Iglesia en la organización de indígenas en la Amazonia

En 1964 la misión salesiana impulsa la creación de la Federación de Centros Shuar que aglutina a “centros creados como unidades administrativo-productivas ubicados en los alrededores de Sucúa” (Yáñez, 1996: 38). Entre las décadas de los 60 y 70 entrena a jóvenes de la zona para la implantación del sistema educativo radiofónico, trabaja con escuelas presenciales abiertas en las propias comunidades indígenas.

La conformación de organizaciones indígenas de la Amazonia ecuatoriana se inicia tanto por la convicción de un grupo de líderes de esas comunidades dispuestos a ejercer la representación directa de sus pueblos, como por la experiencia shuar, considerada como modelo en su género, cuyo ejemplo impulsa la emergencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana -CONFENIAE- en 1981, y posteriormente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE-, en 1986 (Sylva, 1991: 79). Nótese que ya se produce una identificación étnica de parte de los ideólogos de estas organizaciones pues se autorepresentan como indígenas, ya no como campesinos (Cfr. Chancoso, 2000).

La participación de la Iglesia en la integración indígena desde distintas opiniones militares

Las opiniones militares recogidas en esta investigación, no reflejan una posición unitaria entre los integrantes de las FF. AA. sobre este tipo de participación de la Iglesia entre los indios. Por un lado, se la acoge positivamente pues se considera que los sacerdotes salesianos impulsan la organización entre los shuar, para que así, asociados, enfrentasen su situación, con la búsqueda de salidas “compatibles con la preservación de los valores indígenas” (Crnl. EM J. Andrade, 1984: 35). La acción salesiana consigue, entre los shuar, un modelo de comportamiento que se adapta perfectamente al ideal castrense de integración: un esquema organizativo disciplinado, surgido de su propio esfuerzo con el apoyo de los sacerdotes, que está encabezado por dirigentes propios, formados bajo un esquema de asociación que persigue elevar sus niveles de vida, que acepta los basamentos del enfoque de Desarrollo Comunitario: formación de líderes, trabajo y artesanía, cooperativismo, educación y cultura religiosa, salud, nuevas tecnologías agrícolas (Crnl. EM. J. Andrade, 1984: 58).

De esta manera, Iglesia y militares se vuelven fuerzas sinérgicas al potenciar que los shuar adoptasen el perfil adecuado para su contribución en la defensa de la Patria, y en otras esferas de participación pública, con una organización que surgida en su mismo entorno fuera capaz mediar entre el Estado y la comunidad. No puede perderse de vista que para los militares el resguardar las fronteras frente al ‘enemigo del Sur’ implica la presencia de población unificada en las zonas en conflicto, ubicadas especialmente el territorio shuar.

La coincidencia que la posición de la Iglesia encuentra con el discurso militar halla especial significado cuando la Revista de las Fuerzas Armadas en sus números fundacionales, hace público, a fines de la década de los 60, un manifiesto de Mons. Pablo Muñoz Vega, Arzobispo de Quito, que ratifica la confluencia de ideales entre ambas instituciones:

La paz tiene un sinónimo: desarrollo [...] o desarrollo o guerra y desolación [...] y la guerra se fragua en la vida de todos los días, en las relaciones sociales cotidianas, cuando los corazones no están en paz y la vida se desenvuelve bajo el signo de la inconformidad [...] (Arz. de Quito Pablo Muñoz Vega, 1968: 39).

Muñoz Vega aboga porque las autoridades apoyen el desarrollo y como fórmula, la integración de los sectores marginales, “campesinos”:

Si nos decidimos por el desarrollo, muy posiblemente conjuramos el trastorno y la guerra en cualquier forma [...] incorporar rápidamente a los beneficiarios de la vida social a la población, al campesinado en todas nuestras zonas (Arz. de Quito Pablo Muñoz Vega, 1968: 39).

En determinadas coyunturas trabajan paralelamente, con estrategias y objetivos compartidos. Ya desde 1946, cuando el Departamento de Obras Públicas Militares, con su cuerpo de ingenieros, termina la construcción de la vía Baños-Puyo, el Padre Elías Brito, representante de las Misiones Salesianas, aplaude efusivamente esta acción, a la que califica como “un espléndido triunfo del Ejército ecuatoriano” (Departamento de Obras Públicas Militares, 1946: 13). Y reconoce la íntima unión entre “Religión y Patria”, que ha significado para el Oriente “civilización y progreso, defensa territorial y dominio amazónico” (Departamento de Obras Públicas Militares, 1946: 13).

Ello no quiere decir que no existan momentos de confrontación entre estas élites que compiten en el campo del poder. Entre los militares, se develan posiciones que ven con antipatía este tipo de influencia de la Iglesia Católica por ser nocivo para la nación, por sus tendencias marxistas que tienen contenidos extraños a la tradición ideológica católica:

El campesinado e indigenado de la Patria, por la diferencia de culturas existentes, no estuvo debidamente cohesionado; lo cual ocurrió a partir de la acción de muchos clérigos seguidores de la teología de la liberación [...] el discurso de la igualdad, libertad y confraternidad, otrora combatidos por la Iglesia Católica, hoy es su bandera para la acción, pero sumados a él los principios marxistas (Crnl. EM. F. Viteri, 1995: 48-9).

En otro momento, Monseñor Corral, Obispo de Riobamba, heredero de la tradición por los pobres de Monseñor Proaño, critica a las FF. AA. su intervención de apoyo al desarrollo, en la década de los 90, vista como estrategia militar para evitar el avance de la organización, y como la aplicación de una guerra de “baja intensidad”, para cooptar el movimiento indio, que da muestras de su presencia para entonces (Falconí, 1991) y cuestiona el imaginario uninacional vigente que invisibiliza la diversidad esencial del Ecuador.

Los discursos que emanan tanto desde la Iglesia como desde distintos sectores de las FF. AA. hallan congruencias en cuanto a sus caracteres teleológicos que se confunden entre dioses afines, la Patria y la fe católica. Ambas ejercen y han sido iniciadas en sacerdocios que se encomiendan a Dios y la Patria, lo cual sugiere que el culto a la nación sea una suerte de culto religioso (Cfr. Llobera, 1996). Ambas muestran sesgos mesiánicos, al tener como misión la de redimir a los más débiles; el indio se convierte entonces en peón semiótico.

La influencia evangélica

A partir de 1962, proliferan en las zonas de población indígena, particularmente en las amazónicas, un sinnúmero de iglesias evangélicas que declaran entre sus objetivos la formación de escuelas en la zona. Implementan un trabajo social con las comunidades, las apoyan en la organización de cooperativas y la construcción de centros escolares (Bretón, 2001). La forma de llegada, o lo que podría entenderse como la “estrategia civilizatoria” de las iglesias evangélicas, radica en que confieren al indígena una situación de autonomía a través de la elevación de su autoestima, con una resignificación positiva de su identidad y tradiciones (Gross, 2000: 136 y ss.).

El Instituto Lingüístico de Verano -ILV- es una de las instituciones evangélicas procedente de Estados Unidos, que opera en Ecuador por Decreto Ejecutivo desde 1952. Su objetivo expreso radica en estudiar las lenguas indígenas para evangelizar a los indios; desarrollan asimismo trabajos de alfabetización, desde un enfoque bicultural-bilingüe (Cfr. Yánez, 1996). La actividad de la institución se despliega especialmente en la Amazonia. Se editan cartillas de enseñanza para los pueblos shuar, achuar, siona-secoya, kichwa, cofán, huaorani y zápara con el objeto de llegar a la castellanización a través del paso de las propias lenguas vernáculos y del estudio de las Sagradas Escrituras. En 1963 firman un convenio con el Estado, para continuar con sus objetivos. A inicios de los 80, durante la administración de Jaime Roldós Aguilera, se escinde el contrato con el ILV. Para ese gobierno, en una visión compartida con un sector de la clientela política de raíz marxista, la presencia evangélica resulta contraria al principio de respeto a las culturas ancestrales.

Para Blanca Muratorio (1982), entre los indígenas del Chimborazo “el evangelismo se convirtió en un elemento importante de afir-

mación étnica”, pero a su vez, provocó rupturas internas contrarias a que los indios cuestionasen “las relaciones de dominación existentes”. La forma de operar de los grupos evangélicos ha originado no pocos conflictos en las áreas de trabajo con indígenas y campesinos, que han tenido como efecto la ruptura de la unidad de muchas comunidades que resultan fraccionadas políticamente.

Las propuestas evangélicas tienen sus pros y sus contras frente a la idea militar de integración indígena. Si bien contribuyen a la organización y disciplinamiento de los indios, los aleja del alcohol o desalienta la posible presencia del comunismo entre los grupos étnicos, contiene elementos extraños a la defensa del nacionalismo por su visión extranjerizante, lo que la vuelve sospechosa, desde el punto de vista militar que más bien tiende al nacionalismo (Cfr. Myr. FF.BB. O. Jarrín, 1984).

La participación de la izquierda en la integración indígena

La izquierda ecuatoriana opta por redimir a los indios, conseguir su liberación y habilitarlos para, conjuntamente con los proletarios, convertirlos en los portadores de la dictadura de los trabajadores. Los organiza con una visión clasista, en la que los indios estarían sujetos a un proceso de campesinización con el objeto de incorporarlos como categoría social en un imaginario que emula la Revolución Rusa, donde los campesinos instauran la dictadura del proletariado conjuntamente con los trabajadores (Cfr. Páez, 1990).

Al concebir a los indios como ‘semiproletarios’ y ‘campesinos’ por su adscripción al campo, la lucha por la tierra es la narrativa aglutinante. La concepción política y estratégica de la izquierda relega el problema indígena y la comunidad que imagina constituye una sociedad homogénea que busca implantar el socialismo como sistema ideal (Rivera, 1998: 60).

El contenido de la acción de la izquierda entre los indios ha sido visto como “neoindigenista”, tendencia ideológica aparentemente progresista que, criticando los afanes homogeneizadores y unitarios del indigenismo integracionista tradicional, se caracteriza por postular la pluralidad o diversidad sociocultural de las formaciones nacionales a partir de un sobredimensionamiento de la civilización india como proyecto societal global (Rivera, 1998: 60). En este trabajo planteo que esa unidad en la diversidad que se propone con los indios es más bien un

“nacionalismo multicultural” (Selmeski, 2000) que acepta la diferencia en sentido parcial y pese a la homogeneización que propone, busca un trato diferenciado hacia los indios por su condición étnica, una suerte de ‘nativismo’.

La izquierda mantiene un trabajo directo con los indígenas, con un sentido asistencial que concibe al indio en situación de minoridad, es decir como niño al que hay que conducir porque no tiene capacidad de hacerlo por sí solo. Con un desconocimiento de la potencialidad de los indios frente al Estado, la militancia izquierdista adopta un rol de intermediación entre estos dos actores (indios - Estado), a través de la que Guerrero denomina una “imagen ventrílocua” (1994: 242), al convertirse en intérpretes de las necesidades indígenas y representarlos en la esfera pública. Los indios aceptan tal tratamiento y lo adoptan como estrategia de negociación frente al Estado.

En 1926 se funda el Partido Socialista y hacia 1927, tres sindicatos de campesinos con *huasipungueros*, *yanaperos* y arrimados se organizan ya en Cayambe, zona eminentemente indígena de la provincia de Pichincha. Luchan porque se reconozcan sus derechos a la tierra, al agua y a los pastos, al salario, a la educación. En 1931 estas organizaciones toman mayores dimensiones y se expanden tanto en la Sierra como en la Costa; en 1934 tiene lugar la “Primera Conferencia de Cabezillas Indígenas” que busca constituir una organización de carácter regional (Crnl. EM. N. Gudiño, 1991: 25). En esa misma época, hacia 1937, el General Enríquez Gallo, como Jefe Supremo de la República, emite la Ley de Comunas a favor de la organización indígena en el esquema comunal.

Desde 1944 el Partido Comunista, a través de la Federación Ecuatoriana de Indios -FEI-, filial en el las zonas rurales de la Central de Trabajadores del Ecuador -CTE-, trabaja con los indígenas inmersos en el sistema de hacienda, con el objeto de superar las relaciones ‘serviles’ a través de la aplicación de las leyes laborales.

La educación indígena forma parte de las preocupaciones de la izquierda, y en 1945, un grupo femenino de activistas reunidas en la Alianza Femenina Ecuatoriana, trabaja directamente con la población en la zona de Cayambe; se crean las escuelas indígenas, en las que se forman maestras de indios (Yáñez, 1996: 28). Es allí donde se prepara la líder campesina Dolores Cacuango, emblema del moviando indígena en Ecuador. La militante de izquierda Luisa Gómez de la Torre fue

la gestora e ideóloga de un proceso de adoctrinamiento político que genera una forma de organización a través de la educación entre los indígenas. Éste fue tomado como un modelo organizativo entre los activistas de izquierda para con los indios. Se trata de una de las propuestas más tempranas de intervención educativa con indígenas, aparte de las anteriores, elaboradas por la Iglesia y por la Unión Nacional de Periodistas -UNP-²⁵, con la alfabetización y evangelización como fines principales.

Entre los hechos en que la CTE toma parte hasta 1947, se hallan las luchas por los intereses de las masas campesinas y por la instauración de una “verdadera reforma agraria”, a través de la propuesta de planes económicos orientados a la destrucción del latifundio (Paéz, 1990: 158). “Para la izquierda latinoamericana la reforma agraria era una vieja reivindicación” (Cfr. Guerrero, 1983: 92).

... la lucha por la Reforma Agraria, problemática que la misma presencia de la FEI al interior de la CTE y el constante trabajo de militantes del partido comunista dentro del campesinado serrano, fundamentalmente, denotaban como básica para el mantenimiento de la ‘alianza obrero-campesina’, que desde la CTE se quería implementar (Páez, 1990: 158).

En los años 50 y 60 las aspiraciones de reestructuración agraria desde el Estado y la crisis productiva del agro provocan una serie de levantamientos, huelgas, protestas, tomas de tierras en las haciendas de las zonas más afectadas y litigios por linderos, que tienen el respaldo de la FEI. La FEI constituye un “organismo corporativo que intenta agrupar a los campesinos quechuas de la sierra”, a través de la constitución de un proletariado rural étnicamente particularizado (Varas y Bustamante, 1978: 189).

Interesa, asimismo, conseguir la extensión del derecho a la seguridad social para los campesinos de la Sierra y a los escogedores de café y tagua, en la Costa y Amazonia. En la Costa, auspician la constitución de la Federación de Trabajadores Agrícolas de Litoral -FETAL- (Almeida, 1990: 184). Hacia 1955 la influencia de las centrales sindicales es evidente, de manera especial en las zonas en que ya existe una trayectoria política relacionada con la izquierda (Pichincha, Chimborazo, Guayas y Esmeraldas) (García, 1987: 105; Páez, 1990). Entonces, en Cotopaxi, Tungurahua, y Chimborazo, varias organizaciones indígenas

dan muestras de agitación a causa de la implementación del censo agropecuario, en “Columbe se levantan 2.000 indios” (Crnl. EM. N. Gudiño, 1991: 25). Estas manifestaciones que apelan tanto a la apertura de acceso a recursos para los indígenas como a reivindicaciones que se acercan más a un sentido de lo cultural (Almeida, 1990: 175), hallan vínculos simbólicos en el imaginario de la izquierda, con las revueltas previas a una revolución socialista, sin que se piense en otra posibilidad alternativa de canalización de la protesta.

Izquierda y militares

Una vez emitida la primera Ley de Reforma Agraria (1964), en el contexto de la Junta Militar (1963-1966), la lucha por la tierra se concentra en torno a la aplicación de este instrumento legal, lo cual provoca que la acción de la FEI se viese debilitada. Si se asume que los militares compiten con el resto de élites por el control del poder, éste puede considerarse un punto a favor de los militares que consiguen su objetivo al detener el control de la izquierda sobre la organización indígena.

Sin embargo, la posibilidad de hallar formas de organización del sector indígena, en pos de la unidad nacional y su control los unos, y de conseguir la dictadura del proletariado los otros, es un punto de convergencia entre los militares y la izquierda. Los militares modernizantes tienen influencias de izquierda en sus propuestas, desplegadas a lo largo de la historia del siglo XX en Ecuador, a favor de la integración de indio y de la justicia social. Entre los ideólogos de la Revolución Juliana de 1925²⁶, y luego entre los fundadores del Partido Socialista en 1926, aparecen cuadros militares identificados previamente con las propuestas del socialismo utópico. El Gral. Luis Larrea Alba, encargado del Poder Ejecutivo en 1932, fue un alto dirigente y fundador de Vanguardia Socialista Revolucionaria del Ecuador -VSRE-, movimiento que hace presencia en la década de los 30. Defiende la reforma agraria entre sus puntos programáticos, así como la organización cooperativista y la instauración del seguro social campesino, entre otras estrategias de organización integracionista (Cfr. Paz, 1938). En 1935 protagoniza un intento de golpe de Estado, a raíz de lo cual es desterrado del Ecuador temporalmente, fue previamente candidato a la Presidencia de la República.

El Coronel Juan Manuel Lasso, socialista-cristiano, consta entre la nómina de fundadores del Partido Socialista en 1926 (Páez, 2001: 106); en este episodio participan de igual modo, militares jóvenes que simpatizan con el socialismo, quienes ya en 1924 forman parte de “La Antorcha”, un grupo que propugna el ideario socialista y apoya las vías de modernización nacional burguesa, en coincidencia con algunos cuadros provenientes de los sectores medios y con grupos de otra tendencia, la de los “liberales radicales”, que cuenta entre sus integrantes a Luis Napoleón Dillon, prominente miembro del gobierno juliano e ideólogo de muchas de sus propuestas económicas.

[...] con una base social de apoyo compuesta fundamentalmente por estudiantes, *soldados, jóvenes oficiales vinculados a la Revolución de 1925* e interesados en la modernización del Estado, la institucionalización de las Fuerzas Armadas, la ampliación del sistema político y la resolución de los problemas sociales, los primeros grupos socialistas [...] conformaron el PSE en la asamblea de 1926 (Páez, 2001: 112) (las itálicas son mías).

Un breve acercamiento a las ideas del llamado socialismo utópico, tendencia que se desarrolla en Europa Occidental: Francia, Inglaterra, Alemania, desde fines del siglo XVIII e inicios del XIX (Stedman, 1984: 199 a 209), sugiere su presencia en el *militarylore* ecuatoriano de la época. El socialismo utópico se difunde en Europa Occidental a lo largo del siglo XIX, Saint-Simon, Fourier y Owen son considerados sus principales exponentes; sus análisis se centran en problemas religiosos y filosóficos; en este contexto, el altruismo era el móvil principal del progreso humano y socialista.

Se ve en el socialismo la posibilidad de instauración de armonía en la humanidad y el acicate de su acción radica en la devoción contra el egoísmo material. Se oponen a las ideologías que promueven el individualismo. Sería anacrónico proponer que contienen alguna crítica en contra del capitalismo, contra las prácticas estatales o de la clase gobernante, van en contra de la “teoría falsa, ignorante o alienada que supuestamente constituía la base de aquellas prácticas” (Stedman, 1984: 205). Los socialistas de corte deísta, aceptan la existencia de una “intimidad privilegiada con la dinámica de lo divino” (Stedman, 1984: 205). Es una nueva religión humanista cuyo evangelio proyecta la nueva ciencia y el progreso como bases de construcción social, es allí donde radica su condición utópica.

El socialismo utópico que adoptan los militares ecuatorianos tiene sus matices, pues ellos mantienen una visión jerárquica de la organización social, pese a que esta tendencia del socialismo cuestiona la jerarquía por hallarse opuesta a la igualdad que buscan propiciar contra la diferenciación de los tipos humanos. Ello demuestra que acataron la propuesta adaptándola a su visión del mundo y al tipo de literatura a la que tienen acceso. Por otro lado, esta filiación de muchos de los soldados en Ecuador, muestra una vez más que ellos no están aislados del resto de la sociedad y que participan con ella desde sus propias ópticas de comprensión del mundo.

Ante la ‘falta de cultura’ de la clase obrera, los socialistas utópicos promueven a la clase media como la vanguardia del progreso hacia el socialismo, ya que se trata del sector ilustrado de la población. En el discurso militar ecuatoriano se hace continua alusión a la procedencia de clase media de los integrantes de las FF. AA., quienes se consideran escogidos para redimir a los oprimidos y establecer los cambios que requiere la instauración de una sociedad moderna, más justa y equitativa.

El estrato social de las Fuerzas Armadas es de clase media hacia abajo. No hay gente de las clases poderosas, al interior. Nunca fueron represivas, es un caso muy especial el de su gran respaldo y un gran concepto en la base popular, nunca pertenecieron a las élites, ello permitió una identificación permanente con los sectores marginados (Cnrl. Patricio Haro, entrevista de noviembre de 2003).

Para el Gral. Paco Moncayo²⁷ en Ecuador, durante una importante etapa de su historia, los militares fungen de “voceros políticos de la emergente clase media, incapaz de competir políticamente con las aristocracias tradicionales” (Gral. P. Moncayo 1993: 7). Los procesos de profesionalización, por otro lado, los dotan del conocimiento necesario para trabajar a favor de la construcción nacional y de conducirla. En las coyunturas que nos ocupan, los militares se arrojan la responsabilidad de consecución de procesos de desarrollo y de integración indígena.

Los cuadros militares en Ecuador, tuvieron especial influencia en la “formación de la mentalidad de los sectores medios entre los años 20 y 30” (Maignashca, 1988), cuando desde el sector castrense se desafía la relación secular entre dominantes y dominados y se dibuja ya un imaginario de la nación burguesa que tienen intención de construir.

“Así, el grupo de empleados militares se transformó en el eje social de las peticiones de racionalización del Estado [...]” (Maignashca, 1988), y frente a los indígenas se mantiene la noción de su inferioridad racial, que los vuelve objeto de civilización, sobre todo ante la idea de que el indio es “a pesar de todo hermano en Cristo” (Maignashca, 1988).

Ello demuestra que los militares también se han servido de las coyunturas políticas y sus expresiones institucionales para desarrollar su proyecto nacional, lo cual incide en la forma en que se han estructurado los partidos políticos o sus expresiones institucionales. Cuando la Junta Militar de Gobierno toma el poder en 1963, no recibe una observación negativa de parte del Partido Socialista, cuyos militantes envían una comunicación a los dictadores en donde expresan que “el hecho político ‘creado por la intervención militar abre nuevas perspectivas para un cabal ordenamiento legal y democrático del país [...]’ los socialistas miraron los hechos con cierta reserva pero sin manifestarse en oposición” (Tcrnl. EM. F. Velasco, 1990: 63).

El Partido Comunista por su parte, mantiene para entonces una actitud distante, y constituye una de las pocas excepciones entre los respaldos políticos que recibe la Junta Militar (1963-1966) el momento de su ascenso al poder. Este sector de la izquierda enfrenta a las FF. AA. durante la última dictadura velasquista, y opta por la oposición. El gobierno militar coloca al comunismo fuera de la Ley, por considerarlo agente permanente de la subversión manejada “desde China, Rusia o Cuba” (Tcrnl. EM. F. Velasco, 1990: 63). En ese contexto, la Junta Militar exige que los funcionarios públicos que profesaran las ideas de izquierda fuesen destituidos de sus cargos.

En otro contexto temporal, el gobierno de Rodríguez Lara enfrenta cíclicamente la protesta de los sectores de izquierda aglutinados en la Universidad Central, esta pugna provoca fricciones y rechazo de los civiles hacia los militares, especialmente entre los sectores de izquierda y progresistas.

Rodríguez Lara encontró en el movimiento universitario de los 70 su principal amenaza, digámoslo así, una herencia de la dictadura de Velasco Ibarra y de la dictadura de los 60.

Nosotros difícilmente podíamos salir uniformados a las calles porque los jóvenes de nuestra misma edad, se encargaban de gritarnos cosas ofensivas. Nos preguntábamos, por qué es eso, por qué hay ese rechazo a la clase militar si hemos estado por años identificados

con el pueblo, y era porque había fricción con el gobierno y nosotros éramos identificados como del gobierno (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003).

Por esta experiencia de rechazo vivida durante los 5 años de Escuela Militar, desde esos espacios de formación y perfeccionamiento de oficiales se tiende a la reflexión sobre las relaciones con los civiles y se ve la necesidad de mejorar las condiciones democráticas para solucionar este tipo de enfrentamiento. Demanda también mejorar la imagen de las FF. AA. frente a la sociedad, lo cual las impulsa a trabajar en temas de acción cívica (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003).

Sobre la aversión contra el comunismo por parte de los militares existe una interpretación válida, que la toma como una defensa corporativa de los miembros de las FF. AA. ante el temor a que se aplique la extinción de los altos mandos y mandos medios, como sucedió en Cuba con el Ejército de Batista (Fitch, 1977; Loveman, 1999)²⁸.

Los líderes militares latinoamericanos, sacudidos ante la ejecución realizada por los líderes de la Revolución Cubana contra seiscientos oficiales y la destrucción de sus antiguas fuerzas armadas, avizoraron el peligro inminente para ellos mismos y sus instituciones [...] (Loveman, 1999: 172) (Traducción de la autora).

La idea de que los ideólogos de izquierda ecuatorianos participan en las decisiones del sector armado durante la dictadura de Rodríguez Lara, se percibe entre quienes analizan la coyuntura. En un comunicado a la nación del Partido Socialista Revolucionario, a raíz de la toma del poder por parte del Gobierno Nacionalista Revolucionario (1972), se mencionan a la Iglesia y al Ejército ecuatorianos como instituciones que han constituido “la columna vertebral del orden social capitalista” en cuyas conciencias han influido factores del orden internacional como “la acentuada explotación exterior e interior de nuestros países sometidos, el ascenso del socialismo mundial y especialmente la revolución cubana”, y permiten que desde estas instituciones se exterioricen actitudes renovadas de cambio (García, 1987: 235). Este pronunciamiento es claro en cuanto al reconocimiento de la acción de Iglesia y militares desde un sector de la izquierda que las sanciona positivamente.

El Partido Comunista, en esta oportunidad, replantea su antigua posición frente a los militares e inclusive pasa a vincularse públicamen-

te con las FF. AA., a través de los tecnócratas que participan en el gobierno dictatorial. Opta por la “tesis del apoyo crítico” (Varas y Bustamante, 1978: 101), lo cual le permite respaldar a los militares desarrollistas en la medida de sus posibilidades. Por otro lado, cuando la oposición de los partidos políticos se generaliza en contra el gobierno de facto por su condición de inconstitucionalidad, los partidos de izquierda aún mantienen la expectativa frente a las propuestas de transformación del régimen.

La radicalidad de los contenidos de la Filosofía y Plan de Acción del Gobierno Nacionalista Revolucionario que accede al poder a través de un golpe de Estado que culmina en una dictadura militar (1972-1976) puede insinuar una tendencia socialista; sin embargo, para García (1987) la tendencia raya más en el nacionalismo, del cual se declara gestora la dictadura. En este trabajo planteo que más bien puede ser vista como un populismo pragmático, que explica la aversión contra los políticos populistas, tendencia combatida históricamente por los militares en Ecuador²⁹.

Frente a la izquierda, son más las coincidencias entre estas formas de acción, en el campo de la integración indígena, que las diferencias que muestran tener ambos bandos: izquierda y militares; ello explica que los partidos de izquierda hubiesen tenido incidencia en la organización indígena, pese a la oposición que se mostró contra el comunismo y la subversión (Fitch, 1977; Loveman, 1999) en estos períodos por parte de las FF. AA., y que ello hubiese sucedido en regímenes castrenses de facto, que más bien han sido caracterizados por la represión a las ideas de izquierda, especialmente en el Cono Sur. Cabe recordar que a instancias del Movimiento de Izquierda Cristiana y la Iglesia se conforma ECUARUNARI, la primera organización indígena de carácter nacional en 1973, en plena dictadura militar. Ocurre lo mismo en Chimborazo, en 1974, con la conformación del Movimiento Indígena de Chimborazo -MICH-.

En Ecuador, el énfasis es mayor en el desarrollo, y ello propicia otro tipo de actitud de las FF. AA., que proponen otro modelo estatal con distintas formas de construcción de ciudadanía. Ello sugiere una vía para entender porqué toda la agitación social que trajo consigo el desarrollismo coordinado por gobiernos militares, deje como resultado la eclosión de nuevos actores políticos, “la aparición de grupos de artesanos, trabajadores, peones del campo, pequeños propietarios y

pequeños industriales que se organizan, y dan lugar al apareamiento de nuevos grupos políticos de tendencia socialista” (Tern. F. Velasco, 1990: 119).

Estos son los elementos que marcan las diferencias de forma y fondo de las FF. AA. ecuatorianas con respecto a las de otros países, y con respecto a un esquema anticomunista de la Guerra Fría, que aparentemente impone las decisiones de Estados Unidos como cosa juzgada. Es decir que a pesar de lo riguroso de la doctrina anticomunista de Estados Unidos, que prima en las etapas de estudio, ésta tiene adaptaciones y variaciones construidas en función de las necesidades políticas y los esquemas sociales y culturales configurados históricamente en los distintos espacios nacionales y en Ecuador, para el caso que nos ocupa. Incluso con el ‘indoctrinamiento’ ideológico y el entrenamiento norteamericano, las FF. AA. mantuvieron sus intereses propios adaptados al horizonte social y simbólico en donde se desarrollan, con sus versiones propias sobre el patriotismo³⁰.

Los impulsos de modernización del agro desde lo local a partir de la década de los 80

En el campo, desde etapas anteriores, y con fuerza en 1980 (Sylva, 1991: 47), se puede hablar de una verdadera “fiebre desarrollista” que involucra a varios sectores de la sociedad. En la puesta en marcha del proceso de modernización del agro participan, a su vez, otros gestores de desarrollo de carácter privado las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) atienden, hacia 1977, al 42% del total de la población beneficiaria; entre tanto, el Estado cubre un 38% y los organismos internacionales un 30%. Ello inyecta de dinamismo a este proceso cuyos agentes buscan que la población indígena consiga mejores condiciones de vida, a partir de su paso por procesos civilizatorios (Sylva, 1991).

Desde la década de los 80, a los planes de desarrollo rural integral acompañan, dentro de esta lógica, procesos participativos implementados por el Estado. Sobresalen, entre las agencias que operan entonces, FODERUMA del Banco Central del Ecuador en el 1977; la Secretaría de Desarrollo Rural Integral -SEDRI-; estos programas permiten a los indígenas aprender y entender el problema ecuatoriano como un hecho integral (Sánchez y Freidenberg, 1998: 67).

Los terratenientes frente al proceso de modernización del agro

Otro actor vulnerable al cambio en el contexto que se analiza resultan los hacendados, pues parte de los objetivos del desarrollo radica justamente en superar las relaciones oligárquicas predominantes en el sistema de hacienda. A primera vista, el sector terrateniente representado por el hacendado, imagen patriarcal símbolo de la época que declina, resulta directamente impactado por el giro que toma su posición de poder ante la aceptación de un proceso de reforma como el que se vive. Y digo “a primera vista” porque no se puede hablar de un solo tipo de hacendado.

Existen quienes se resisten a la desestructuración del sistema de hacienda y deben enfrentar la reorientación de los procesos de producción tradicionales a regañadientes u obstaculizarlos; pese a que consideran indispensable la modernización del agro, observan con recelo el esquema militar y se oponen a su realización desde distintos frentes. Presionan para conseguir ventaja de la coyuntura, y desde sus espacios de poder, boicotean el proyecto castrense para, finalmente, alterar los planes iniciales³¹.

Rechazan la posibilidad de competir a un mismo nivel con los productores indígenas y campesinos. Manejan el discurso de la necesidad de sacar adelante a la Patria, pero a manera de contradiscurso con relación al que desarrollan el resto de fuerzas involucradas en la integración indígena (analizadas en líneas anteriores). Estos terratenientes están en contra de los agentes del proyecto, es decir de los militares, no así de las reformas que plantean.

Contrariamente a lo que buscan las propuestas tanto externas como internas que se han observado hasta el momento en el presente desarrollo, consideran que los indígenas se convierten en amenaza en caso de entregárseles las tierras, justamente por su insuperable condición de retraso e ignorancia (Pallares, 1999). Se ven a sí mismos como los únicos capacitados para hacer producir al agro y aprovechan la situación para recibir el apoyo del Estado, destinado a los terratenientes empeñados en optimizar la producción.

Estos hacendados atribuyen a indios y campesinos las causas de la inanición del agro:

El discurso modernizador [...] encontró al indigenado como el mayor lastre histórico para consolidar el avance del capitalismo y la modernidad; instituyendo de esta manera un análisis -desde las élites- que implicaba la apología del progreso técnico y que definía al indio como paradigma de ‘perversión y estupidez, vagancia y estulticia’ (Arcos, 1984: 173).

En general, la visión que hacia los indígenas se revela desde este sector de hacendados, denigra la identidad indígena, considera que son ineptos y los causantes del estancamiento del desarrollo nacional (Cfr. Pallares, 1999). Tratan de persuadir al país de la incapacidad de los indios para volver productivo al suelo. En el marco de la Reforma Agraria de 1973, los hacendados reunidos en la Cámara de Agricultura, racializan el discurso contra los indígenas al representarlos como “atrasados en sus tecnologías de cultivo, carentes de espíritu capitalista y, consecuentemente, destinados a permanecer en los niveles más bajos de la producción...” (Pallares, 1999: 165).

Si los terratenientes tradicionales son hasta entonces representados y se representan como una figura patriarcal, y son parte de un periodo que termina, resulta sugerente pensar que ante la ausencia de aquella figura patriarcal, fueran los militares quienes aspiraran a suplantar la imagen del terrateniente, con los matices que el cambio de época supone: los militares como sacerdotes, poseedores de una misión patriótica llamada a guiar la civilización actúan frente a los indios como quienes los dotan de herramientas para ajustarse a las demandas del avance global de la civilización, serían quienes dinamicen el funcionamiento del nuevo sistema.

Las aspiraciones de modernización del agro desde el sector terrateniente

Los terratenientes tradicionales, como podría calificarse al grupo analizado en líneas anteriores, conviven con otros que a mediados del siglo XX, dan muestras de su propio proceso de modernización³². Hacia el siglo XIX, ya se registran antecedentes de estas iniciativas entre las élites quiteñas, justamente el presidente García Moreno y el círculo de la élite en el que se mueve, emprenden en la modernización de la producción de sus haciendas a partir de tecnología europea para la producción de azúcar y los derivados de la caña³³. En la década de los 40 un sector de terratenientes modernizantes mantiene una nueva vi-

sión desde el progreso con una apertura mayor a las propuestas del capitalismo. Implementa una serie de cambios en sus unidades de producción, con la aplicación de tecnología, la introducción de nuevos métodos productivos y renovación de sus cultivos, la reorientación del uso de la tierra que cambia del ámbito agrícola al ganadero para la obtención de lácteos o la instalación de maquinaria para dar un tratamiento industrial a la producción³⁴.

Los hacendados modernizantes buscan elevar el nivel de vida de los campesinos y ofrecen su apoyo al activismo de Alianza para el Progreso y Misión Andina, así como a las propuestas de los gobiernos militares. El mejor exponente del sector es el presidente Galo Plaza Lazo, quien durante su gobierno (1948-1952) impulsa decididamente los procesos de modernización del agro. Este grupo considera la posibilidad de civilizar a los indígenas, de capacitarlos y volverlos productivos, habilitados para transformarse en la mano de obra indispensable para elevar la productividad, y desde un inicio, trabajan por su integración en la sociedad dominante desde un esquema del mestizaje (Cfr. Marchán, 1984).

Desde su visión, no apoyan la supresión de la hacienda, sino de las relaciones que la presencia de esta institución involucra, favorecen su conversión en empresas agrarias, en donde los antiguos peones pasan a una nueva condición de asalariados y dejan de depender de la hacienda para su supervivencia. Se adelantan al decreto de Reforma Agraria y liberan mano de obra campesina, pasan a funcionar con base en relaciones salariales.

Los militares reformistas de los 60 establecen alianzas con estos sectores para la toma de decisiones en cuanto a los pasos que debían darse en el proceso de reforma agraria, como condición para el desarrollo industrial. De acuerdo a una tendencia analítica (Moreano 1991), el "placismo" (representado por Galo Plaza), definió las políticas reformistas de las dictaduras de las décadas de los 60 y 70 y en esta medida, las iniciativas modernizantes no se originan en la propuesta militar, sino que éstas responden a los intereses del presidente Plaza, lo que convierte a las FF. AA. en instrumentos de las élites civiles. Como planteo en esta investigación, resulta más apegado a la realidad histórica hablar de intereses en común y de la generación de alianzas entre civiles y militares; en todo caso, sería una utilización mutua, lo cual dista de una interpretación de instrumentalización de las élites civiles hacia los militares.

Finalmente, modernizantes o retardatarios, los terratenientes se ven obligados a comprometerse en procesos de transformación capitalista como estrategia de supervivencia, o a buscar otras opciones. El de transición hacia la modernización del agro fue un proceso de largo aliento que en su transcurso verifica modificaciones y continuidades. Entre 1960-1964 el agro serrano aparece como un “mosaico abigarrado de situaciones de transición” (Guerrero, 1983: 48). Para Andrés Guerrero (1983), no puede perderse de vista en la opción de los hacendados, la influencia que tuvo la presión social que los campesinos ejercen para la entrega de tierras en sus distintas unidades productivas.

De acuerdo con las condiciones sociales y económicas de cada hacienda, los terratenientes buscaban transitar a relaciones capitalistas de la manera más provechosa, adoptando medidas como la entrega de huasipungos, el retaceamiento de las tierras, cambio de rama productiva, mecanización, etc. (Guerrero, 1983: 30).

Para recapitular, puede decirse que la integración del indio al sistema dominante es el resultado de un proyecto civilizatorio provocado por la diversidad de fuerzas sociales, nacionales e internacionales, sujetas a factores internos y externos que coinciden en este mismo objetivo, entre las que se cuentan los propios indígenas, porque también les interesa integrarse.

Estas fuerzas sociales comparten un ideal de nación unitaria; tienen un imaginario común del indio como arcaico y le transmiten estrategias que le permiten insertarse en la sociedad nacional. De una u otra manera, mantienen en su mayoría, un carácter antioligárquico y suplen muchos de los roles que no puede cumplir el Estado frente al sector indígena. Hallan sinergias entre sí, en las formas de intervención directa con los indígenas para su civilización, al trabajar con fines relativos: la evangelización, la liberación, la construcción de la nación, la defensa y modernización nacionales, que les confieren un carácter teológico, pese a que parten de distintos campos de acción, lo cual fortalece el proceso y lo dota de características definidas.

Reconocen que Ecuador es un país diverso desde el punto de vista étnico, pero esa diversidad es vista como antagónica con la modernidad a la que aspiran, de ahí que los indios, aunque no públicamente, sean actores políticos a lo largo de la historia nacional, hecho que copa la esfera pública desde fines del siglo XX.

Los militares, por su parte, a más de compartir todos los rasgos descritos anteriormente con el resto de fuerzas sociales, cuentan con una serie de ventajas comparativas, factores que les confieren mayor presencia y capacidad de direccionar el proceso: tienen un proyecto que busca generar la nación unitaria como objeto de defensa, lo cual los reviste de legitimidad ante el resto de la sociedad; ocupan el Poder Ejecutivo en esas coyunturas, y ello les facilita otorgar la suficiente apertura para que todos los involucrados actúen. La continuidad de su presencia les posibilita controlar el proceso y adaptarlo a las necesidades del momento, pero sin perder de vista el proyecto inicial, hecho que les confiere protagonismo y les permite consolidar su propuesta.

Notas:

- 1 En este capítulo tomo en cuenta las opiniones, vertidas en sus trabajos académicos, de militares cursantes del posgrado en Seguridad y Desarrollo que ofrece anualmente el Instituto de Altos Estudios Nacionales, dependencia del Consejo de Seguridad Nacional que opera desde 1972. He accedido asimismo, a ensayos generales de interpretación y a trabajos que se detienen a analizar los resultados de las políticas adoptadas y otros que enfocan la participación de las distintas fuerzas sociales en el proceso de modernización del agro de manera individual.
- 2 Para períodos anteriores ver Prieto (2004), quien analiza el discurso de las élites liberales entre 1895 y 1950 con respecto a los indios. Sobre la visión de los liberales, conservadores y la izquierda ver Ortiz, 2001c. Este modelo discursivo también está presente entre las élites militares de esas épocas y posteriores como se demuestra en el presente trabajo.
- 3 En las monarquías, un reino lo conforma un grupo humano que se considera vasallo de un mismo rey. Este sistema de gobierno, mal puede analogarse con los que existieron en América en el período prehispánico.
- 4 La crisis del colonialismo iniciada en la I Guerra Mundial se acentúa al final de la II Guerra Mundial y pasa a cuestionar algunas de las interpretaciones sobre la evolución histórica aceptadas hasta entonces. La modernidad debía encararse como fenómeno universal, estadio social al que aspirarían todos los pueblos, con el desarrollo pleno de la sociedad democrática. Estos temas pasan a tratarse como parte de la “teoría del desarrollo” (Dos Santos, 1999: 2).
- 5 Para Rostov, todas las sociedades que mantuvieran relaciones precapitalistas deben ser consideradas como “tradicionales” (Cfr. Dos Santos, 1999).
- 6 Con la Ley de Reforma Agraria (1964), la Ley de Abolición del Trabajo Precario en la Agricultura y el Decreto 1001 que “aceleraba la abolición de las relaciones sociales precarias en la costa y contribuía a la conformación de campesinos propietarios con capacidad de intervención en el mercado” (García, 1987: 118), desaparecen las

relaciones precapitalistas de trabajo y la economía agrícola costeña adquiere un carácter moderno (Cfr. Hurtado, 1977: 170; Cardoso, 1990).

- 7 Sobre la propuesta de desarrollo de la comunidad y su influencia en el desarrollo rural se profundiza más detenidamente en las siguientes páginas del presente capítulo.
- 8 W. Rostov trata de comprobar a través de su “Manifiesto anticomunista” que el desarrollo no depende de la revolución, como se había dado en la URSS, sino de las medidas económicas que siguieran aquellos estados nacionales que optasen por el desarrollismo (Cfr. Dos Santos, 1999: 3).
- 9 In the early 1960’s, the Kennedy administration responded to the perception of a threat by launching the Alliance for Progress, creating the Peace Corps dramatically expanding and reconfiguring economic assistance in a new Agency for International Development, and developing a counterinsurgency doctrine and its physical infrastructure, including the Army Special Forces (Schoultz, 1994: 35).
- 10 En el Cono Sur, el enemigo interno se configura de otra manera y la imbricación entre seguridad y desarrollo pone mayor énfasis en la seguridad ante la amenaza comunista, lo que implica un proceso de control social basado en la represión.
- 11 La propuesta del desarrollo de la comunidad es una categoría del enfoque del desarrollo. Se había implantado ya en países caracterizados por su extrema pobreza con una experiencia previa en la India y África para conseguir el desarrollo de una economía de mejor nivel, como preparación a sus procesos independentistas de Gran Bretaña.
- 12 A instancias del presidente Galo Plaza, posterior Secretario General de la Organización de Estados Americanos -OEA- se solicita a las Naciones Unidas y a la OEA el apoyo a los países del Área Andina a través de estos organismos internacionales.
- 13 La Ley de Comunas se emite durante la Jefatura Suprema del militar, Gral. Alberto Enríquez Gallo (1937-1938).
- 14 Es decir que se vuelven funcionales también formas de organización legadas por la administración colonial española, que se habían adaptado a lo largo del tiempo a la realidad americana. Ello puede ser visto como la continuación del colonialismo.
- 15 Las alfombras de Guano, en la provincia de Chimborazo, las artesanía de Salasaca en Tungurahua, no responden a una tradición, como en el caso de los textiles otavaleños, sino que son conducidas por los activistas del desarrollo comunitario, como estrategia para elevar los niveles de producción e integrar a los indios al sistema de mercado a partir de sus propias potencialidades (Comunicación personal con Estelina Quinatoa, diciembre de 2003).
- 16 El investigador Carlos Larrea en sus estudios acerca de la problemática de la nutrición en el área andina establece que los cambios de patrones de consumo en este sector, han provocado serios problemas de alimentación que han conducido a que entre la población indígena se proliferen altos niveles de desnutrición (Cfr. Larrea, 2005).
- 17 Barsky (1982) hace notar que en esas zonas se habían adentrado sólo los “abogados” de la FEI (brazo del Partido Comunista en el campo) desde 1944, hecho que preocupa a los gobiernos -tanto de Ecuador como de Estados Unidos-, ante la visión del comunismo como el enemigo externo e interno.

- 18 “El indigenismo latinoamericano reconoce la existencia del pluralismo étnico y la necesidad consecuente de elaborar políticas especiales para los pueblos indígenas [...] A raíz del Congreso Indigenista de Patzcuaro, en 1940, se introduce la tendencia integracionista que trata de generar una compatibilidad con la integración de los indios a la sociedad nacional moderna, dotándoles de todos los instrumentos civilizados necesarios conservando las matrices culturales que les son características a dichos grupos étnicos [...] (Rivera, 1998: 59).
- 19 Esta teoría, cuyo autor es economista Raúl Prebisch, quien dirige el organismo en esos años, intenta explicar las nuevas características del desarrollo dependiente, implantando ya en ciertos países latinoamericanos. Busca superar propuestas aplicadas anteriormente originadas en los países centrales, e implantar una metodología propia (Dos Santos, 1991).
- 20 “Entidades internacionales como el BID, Banco Mundial, PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para las Poblaciones, OMS, FAO, OEA, USAID, Cuerpo de Paz financiaron proyectos de desarrollo por un promedio de doscientos millones de dólares anuales, entre fines de los 70 y principios de los 80, sin contar con apoyos adicionales procedentes de Japón, Alemania Federal, el Reino Unido, Francia e Israel” (Sylva, 1991: 44).
- 21 La “cuestión agraria” es analizada por Barsky (1982), Guerrero (1983), Marchán (1984), Arcos (1984).
- 22 Afirmación válida para todas estas fuerzas sociales. Cabe como ejemplo, el giro que dan las Ciencias Sociales en Ecuador a partir de la propuesta desarrollista. La cooperación internacional para el desarrollo, hacia los años 50, no contó con personal local preparado para el trabajo directo con las comunidades campesinas, Aníbal Buitrón fue el único cientista social que se ajustaba al perfil requerido; sin embargo, no formó parte del equipo de la Misión Andina (Cfr. Bretón, 2001); a partir de los 70, las Ciencias Sociales toman un nuevo giro, las universidades dan cabida al estudio de la Antropología, la Sociología, la Lingüística, esta última a mediados de los 60; en la actualidad, las ONG de desarrollo cuentan con personal formado en el tema, que surge de las propias universidades locales y se halla muy en contacto con la realidad nacional.
- 23 Parte de las reformas liberales introducidas a fines del siglo XIX e inicios del XX restaron poder a la Iglesia al enajenarle sus haciendas que pasaron a manos del Estado. La Iglesia, hasta entonces, había sido la mayor propietaria de tierras en Ecuador.
- 24 Cfr. Yáñez, 1996; Bretón, 2001; Pallares, 1999.
- 25 La Campaña de la UNP se inició en 1943 (Cfr. Prieto, 2004).
- 26 La Revolución Juliana, por provocarse en julio de 1925 fue una asonada militar en la que participaron mandos medios del Ejército para terminar con los gobiernos de la ‘plutocracia’ de la Costa que habían delegado la crisis del cacao a los sectores vulnerables de a sociedad. En este hecho coparticipan intelectuales civiles y militares.
- 27 Alcalde actual de la ciudad de Quito.
- 28 Latin American military leaders, shaken by the Cuban revolutionaries’ execution of over six hundred officers and destruction of the old armed forces, sensed the immediate danger for themselves and their institutions [...] (Loveman, 1999: 172)

- 29 Posteriormente (2005) la misma autora se refiere a las acciones desarrollistas de las dictaduras de los 60 y 70 como parte de un populismo.
- 30 Cfr. Loveman, 1999: 170; Schirmer, 2001; Ben Ari, 2002.
- 31 Que se expresan en los documentos “Filosofía y Plan de Acción del Gobierno Nacionalista y Revolucionario del Ecuador” y en el “Plan Integral de Desarrollo” (1972).
- 32 Según Marchán (1984) y Arcos (1984) ya para fines del siglo XIX e inicios del XX en la Sierra centro-norte se identifica un grupo progresista de hacendados que provoca cambios en la distribución de la tenencia de la tierra y en la orientación de su producción.
- 33 Tanto el Gral. Vicente Aguirre como Roberto Ascásubi, hermano político de García Moreno, importan alambiques y trapiches desde Francia para sus plantaciones de caña de azúcar en Míndo (Loor, 1956).
- 34 En Patate, por ejemplo, se destila la caña y se producen dulces y panelas y licores a una escala que se acerca a la industrial, en los años 40.

LA RESPUESTA INDÍGENA: LA INTEGRACIÓN COMO OPCIÓN POLÍTICA

La respuesta de los indios a la serie de planes de integración de los que son objeto en un nuevo contexto político de administración civil, es el punto central de este capítulo, especialmente en lo que tiene que ver con la participación de las FF. AA. en su afán por conseguir la modernización del agro. El punto de partida es que el rumbo que toma la organización indígena y el tipo de relaciones que se establecen entre los militares y los indios organizados reflejan las formas de acción política que ambas partes desarrollan en este contexto, con la influencia de factores que desde lo global, fortalecen la conformación del movimiento indígena en Ecuador y sus avances hasta fin de siglo.

¿Es del caso hablar de un proyecto de inserción societal propio de parte de los indígenas? y de ser así, ¿cómo se plantea esta propuesta? Interesa comprobar que para este momento del presente análisis (1980-2000), los indios se hallan en una etapa fructífera de su proyecto de inserción en el esquema político ecuatoriano con una imagen distinta a la que les confieren históricamente los no indios: adscritos al campo y sin representación política propia. El supuesto en el que se basa este análisis es que son las mismas élites las que con sus políticas integracionistas perfilan la respuesta inesperada: indios autónomos con respecto a otras influencias políticas, con una conformación orgánica particular aglutinada en torno a un contenido identitario que demanda el reconocimiento de derechos diferencia-

dos por su condición étnica, sin cuestionar su adscripción nacional como ecuatorianos.

No se propone que los indios fueran actores pasivos antes de los 90, si bien por un largo período son voces ‘en *off*’ en el escenario político ecuatoriano, es decir que están pero de forma desarticulada, ello no anula su presencia en el imaginario nacional y como problema que preocupa a las élites no indias desde la Conquista. La política de la diferencia que históricamente ejercen los sectores dominantes sobre los indios, vistos como el Otro, en la que sustentan su proyecto de homogeneización, tiene como colofón la organización indígena que se expresa públicamente en los noventa con el paso de los indios a ocupar un rol protagónico en el campo político que se consuma en su participación activa en los acontecimientos del 21 de enero de 2000.

Si bien eclosionan en la escena pública sólo a fines del siglo XX, cuando lo hacen muestran que su propuesta de integración, pese a que aparentemente sea distinta, halla espacios de confluencia con aquellas que implementan las élites para conseguir la modernización del agro y construir la nación unitaria, pero que a su vez, trabajan por la elaboración de un discurso propio que tampoco puede eludir los sesgos de las prácticas de poder tradicionales, y ello porque comparten una misma matriz en la constitución de su cultura política.

El retorno a la democracia, la nueva mirada de las élites no indias hacia los indios

Luego de 9 años de gobiernos militares de facto, el país retorna al régimen democrático. Los últimos veinte años del siglo arrastran una situación de crisis que se configura a través de una serie encadenada de factores: deuda, pobreza, desocupación, exclusión, desnutrición, analfabetismo, el tradicional manejo político más inclinado hacia los intereses de grupo que al beneficio de la colectividad. Se une al saldo negativo de la época la culminación del espejismo petrolero y el acrecentamiento insostenible de la deuda externa, iniciada en los años del triunvirato militar. Todo ello enmarcado en un estilo de democracia controlada desde las FF. AA., como herencia histórica, condición que es aceptada y auspiciada por el resto de fuerzas políticas civiles.

Si bien los militares auspician el retorno a la democracia dentro de los cánones constitucionales -con sus resistencias unos y más abier-

tamente otros- no se entienda con ello que se eclipsen del campo del poder, aunque con mayor relevancia durante las dictaduras, su influencia se deja sentir en lo posterior de forma permanente. Previa la entrega del mando, se garantizan una participación sostenida y autónoma en la sociedad desde distintas vías, libres de la interferencia de los políticos civiles; se aseguran además, el control de las áreas estratégicas de la economía¹ y la participación directa en la industria nacional a través de las empresas de las que las FF. AA. son propietarias, lo cual les confiere una cuota de poder también en el sector de la producción, pero bajo condiciones más favorables que las que obtienen los industriales civiles, dada la autonomía que sostienen con el objeto de precautelar la soberanía y la seguridad nacionales y el conocimiento de la situación del país que aquello les confiere.

La pugna por el poder mantiene, por un lado, rasgos antioligárquicos que hallan como correlato, por otro, la lucha de los grupos políticos tradicionales por mantenerse en primer plano. Desde estos flancos, heterogéneos y carentes de cohesión, no se consigue proyectar un imaginario de nación definido como objeto 'a construir' colectivamente.

Un nuevo orden político enmarcado en la sucesión

Durante los 80 y 90, se verifica la participación dinámica de nuevos actores políticos y económicos y de cambios radicales en la distribución de fuerzas entre las élites agrupadas sobre una estructura de partidos². Desde 1979 hasta 1996 Ecuador presenta un comportamiento regular en la sucesión presidencial³, esa linealidad se altera en cierta medida, por el fallecimiento del presidente Jaime Roldós Aguilera, en ejercicio de sus funciones en 1981. Con cinco administraciones al mando de: Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres-Cordero, Rodrigo Borja y Sixto Durán-Ballén, todos ellos ubicados entre el centro y la derecha. Si comparamos éste con el contexto de las décadas anteriores, con relación a la participación de las FF. AA. en su rol arbitral del conflicto político en Ecuador⁴, la presencia de la institución evidencia un perfil aparentemente bajo, a no ser por la asonada militar protagonizada por el General Frank Vargas Pazzos, ocurrida en Manta, en 1986⁵, durante el régimen de Febres-Cordero.

El 'bajo perfil' de las Fuerzas Armadas (1979-1990)

En esta época, los miembros de la institución se ubican en sitios menos visibles o visibles desde otros ángulos. A raíz del retorno a la democracia, los militares intensifican su participación en el desarrollo agrario, una vez que allanan su camino para hacerlo respaldados en la legalidad con la creación de instrumentos apropiados durante las dictaduras, para trabajar en este sentido, libres de interferencias en situación de democracia.

Con el triunfo del binomio Roldós-Hurtado, de la alianza CFP-DP⁶, inicia, en abril del 79, un nuevo hito en la historia política del país, en lo que al tratamiento oficial del problema indígena se refiere. Desde el acto de posesión de mando se manifiesta una nueva retórica cuando, en su discurso, Roldós pronuncia un fragmento en kichwa. Esta tónica continúa, con el sucesor de Roldós (luego de su muerte), Osvaldo Hurtado, quien el día de su posesión lleva una banda presidencial escrita en shuar (Endara, 1998: 31). Se trata de un nuevo lenguaje en el discurso oficialista: “respeto a la autodeterminación”, “valores de las culturas autóctonas”, “derecho a la participación” y constituye un replanteamiento del tratamiento regular del tema indígena que se denomina “nueva acción indigenista” (Ibarra, 1987: 178).

Desde mediados de los 70, se siente la línea que se mantiene en lo posterior, en cuanto al tratamiento del tema agrario, se crean una serie de instituciones: IERAC, INCRAE, PREDESUR, CREA, Banco Nacional de Fomento, Ministerio de Agricultura, FODERUMA, entre otras. Todos estos organismos, aparecidos muchos de ellos en el contexto del gobierno militar, tienen por objeto fortalecer al Estado y su proceso de modernización, con lo cual se institucionalizan las políticas planteadas y se garantiza la permanencia del proyecto nacional militar.

Proliferan entonces en el país ONG privadas, nacionales e internacionales que –bajo el paraguas de la cooperación y la asistencia técnica– “imponen”, a decir de un militar, “diversos programas dirigidos a comunidades indígenas y campesinas” (Tcrn. EM. N. Gudiño, 1991: 17). Tal punto de vista implicaría la presencia de comunidades o de un poder civil que permitirían la “imposición” de aquellos programas pero sin capacidad de diferenciar sus intereses de los de aquellos organismos. Vale pensar que tanto a las comunidades como al Estado les con-

vienen los auspicios de las ONG, una vez que éstas en muchas ocasiones suplantán las funciones del Estado y, a la larga, mantienen los planteamientos, ya aceptados, del enfoque de desarrollo comunitario que se aplican desde la primera mitad del siglo a favor del desarrollo agrario en el país. Por otro lado, estas acciones desplegadas en el campo influyen en la transformación de los indios en grupos de presión política con las particularidades que adquieren en el proceso.

Desde 1980 se establecen nuevos programas de alfabetización dirigidos expresamente a los indios, se legisla en torno al tema agrario, y se fomenta la organización popular (Sylva, 1991). En la administración civil se continúa con los fundamentos que motivan la reforma agraria, con un nuevo enfoque que involucra el “desarrollo rural integral [DRI]” (Tcrn. F. Fiallo, 1992: 22); este modelo se pone en práctica entre 1979 y 1984, busca la “participación social, autogestión y organización campesina” (Sánchez y Freidenberg, 1998: 67).

El problema de la deuda externa se hace latente con la consiguiente pauperización de la sociedad que afecta mayormente a los sectores populares; el país vive en constante situación de protesta, entre tanto los representantes de la Cámara de la Producción pasan a la oposición. Paradójicamente, Hurtado premia al sector al aplicar la sucretización de la deuda que afecta a quienes nada hacen para contraerla. Aquella política de apoyo a las élites económicas, sin embargo, apacigua a la oposición, con antelación a la convocatoria a elecciones.

La continuación del orden sucesorio (1984-1988)

El 10 de agosto de 1984, León Febres-Cordero, respaldado por el Partido Social Cristiano, asume la presidencia; encabeza el Frente de Reconstrucción Nacional -FRN- coalición de partidos de Derecha⁷; en el nuevo gobierno priman los intereses políticos y económicos de las élites costeñas, especialmente de Guayaquil, que se mantienen en la competencia ya histórica por el poder con las de la Sierra.

Se desarrolla bajo un esquema prepotente que hace uso clientelar de las FF. AA., las divide internamente y resquebraja la relación entre los militares y el régimen por constituir ambos dos tipos de autoritarismos que se enfrentan por conseguir iguales niveles de autosuficiencia y capacidad de mando. Un ala de la Fuerza Aérea protagoniza incidentes que culminan con el secuestro del Presidente en la base aé-

rea de Manta, lo cual vulnera la autoridad de Febres-Cordero y evidencia, una vez más, el poder real y la condición arbitral en el manejo de los destinos de la nación que se arrogan para sí las FF. AA.

La consolidación organizativa de los indios

En cuanto a su proceso de consolidación, en la década de los 80 las organizaciones más representativas de los indios incrementan su capacidad de convocatoria, con un discurso que configura su contenido étnico. Cuenta con buenos auspicios durante los gobiernos de Roldós y Hurtado y, por paradójico que parezca, mantiene su continuidad en el contexto antisedicioso de la administración febrescorderista (1984-1988). La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE-, por ejemplo, se crea en 1986. Entre los líderes indios hay claridad de las implicaciones que hubiese tenido para sus intenciones orgánicas desplegar una presencia combativa en esa coyuntura; pese a que ya estaban organizándose lo hicieron con cautela, porque Febres-Cordero bien pudiera haberlos “masacrado” (Dirigente de la CONAIE. Cfr. Falconí, 1991).

Entonces, la cuestión étnica no guarda especial interés para la política de seguridad del régimen, pues la subversión es vista como un problema focalizado en las zonas urbanas de Quito y Guayaquil. Especialmente en Quito, donde surge el grupo guerrillero de izquierda “Alfaro Vive Carajo”, que es desactivado con despliegue de violencia, con objeto de limitar el fortalecimiento de la subversión y a manera de escarmiento para quien pretenda unirse a la iniciativa. Febres-Cordero la califica como “terrorista”, lo que le vale el apoyo de Estados Unidos para combatirla, especialmente a través del fortalecimiento de las fuerzas policiales, lo que resta poder a las FF. AA. El estilo represivo que el mandatario proyecta confiere a su administración el aspecto de una dictadura civil. Las agencias de inteligencia y seguridad del Estado, en todo caso, miran con sospecha a los indios como potenciales sujetos sediciosos, especialmente a los grupos que se forman a instancias de la pastoral indígena (Crnl. EM F. Viteri, 1995: 48-9; Myr. FF.BB. O. Jarrín, 1984).

Si la organización indígena no es vista con sospecha por el gobierno es porque aún no se dimensiona su potencialidad política, y más bien se la estimula desde las FF. AA. a través de la acción cívica.

Luego del fracaso ecuatoriano en el frente externo tras la Guerra de Paquisha (1981), y una vez culminada la participación directa de los militares en política, se vuelcan a las acciones de desarrollo para las que se había preparado el terreno durante las dictaduras. En la Amazonia, dada su cercanía con la frontera, los militares intervienen de distintas maneras, entre otras, con el establecimiento de fronteras vivas. Las FF. AA. no ven con sospecha sino que apoyan la organización indígena, que auspician con fines unitaristas y de control, cabe preguntarse si calculan el rumbo político que podía tomar el movimiento indígena.

En 1981, Ecuador y Perú protagonizan un nuevo enfrentamiento bélico en Paquisha, 40 años después se renueva la situación de derrota vivida en el 41 frente al mismo enemigo. Al igual que en esa oportunidad, el frente militar da muestras de debilidad y comete errores, sobre todo por la capacidad insuficiente e inconsistente de armamento apto para ese enfrentamiento, y debe redefinir su estrategia de defensa en escenarios futuros, como el del Cenepa en 1995⁸. Tal situación bélica coincide con momentos en que su acción durante las dictaduras es sometida a juicio por el resto de la ciudadanía, una vez que pierden parte del control que consiguen durante su estadía en el Ejecutivo. Una vez más, la crítica en su contra se enrumba por el cuestionamiento a su participación en política que debilita su capacidad de acción en el frente externo, función tradicional de las FF. AA., y se ven obligadas por tanto, a mejorar su preparación para la defensa del frente externo, no sólo en cuanto a su contenido armamentista sino al fortalecimiento del frente interno a través de las acciones del desarrollo que también se han vuelto tradicionales en la institución a nombre de la defensa.

*Un nuevo momento integracionista
en un contexto democrático (1988-1992)*

Para ese período 88-92 resulta electo el socialdemócrata Rodrigo Borja, líder del Partido Izquierda Democrática, que marca un estilo político distinto al de Febres-Cordero.

Varios son los elementos que establecen la diferencia de esta administración que pone énfasis en la política social y se muestra partidaria de la “paz y la unidad” (Espinosa, 1998: 227). Borja hace pública su opinión sobre la necesidad de construir un Estado plurinacional

“como unidad de equilibrio entre la nación ecuatoriana y los pueblos indios” (Tcn. EM. F. Fiallo, 1992: 44). Ratifica y avala de esta manera el discurso indio de reconocimiento de la diferencia. Ratifica también la permanencia de las FF. AA. en las funciones del desarrollo, aunque lo menciona como un “nuevo objetivo”, e invisibiliza así el protagonismo que los militares mantienen en este campo. Borja enfatiza en que la seguridad nacional debe garantizarse a partir de la salvaguarda de los derechos humanos y afirma que “un Estado es seguro cuando es capaz de garantizar los derechos humanos de sus habitantes” (Cfr. Espinosa, 1998: 227). En este mismo contexto político Borja difunde el Sistema Nacional de Educación Indígena Intercultural Bilingüe, a fin de preservar la cultura y la lengua aborígenes y “permitir que los propios indígenas participen en su propio proceso educativo” (Tcrn. EM. N. Gudiño, 1991: 48).

En las coyunturas previa y posterior los indios, una vez que han ganado experiencia asociativa, retoman las palabras de Borja y exigen sus derechos a la tierra y al reconocimiento de sus nacionalidades con un repertorio de protesta que toma fuerza en junio de 1990, en el que hacen derroche de su capacidad de convocatoria. Este evento cuenta con la participación masiva de los indígenas organizados de las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar y Loja (Tcrn. EM. F. Fiallo, 1992: 36), y sólo se supera cuando los indios logran la atención del Ejecutivo que acepta algunas de sus demandas.

Los indios presionan por el reconocimiento a sus derechos étnicos y consiguen la entrega de 1'500.000 hectáreas de terreno, de las cuales 1'200.000 se destinan a los pueblos indios. Una vez más, el Estado promueve la modernización de la sociedad nacional, pero en esta oportunidad, se ejecutan políticas redistributivas con las cuales se dan pasos más en firme hacia la integración de los indígenas, amparados en sus demandas, que al parecer, calan en el sector socialdemócrata de las élites gobernantes, a instancias del llamado de atención de los propios indios, que dan muestras de haber ganado influencia en las decisiones que se toman desde el Estado a su favor.

En las decisiones de Borja, sin embargo, tuvo gran ascendente el Comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, Gral. Carlomagno Andrade, quien consigue se entable el diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas, en este marco del primer levantamiento,

al fungir como intermediario directo entre las élites de poder y sus protagonistas. Andrade soluciona el problema en Cotopaxi, aunque también tiene incidencia en otras provincias que se hallaban implicadas en los acontecimientos para la fecha (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre de 2003). A decir del Crnl. Haro, existe un respeto y un reconocimiento hacia la autoridad de las FF. AA. por parte de los indios. Andrade, con formación en Brasil y Panamá, pertenece a la generación de generales como José Gallardo Román, Paco Moncayo y Miguel Iturralde (Andrade e Iturralde fallecieron en accidentes aéreos en servicio activo). Ellos participan vigorosamente en las acciones de las FF. AA. en el desarrollo. “Andrade e Iturralde” se hallan muy identificados con los movimientos indígenas” (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre de 2003).

Con miras a regular la protesta, durante el gobierno de Borja se crean instituciones de decisión lideradas por indígenas. Las FF. AA. no ven con buenos ojos la actitud de Rodrigo Borja que más bien es criticada, cuando habla del Ecuador como un país compuesto por distintas nacionalidades. Para los militares el tema de la nación está zanjado y la ven como uninacional (Mendoza, 1996).

En el contexto internacional, entre los ochenta y noventa el mundo en general, asiste a grandes cambios en el paradigma del poder. La caída del muro de Berlín, en 1989, que provoca el fin de la Guerra Fría, trae consigo la necesidad de un replanteamiento de la idea de la guerra y obliga a resignificar el perfil del enemigo externo, con una reorientación del concepto de seguridad nacional, sin que se deje de pensar en el comunismo como el enemigo, que legitima la presencia militar.

... las necesidades de enfrentar diversas amenazas como producto del cambio en las políticas mundiales con la aparente desaparición del comunismo, obliga a las fuerzas armadas a enfrentar un importante desafío para elaborar estrategias aplicables en todo el espectro del empleo militar [...] en tiempo de paz, conflictos de baja intensidad y hasta la guerra [...] (Crnl. J. Hernández y otros, 1993: 49).

Todo ello sucede bajo el proceso de globalización que se apoya en los avances tecnológicos, especialmente de las comunicaciones, y que se plasma en los procesos migratorios que llevan a buscar ciudadanías más universales⁹. Para el caso ecuatoriano, los acelerados procesos

de cambio que se verifican, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, generan nuevos escenarios y actores políticos.

Una nueva experiencia democrática enfocada desde la derecha (1992-1996)

En 1992 una coalición de disidentes del Partido Socialcristiano que muestra la heterogeneidad de las derechas y de los procesos políticos, llega al poder por la vía democrática. El binomio Durán Ballen - Dahik expresa el afán de ‘modernizar el Estado’. En cuanto a la política agraria, en 1994 se emite la Ley de Desarrollo Agrario, cuyo objetivo radica en la liberalización total del mercado de tierras en el país. Los levantamientos indígenas se mantienen como repertorio de protesta y consiguen ciertos cambios, poco significativos, en el articulado de la Ley. Los logros para los indios irían en otro sentido, cuando la revuelta se convierte en un termómetro de su capacidad de convocatoria y dejan entrever a las élites tradicionales que comparten la pugna por el poder con un nuevo adversario, con el que deben negociar en las mesas de diálogo, como ocurre en aquella oportunidad.

Un nuevo episodio bélico con el Perú ocurre al iniciar 1995, entonces, tanto las FF. AA. como el gobierno nacional y la ciudadanía, despliegan importantes esfuerzos por enfrentar la situación de guerra con una actitud unitaria para ‘enfrentar el conflicto con dignidad’, lo que le vale el triunfo al Ecuador, y evidencia que los planes defensivos preparados después de la derrota de Paquisha inciden en los resultados obtenidos. Tal situación incrementa la capacidad de influencia de las FF. AA. frente al Ejecutivo que cede posiciones políticas dadas las prioridades de la guerra, es decir, de la agenda de las FF. AA., que salen fortalecidas. La economía se orienta al contexto bélico y a la necesidad de conseguir recursos para tal coyuntura; los frentes interno y externo se adecuan a los lineamientos del Consejo de Seguridad Nacional.

La intensificación de los afanes integracionistas a raíz de la derrota de Paquisha tienen mucho que ver en el fortalecimiento que se provoca en el movimiento indígena, con la participación de los indios amazónicos en la Guerra del Cenepa; los shuar, cuyos territorios se ubican en la zona de conflicto, forman parte de la defensa ecuatoriana, con ventajas comparativas que se expresan en su tradición de guerreros y el conocimiento del medio selvático, donde se asienta el campo de bata-

lla; se les atribuye buena parte del saldo positivo que en esta oportunidad queda para Ecuador¹⁰.

La ruptura del orden sucesorio: 1997-2000

Cuando a fines de la administración febreescorderista la representación socialdemócrata consigue el triunfo electoral con un discurso democratizante, cupo preguntarse si era posible pensar “que el país había entrado en la senda de la consolidación de sus instituciones republicanas y que el turbulento pasado de golpes, asonadas y cuartelazos estaba en vías definitivas de superación” (Bustamante, 1988: 131-132). Los últimos cuatro años del siglo dan muestras de lo contrario, cuando la etapa arranca con el triunfo electoral del populismo, en 1996.

En aquellas elecciones se cumple una aspiración de larga data de la tendencia populista en Ecuador: acceder al Poder Ejecutivo, y lo consigue por intermedio de Abdalá Bucaram, quien cuenta con un amplio electorado, principalmente entre los sectores populares costeños. Pese a la crítica que recibe de sus adversarios políticos e ideológicos por su carencia de un plan de gobierno, Bucaram asume el poder basado en tres objetivos: “ajuste económico, político y social tajante y coherente; la paz con el Perú, y vivienda para los pobres” (Espinosa, 1998: 253). Con prácticas irregulares y corruptas, protagonizadas muchas de ellas por sus familiares cercanos y coidearios, Bucaram gobierna entre agosto de 1996 y febrero de 1997. El listado de actos de corrupción llega a ser interminable, “sólo desde el BEDE se habían presentado más de 14 denuncias de atracos cometidos en 6 meses de gobierno [...]” (Gral. J. Gallardo, entrevista de noviembre, 2003).

Cuando la corrupción del régimen recibe la crítica por parte del Embajador de Estados Unidos, queda consignado el fin del régimen bucaramista. Los indios dejan sentir su presencia en aquella oportunidad; los estudiantes y trabajadores, las mujeres y la ciudadanía en general, participan en extendidas jornadas de protesta, que desde entonces se vuelven repertorio del sector civil descontento con los regímenes que arremeten contra la institucionalidad del país¹¹. Mientras, Bucaram huye a Panamá en febrero de 1997, y lo hacen también muchos de sus colaboradores más cercanos. Esa abrupta salida pone al descubier-

to los manejos fraudulentos del gobierno populista que van contra los intereses del Estado y su orden interno.

Cuando llegué, el BEDE se hallaba acefálico, en manos de un comité que habían organizado los trabajadores, porque se habían escapado todas las autoridades (Gral. J. Gallardo, entrevista de noviembre, 2003)¹².

Ni el populismo, tampoco la oligarquía, han gozado de la simpatía de las FF. AA. en Ecuador, “la *betenoire*” de los militares modernos ha tenido dos cabezas: el patrimonialismo oligárquico-familístico y el populismo “plebeyo” (Bustamante, 1988: 138). Bustamante olvida un elemento crucial desde la óptica del nacionalismo militar: lo extraño que este personaje resulta para la comunidad que imaginan, por su ancestro extranjero que nunca fue bien visto tampoco por las élites tradicionales; los ‘turcos’, como Bucaram, son rechazados por los grupos de poder en Quito y Guayaquil, al ser captados como advenedizos. Como se recordará, la participación política de los militares, en 1972, se atribuye en parte, al rechazo de la posibilidad de triunfo electoral de Asaad Bucaram. Las sospechas hacia el populismo por parte del sector castrense, se confirman, esta vez, en 1996.

Vino el gobierno de Abdalá Bucaram, que fue un desastre para el país, cuando se cayó, yo, que había pasado toda la vida conteniendo a los que protestaban, me uní a las protestas, en febrero de 1997 (Gral. J. Gallardo, entrevista de noviembre, 2003).

El populismo y la oligarquía contienen, a ojos de los militares, lógicas “profundamente disolventes de lo nacional y destructivas de lo estatal” (Bustamante, 1988: 132), que han puesto en riesgo la consolidación del frente interno, puesto que se desarrollan con dinámicas que provocan situaciones de ingobernabilidad, lo cual debilita el poder nacional y cualquier aspiración efectiva de defensa.

En la memoria colectiva de los militares ambas tendencias disfuncionales se han encarnado en figuras de líderes arquetípicos profundamente perturbadores para la oficialidad: Arroyo del Río y Velasco Ibarra y los Bucaram, tío y sobrino [...] (Bustamante, 1988: 138).

La forma de apoyo de las FF. AA. a la caída de Bucaram se efectiviza, no con la toma del poder por la fuerza, sino con el apoyo directo a la sociedad civil, a través de la no interferencia en los actos populares de

protesta, lo cual expresa definitivamente cuando las fuerzas del orden retiran su apoyo al Presidente, acto que se complementa con la declaratoria de ‘incapacidad mental para gobernar’ de Bucaram por parte del Congreso y se lo sustituye por Fabián Alarcón, presidente del Congreso Nacional; se desatienden a los mandatos constitucionales al impedir que la vicepresidenta Rosalía Arteaga ocupase el Poder Ejecutivo, dadas sus vinculaciones con el gobierno defenestrado¹³, con la anuencia del alto mando militar y el apoyo del héroe del Cenepa, Gral. Paco Moncayo, quien para entonces, es Jefe del Comando Conjunto de las FF. AA.

La mayor crisis en los últimos diez años

Alarcón convoca nuevamente a elecciones, en este evento resulta triunfador el representante de la Democracia Popular, y hasta entonces alcalde de Quito, Jamil Mahuad. En este gobierno, se consigna la firma del Tratado de Paz y Amistad con el Perú, en 1998. Con ello terminan más de cien años de disputa limítrofe, hecho que obliga a las FF. AA. a buscar otro destino a su gestión a favor de la defensa y a construir nuevos enemigos tanto internos como externos. Su contingente, antes enfocado en las necesidades de la guerra, hallan una nueva razón de ser en el desarrollo agrario, lo que se resume en la Doctrina del Apoyo al Desarrollo que fortalece la relación entre indios y militares que toma sesgos populistas y clientelares, que vuelve a los indios dependientes de los favores del Estado con la mediación de las FF.AA.

En este sentido, las acciones de apoyo al desarrollo a partir de la década de los 90, pueden leerse como una estrategia de cooptación del movimiento indígena, una vez que los indios demandan el reconocimiento de sus “nacionalidades”, lo cual inquieta a los militares dada su vocación de defensa de un modelo de nación burguesa unitaria e integrada. Más aún cuando los altos presupuestos anteriormente orientados a la defensa se canalizan por otras vías, lo cual desfinancia a las FF. AA. El apoyo al desarrollo justifica la permanencia militar una vez superado el problema limítrofe, y toma tal ‘vuelo’ que incluso llega a convertirse en una doctrina, cuyos gestores son los militares ecuatorianos. Este hecho muestra el bagaje que consiguen en el tema del desarrollo agrario por su trabajo continuo en este campo, al punto que se convierten en el ejemplo válido a seguir por las FF. AA. de otras naciones (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre de 2003).

El apoyo al desarrollo pasa a ser un impulso más en el proceso indígena de transformación en elemento activo y no pasivo en la escena pública, cuando los indios dan muestras de consolidación de su proceso de integración política impulsados por el discurso desarrollista y por sus propios avances de construcción identitaria de corte étnico. Hacia la década de los 90 ya saben moverse en la arena política y pese a que en su discurso los indígenas incluyen otros elementos que se resumen en el respeto al Otro, el diálogo, la organización y el acatamiento de la jerarquía de sus dirigentes, las formas de hacer política de las que han dado muestra desde su inserción en el ámbito público no pueden negar su 'escuela', que se deriva de las prácticas de los no indios entre las que tienen importancia las formas de funcionamiento de la izquierda con su visión clasista.

Entonces, el movimiento indígena había ganado mayor capacidad de maniobra, entiéndase "maniobra", no como una manipulación sino como la capacidad de negociación. El constante contacto con el aparato burocrático para la entrega de tierras que inicialmente fue realizado por intermediarios, es más adelante, desempeñado por los indígenas organizados, que habían aprendido también las formas de inserción en estos medios para conseguir sus objetivos, ya desde el entrenamiento que reciben para la formación de líderes, se los había dotado de una larga experiencia de las formas de funcionamiento estatal y habían aprendido a manejar las situaciones (Trn. Nelson Gudiño, 1991: 27) y cómo demandar sus derechos.

En esta misma administración, el manejo económico del país da muestras de deterioro, se introduce al Ecuador en un proceso de dolarización con el ánimo de mejorar su economía, sin una clara política para el efecto (Samaniego, 2004). Se provoca la caída del sistema financiero que culmina con el 'salvataje bancario', cuando el gobierno se pone del lado de la banca privada y en contra de los intereses ciudadanos. Se desenlaza así una situación de caos en el país, enmarcada en la peor crisis de los últimos diez años.

Algunos banqueros corruptos hacen uso de los dineros de los cuenta habientes y huyen del país, tema frente al cual tampoco se toman decisiones desde el Ejecutivo contra la banca privada. Nada se dice sobre la impunidad en que se sospecha quedaría el banquero Fernando Aspiazu, responsable de la quiebra del Banco del Progreso, y colaborador de la campaña de Mahuad con fuertes sumas económicas.

Sería el Ministro de Defensa, el General José Gallardo, quien tome la decisión de apresar a Aspiazu, “ante la ausencia de otra autoridad que lo hiciese”. Así las FF. AA., a través de uno de sus representantes, tutelan una vez más la democracia en Ecuador, ante la inoperancia de los políticos civiles, ‘carentes de autoridad moral’.

Cuando vinieron los problemas con Aspiazu yo llamé a Guayaquil, siendo ministro de defensa, y le dije al comandante de brigada, no voy a aceptar ninguna disculpa en caso de que Aspiazu se fuera. Esa es otra cosa que a mí me llena de satisfacción, porque aparecía como que aquí no había ninguna ley ni autoridad y que podía hacerse lo que se quisiera (Gral. J. Gallardo, entrevista de noviembre, 2003).

Como resultado de este mismo episodio, y de toda la política contraria a los intereses populares de esta administración, una coalición conformada por la dirigencia indígena, respaldada por las bases que se toman las calles de Quito en un número multitudinario. Un sector de los miembros de las FF. AA., ubicados mayoritariamente en el rango de Coronel, a más de 500 oficiales de la Academia de Guerra de la Escuela de Perfeccionamiento Militar, se sublevan el 21 de enero de 2000, y protagonizan la “Rebelión de Quito” (Paz y Miño, 2002); indios y militares copan el Congreso¹⁴ y dan el golpe que defenestra a Mahuad cuando las FF. AA. le retiran su apoyo.

La caída de las estructuras financieras por la corrupción y complicidad del gobierno afecta corporativamente a las FF. AA., que viven momentos críticos de reacomodo institucional una vez superada la etapa de guerra con el Perú. El hecho vacía el discurso de la razón de ser de las FF. AA., en cuanto al rol que cumplen como defensoras de la integridad nacional. La firma de la paz afecta seriamente el presupuesto que hasta entonces se destina a la defensa, más aún si se toma en cuenta la política neoliberal de servicio a la deuda externa, preponderante en aquellos momentos.

Hay inconformidad en las filas militares¹⁵, desde donde se buscan estrategias de desestabilización política, práctica militar que no es novedosa en la historia política ecuatoriana (Fitch, 1977). En la coyuntura previa, ciertos miembros de la cúpula militar se envuelven en acciones conspirativas, “...el Comandante del Ejército, Gral. Sandoval, se convierte en el principal conspirador, había estado en contacto con los indígenas, con los choferes, con la gente de las cámaras, hablaba de des-

tituir los poderes del Estado...” (Gral. J. Gallardo, entrevista de noviembre de 2003)¹⁶; el Gral. Carlos Mendoza (Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas) protagoniza también actos de conspiración¹⁷. El mismo Sandoval influye, en lo posterior, para que el vicepresidente Gustavo Noboa, asumiera el poder en lugar del triunvirato conformado por Antonio Vargas, Presidente de la CONAIE; Carlos Solórzano Constantine (ex presidente de la Corte Suprema de Justicia), promovido por los movimientos sociales, y el Crnl. Lucio Gutiérrez. El Gral. Carlos Mendoza, garantiza en esa coyuntura la lealtad de las distintas ramas de las FF. AA. al nuevo gobierno. Recuérdese que Mendoza presenta uno de los discursos más radicales en defensa del Estado nacional en cuanto a la posición separatista que muestran las reivindicaciones que demandan los indígenas, a mediados de los 90 (Cfr. Grab. C. Mendoza, 1996).

El desenlace de los hechos y el tiempo transcurrido permiten deducir que el alto mando militar, representado por los militares mencionados, utiliza a los coroneles descontentos por la situación económica y política para garantizar su statu quo, deteriorado por dos momentos de crisis, económica e institucional, desprendidos de la firma de la Paz con el Perú. Los generales Sandoval y Mendoza, amparados en la corporación militar, intervienen a favor de sus intereses particulares: en son de protesta por el bajo presupuesto que se destina a las FF. AA. y para garantizar su permanencia en el alto mando; aparecen, sin embargo, como defensores de la constitucionalidad y luego de haber sido separados de las filas militares, por su participación en la asonada del 21 de enero, son condecorados por el gobierno de Noboa.

El Crnl. Lucio Gutiérrez protagoniza este levantamiento frente a los medios de comunicación y la opinión pública, que causa remezón dentro de las filas militares, pero que finalmente cumple con el objetivo de destituir a Mahuad por corrupto y por su entreguismo con la banca privada, justificación esgrimida por indios y militares para dar el golpe. A Gutiérrez se lo coloca en disponibilidad en espera de las sanciones militares. Después de una amnistía dada por el Congreso, conforma su propio partido político en unión con otros militares que participan el 21 de enero, que se denomina “Sociedad Patriótica 21 de Enero” (lista 3). En las elecciones del 2002 Sociedad Patriótica entra en alianza con Pachakutik (lista 18) con lo que se conforma la Alianza 3-18, que alcanza la Presidencia de la República.

Poco después, se evidencia la cooptación de la que es objeto el proyecto indígena, cuando los indios y sus allegados rompen la alianza y deslindan responsabilidades con el gobierno de Gutiérrez, que utiliza la simpatía que los indígenas organizados políticamente provocan entre los electores para, una vez en el gobierno, anular su poder de decisión. La CONAIE, actor gravitante en el 97, se debilita y su representatividad y credibilidad políticas se erosionan en el espectro nacional. Se rompe así el aparente unitarismo del movimiento indígena basado en lo andino, que construido desde las élites, no representa una amenaza para el proyecto estatal. Es así como los indios irrumpen en la escena política y, más tarde (2005), sufren el fraccionamiento de su partido Pachakutik que da muestras del deterioro que le provoca el paso por su participación directa en las esferas del poder.

La práctica de cooptar la inserción de los indios en política no puede delegarse sólo a las FF. AA. en Ecuador. A partir de la década de los 90, se evidencia un interés por parte de las élites en el poder por regular la protesta, al otorgar cargos a los dirigentes indígenas en las organizaciones del Estado, ello se percibe con particularidad en los gobiernos de Rodrigo Borja, Sixto Durán-Ballén y Abdalá Bucaram que se ven obligados a incluir a los indios en el juego patrimonial. Alarcón, por su parte, da un manejo a las expectativas de los indios, pero sin mayor compromiso; contrasta con esta situación el gobierno de Jamil Mahuad que no negocia acertadamente porque minimiza la presencia del actor indio, pero que tampoco lo excluye. Así, “el Estado se vuelve referente esencial de la protesta social y es visto como el árbitro de los conflictos y fuente de recursos para los grupos específicos” (De la Torre, 2003: 63). Ese rol del Estado, es cumplido, en buena parte por las FF. AA.

El proceso de consolidación política del movimiento indígena

Como interesa demostrar en los capítulos 2 y 3, el pensamiento de los militares modernizantes del siglo XX temprano refleja con fidelidad el rol que juegan los indios en el imaginario nacional del resto de ciudadanos y de las élites civiles no indias. Éstas ensayan estrategias integradoras, comparten y disputan espacios en este proceso, lo que configura el proyecto societal que implementan desde sus espacios de poder. Sin querer restarles peso a las demás, las FF. AA.

tienen un rol definitorio, lo que les permite manejar niveles de hegemonía.

Este imaginario nacional característico del período republicano en la época que cubre el presente análisis, se inscribe en uno mayor que rebasa las fronteras nacionales: el proceso de modernización global. El pensamiento modernizante que toma un carácter planetario, trasciende el mundo de las ideas y es llevado a la práctica por las potencias internacionales, avaladas por las élites locales.

Si bien el imaginario de la nación homogénea en términos sociales cumple ya para mediados del siglo XX con una agenda significativa en cuanto a los instrumentos que aplica para conseguir plasmarla en la realidad, desde finales de la década de los 40, con la influencia de las entidades extranjeras auspiciadas desde Estados Unidos, se promueve en la subregión andina la aplicación de fórmulas modernizantes destinadas a las sociedades tanto urbanas como rurales, orientadas principalmente a introducirlas en el sistema de mercado y en procesos de industrialización y urbanización. Tales estrategias apelan a la inserción de las sociedades de sus zonas de influencia en procesos de homogeneización cultural que son de tipo integral porque abarcan la generalidad de dimensiones de la vida de estas poblaciones.

El ordenamiento y salubridad del entorno urbano por ejemplo, corren en este período a cargo del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, coordinado desde el Punto Cuarto con fondos y asesoría estadounidenses; la entidad trae consigo sistemas de salud y salubridad, la canalización de las principales ciudades del país y de algunas de las rurales, entre otras obras de saneamiento como vacunación y letrización, o entrenamiento de personal hospitalario (Ortiz, 2004). En el sector rural lo hace a partir de la Misión Andina para el Ecuador, que como se menciona detalladamente en el tercer capítulo, trae muchas de las bases de lo que sería la concepción de desarrollo rural, contenidas en el enfoque de desarrollo de la comunidad, varios de cuyos elementos se mantienen hasta la actualidad. La Misión Andina influye no sólo entre la población indígena o entre los habitantes del campo, los sectores urbano-rurales no indios, también son objeto de tal intervención¹⁸.

A finales del siglo XX, las estrategias de modernización agraria surten su efecto, el paisaje rural varía substancialmente, “las haciendas tradicionales habían desaparecido [...] y las economías indígena-cam-

pesinas se habían mercantilizado e insertado definitivamente en los mercados regionales, pauperizándose en su mayor parte” (Bretón, 2001: 28). La mano de obra agraria atraviesa por procesos de homogeneización cultural que resultan excluyentes en la medida que anulan ciertos elementos que consideran arcaicos y mantienen o potencian otros que son funcionales a la construcción del proyecto nacional societal y económico.

Como se observa a lo largo de cien años, las formas de incorporación del Otro que ponen en práctica las élites en el poder se mantienen en lo formal pero van adaptando sus contenidos a las distintas condiciones históricas endógenas y exógenas y particularmente a las respuestas que van recibiendo de parte de los receptores de tales políticas: los indios, para el caso del presente estudio.

En esta visión integracionista, la organización ocupa un lugar preponderante. Todos los gestores del desarrollo: Iglesia, Estado, militares, izquierda, activistas nacionales e internacionales del desarrollo agrario inducen a la población indígena en procesos organizativos y de formación de líderes. Para Carlos de la Torre (2003: 63), ello deriva de una tradición corporatista y populista que consiste en que “si un ciudadano común no pertenece a un grupo organizado, que es o busca ser reconocido por el Estado, es invisible, está solo y aislado” —lo que resulta disfuncional en una lógica modernizante—. La obsesión por la organización además, deviene en el proceso de recolonización del agro que se da desde inicios del siglo XX enmarcado en los esfuerzos de modernización nacional. Es más fácil negociar con grupos organizados que con grupos que ante esa visión aparecen como ‘salvajes dispersos’.

Una breve entrada teórica para la comprensión de los movimientos sociales

El tema de análisis que se propone en las líneas que continúan, encuentra instrumentos teóricos en construcciones como la teoría de la movilización de recursos y la identidad, para la comprensión de la acción colectiva, que aportan para entender la conformación de movimientos sociales. La identidad se entiende en la captación de su ‘mismidad’ por parte del individuo a través de la percepción de la diferencia de unos con respecto a otros (Hobsbawm, 1991). Cuando se dejan sentir las colectividades que buscan la legitimación de su diferencia y

ello entra en tensión con el orden establecido aparecen los movimientos sociales. "...Que los participantes en la acción colectiva busquen construir, legitimar o expresar una identidad, antes que perseguir alguna estrategia de carácter instrumental, es algo fundamental..." (Calhoun, 1999: 78)¹⁹.

Para entender el caso del movimiento indígena ecuatoriano se puede optar por distintas vías de entrada. Desde la teoría de la movilización de recursos, se trata de un movimiento colectivo que tiene una organización establecida, cuenta con distintos tipos de recursos, repertorios definidos, ha generado participación, organización y por tanto ha creado oportunidades políticas (Tilly, 2000). Sus actores, por otro lado, están interesados en un cambio de la estructura estatal, para así conseguir mejores condiciones para el sector al que representan. Incluye además, grupos de interés previos a su organización (Cfr. Tilly, 2000; Barrera, 2000). El énfasis de esta teoría se asienta en aquellos movimientos que apuntan hacia un cambio institucional en determinados elementos de la estructura social o en la "estructura de la distribución de recompensas en la sociedad" (Jenkins, 1994: 8 y 9).

Las teorías de la identidad para la comprensión de los movimientos sociales resultan efectivas para explicar dimensiones no tratadas en las teorías de la movilización de recursos y en aquellas que se orientan a la elección racional (*rational choice*) para la comprensión de la acción colectiva; por tanto, cabe complementar estas propuestas con un acercamiento al tema étnico identitario del movimiento indígena ecuatoriano. Su lucha integra la aceptación de la diferencia y el respeto a su lengua y tradiciones culturales²⁰. La acción colectiva nunca se basa exclusivamente en el cálculo de costos y beneficios y nunca es enteramente negociable (Melucci, 1994: 172-173). Debe tomarse en cuenta, para captar al movimiento indígena ecuatoriano, que la constitución de la identidad es una preocupación crucial "...la identidad es, en muchos casos, forjada en y por la lucha..." (Calhoun, 1999: 79).

*Una mirada al proceso de organización indígena en Ecuador*²¹

Ya el Estado colonial apuesta por las comunas y los cabildos como formas de sujeción para los indios²². Durante la República, comunas y cabildos son retomados y regulados a partir de la Ley de Comunas²³. Si bien no fue aplicada inmediatamente resulta útil, sin em-

bargo, a partir de la década de los 50, cuando el Estado va clarificando las estrategias de integración y de control que busca aplicar con los indios.

La comuna es la forma de organización básica, sus dirigentes son escogidos entre los más ancianos de la comunidad o entre los miembros que hubieren desarrollado destrezas para interactuar con la sociedad dominante en los ámbitos local o nacional. El cabildo es su órgano oficial y representativo y subsiste a través de la contribución económica de los comuneros. La nueva presencia de los cabildos de indios, reactivada cuando se aplica la Ley de Comunas, permite que se prescindiera del teniente político, intermediario tradicional hasta entonces entre los indios y el Estado; este factor facilita el desarrollo del activismo indígena. Cabe mencionar como ejemplo a Cacha, provincia de Chimborazo, donde la organización en los cabildos otorga a los indígenas nuevas formas de presencia ante el Estado para exigir sus derechos, como en el caso del acceso al agua: organizados de esta forma, realizan sus demandas de manera oficial y acceden al recurso (Pallares, 2000: 289)²⁴.

En este mismo nivel básico de primer grado, se enmarcan las cooperativas y asociaciones de productores agrícolas que se crean desde la década de los 60 y toman fuerza entre los 70 y 80, a raíz de la emisión de las leyes de Reforma Agraria; hacia 1993 alcanzan un total de 2.912 en la Sierra (Zamosc, 1995: 48). Las cooperativas, de amplia aceptación entre los ideólogos militares desde la primera mitad del siglo XX, continúan siendo estimuladas por las FF. AA. y otros sectores interesados en la integración indígena. El segundo grado lo ocupan las asociaciones, grupos de comunas que se remiten al ámbito cantonal, y su dirigencia la mantiene un representante electo por los delegados de las comunas que integran esta asociación. En el ámbito provincial, la reunión de asociaciones conforman las federaciones y su directiva es el resultado de la elección entre los delegados de las asociaciones y las comunas²⁵. Las confederaciones tienen un alcance regional, y sus representantes se eligen por los miembros de las comunas, asociaciones y federaciones.

El movimiento indígena se materializa en un sinnúmero de organizaciones formales, compuestas básicamente por indígenas de una misma nacionalidad o pueblo. Sus formas organizativas, si bien no son las tradicionales, son asumidas por ellos como propias, en la medida

que les permiten una representación frente al Estado, a la sociedad nacional y frente a sí mismas. Todos sus líderes son indígenas y los cargos que ocupan no siempre corresponden a los tradicionales, las cualidades del liderazgo varían acorde con las necesidades de la organización. Logran una mayor estructuración en los ámbitos local, regional y nacional, lo que les permite mayor representatividad al superar el localismo en sus demandas (Cfr. Tcrn. N. Gudiño, 1991: 28).

Todas estas fórmulas asociativas se proyectan en el ámbito nacional a través de la confederación nacional. Se inscribe en esta instancia la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE-, creada en 1986. La integran la ECUARUNARI²⁶, en torno a la cual se hallan federadas las agrupaciones de la Sierra; la coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana -COICE- y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana²⁷ -CONFENIAE-. Este es el nivel de organización que ha articulado a los indígenas con la política nacional, ya sea con los trabajadores, aglutinados en el Frente Unitario de Trabajadores, o con el sistema político en su conjunto y los aparatos estatales (Chiriboga, 1987: 110).

En esos años, a medida que sus organizaciones se consolidan a partir de las propias iniciativas indígenas y con apoyos externos a la organización, los indios construyen una imagen de identidad cultural que se proyecta como unitaria y adoptan una posición solidaria en demanda de “justicia, respeto y valoración de sus comunidades y sociedades como consecuencia de la falta de tierra y de las pocas posibilidades de supervivencia” (Tcrn. F. Fiallo, 1992: 24).

A fines de los 70, las orientaciones del gobierno militar hacia el desarrollo agrario, así como su convicción en la vocación agrícola del país, provocan una mayor atención hacia el sector indígena por parte del Estado, hecho que produce una visión etnicista de su problemática desde estas asociaciones (Ibarra, A., 1987: 177). El proceso de consolidación identitaria de los indios como grupo se deja sentir cuando de a poco se asumen como indios y ya no como campesinos, con lo que se apartan de la visión de las élites que pretenden campesinizarlos (Chancoso, 2000). Durante los 80 se conforman las organizaciones regionales y nacionales y hacia los 90, su lucha deja de circunscribirse al tema meramente indígena y toma caracteres nacionales.

Las formas que toma el movimiento y que le atribuyen un carácter diferenciado son: la búsqueda de autonomía libre de mediadores externos y el haber dado a las reivindicaciones un carácter socioeconómico, cultural y político (Terni. N. Gudiño, 1991: 28). Todos estos factores, sumados a las acciones implementadas tradicionalmente por las FF. AA. como estrategias civilizatorias, a más de otros que se analizan en esta sección, fortalecen la capacidad de participación política de los indios, como grupo organizado alrededor de objetivos que les son privados y de otros con alcance nacional.

El rumbo expansivo del movimiento indígena registra cada vez mayores niveles de intensidad a través de la presencia de las propias comunidades indígenas que consiguen mayor autonomía y adquieren formas organizativas avaladas desde su posición de sujeto, una vez que han madurado su proceso de empoderamiento y ‘vuelan con alas propias’, con una identidad más definida y toman mayor conciencia de su funcionalidad con relación al resto de fuerzas políticas nacionales y sus demandas adquieren una dimensión nacional, que supera lo local.

Con la apertura de la oportunidad de voto a los analfabetos -entre quienes se encuentra para entonces la mayor parte del conglomerado indígena- reconocida en la reforma constitucional de 1978, auspiciada por los militares en el contexto de la transición a la democracia, se da el primer impulso a que los indios puedan elegir y ser elegidos para cargos públicos, ya nombran sus propias autoridades locales y en 1996, tercián en las elecciones nacionales con candidatos y partido propios: Pachkutik.

Las particularidades del caso de los indios amazónicos

En la Sierra, desde los años 20 del siglo pasado, el proceso de organización política de los indígenas responde a una visión de la realidad enmarcada en la lucha de clases, que basa su demanda en los derechos a la tierra y cuenta con el impulso de la izquierda, afincada especialmente en el agro serrano, a la que, años más tarde, se le unen una gama de activistas de distintas índoles y procedencias.

En la región amazónica, y con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Fomento Agropecuario, se intensifica la política de colonización, lo cual afecta a los habitantes de la región, factor que acelera su organicidad (Ibarra, A. 1987: 176). En la Amazonia, los shuar comien-

zan a organizarse desde la década de los 60 a instancias de la Iglesia Católica, con la congregación Salesiana; ocurre lo mismo con los sionas y secoyas y grupos pertenecientes a la nacionalidad kichwa que son apoyados por la comunidad josefina y el Instituto Lingüístico de Verano; entre los huaorani tiene injerencia la misión capuchina.

Desde finales de la década del setenta la presencia de colonos atropella, consciente o inconscientemente, los derechos de los pueblos indígenas amazónicos. En esta medida, los colonos también se insertan en la categoría de “peón semiótico” (Muratorio, 1994b), ya que son ellos quienes están en la zona amparados por un proyecto civilizatorio, impulsado por el Estado a través de sus FF. AA., que apunta a la ocupación de tierras consideradas como baldías y carentes de bases sociales, para defenderlas como propias frente a la amenaza peruana de invadir esos territorios. Las estrategias aplicadas se orientan, en su contenido más profundo, al poblamiento de las zonas amazónicas para garantizar la defensa de la frontera y la continuidad del Estado. Las nociones de ‘fronteras vivas’²⁸ y de reforma agraria y colonización, van en detrimento de las formas tradicionales de ocupación del espacio practicadas ancestralmente por los indios amazónicos.

En el caso de la frontera norte, si bien los colombianos no se priorizan en términos de seguridad para la época, la influencia de la población colombiana es vista como un peligro en lo que constituye entonces la provincia del Napo (ahora dividida en Orellana, Sucumbíos y Napo). En el caso de la frontera sur -Morona Santiago y Zamora Chinchipe- el proceso integracionista cuenta con el liderazgo de los militares en una relación de sinergia con los salesianos a quienes se les otorga parte de la potestad civilizatoria, a través del control de la educación y de la enseñanza agrícola, con los grupos amazónicos que se acogen a la conformación de fronteras vivas²⁹.

A partir de los años 70, con un fortalecimiento posterior durante el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), las compañías petroleras privadas sustituyen a ciertos sectores del Estado como agentes de civilización; estas empresas alivian las funciones de la institucionalidad estatal a través de la construcción de carreteras y conformación de poblados o con la dotación de servicios de salud y locales educativos. Las relaciones entre las comunidades indígenas asentadas en las zonas circundantes a los asentamientos petroleros³⁰ se realizan a través de negociaciones entre estos actores casi sin injerencia por parte del Estado. En

esas instancias se genera una relación clientelar en la que los indígenas y las petroleras llegan a determinados pactos a través de los cuales les es permitido operar en esos territorios. De esta forma, las organizaciones de base aceleran su proceso de empoderamiento al desarrollar su capacidad de negociación directa con otros actores a favor de sus intereses como grupo.

Como resultado, en contraste con las serranas, las organizaciones amazónicas emiten un discurso cuyo contenido tiende más a la defensa étnica que a una definición clasista, presionan por el respeto a sus derechos territoriales con jurisdicciones específicas, que se convierte en emblema político y punto central de la actual organización india en la región (Trujillo, 2001).

La respuesta indígena, un discurso de ‘doble faz’

Desde la versión testimonial con que se construye esta sistematización, la respuesta indígena a todos estos estímulos modernizadores aparece como si arrojara un saldo positivo dada la poca resistencia que ofrecen al modelo civilizatorio que se les impone. Vale como muestra que “entre 1964 y 1992 se constituyeron el 68% del total de 2.783 instituciones de base (comunidades, cooperativas y asociaciones)” (Guerreiro, 1995: 100). Sin embargo, se identifica que, a la larga, la organización cooperativista ha sido un “mero mecanismo de acceso a la tierra, pues luego se desintegra generando procesos de parcelación individual” (Tcrn. EM. F. Fiallo, 1992: 20).

Ante la consideración de que la alfabetización es esencial para la conformación de organizaciones de base, los indígenas amazónicos apoyan decididamente la iniciativa del gobierno de Hurtado, que propone la ejecución del Plan Nacional de Alfabetización en 1982 (Ibarra, 1987: 166). Entre 1970 y 1980 los indígenas dan muestras del cambio vivido, en lo que a su proceso educativo se refiere. Inducidos por los programas a los que se articulan, un importante número de ellos deja sus zona de habitación y sale a las ciudades para adquirir una formación superior, para luego volver a sus comunidades como maestros, abogados, médicos o enfermeras (Smith y Belote, 2000: 94). Muchos de ellos reciben apoyos de organismos nacionales e internacionales, como sucede con los otavaleños o los saraguros, en cuyo caso se enlazan directamente con el mercado mundial y adquieren otra dimensión desde lo global,

con mejores posiciones en sentido económico. Se configura así una segmentación social entre las distintas culturas indígenas, que en esa medida, no pueden ser vistas como conglomerados homogéneos.

El discurso de los indígenas frente a la acción de las petroleras, militares y distintas iglesias presenta una 'doble faz' pues, si bien acogen la educación, la religión, las formas organizativas y asistencialistas con las que se da tratamiento a su problemática, las critican *post factum*, por considerarlas negativas a su cultura ancestral y sus valores, como es el caso de los shuar frente a los salesianos (Crnl. M. Suárez, 1988). Desde esta perspectiva indígena, la presencia de los militares, la Iglesia y las petroleras les han sido impuestas. A los militares los declaran obstructores de la potencialidad de los poderes locales, muchos de ellos ocupados por indígenas ya a fines de siglo, y se consideran utilizados por ellos como justificativo para garantizar su pervivencia institucional al actuar en ámbitos que le corresponden a la sociedad civil (Cfr. Falconí, 1991: 85 y ss.)³¹. Protestan por los daños medioambientales provocados por la exploración y explotación del crudo y la presencia de capitales foráneos en zonas nacionales ocupadas por ellos ancestralmente³². Pese a lo que manifiestan, cuidan sus intereses frente a los de cualquier otra entidad que pudiera competir con ellos por fondos internacionales o por los recursos provenientes de las negociaciones con las empresas petroleras.

Los indígenas, sin embargo, no dudan cuando de recibir estos apoyos se trata, y más bien exigen otros relacionados con el reconocimiento y respeto de sus derechos: a una educación bilingüe, a sus territorios que les han sido enajenados por el proceso de colonización, a sus tradiciones culturales. Piden autonomía en el manejo de los recursos naturales de su suelo y marcan así la diferencia de ésta con el resto de élites políticas e indígenas. Al demandar un trato diferenciado generan fronteras étnicas con el resto de integrantes de la sociedad y reproducen formas de administración de poblaciones implementadas con antelación por las élites nacionales tras de las cuales subyace un carácter excluyente.

La respuesta indígena a la acción desarrollista de los militares

La ciudadanización de los jóvenes a través de su identificación con una misma idea de Patria/Nación en el Servicio Militar Obligato-

rio, tarea privativa de las FF.AA., potencia las capacidades de quienes ya han pasado por procesos civilizatorios y se dota de estos instrumentos a quienes no los han adquirido aún, con especial atención hacia los analfabetos. Durante las épocas que abarca este análisis, el SMO enfatiza en la población del campo, cuando “la conscripción era sólo para los de poncho” (Gral. H. Berrazueta, entrevista de noviembre de 2003)³³, hecho que se demuestra en el discurso militar, y la orientación de las tareas atinentes a la producción agraria a las que se dedican los conscriptos, particularmente de los de raíz indígena-campesina.

Existen épocas, previas a la década del 60, en que los jóvenes indígenas y campesinos se resisten a cumplir con el SMO y son ‘llevados a la fuerza’ por los soldados. Aprovechan los días de feria (domingos), cuando los habitantes rurales de los anejos circundantes bajan a las zonas pobladas, y se los recluta sin previo aviso. Como resultado, “la gente le tenía aversión al cuartel, no quería entrar en forma voluntaria” (Gral. Homero Berrazueta, entrevista de noviembre, 2003). La agresividad que mantienen estos métodos y aquellos que para entonces se aplican en los cuarteles, provoca el rechazo de los jóvenes indígenas al SMO; el trato que allí reciben está revestido de crueldad y dureza en el entrenamiento y se los denigra por su condición étnica, son considerados ‘rudos’ para los aprendizajes. La rutina militar les provoca problemas, uno de ellos es el baño diario y la dificultad, y hasta imposibilidad, para adoptar la nueva psicomotricidad del entrenamiento militar (voz, movimientos), lo que convierte al SMO en una experiencia poco apetecida por los jóvenes indígenas³⁴.

El nuevo discurso que hacia lo indio se evidencia hacia la década del 60 de parte de las élites en general, incluidas las militares, va acompañado de un cierto cambio de actitud en el cuartel hacia los indios, se les permite a los conscriptos indígenas llevar el *huango* (el cabello largo y recogido), ya no se les obliga a cortarse el cabello y se separa de sus funciones a los instructores que aplican métodos violentos (Gral. J. Gallardo, entrevista de noviembre de 2003).

[...] a los que conservan el *huango*, es prohibido cortárselo [...] en el pasado, cuando les cortaban el *huango*, ellos se resentían y se sentían humillados (Gral J. Gallardo, entrevista de noviembre, 2003).

Hay una toma de conciencia desde las cúpulas militares en cuanto a que es más importante tener conscriptos, sin importar su

adscripción étnica y que existen diferencias que no son necesariamente infranqueables. Por otro lado, el cuartel debe aportarles una posibilidad de ciudadanía, por lo que se opta por una institución más asequible a la presencia del Otro, sin cuestionar las características que lo distinguen. Los militares, a partir de sus acciones a favor del desarrollo, proyectan una noción de mestizaje entendida como multiculturalismo que finalmente acata la diversidad y la integra en su imaginario nacional ya no como elemento disruptor, en la medida que pase por procesos de blanqueamiento -“buenas costumbres”-, como medio de ciudadanía, es decir insertos en su esquema moderno (Selmeski, 2002: 7).

El SMO, experiencia de carácter continuo que atrae al mundo indígena con altibajos coyunturales en cuanto a su intensidad, es acogido por los indígenas porque les confiere otro estatus en su entorno social. Selmeski (2002) anota que “la naturaleza transformadora de la conscripción es aceptada no sólo por los oficiales de las FF. AA. sino también por muchos jóvenes y sus seres queridos, quienes valoran los distintos aspectos del capital cultural que confiere una buena formación”(Selmeski, 2001: 2)³⁵. En todo caso, la respuesta indígena no es siempre la que espera la cúpula militar. Con las estrategias civilizatorias que se aplican se busca que los indígenas permanezcan en el campo; sin embargo, una vez alfabetizados y con cierta preparación, los ex conscriptos migran a la ciudad, pues se los ha dotado de algunos instrumentos para tomar esta decisión.

Siempre se buscó que los jóvenes regresen a sus sitios de origen. Incluso la CAME designaba un sitio en la frontera veían que se cubra con esta juventud militar las fronteras de la Patria. Entonces la idea era que los jóvenes vuelvan a su tierra; sin embargo, cuando venían al SMO, los jóvenes indígenas veían otras oportunidades y se quedaban en las ciudades (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003).

Partes del proceso del SMO se vuelven atractivas para los jóvenes indígenas, quienes llegan con el interés de reproducir con sus propias vidas el comportamiento masculino-céntrico de los héroes de cine y televisión, o que les puede dotar de habilidades para trabajar como guardia de seguridad, policía o soldado profesional (Selmeski, 2001: 2), todo ello deja entrever que los intereses civilizatorios de los no indios no reciben la respuesta a que aspiran de los indios, sino que es catalizada

de acuerdo a sus intereses que difieren de los de sus gestores, en cierta medida.

Una respuesta negociada y con acuerdos previos

Al parecer de uno de los militares, los indios “tratan de trabajar, de acercarse a la sociedad blanco-mestiza [...] tratan de aprender el idioma español [...] con este propósito” (Cfr. Falconí, 1991: 68), y las obras que las FF. AA. realizan entre las comunidades son realizadas a pedido de las organizaciones y con su beneplácito (Trn. L. Burbano, 1991: 49). Las demandas de los indígenas tienen que ver con la asistencia técnica, maquinaria, sistemas de riego, crédito (Cfr. Falconí, 1991: 69). Y, efectivamente, ello no difiere del discurso militar y/o desarrollista, lo que la dirigencia sostiene es que se le permita mantener la autonomía sobre la distribución de esos derechos, sin que se la direccionen desde arriba, como lo han hecho los militares, porque ellos lo que buscan es debilitar el nivel de organización que se expresa con fuerza con el levantamiento de los 90 (Dirigente indígena de Guamote. Cfr. Falconí, 1991: 92). Si bien demandan autonomía y ser ellos los conductores de sus procesos, aspiran a aplicar por sí mismos, idénticas estrategias implementadas ya por los militares en sus comunidades, o por otras entidades de desarrollo.

Las agrupaciones *Arutam* que se conforman para participar con las FF. AA. en la coyuntura de la guerra del Cenepa³⁶ y se integran por pelotones de soldados shuar en su mayoría, gestionan su conformación como organización jurídica adscrita al Ministerio de Bienestar Social y aspiran a trabajar en beneficio de sus comunidades mediante programas que se inscriben en el enfoque del desarrollo comunitario (Fiallos, A. 1997: 80), en el que se fundamentan los proyectos desarrollistas implementados por los no indios, que se caracterizan por su influencia homogeneizante.

La dirigencia india no desconoce los méritos militares, más bien se muestra respetuosa de ellos, pero está dispuesta a negociar directamente con los representantes de las FF. AA. en cuanto a su ingerencia en las decisiones de las comunidades, porque saben que son los militares quienes manejan el poder real sin importar quién ocupe el gobierno central (Dirigente de la CONAIE. Cfr. Falconí, 1991: 88). En la última década del siglo XX, los indios ya se expresan con un discurso que

los iguala con sus interlocutores en la arena política, la dirigencia cuestiona las formas “militarizantes” de tratar el tema educativo en las escuelas que sostienen las FF. AA., que influyen ideológicamente entre las comunidades; interpretan la presencia simbólica de las “enormes banderas de los militares” en las escuelas que les dan aspecto más bien cuartelario y cómo detrás de su aparente apoliticidad, eficiencia y cumplimiento de ofertas existen penetración y trabajo ideológico que responden a intereses ajenos a las necesidades de los indígenas (Dirigente indígena de Guamoto. Cfr. Falconí, 1991: 92).

Como recurso performativo, en esa misma línea, los pueblos amazónicos de Pastaza, miembros la OPIP, exigen la desmilitarización de sus zonas de habitación, en la movilización que protagonizan en 1992. Se critican los desfiles con banda de guerra y toda la parafernalia simbólica con la que los militares decoran las festividades locales para dar muestras de su presencia. Sin embargo, el discurso politizado de los dirigentes no se generaliza en toda la comunidad, y ellos no dejan de reconocer que “ciertas comunidades indígenas admiten a los militares” (Dirigente de la CONAIE. Cfr. Falconí, 1991).

Un contexto internacional que favorece al nuevo posicionamiento de las élites indígenas

Además de todos los factores que se han analizado a lo largo del presente trabajo como elementos que inciden en su proceso de politización, los indios se acogen a regulaciones internacionales que afianzan la organización indígena de carácter étnico: Ecuador suscribe el Convenio 169 de la OIT, por medio del cual sus gobiernos se comprometen a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a su integridad. A promover la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos; a respetar su identidad social y cultural, costumbres, tradiciones e instituciones.

Este Convenio señala a los pueblos indígenas el derecho a decidir sus prioridades en cuanto a su proceso de desarrollo, y por lo tanto a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo que les afecten directamente. Los gobiernos se comprometen también a tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios en que habitan.

Se reconoce a los pueblos indígenas y tribales el derecho a la propiedad y posesión sobre las tierras que han ocupado tradicionalmente y se salvaguarda su derecho a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido acceso tradicionalmente para sus actividades de subsistencia (www.prodiversitas.bioetica.org/doc8.htm).

Cumplen con un rol de empoderamiento, favorable a la organización étnica, los discursos que emanan en el ámbito global y local por las posiciones de rechazo –o a favor– por los 500 años de llegada de los conquistadores europeos al continente americano, eventos que movilizan a sectores de indígenas y no indígenas en los ámbitos nacional e internacional. La situación de subordinación y explotación a lo largo de 5 centurias, se convierte en una de las fortalezas de los indígenas como actores y movimiento político una vez que fuera sancionada y reconocida positivamente por el sistema internacional, lo cual legitima sus demandas políticas y reivindicaciones sociales dentro de sus respectivos países, como a partir de la asistencia y apoyo de organismos internacionales. Estas fuerzas buscan acelerar el proceso civilizatorio de los indios por la exclusión de la que son objeto para que superen la situación de pobreza que limita sus posibilidades de inserción real en el sistema global.

En 1998, en los umbrales del siglo XXI, en una nueva Carta Constitucional, se reconoce el carácter pluricultural y multiétnico del Ecuador. Los indios logran, además, la aceptación de fórmulas para canalizar los recursos tanto nacionales como internacionales para el desarrollo de las nacionalidades indígenas (De la Torre, 2003: 64). Factores en los que dan muestras del avance que logran a fines del milenio.

Algunos hitos del movimiento indígena

1964	Conformación de la Federación de Centros Shuar
1973	Fundación de la organización Runacunacap Riccharimui ECUARUNARI, primera organización indígena con carácter nacional.
1974	Fundación del Movimiento Indígena del Chimborazo –MICH–
1978	Concesión del derecho de voto y de acceder a cargos de elección popular a los analfabetos, indígenas muchos de ellos.
1981	Fundación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana -CONFENIAE-
1986	Fundación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE-
1990	Primer levantamiento, en demanda de legalización de tierras. Participan indios de todas las provincias.
1992	500 años de la llegada de los españoles son conmemorados por indígenas como “medio milenio de opresión”.
1992	Levantamiento de la OPIP.
1994	Gobierno de Durán-Ballén intenta instaurar nueva Ley de Reforma Agraria, perjudicial para los indígenas. Después de un levantamiento consiguen instalarse en la mesa de discusión con el gobierno.
1996	Se funda Pachakutik, brazo político de la CONAIE, indios participan en elecciones nacionales con candidatos propios.
1997	Indios inician levantamiento nacional por situación económica del país y en protesta por actos de corrupción del gobierno de Bucaram que desemboca en la caída del régimen.
1998	Se emite nueva Carta Constitucional que declara al Estado ecuatoriano “pluricultural” y “multiétnico”.
2000	Luego de levantamiento nacional la alianza entre indios y militares derroca a presidente Mahuad; forman gobierno de “salvación nacional”; ocupan por tres horas la presidencia de la República.
2001	Nuevo levantamiento en demanda de derogatoria de medidas económicas anunciadas por gobierno de Noboa.
2002	Alianza Sociedad Patriótica 21 de Enero y Pachakutik triunfa en contienda electoral para presidencia de la República.
2003	Se rompe alianza PSP-Pachakutik. Indios pasan a la oposición del gobierno de Gutiérrez.

Fuente: Diario El Comercio. Sábado 17 de noviembre de 2001 (la información original se ha adaptado a los cambios suscitados hasta el 2003).

Lo que se resume en el cuadro anterior es el colofón de un proceso de 80 años que se acelera desde la década de los 90 y se cataliza con la participación de los indios en la política formal, pues deja ver las fortalezas y debilidades de este actor. El proceso de inserción del movimiento indígena en la escena política se desarrolla en torno a una lógica organizativa con caracteres particulares, que toma forma en momentos en los que desde el Estado y desde otras instancias de la sociedad, tanto civiles como militares, se aplican estrategias civilizatorias, con mayor intensidad dirigidas a este actor y que van orientadas a la re-colonización del agro.

Los repertorios de la protesta indígena

Los últimos diez años del siglo XX están signados por una fuerte presencia indígena en la escena pública, que es utilizada por los indios para conseguir reivindicaciones, una vez que su proceso organizativo alcanza mayores niveles de cohesión. En líneas posteriores se analizan los repertorios de la protesta.

El primer levantamiento: junio de 1990

La década de los 90 se inicia con la fuerza de la presencia indígena como grupo organizado desde un punto de vista étnico con fines políticos alrededor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Su capacidad de convocatoria se demuestra en junio de ese año, cuando paralizan durante tres días al país. El levantamiento del “Intiraymi” aglutina aproximadamente a “un millón de manifestantes” (Crn. EM. N Gudiño, 1991: 33)³⁷, a los que se juntan las organizaciones populares urbanas. Desde una lectura más distante, se puede afirmar que la masa humana que participa en el evento logra poner en situación de alerta al alto mando militar y a la Policía, por el efecto que logra la toma de la iglesia de Santo Domingo, lo que pone en la mira de las organizaciones humanitarias del Ecuador y del mundo, en torno al desenlace que puede tomar este desafío al poder constituido.

Este levantamiento constituye el primer signo de eclosión del movimiento indígena como agente político organizado. En respuesta se instalan mesas de diálogo entre gobierno e indígenas, hecho sin pre-

cedente en la historia ecuatoriana. Las motivaciones de esta acción de protesta, radican entre otras reivindicaciones, en la entrega de tierras y un mejor funcionamiento del IERAC, así como la condonación de las deudas con el Estado³⁸. Recibe apoyo de las organizaciones de Derechos Humanos y de los integrantes de un ala la Iglesia Católica que se adhieren a la opción por los pobres.

El factor sorpresa como efecto que confieren los medios de comunicación a la toma de la iglesia de Santo Domingo, se convierte en ficha del movimiento indígena para despertar la atención nacional e internacional de manera inesperada, y se evidencia en los comentarios no oficiales que en ese momento se profieren desde la esfera mediática (Endara, 1998). La Revista Vistazo, auspiciada por las élites guayaquileñas, da mayor espacio en sus opiniones a los indígenas y los hace aparecer desde entonces, como un actor más, aunque no deja de lado un tono de asombro y respeto por la capacidad cuestionadora que dejan entrever estos actores políticos, sin que ello quiera decir que no se imponga la distancia del caso frente al Otro, con un discurso que no puede dejar de lado su exclusión fenotípica y el temor por la violencia que los ‘indios resentidos’ pudieran imprimir a sus acciones de protesta (Ortiz, 2001b).

La generalidad de los analistas, los de izquierda, en acto revolucionario, y los de derecha, como una expresión coyuntural, no dimensiona la participación y propuestas indígenas, pues sus perspectivas se hallan atravesadas por sentimientos de culpa ante la subordinación centenaria del indio genérico sin considerar la complejidad del proceso y la heterogeneidad de los actores indígenas, con lo cual se idealiza al actor indio de manera desmesurada y se pone en juego un efecto performativo sobre el poder del movimiento indígena y sobre las habilidades de acción e intención política. Tanto los medios de difusión nacional, como las opiniones de los políticos y de los militares dan muestras de que su paranoia sobredimensiona las amenazas por principio, en tal virtud potencian las capacidades de los indios.

Desde el punto de vista de un militar, este levantamiento toma por sorpresa tanto a las fuerzas del orden como a la propia dirigencia indígena, “Ni el gobierno ni la propia CONAIE se imaginaban que la respuesta indígena sería tan generalizada en el centro de la Sierra” (Tcrn. N. Gudiño, 1991: 46). Este evento inquieta a los militares como lo muestra la abundante producción escrita sobre el tema que provoca

en el medio, sobre todo por la posición radical de los ‘indios alzados’ que cuestiona al Estado nacional. Se despiertan también interpretaciones que justifican la actitud indígena por la situación de abandono en que ha vivido el sector, factor que es visto como detonante natural del acto de protesta.

Según se verifica en los medios de difusión militar y los trabajos monográficos de los cursantes del IAEN, el revuelo que se produce al interior de la institución se expresa en el contenido de la literatura que hace referencia a los hechos de aquella coyuntura, con manifestaciones a favor y en contra, y expresiones de temor ante la arremetida de esta amenaza al orden establecido, especialmente en lo que tiene que ver con su imaginario de la Nación unitaria que puede verse vulnerado ante la apelación de los indios al reconocimiento de sus ‘nacionalidades’.

Desde el análisis de un miembro de las FF. AA., que describe los hechos, los planteamientos de los indígenas organizados se concentran en el “Mandato por la defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades”³⁹. Las provincias de mayor presencia son Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar y Loja. Esta opinión reconoce que esta acción constituye un llamado de atención a la falta de preocupación desde el Estado hacia las necesidades tanto del sector como, en general, de la población más vulnerable ante la crisis. Sus protestas tienen sentido, en la medida que reclaman complementariamente por la destrucción de la naturaleza que provoca la explotación petrolera. Es además, una denuncia contra los políticos, cuyos planes sociales no superan el mero discurso con fines electorales, y que luego no se cumplen (Tcrn. F. Fiallo, 1992: 35). Plantea que el levantamiento estuvo influenciado por dos fuerzas: una, que reivindica los derechos de los indígenas y su organización, y otra que expresa su descontento, rebeldía y malestar frente al gobierno y la sociedad, vistos como los causantes y cómplices de la situación marginal de ellos y de la gran mayoría de ecuatorianos (Tcrn. F. Fiallo, 1992: 31).

Desde la particular perspectiva militar que contiene el párrafo precedente, más bien se adopta al indio como peón semiótico frente a los políticos, y no se toma en cuenta que uno de los puntos nodales de este levantamiento radica en el reconocimiento de la diferencia que demandan los indígenas. Prima la idea de la nación unitaria, de allí que se pretenda minimizar su contenido étnico y reducirlo a una protesta por reivindicaciones económicas de parte de los indios. Así, si bien sus

protagonistas tuvieron una “expresión étnica, una dirigencia étnica y un comportamiento étnico, fue ante todo una movilización de pobres rurales” (Tcrn. N. Gudiño, 1991: 50).

Este levantamiento se prolonga demasiado, lo cual desde la óptica militar y de aquellos funcionarios civiles que participan en las negociaciones, amenaza con descomponer el orden político, factor que, desde esa perspectiva, altera el curso regular del ‘frente interno’ que se ve alterado por efectos de un movimiento con características regionalistas, y con un contenido de corte cesecionista que amenaza la existencia del Estado, principio y razón de ser de FF. AA. El 4 de junio, día más crítico de este evento, los indígenas de Chimborazo toman por rehenes a 14 policías y 16 militares. En torno al tema surgen una serie de opiniones entre los militares, que evidencian su afán por aparecer como mediadores en el conflicto, cuando resaltan la actitud mesurada con la que las FF. AA. manejan el problema.

Los indígenas emboscaron y capturaron a un grupo de militares y policías [...] dijimos, si los indígenas tienen estos problemas y reclaman, se han levantado porque no se atienden sus necesidades, es el grupo de los pobres más pobres, hay que ayudarlos, y comenzamos a trabajar en esa línea (Gral. José Gallardo, entrevista de noviembre de 2003).

Desde este punto de vista, las fuerzas del orden optan por una estrategia preventiva, para evitar una respuesta violenta, y establecen alianzas con el gobierno y la Iglesia; se presentan alternativas de diálogo con la dirigencia india. Flota en el ambiente, sin embargo, la posibilidad, no del todo descartada, de utilizar la violencia legítima, pese a que finalmente prime una posición conciliadora:

La primera reacción fue la de rechazar la ofensa, pero luego reflexionamos, yo era jefe de operaciones del Ejército y por tanto, responsable de estos asuntos [...] conversamos entre nosotros y llegamos a la conclusión de que los indígenas tenían muchos motivos de queja contra el sistema, contra el ‘establishment’ y que lo mejor era conversar, valiéndonos de autoridades del mismo gobierno y representantes de la Iglesia con Mons. Corral, y los indígenas entregaron a los rehenes en tres días, no les habían hecho ningún daño...(Gral J. Gallardo, entrevista de noviembre de 2003).

Pese a que la versión de Gallardo no lo mencione, no debe perderse de vista la participación en estos hechos del Gral. Carlomagno

Andrade, como se especifica en páginas anteriores, quien media efectivamente con los indios. Andrade consigue acercárseles positivamente, ya con anterioridad a los eventos de esa coyuntura, por la buena relación que establece con ellos a partir de su trabajo a favor del desarrollo. Desde la posición que ocupa como Comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, su conocimiento de la coyuntura le permite sugerir al gobierno de Borja sobre la forma de actuar ante la reacción de los indios, que se traduce en una respuesta preventiva con la entrega de tierras bajo determinadas condiciones.

Uno de los logros de los indígenas con el levantamiento radica en la firma en Curaray, el 5 de agosto de ese mismo año, de un acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos kichwa oriental, shiwiar y ashuar, entre cuyos puntos principales se identifican, a más de la delimitación de territorios, “la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas que debe estar vigente en el Estado, más aún si éste se declara pluricultural y multiétnico [...] implica autogobierno de los pueblos indios en sus territorios y la plena vigencia de su derecho tradicional [...]” (Tcrn. F. Fiallo, 1992: 49).

Desde un punto de vista que es generalizado entre las FF. AA., y que se difunde entre las élites, esta posición indígena resulta peligrosa, porque conlleva la supresión del régimen vigente de administración interior, que divide al país en parroquias, cantones y provincias. La respuesta desde el Ejecutivo pone énfasis en la inconstitucionalidad de este pedido que atenta sobre una visión generalizada en torno a la pervivencia del Estado nacional unitario pero que a su vez resulta contradictoria con el discurso de Borja en el poder.

La marcha indígena de 1992

La Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza -OPIP-, realiza una marcha en petición de “la entrega de territorios, la desmilitarización de la zona fronteriza y el reconocimiento de las nacionalidades indígenas” (Tcrn. F. Fiallo, 1992: 38). En este evento de 13 días de duración, cuatro mil indígenas llegan desde Puyo a Quito con el interés de tomar contacto con el presidente Rodrigo Borja, para presentarle sus peticiones. En respuesta, y luego de los diálogos del caso, el gobierno entrega 1'115.174 hectáreas a las comunidades con la aclaración de que se trata de tierras y no de territorialidad, sin que ello quiera decir

que alguna organización fuese la receptora de tal entrega, sino que se la hace, de manera directa a los pueblos y comunidades, sin que se viesan afectadas las zonas de ocupación de colonos de la provincia de Pastaza (Tcrn. F. Fiallo, 1992).

A decir de uno de los miembros de las FF. AA. (Tcn. F. Fiallo, 1992: 73), la institución se ubica al margen de estos acontecimientos, dado el tinte pacífico que caracteriza a esta movilización. Su preocupación radica en el pedido de los indígenas de desmilitarizar la zona de frontera, por el riesgo que ello implica para la protección de la soberanía territorial del país. Sin embargo, ello no obsta para que, como en cualquier situación de enfrentamiento inminente –léase de guerra– los militares mantuvieran una posición de alerta.

El levantamiento de 1994

En junio del 94, bajo la administración de Durán-Ballén, un nuevo levantamiento indígena nacional convocado por la CONAIE se produce en rechazo al Proyecto de Ley de Desarrollo Agrario que altera la reforma agraria e impide la división de las grandes propiedades (Guerrero, 1995: 89-90). En esa oportunidad, y como estrategia de cooptación de los protagonistas de la protesta, los militares negocian con los líderes del movimiento indígena el incremento del número de indios que asisten al SMO y la actualización de los registros administrativos de la conscripción (Selmeski, 2002: 4). Cabe resaltar que ya no se trata de negociaciones sueltas sino que se dan entre los representantes del Estado con la dirigencia de los indios, lo cual expresa el sesgo que toman los hechos cuando los indios dan muestras de sus avances en el campo de la representatividad y que se dan en torno a un discurso que involucra una actitud de manejo político más afinado.

La protesta indígena no consigue cambiar la Ley en lo substancial; sin embargo, logra imponer que los representantes gubernamentales interactúen con ellos una vez más, después del levantamiento de 1990, acción de contenido simbólico que materializa la redistribución de fuerzas en el escenario del poder y el quiebre del imaginario nacional mantenido hasta entonces, del cual los militares constituyen factor potenciador y a la vez limitante de las capacidades de organización india.

Con una presencia activa, los indios continúan su proceso de consolidación organizativa. En esta misma década se registran los levantamientos de 1997, cuando resultan agentes de peso en la caída de Bucaram (como se observó en páginas anteriores) y otro en 1999. Al inicio del nuevo milenio, el 21 de enero de 2000, cuando se da la alianza entre indios y militares y derrocan al gobierno de Mahuad, se habla ya de los indios como actores con “capacidad de establecer nuevas reglas de juego en el sistema tradicional que ha conminado la conducción del estado y de la sociedad ecuatoriana” (Rivera, 2001: 206). Se trata de una presencia que se delimita en la arena política con las alianzas coyunturales que consiguen como estrategias de intervención. En todo caso, como se busca demostrar en el presente trabajo, durante estos tres momentos de fines e inicios de siglo la actuación de los indios está mediada por los militares, actores políticos con los que los indios negocian y pactan; y, dejan ver, más bien, que por la simpatía que despierta el movimiento indígena se invisibiliza el poder real de los militares, que en cambio, sí es reconocido y utilizado por los indios.

El indio que imaginan los indios

Las ‘nacionalidades’ de los indios y la ‘Nación’ de los militares

A la luz de los hechos y de los años transcurridos, se aprecia que la discusión en torno a “lo nacional” de los militares y a “las nacionalidades” de los indígenas no son temas antagónicos, como se sospecha entre los militares a inicios de los 90, al contrario, resultan complementarios. Para la dirigencia indígena, sus intenciones son distorsionadas cuando su propuesta se interpreta como separatista, en la medida en que “de ninguna manera” aspiran a la formación de estados paralelos (Dirigente de la CONAIE. Cfr. Falconí, 1991). Hablar de nacionalidades para los indios no implica separatismo ni fragmentación nacional; el término apela más bien a la organización comunitaria y se trata, al contrario de lo que proyecta la idea del separatismo, de una integración participativa. Para ellos la nacionalidad, representada en cada uno de sus pueblos, está dada por las relaciones de parentesco, de afinidad, vecindad y control territorial que comparten, lo que no les impide ser parte de un mismo contexto nacional, en sentido moderno. Desde la perspectiva de la CONAIE las nacionalidades son “categorías que en-

globan todas las particularidades de los grupos indígenas” (Ibarra, 1987: 166).

Desde esta mirada, no obsta que las nacionalidades se hallen juntas en una sola nación. Tal concepción más bien halla coincidencia con la que se proyecta desde el pensamiento militar, cuando se afirma que: “debe darse un proceso de integración del aborigen a la sociedad ecuatoriana, en la que debe ser un elemento participativo y activo” (Trcn. EM. L. Burbano, 1991: 3); es decir que este indio se imagina a sí mismo como funcional al proyecto nacional. No cuestiona el principio de la fusión del soldado moderno con la colectividad sino que lo potencia. El reconocimiento de la plurinacionalidad, que exigen en este contexto, significa “una real participación en términos políticos dentro de esta sociedad, en aras de un real espacio democrático, una democracia amplia, participativa y real” (Dirigente de la CONAIE. Cfr. Falconí 1991: 87). En otras palabras, los indios sí desean integrarse.

Su propuesta, en este sentido, no resulta atentatoria contra el *statu quo*, como lo interpretan los militares de inicios de los 90, ésta apela -igual que la de ellos- a la constitución del Estado moderno que, según el punto de vista indio, debe tender al reconocimiento de la “territorialidad y la autodeterminación de los pueblos”. El temor de los militares, según lo catalizan los indios, radica en la vulneración que pueda darse a la integridad territorial, una vez que la Nación que imaginan está adscrita a un territorio.

La autonomía a la que hacen referencia los indios se relaciona con el autocontrol de sus procesos de desarrollo, para obviar la injerencia estatal a través de los militares, de la que han sido objeto tradicionalmente, tanto por sus condiciones que resultan arcaicas en el imaginario societal de los militares, como porque se hallan asentados en zonas de alto riesgo para la soberanía territorial de la Nación. Los indios, en esta medida, rechazan el patrimonialismo que ejercen los militares sobre las comunidades indígenas a fin de configurar su proyecto nacional y por ello frente a las FF. AA. buscan:

[...] limitar la intromisión de las FF. AA., y buscar las propias alternativas que surjan desde la propia organización [...] los mismos indígenas han demostrado que en cierta forma existe un autogobierno [...] una cierta autonomía territorial [...] se consolidarían más esos principios y se permitiría el desarrollo, sin que eso signifique la separación de los nuevos estados [...] (Dirigente de la CONAIE. Cfr. Falconí, 1991: 90).

Los indios reinterpretan a su favor el discurso de Borja sobre la plurinacionalidad, a través de sus repertorios de protesta presionan a las élites en el poder para que el de Borja no fuese un discurso vacío y validar su propuesta desde el ‘enfoque de derechos’. Demandan el reconocimiento de su presencia como pueblos iguales pero diferentes. El reconocimiento de la plurinacionalidad en la Constitución, desde el punto de vista indígena, les permitiría legalizar sus demandas.

En los 90, los militares intensifican sus estrategias integracionistas y dan continuidad al uso de fórmulas preventivas que reproducen las del contexto de la Guerra Fría, con la ‘guerra de baja intensidad’ y con formas de cooptación a la salida política de los indios. Hacen uso de todos los recursos que tienen a su alcance creados por ellos mismos, y como resultado, se amplían las posibilidades de inserción de los indios en la sociedad dominante (o sociedad nacional).

Hacia 1993, indios y militares realizan el que fuera calificado por la Revista de las FF. AA. como un “encuentro histórico”, cuya finalidad es la de “buscar juntos las soluciones a los problemas que aquejan a la población campesina e indígena” (Ministerio de Defensa Nacional, 1993: 70), cuando se suscribe un convenio con la organización indígena y la ESPE, que entrega becas a los indios para que acudan a ese centro de educación superior de regencia militar. Una vez más, la negociación se da entre la dirigencia indígena y los representantes de las FF. AA. En su alocución, el portavoz de los indios expresa la importancia que este encuentro tiene para ellos, una vez que “el pueblo uniformado y el pueblo indígena trabajan conjuntamente por el desarrollo de las organizaciones indígenas” (Ministerio de Defensa Nacional, 1993: 71).

Allí se muestran los sesgos políticos que ya adquiere para entonces el discurso indio en el que no se habla de las comunidades, ni de los pueblos o nacionalidades, sino de las “organizaciones” y que su salvaguarda implica un trabajo conjunto entre los pueblos indios y los militares; en este contexto también las FF. AA. son igualadas como “el pueblo”. Esta concepción no se divorcia del imaginario nacional de los militares, sino todo lo contrario, mantiene el mismo contenido, en el sentido de la fusión del soldado moderno con la colectividad en defensa de una misma Patria, que se capta como un trabajo conjunto.

La nueva presencia de los soldados indios en el frente de defensa de una misma Patria

A raíz de la guerra de Paquisha (1981), los cuarteles abren sus puertas a los indígenas para que se enrolen voluntariamente en el Ejército, ya no como reclutas sino con la gradación regular. Los shuar en especial, acuden al llamado una vez que los espacios en que habitan se ubican justamente en la zona de conflicto. En la guerra del 41 sus comunidades se escinden entre las que quedaron en territorio ecuatoriano y las que pasan a territorio peruano, lo que muestra la existencia de intereses comunes determinados por el factor suelo entre los indios y el resto de ecuatorianos, y legítima con mayor razón la participación de los indios en la defensa de su soberanía territorial.

Al invitarlos a compartir el frente de batalla, la mayor de sus responsabilidades, los militares validan el paso de los indios por un el proceso que les permite defender una misma Patria, lo que equivale a compartir una misma adscripción nacional definida como ecuatoriana. Los indios también se sienten parte de la misma Patria a la que están dispuestos a defender, pero no desde una visión ‘patriótica’, sino porque en esa actitud se garantizan la seguridad en sus tierras de habitación.

La integración indígena por la vía política con los militares

Ante los acontecimientos del 21 de enero de 2000, esta relación “de larga data” entre indios y militares -expresa un militar- se revela como una “alianza histórica; los indígenas veían que a los únicos que podían volver los ojos era a la fuerza militar” (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre de 2003), y compara esta actitud con la que tienen los indios frente a los militares cuando acuden a los destacamentos para cubrir sus necesidades básicas ante el abandono del que son objeto ya sea en la selva o en el páramo. Lo que equivale a interpretarla como una relación clientelar y de dependencia, que es la que determina la posterior alianza entre indios y militares con fines políticos.

Para Haro, la falta de acuerdos con los partidos políticos en pos de pactos, lleva a los indios a reconocer que sus aliados de siempre han sido las FF. AA. y empiezan a haber aproximaciones. Este acercamiento de los indios no es unilateral, la iniciativa indígena “encuentra respuesta en el coronel Gutiérrez y en varios oficiales que permitieron que se

dé el 21 de enero” (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre de 2003). Los programas de apoyo al desarrollo siguen esta relación, “que también despierta el interés militar después del 21 de enero, por una aproximación política a los movimientos indígenas”.

De esta manera, mantiene Haro, ello explica el contenido político de la alianza 3-18, cuando los indios se lanzan a la lucha por el poder desde el plano democrático, en las elecciones del 2002 lo hacen junto con los militares porque creen que con ellos garantizarían su acceso a esta esfera. No debe perderse de vista, en todo caso, que en el año 2002 quienes se juntan en alianza con los indios con fines electorales son militares sin poder real dentro del orgánico funcional de las FF. AA., una vez que fueran separados de sus cargos tras la asonada del 21 de enero. Aquí entra en discusión otro tema que tiene relación con la imagen ambigua que proyectan los militares sobre sí mismos, pese a estar retirados de las filas, ellos siguen sintiéndose dentro, y pese a integrar una institución apolítica por antonomasia ésta tiene una participación activa y definitoria en política.

Los indios en general, no se resisten explícitamente al proceso civilizatorio, ellos también están interesados en hacer efectivo el discurso de la ciudadanización. Las formas de resistencia se reflejan más bien en la respuesta; los indios acogen lo que les resulta beneficioso, y rechazan lo que no les es favorable a la construcción de su propio proyecto que se va gestando paralelamente a partir de todas las estrategias de las que son objeto, pero con formas propias que no responden necesariamente a las de sus gestores, sin que sean contradictorias.

El sistema clientelar y patrimonialista que caracteriza al Ecuador, implica una relación de doble vía: la presencia de un Estado que ejerce la conducción sobre sus asociados y una sociedad que interactúa con esas reglas del juego. En el proceso que se observa con los indios en Ecuador esa interacción toma una forma determinada sin más alternativas de ciudadanización, lo cual varía a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando el avance del proceso de construcción identitaria de los indios determina el rumbo de su integración, no como actores pasivos, sino con espacios de decisión política entre las élites de poder.

Si durante la Colonia, en una lógica de Antiguo Régimen propia del momento en el que operan, las Leyes de Indias legislan con una base diferenciada para los americanos (indios en su mayoría) con respecto a los peninsulares; en un contexto hartamente posterior, la segunda mitad

del siglo XX y en pleno régimen desarrollista que maneja un discurso homogeneizador como proyecto societal, las estrategias de integración del indio a través del desarrollo agrícola, legislan de forma igualmente diferenciada. Los indios, por su parte, apelan también a recibir un trato diferenciado por su condición étnica lo que vuelve coincidentes, en cierta medida, las propuestas de ambas partes. La relación asimétrica entre Metrópoli y colonias se mantiene en el imaginario de construcción nacional de ese esquema campo-ciudad que confiere una adscripción ciudadana diferenciada a los ‘campesinos’ que los integra con la tierra, en un sentido que involucra lo étnico-cultural en donde se generan ‘ciudadanos multiculturales’ (Selmesky, 2002).

En este punto, en un mismo proceso se materializa la confluencia de dos proyectos sociales -aparentemente- opuestos entre sí. ‘Aparentemente’ porque la esencia colonialista que pervive en el imaginario de la ‘Nación mestiza’ que mantienen las élites no indias, no varía del todo de la respuesta de los indios que también reclaman un trato diferenciado por su condición étnica, que no los excluye pero los aventaja de muchas maneras frente al resto de ecuatorianos. En esta medida, ¿no puede ser vista también como colonialista la demanda de los indios?

Notas:

- 1 La Constitución de 1978, auspiciada por los militares previo el retorno a la democracia, da prioridad al rol estatal en el desarrollo económico y social y atribuye a los militares su participación en los ‘sectores estratégicos’ de la economía (Rivera, 2001: 198).
- 2 A partir de 1963, hasta 1980, se habían conformado: Liberación Popular, el Partido Socialista Revolucionario (PSRE) Demócrata Cristiano -DC-, Partido Comunista Marxista Leninista (PCMLE), la Coalición Institucionalista Demócrata -CID-, la Unión Democrática Popular -UDP-, el Partido Nacionalista Revolucionario -PNR-, un sector del socialismo se agrupa en el Partido Socialista Unificado, Partido Velasquista, Frente Radical Alfarista -FRA-, Izquierda Democrática -ID-, Movimiento Revolucionario Izquierda Cristiana -MRIC-, Movimiento Nacional de Cristianos por la Liberación -MNCL-. El Partido Demócrata Cristiano y el Conservadorismo Progresista se unifican en el Partido Democracia Popular -DP-, se constituye el Movimiento Popular Democrático -MPD-, el Partido Demócrata -PD- (Téhis-CEN, 1993).
- 3 La historia política ecuatoriana registra etapas de “crisis de sucesión presidencial” en las cuales se provoca un “bloqueo de los mecanismo políticos que permiten la transferencia de poder entre distintos grupos y personas al interior del mismo régimen” (Bustamante, 1988: 140), la solución a esta problemática ha contado re-

gularmente con la mediación castrense. Existen asimismo etapas de sucesión presidencial fluida. Éstas son las condiciones que se registran entre 1948-1961 y 1979-1996.

- 4 Se puede establecer una comparación entre lo que sucede en este período y entre lo ocurrido entre 1948 y 1961, cuando si bien los militares no habían asumido directamente el poder, y pese a que los presidentes se suceden por la vía regular desde el punto de vista constitucional, las FF.AA. están presentes, tras bastidores, como mediadoras del enfrentamiento político civil.
- 5 En un apartado posterior se da un tratamiento más extenso a este tema.
- 6 Concentración de Fuerzas Populares-Democracia Popular.
- 7 El FRN aglutina a los partidos Conservador, Coalición Institucionalista Democrata, Liberal, Social Cristiano, Nacionalista Revolucionario y Velasquista.
- 8 Episodio del que se habla con mayor detalle en páginas posteriores.
- 9 Ello no quiere decir que no hubieran aflorado a su vez, particularismos y nuevas formas de exclusión a los diferentes.
- 10 En el capítulo 5 se analiza la participación indígena en el conflicto bélico del 95.
- 11 El 20 de abril de 2005, las protestas ciudadanas agrupadas como 'los forajidos' son el detonante para la caída de la presidencia del coronel Gutiérrez.
- 12 El Presidente interino, Fabián Alarcón encarga la gerencia del Banco del Estado al Gral. Gallardo que para entonces estaba retirado de las FF.AA.
- 13 Entre la intelectualidad feminista se ve esta actitud de los políticos con un fuerte sesgo machista.
- 14 Un grupo de oficiales y soldados permitió el ingreso de los indígenas al Palacio Legislativo (Paz y Miño, 2002: 71)
- 15 En los peores momentos de la crisis financiera, Mahuad acude al 'feriado bancario', con lo que se confiscan los dineros de los cuenta habientes como medida de protección a favor de los malos manejos de los banqueros y la política entreguista de los políticos de turno. Ello afecta los fondos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, depositados en uno de los bancos quebrados.
- 16 En esa coyuntura, Gallardo ocupa la Cartera de la Defensa.
- 17 Información entregada por militar en servicio pasivo, que solicita se guarde el anonimato.
- 18 Comunicación personal con Laura Franco, promotora cultural. Calderón 8 de febrero, 2006.
- 19 Sobre esta misma temática ver también Auyero, 2003; Tilly, 2000.
- 20 Cfr. Balibar y Wallerstein, 1986; Hobsbawm, 1991; 1994; Anderson, 1991; Escalante, 1992
- 21 Si bien en el presente trabajo se hace ya un acercamiento desde muchos ángulos al tema de la organización indígena, en este apartado se realiza una sistematización de las etapas y formas que toma en Ecuador.
- 22 Existe evidencia de que la forma de organización comunal fue aplicada durante el período colonial (Salomon, 1980).
- 23 Que, como se reitera a lo largo del presente trabajo, se expide en 1937 durante la Jefatura Suprema del Gral. Alberto Enríquez Gallo. La Ley de Comunas de 1937 se inspira en las Leyes de Indias, creadas por la administración colonial, para tratar la problemática americana.

- 24 En Cacha la organización indígena estuvo mediada por la Iglesia Católica.
- 25 Hasta los años 90, las federaciones se financian con fondos de organismos internacionales.
- 26 Esta asociación se conforma en 1973, en el contexto de la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara, bajo los auspicios del Movimiento Izquierda Cristiana y la Iglesia Católica.
- 27 Se crea en 1981 y cuenta como miembro fundamental a los shuar cuya experiencia organizativa se inicia con el apoyo de los misioneros salesianos.
- 28 La conformación de fronteras vivas implica la entrega de tierras no sólo a habitantes de la zona, sino también a quienes estuvieran dispuestos a recibir tierra como colonos a cambio de ocuparla, hacerla producir y defenderla, por ello reciben entrenamiento en el uso de las armas y también nociones de trabajo agrícola.
- 29 Comunicación personal con el Crnl. Luis Hernández, 2005.
- 30 De no expresar lo contrario, la información que se consigna en este subtítulo ha sido procesada por la autora a partir de información recogida del Ministerio de Energía y Minas y las opiniones vertidas por un militar en servicio pasivo, que prefiere guardar el anonimato.
- 31 Fidel Falconí (1991) realiza entrevistas a dirigentes de la CONAIE que han ampliado mi visión sobre la problemática que trato y por ello las retomo en mi investigación.
- 32 Cabe recalcar que este tipo de opinión la mantienen indígenas que han tenido una participación política o fungen como líderes de comunidades determinadas, cuyo discurso se encuentra ideologizado de alguna manera.
- 33 Es un lugar común entre los no indios que cuentan con influencias, utilizarlas para no ser reclutados por el Ejército para el SMO, lo que no ocurre con los indios que no tienen a quién acudir para evitarlo.
- 34 Opiniones vertidas por militar en servicio pasivo, que prefiere guardar el anonimato.
- 35 Selmeski (2001: 2) cita estudios realizados en otros países andinos como Bolivia y Perú a través de los que se constata el rol fundamental que ha jugado el servicio militar obligatorio en la movilidad social y étnica de los jóvenes reclutas indígenas.
- 36 La participación de los indios amazónicos en la guerra del Cenepa se topa con amplitud en el capítulo 5.
- 37 Estos juicios están atravesados por valoraciones y reacciones emocionales a favor o en contra de los hechos que se relatan, en los momentos cercanos a los acontecimientos que se analizan, con una visión no del proceso, sino de eclosiones coyunturales de hechos políticos, lo cual se ejemplifica con el “millón de participantes” en este testimonio.
- 38 Se trata de las deudas adquiridas por los indígenas y campesinos que reciben créditos de FODERUMA, del Banco Nacional de Fomento u otras entidades, que no se hallaban en posibilidad de cancelar.
- 39 Este documento incluyó un pliego de peticiones de 16 puntos referentes a legalización y entrega de tierras; contaminación de aguas; no pago al predio rústico; educación bilingüe; condonación de deudas adquiridas para mejorar producción; declaración constitucional del Ecuador como estado plurinacional; congelamiento de

precios de productos industrializados y primera necesidad de uso campesino; obras de infraestructura básica para comunidades indígenas; protección de sitios arqueológicos por parte de CONAIE; derecho a la práctica de la medicina indígena; expulsión del ILV; defensa a los derechos de los niños y rechazo a elecciones infantiles (Tcrn. F. Fiallo, 1992: 35).

INDÍGENAS E IMAGINARIOS DE NACIÓN: EL DISCURSO MILITAR DE FIN DE SIGLO

Entre los 80 y 90, a más del retorno a la democracia, se presenta un contexto cambiante, definido como tal por una serie de hechos que significan momentos de inflexión para la participación militar en la historia sociopolítica del país. Así, la derrota de Paquisha frente a Perú, en el 81; el fin de la Guerra Fría, en el 89; la irrupción con mayor fuerza de los indígenas como grupo aglutinado orgánicamente por su diferencia étnica, a partir de 1990, que cuenta con el aval de los acuerdos internacionales de reconocimiento de derechos étnicos signados por Ecuador y el respaldo de la opinión internacional que recuerda los 500 años de explotación a los indios; la Guerra del Cenepa frente a Perú, en 1995 y la firma del tratado de paz con ese mismo país, marcan los cambios en la pauta de la presencia institucional de las FF. AA. de fin de siglo, e inicios del actual, que comienza con el episodio que pasa a la historia como la “asonada indígena-militar” del 21 de enero de 2000¹.

Este capítulo supone que los cambios en los contextos tanto interno y externo, entre los que es un factor importante la eclosión de los indios en la escena pública, obliga a los militares a readaptar su discurso y acción frente a los indios de maneras más drásticas con relación a las que se habían aplicado hasta entonces. Además, el cambio de timón que provoca para las FF. AA. la firma del tratado de paz con el Perú, implica un reacomodo también en sus acciones a favor del desarrollo agrario. Ello provoca mayores acercamientos entre indios y militares que desembocan en la eclosión de los indios como actores políticos en una acción conjunta con una de las facciones de las FF. AA. y se sella así una alianza indígena-militar que toma visos de coopta-

ción política por un sector de los militares que consigue debilitar al movimiento indígena.

Se analizan algunos temas que son constantes en el discurso militar, para verificar los cambios que se registran en sus contenidos, especialmente frente al tema indígena, y cómo se van adaptando a la respuesta de sus interlocutores -los indios- frente a las fórmulas integracionistas; se estudia el rumbo que toma su proyecto de construcción nacional/societal en un momento en que los indios consiguen los mayores avances en su proceso organizativo y finalmente irrumpen en la escena pública, para alcanzar presencia política. Se verifican las variaciones en las funciones que cumplen los militares en el nuevo contexto que se registra a fines del siglo XX e inicios del XXI, que responden a las que, desde su perspectiva, son las necesidades de defensa y seguridad del país en un nuevo contexto internacional, y que se ajustan, a su vez, a los intereses individuales y corporativos de los integrantes de las FF. AA.

Como ya se ha observado para el caso ecuatoriano, el retorno a la democracia auspiciado por los propios militares no implica de manera alguna, que las actividades de las FF. AA. se hubieran restringido a la defensa desde el frente externo. Su paso por el poder les permite, más bien, garantizar la continuidad de su participación en la sociedad tanto al interior como al exterior de sus ámbitos corporativos, en gobiernos tanto civiles como militares e intensifican su presencia, como se da en el caso del desarrollo agrario. Una lectura cronológica del discurso militar permite elucidar cómo se vive el retorno a la democracia entre los miembros de las FF. AA.

Se toman para el efecto los aportes de los cursantes del IAEN, así como otras publicaciones que reflejan el pensamiento militar; se cuenta asimismo con la opinión de miembros representativos de las FF. AA. con quienes hubo un acercamiento personal. Han sido de mucha utilidad las entrevistas realizadas por Fidel Falconí en el año 91, a distintos actores militares clave en esos momentos, a raíz del primer levantamiento indígena y que opinan sobre los temas que nos ocupan en el presente trabajo².

El discurso sobre la nación

El tema de la construcción nacional como única e indivisible se deja sentir con fuerza en el pensamiento militar, alude principalmen-

te a la necesidad de la creación de una conciencia colectiva de pertenencia a la nación como medio defensivo. La premisa de “vivir en unidad, concordia y paz, en esta tierra grande y heroica” (Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1986: 7) resume, de alguna manera, los objetivos de quienes comparten una nacionalidad, según el pensamiento militar de fines del siglo XX. Ser integrante de la nación implica, desde esta visión, que el colectivo de ecuatorianos comparta “ideales, acciones y esperanzas” para conseguir la Patria unida a partir de “esfuerzos de los ciudadanos ligados por una misma responsabilidad” (Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1986: 8).

La responsabilidad que comparten los ciudadanos -civiles y militares- radica en la defensa de la Patria, la defensa entendida como un hecho colectivo, concepto que halla continuidad en la retórica castrense, y que como se ha podido observar entre los soldados ecuatorianos para el caso del presente estudio, se remontan a los inicios del siglo XX. El soldado moderno está al servicio de la integridad y la defensa de la soberanía nacionales, tiene a su cargo generar y mantener la unidad de los connacionales y fundirse con ellos en la defensa de la Patria, como medio para fomentar una efectiva pertenencia ciudadana.

Para obviar una posible obstrucción a la unidad dada por la diversidad en Ecuador se rescata al mestizaje como la vía adecuada porque permite la consolidación de “una sola alma nacional”, en la que confluyen “múltiples herencias armonizadas en un mismo ser” (Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1986: 8).

[...] confluencias de sangre diversas corriendo por un cauce común; y que todas ellas le dan la suprema sensibilidad para la unidad, como una misma luz de espíritu sobre la firme base de sus emociones, que trae el equilibrio, la madurez mental, la firmeza para la renovación y evolución, como nexos de continuidad y perseverancia (Ministerio de Defensa Nacional, 1986: 9)

El mestizaje como la base de la configuración societal de la nación, que se presenta ya con intensidad en el discurso nacionalista revolucionario de los años 70, se proyecta mayor solvencia en el pensamiento militar de los 80 y toma vigencia como respuesta a las propuestas indígenas que se basan en el respeto a la diferencia y que se dejan sentir para entoces. La fuerza de las nociones de desindianización baja

de tono hacia los ochenta cuando gana espacio la necesidad del reconocimiento de la condición multicultural del Ecuador, y se dan muestras de una nueva percepción hacia los indios. Sin que puedan dejar del todo el sesgo racista de desprecio en las formas de concebir y expresarse sobre el Otro (Trn. L. Burbano, 1991) o de considerar que pueden tomar decisiones sobre sus destinos. Prima una actitud conciliadora que busca proyectar una perspectiva más amplia del significado de la diversidad étnica y de la necesidad de promover procesos homogenizantes desde esta dimensión.

Este modelo integrador está diseñado desde fuera de las comunidades indígenas, por ello propone que quienes participan en la planificación de sus políticas deben acercárseles y conocerlas para de esta manera definir acertadamente los “valores y características que deben desarrollar los indígenas” para integrarse a la cultura dominante y los que se eliminen (Crnl. E.M. M. Suárez, 1988: 26). Hasta aquí no difiere mayormente del modelo original. “Alas para la Salud” auspicia un “proyecto crítico y formativo” para introducir “cambios estructurales de la práctica sanitaria” (M. Snd. Avc. J. Larreátegui, 1989: 76); tampoco cuando se demuestra preocupación porque el proceso no signifique enfrentamientos “atropellos, violencias, choques o desequilibrios [...]” (Crnl. E.M. M. Suárez, 1988: 26) pues mantiene su vocación preventiva y disuasiva; el matiz aparece cuando propone que los indios deben participar en este proceso y dar sus opiniones al respecto, una suerte de intercambio cultural pero asimétrico.

Pese a que las ideas del respeto a la cultura del Otro ya están presentes en cierta forma, tanto en la retórica como en la práctica: cuando se permite el *huango* a los soldados kichwa o cuando se sugiere que la educación fuera en lengua materna con maestros que les enseñen en sus propias lenguas, las coyunturas de las últimas décadas del siglo obligan a dar giros más radicales a las concepciones sobre la integración, una vez que el discurso indígena (que no se había dejado sentir como hasta esos años) apela no sólo al reconocimiento de su diversidad sino a que se le restituyan derechos no reconocidos a lo largo de la historia. Demanda, sobre todo, el respeto a sus ‘nacionalidades’ y lo hace a través de una organización capaz de cuestionar el orden establecido. Para los militares, ello implica resignificar su estrategia frente a un nuevo interlocutor, con un lenguaje que se acerca al suyo propio -¿una nueva amenaza?-.

Fustigados por estas urgencias, los espacios de opinión de las FF. AA. se convierten en corolarios de ideas sobre la nación, los indios, los roles de las FF. AA., que confluyen todas en la necesidad de enfrentar el problema para defender la integridad nacional y, de una u otra forma, recomiendan salidas preventivas ante las nuevas condiciones, que van paralelas a otras más radicales.

El discurso contrario a la aceptación de las nacionalidades halla distintos argumentos, entre los que sobresale el del reconocimiento de la pluriculturalidad: las nacionalidades no concuerdan con la integración que es uno de los objetivos nacionales permanentes (Tcrn. L. Burbano, 1991: 53). En esta discusión sobre el tema, ‘las nacionalidades’ de las que hablan los indios, no equivalen a ‘la Nación’ –moderna–, apelan al sentido cultural de las distintas etnias, son “grupos étnicos organizados que tienen culturas diferentes” (Fiallo, 1992: 80), por tanto, lo válido es reconocer al Ecuador como pluricultural. Se ve necesaria la “participación activa y directa de esa población para expresar sus pensamientos y deseos en la proyección de sus destinos, en la defensa y desarrollo de sus formas y valores, con miras a un bi o pluriculturalismo en el país [...]” (Tcrn. N. Gudiño, 1991: 68). El reconocimiento a la pluriculturalidad, es una salida a la división que podría causar el multinacionalismo, es correcta y apegada a la realidad; sin embargo, se debe optar por salidas que medien el conflicto (Gallardo, 1998: 20). Se reconoce la necesidad de pensar en una forma de Estado “donde la multiculturalidad sea posible con base en el diálogo pacífico, sereno y constructivo” (Dirección de Inteligencia de la Fuerza Terrestre, 1998: 77).

Los militares se sienten obligados a proteger los derechos colectivos, por tanto, no pueden aceptar la autodeterminación y autonomía que demandan los indígenas porque van en contra de los derechos de la gran mayoría de ecuatorianos, quienes han conformado una sociedad fruto del “mestizaje sanguíneo y cultural, producto del descubrimiento de América”. Tales aspiraciones de autodeterminación de los pueblos indios “traen una serie de riesgos y peligros que podrían dar lugar a que se desarrollen resistencias, críticas y luchas de razas y culturas [...]” (Tcrn. N. Gudiño, 1991: 92); es decir, ‘alborotarían’ el orden interno. Por otro lado, si la Constitución política acoge el derecho de asociación, no es necesaria la creación de “gobiernos paralelos”. Se llama la atención en cuanto al significado del autogobierno, “el gobierno es el ejercicio de la soberanía del Estado por la autoridad designada”

(Fiallo, 1992: 80-82); los indios en esa medida, tienen que acogerse a la autoridad nacional.

Las voces más optimistas, que se elevan entre los militares en ese contexto recomiendan que la salida válida para estructurar lo diverso en una sola unidad está en el construcción de un proyecto consensuado de nación, en el cual la diversidad se materialice en la práctica, en el ámbito operativo. Los militares tienen las armas también en este campo, porque el desarrollo contribuye a la construcción de esa comunidad imaginada en la medida que permite “la realización material y moral del hombre ecuatoriano” (Moncayo, P. 1996a: 77). Nótese que aparece el elemento del consenso como otro de los recursos de la retórica, lo que deja pensar en un cambio de posición en la relación hacia los indios; sin embargo, las políticas de intervención en el desarrollo que ya fueron trazadas mucho tiempo atrás fuera de los límites del consenso, se mantienen en la práctica. Varía en el hecho de que se consultan las necesidades de las comunidades a los dirigentes indios para solucionarlas, en las tareas de la acción cívica.

Este consenso es entendido a través de la participación del indígena con base en el respeto mutuo y, por parte de los no indios, con una actitud de tolerancia a la diferencia, a su identidad, su lengua, su cultura y sus tradiciones (Crn. EM. N. Gudiño, 1991: iii) a los que se suman “costumbres y particulares puntos de vista” (Tcrn. L. Burbano, 1991: 47). Se mantiene la necesidad de una participación mancomunada que involucre el diálogo “trabajando conjuntamente en el análisis y solución de problemas” (Tcrn. L. Burbano, 1991: 47)³. Se celebra que los indígenas hacia la década de los 90, se hallen ya entre los estudiantes de las universidades, a las que hasta entonces había asistido sólo población urbana no indígena. Se aplaude la participación política de los indígenas en cargos de dirección local habida cuenta que esto exigirá a los candidatos empaparse de la problemática de este sector e integrarla en sus ofertas de campaña al competir con ellos para conseguir posiciones. Por otro lado, al hacerlo por su propia mano conseguirán superar las limitaciones que históricamente les han afectado y se superarán las formas en que se ha buscado integrarlos regularmente, que no respetan las características propias de su cultura, con estrategias discriminatorias.

Se toman como modelos de integración a Eugenio Espejo, a los otavaleños y se enfatiza en que su éxito radica en la capacidad de asi-

milación de la cultura dominante en simbiosis con su ciertos rasgos de su cultura ancestral: “que han adoptado formas claras y definitivas de la economía blanco-mestiza, han logrado el dominio del castellano” (Tcrn. EM. N. Gudiño, 1991: 82). Y si bien se lamenta que en algunos casos hubieren perdido el kichwa, ello no quita que mantengan una “actitud franca y sincera de adhesión a sus grupos y cultura; a su raíz india” (Tcrn. EM. N. Gudiño, 1991: 82). Se critica la deficiencia de las escuelas, que imparten enseñanzas “idénticas a las de los grupos blanco-mestizos del sector urbano”, sin tomar en cuenta que deben implantarse formas educativas diferenciadas, u otras iniciativas de integración en las que prime el criterio indígena (Tcrn. EM. N. Gudiño, 1991: 18).

El discurso integrador que, como se ha visto, se deja sentir ya desde la primera mitad del siglo XX, no ha perdido su esencia a fines del mismo siglo; aunque con nuevos ingredientes, se mantiene la noción de que la integración debe darse entre los distintos estamentos de la sociedad y de parte de los militares hacia los civiles. Los afanes integradores que dirigen los militares hacia los indios que al finalizar el siglo, dan muestras de un cambio cualitativo a través de la organización y la participación política, adquieren rasgos clientelares a través de encuentros y prácticas que toman semejanza con el proselitismo electoral, en un tono de campaña a favor de la integración: “este encuentro tiene como finalidad hacer integración nacional [...] y recomienda la unión y el trabajo conjunto de los indios con lo otros sectores de la patria” (Ministerio de Defensa Nacional, 1993: 71). Si a inicios de siglo XX el proyecto militar impone a los hacendados dar educación a los indios, a fines de siglo se los invita a las universidades —y ellos aceptan— creadas por los militares para la formación técnica de sus cuadros, ahora también lo son para los indios, cuyo estadio en su proceso de modernización lo demanda.

Desde una posición más radical, que se apega al significado de lo homogéneo como parte constitutiva de lo moderno, se alega que se trata de una “integración nacional”, es decir que trae consigo una idea determinada de nación que se inscribe en un proceso de modernización, y por tanto, es entendida como un hecho participativo en el que se articulen todos aquellos que se sientan adscritos a este estilo de Nación (Grab. C. Mendoza, 1996: 29). Este tema mantiene su latencia hasta finales de siglo, aunque con mayor claridad en cuanto a la necesidad del establecimiento de un “proyecto nacional” que se establezca con base en un con-

senso, sin embargo, se enfatiza en que ese consenso tenga como base los “intereses del Estado”, ¿quién define los intereses del Estado?

Los militares se ven obligados a matizar el contenido de su proyecto nacional tradicional en el que los indios tenían un sitio determinado, replantean ciertos sesgos de su discurso para salvaguardar los intereses del Estado. Se rechazan las actitudes “regionalistas y divisionistas” para lo cual se requiere de una “tesis nacional” (Grab. C. Mendoza, 1996: 35). Sólo así se puede hablar de justicia social, con respeto a la dimensión humana. Estos argumentos explican que la intervención en política de los indios responda a la situación económica que han vivido históricamente.

A fines de los 90, cuando la continuidad de las actividades castrenses se ve alterada por dos factores definitorios: el final de la Guerra Fría y la firma del Tratado de Paz con el Perú; a más de unos indios que ya se habían ‘levantado’ desde los inicios mismos de la década, se distingue una retórica que refuerza la idea de la comunidad imaginada desde el ámbito militar, factor que continúa en construcción. Desde esta perspectiva, la sociedad debe girar en torno a un “Estado fuerte”, con “ciudadanos fuertes”; este ideal de nación debe cimentarse en la igualdad y no en la diferencia entre sus integrantes, debe disponer de un “centro de gravedad estratégico” que proporcione poder a la Nación (Tcrn. E. Vaca Rodas, 1999: 21), ese es el Estado al que los militares creen representar y esta es la vía de solución al problema de la diversidad. Sin embargo, tampoco su práctica es igualitaria con respecto a los indios, éste debe leerse como un discurso que da una respuesta parcializada a la noción de diferencia a la que apelan los indios.

El activismo indígena tiene un logro parcial cuando en la Constitución, emitida en 1998, el primer artículo reconoce el carácter pluricultural y multiétnico del Ecuador. El proyecto societal de los militares es un hecho dado, uno de sus representantes opina con beneplácito que los indios están ya integrados, porque han adoptado muchas de las formas de relacionarse con el resto de la sociedad, cabe verlos ya con otros ojos, es decir, han aprobado su paso por procesos civilizatorios, ya no cabe la sospecha (Gral. J. Gallardo, entrevista de noviembre, 2003).

Ya en los albores del siglo XXI, el mestizaje como opción integracionista se mantiene en el imaginario militar y se la vislumbra como el futuro nacional desde el punto de vista societal:

De aquí a unos 300 años todo el país será mestizo, porque no puede ponerse cortapisas a las situaciones naturales de la vida. Las cosas tienen que darse en forma natural no atropellando. Si quieren conservar vestido y tradiciones, no hay para qué entrar a contrariar eso, se van a integrar espontáneamente [...] (Gral. José Gallardo, entrevista de noviembre, 2003).

Las amenazas que asechan a la nación

La presencia de amenazas justifica la razón de ser de los militares en la sociedad, como garantes del orden que necesita la nación para su supervivencia; las FF. AA. intervienen en las distintas sociedades cuando “no se consigue un estado ideal de equilibrio” y, en esa medida, la sociedad no deja de constituir su objeto de protección. Ello implica identificar las amenazas y establecer una organización capaz de enfrentarlas (Crnl. J. Hernández y Crnl. Avc. J. Burgos, 1993: 2). Las amenazas contra la nación continúan siendo las mismas en este fin de centuria, desaparecen algunas, se generan otras o se dota de una nueva fachada a las preexistentes.

La oligarquía y los políticos

La oligarquía representada por los “grandes terratenientes, plutócratas y explotadores” es una amenaza que continúa presente y a la que los militares se ven obligados a repeler en bien de la nación que, controlada por la oligarquía, se mantiene en una situación de injusticia y dependencia, pues la riqueza no ha podido serles arrebatada (Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1986: 10).

Los políticos constituyen también amenazas contra la nación, ellos actúan con “demagogia y se escudan en sofismas como norma de gobernar a los pueblos” (Trcnl. de E.M. G. Monteverde, 1986: 123). Los responsables de la situación de los sectores marginales son los políticos que conjuntamente con la oligarquía mantienen su lugar en este imaginario como el enemigo interno al que hay que combatir. Por ellos, los indios sufren deterioro biológico al no haberles garantizado una buena alimentación ni atención médico-sanitaria. Son analfabetos porque se les niega el privilegio de las letras. Sus patrones son los responsables de su marginalidad, discriminación legal, caren-

cia de una presencia significativa en la vida política, económica y social del país (Gral. J. Gallardo, 1998: 20). Este discurso justifica, una vez más, la presencia de las FF. AA. en campos a los que el Estado oligárquico no ha entrado por su incapacidad de dimensionar la presencia india y sus necesidades.

La retórica militar contraria a la política partidista, encuentra negativos sus afanes proselitistas que no coinciden con los intereses de la Nación. Al desprestigiar a los políticos reproduce el imaginario ideal que sobre sí mismo pretende proyectar el militar, quien actúa en forma sincera, ajustada a sus principios, a su formación, a esta nueva concepción de su papel dentro de la sociedad, adscrita a la consecución del desarrollo. Las FF. AA. no constituyen un partido político y de allí que sus afanes no busquen adeptos, su único interés es el de “hacer Nación” (General en servicio pasivo. Cfr. Falconí, 1991:72).

Los militares aspiran al desarrollo en ‘afán de servicio’ para con el pueblo: “nuestro interés no es político ni religioso, sino procurar que las comunidades indígenas salgan de su retraso social y económico y que se les satisfagan todas sus necesidades, capaz de que tengan buena salud, buena educación” (Oficial Coordinador de la Brigada Galápagos. Cfr. Falconí, 1991: 71). Su participación es inofensiva porque, en el militar no hay ningún provecho, sino el de su pueblo, el interés real de buscar las soluciones (Oficial coordinador de la Brigada Galápagos Cfr. Falconí, 1991: 72).

Civiles y militares, desde esta perspectiva, “conducen en que el pueblo ecuatoriano es gobernable y que la ingobernabilidad radica en la clase política y la organización del Estado...” (Moncayo, P. 1993: 14)⁴. Así, el discurso castrense a favor de los indios se convierte en motivo más de denuncia contra los partidos políticos tradicionales a quienes la eclosión del movimiento indio como actor político sorprende “sin propuesta sobre la cuestión indígena, sin capacidad para asumir su representación y sin posibilidades para hacer de las organizaciones indígenas sus clientes o filiales” (Tcrn. N. Gudiño, 1991: 95)⁵. ¿Quiere decir acaso que los militares, en contraposición a los políticos, sí controlan los pasos del movimiento indígena y sí actúan para convertirlos en sus “clientes o filiales”?

Se atribuye al mal manejo de los partidos políticos tradicionales, la denigrante situación de los indígenas, pues éstos sólo hacen ofertas de campaña y luego no las cumplen. “El levantamiento de junio del 90

es una respuesta a esa actitud politiquera” (Tcrn. EM. F. Fiallo, 1992: 30). Cabe recordar que los militares critican al presidente Borja por su discurso a favor de la multinacionalidad.

Se objetan los errores del Estado por inequitativo, con sectores que reciben una educación insuficiente, asentados en las zonas de habitación indígena, con escuelas incompletas “de cuatro grados; forma que automáticamente elimina a los egresados indígenas y campesinos a continuar con su formación y capacitación en otros niveles educativos” (Tcrn. EM. N. Gudiño, 1991: 18).

Desde los albores hasta el fin de siglo los militares responsabilizan de la debilidad del poder nacional a los grupos dominantes del sector civil, porque éstos no han generado condiciones para enfrentar con éxito las amenazas en los órdenes interno y externo que atentan contra las aspiraciones de la sociedad: preservación del medio ambiente, defensa de la soberanía, justicia social, desarrollo integral, integración nacional, democracia auténtica (Tcrn. E. Vaca Rodas, 1999:20). Los militares satanizan de esta manera a la política partidista que se articula al mundo profano, la de ellos es una actividad de iniciados en el culto a la Patria y ello los pone a salvo de las tentaciones de la política y les permite dar las pautas para gobernar a la nación.

*El apoliticismo ¿les da libertad de participar en el desarrollo?**

Cuando los militares hablan de su apoliticismo hacen mención a las regulaciones constitucionales que les impiden participar en política, y no ven como política su acción a favor del desarrollo o como una fuente que legitima su poder. Entienden, más bien, que su intervención es efectiva porque no persigue un interés “político ni religioso”, sino que trabajan sin interés particular a favor de las comunidades indígenas (Oficial coordinador de la Brigada Galápagos. Cfr. Falconí, 1991: 71).

Con los conceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional que trasladan el campo de batalla del frente externo al frente interno, y convierten al desarrollo en estrategia de seguridad y de defensa, se vuelve confuso el campo de acción real de las FF. AA., factor que influye en la percepción que proyectan de sí mismas y los límites de su atribuciones. Es frecuente en su discurso hallar un sesgo justificativo, que los lleva a explicar porqué lo hacen, y reconocen que pese a que

las tareas de desarrollo van más allá de sus funciones ‘tradicionales’, se han visto abocados a participar en ellas en bien de la Patria. En realidad el ‘apoliticismo’ es el manto que cubre una actividad política que busca direccionar los destinos nacionales a nombre de la preservación de la nación, no sólo con el desarrollo, y dota a los militares de una presencia política ambigua que favorece a sus intereses corporativos e individuales.

El comunismo: antes y después de la caída del muro de Berlín

A los oligarcas y los políticos, enemigos tradicionales de la Nación, hasta fines de la década de los 80 continúa sumándose el comunismo como amenaza que se cierne tanto sobre la Patria como sobre el cuerpo militar por ser una “doctrina exótica que ensombrece la mente y la dignidad institucional” (Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1986: 10). Las estrategias de seguridad hemisférica en esta “confrontación ideológica”, surgidas treinta años atrás, conducen a la institución militar a mantenerse orientada hacia la “defensa interna, misión específica y razón de su existencia” (Myr. FFBB. O. Jarrín, 1984), de allí que se involucren en acciones de desarrollo e integración nacional para erradicar al comunismo: a fin de “salvar a aquellas clases marginales que son el caldo de cultivo” para su implantación en el medio (Tcrnl. de E.M. G. Monteverde, 1986: 124).

En 1989 se provocan cambios en el escenario internacional con la caída del muro de Berlín, que conlleva variaciones en el imaginario del enemigo externo, alimentado hasta tanto con las políticas de seguridad hemisférica desde mediados del siglo XX. Una vez que desaparece la amenaza comunista, ¿cuál será la que aseche al país en su lugar? Muchas son las amenazas que aún se ciernen sobre el país después del comunismo y éste sólo toma nuevas formas en Ecuador por la deficiencia de las condiciones de vida de sus habitantes, que persisten. Así, las amenazas pueden aparecer de muchas formas pero ello no implica que cambien necesariamente las estrategias que se aplican para el combate al comunismo.

Las aspiraciones de los indios de reconocimiento a las nacionalidades indígenas: una amenaza combatida por los militares

Al interior de la institución castrense se evidencia, a inicios de los 90, una resistencia a admitir abiertamente que los indios con sus demandas de reconocimiento de derechos diferenciados fueran una amenaza para sus ideales de nación burguesa, “No los tomamos como amenaza. Lógicamente, no concuerdan con la unidad nacional, pero una amenaza en sí, no.” (Oficial Coordinador de la Brigada Galápagos. Cfr. Falconí, 1991: 68). Quien lo ve así parte de la relación de cercanía que existe históricamente entre indios y militares.

Nosotros conocíamos cómo eran los indios y no los tomábamos como enemigos, hicimos un gran esfuerzo porque el gobierno trabaje efectivamente con los indígenas, que solucione sus problemas, preparamos planes (Gral. José Gallardo, entrevista de noviembre, 2003)⁷.

Al iniciar la última década del siglo, cuando en junio de 1990 los indios protagonizan el primer levantamiento de los últimos años, hay un sector de las FF. AA. para quien los indígenas organizados en son de protesta por la reivindicación de sus derechos no deben ser vistos como una “nueva amenaza”, sino como el resurgimiento de un viejo problema con nuevas características más “dramáticas” ante la pauperización de la mayoría de la población que degenera en muchas formas de violencia. Desde esta perspectiva, las insatisfacciones de los grupos indígenas, las contradicciones internas de la sociedad que lejos de solucionarse tienden a profundizarse y a proyectarse en el tiempo con visos de mayor gravedad, continuarán constituyendo “amenazas a la seguridad de la nación” (Crnl. J. Hernández y Trn. Avc. J. Burgos, 1993: 50). Una vez más, no se ve el problema desde el punto de vista étnico, sino desde el de las necesidades apremiantes de los indios, que lo reducen a un problema económico.

Este discurso toma fuerza luego de otra campaña de protesta de relevancia significativa, protagonizada por un sector de las comunidades amazónicas, aglutinadas en torno a la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, en 1992⁸. Los militares, expresan sus temores sobre los pedidos indígenas de reconocimiento a la multinacionalidad y la territorialidad, consideran que estos planteamientos no concuerdan “ni con la realidad ni con el tiempo” y que van en contra del principio de-

fendido por las FF. AA. sobre la protección de la unidad nacional (Tcrn. F. Fiallo, 1992: 68). Se considera que las demandas de plurinacionalidad se circunscriben a la zona amazónica, es allí donde radica una amenaza de este tipo, no así entre los habitantes de la Sierra (Oficial coordinador de la Brigada Galápagos. Cfr. Falconí, 1992: 67). Sin embargo, el levantamiento de 1994, en contra del nuevo proyecto de Ley de Fomento Agropecuario que se intenta introducir durante la administración de Durán-Ballén, también involucra a los indígenas de la Sierra en esta visión territorialista, y desde el sector castrense se recomienda “detener la aplicación de una ley agraria perjudicial, para posteriormente, con los dueños de las tierras, proceder a formular una ley más acorde con el tiempo y sus aspiraciones” (Dirección de Inteligencia de la Fuerza Terrestre, 1998: 77).

Se califica como “desorientadas, erráticas y contradictorias” las expresiones del presidente Borja en torno al tema de reconocimiento del Estado ecuatoriano como multinacional, en vista de que las sociedades que reclaman para sí tal distinción, no pueden ser consideradas en este sentido pues se trata de agrupaciones que previa la conquista, máximo llegaron a conformar “confederaciones y agrupaciones tribales que no pasaron más allá de ser etnias organizadas, pero de ninguna manera naciones” (Tcrn. E.M. F. Fiallo, 1992: 80).

Desde este ángulo, el concepto de lo plurinacional debe ser tomado más allá de lo antropológico; el problema radica en que servirá como base para la estructuración de nuevos estados, “Esta actitud no sólo atenta contra la estabilidad democrática sino además atenta contra la supervivencia del Estado ecuatoriano”. El discurso de la dirigencia indígena despierta la sospecha militar ante el divisionismo que puedan causar los movimientos que defienden intereses grupales como los étnicos, por tanto, cabe verlos como amenaza a la integridad del Estado, por constituir tendencias divisionistas o separatistas, a las que se juntan la pobreza y desocupación, los bajos niveles de educación, los grupos de poder político y económico sin sentido de Patria, los grupos sociales que demandan reivindicaciones históricas, la falta de identidad nacional, de allí que las FF. AA. busquen formas para combatir las amenazas (Grab. C. Mendoza, 1996: 34).

Este discurso mantiene su vigencia y si bien hay momentos de mayor intensidad, existen otros en que cambia de tono conforme se provocan acercamientos o distanciamientos entre indios y militares.

En 1995, con la participación indígena con su contingente militar en la guerra del Cenepa y el triunfo ecuatoriano, la visión militar de la relación de los indios con la nación imaginada -por los militares- despierta un sentimiento de admiración patriótica y las sospechas en contra de la adscripción indígena a ese imaginario de nación se desvirtúan en gran medida -lo que también ocurre desde los indios hacia los militares-.

Parte del éxito militar del último conflicto con el vecino país del sur fue la participación patriótica de algunos pueblos ancestrales de la región amazónica, que apoyaron las acciones militares en momentos decisivos para nuestra Patria [...] (Tncrn. A. Fiallos, 1997: 79).

A fines del 2003, las opiniones de los oficiales revelan que los temores por el separatismo indígena, que preocupan a las FF. AA. durante la década anterior, fueron infundados y los indios pasan al bando de los aliados. En todo caso, si bien los conceptos han ido variando ello no cambia que en el pensamiento militar exista una sola nación. Se acepta que los indios tienen un concepto diferente cuando hablan de las “nacionalidades”, actitud que se adapta al proceso que ha sufrido ese punto de vista también entre los indios, y asumen la posición indígena como viable:

Al principio hubo mucho temor de que eso fragmente al Ecuador, inclusive territorial y físicamente. Pero vemos que eso no ha sido cierto, han pasado ya muchos años para determinar que el Estado ecuatoriano, como tal, es una realidad permanente y está constituida por varias nacionalidades. Desde las Fuerzas Armadas se entiende, se acepta mucho la diversidad (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003).

En el 2003 la integración indígena no sólo es vista como un hecho dado, sino que se considera un “proceso saludable” para el país; ello se demuestra porque los indios, han adquirido cualidades que resultan positivas en la escala de valores militares: tienen sentido de la organización, disciplina, son fuertes y recios; dan muestras de su capacidad de participación política con buenos niveles de representatividad de sus comunidades a través de los cargos que han ocupado ya sea en el Congreso, en las alcaldías, concejalías de sus localidades y su participación, aunque transitoria, en el gobierno del Crnl. Gutiérrez” (Gral. José Gallardo, entrevista de noviembre de 2003).

Es interesante contrastar con el paso del tiempo la opinión del Gral. Gallardo. Durante los 90, expresa su oposición a la propuesta indígena al afirmar que “las nacionalidades son excluyentes y que por lo tanto, tienden a la dispersión. Constituidas las naciones, su siguiente paso es transformarse en estados” (Gral. José Gallardo, 1998: 22). Pasados los años y los hechos, hacia el 2003, reconoce que inicialmente, preocupó mucho a los militares la posición de los indígenas, pero ésta ha “cambiado bastante”, una vez que cuando surgen insisten con fuerza en la aceptación de la plurinacionalidad, que para ellos significa “preservar su derecho a mantener su cultura y tradiciones”, los militares no desconocen tales derechos, sino que los ven como “absolutamente legítimos”, los temores de los militares, radican a inicios de los 90, en el peligro de secesión que podía darse en las zonas fronterizas:

En este país tan recortado. Yo tenía mucha preocupación, pero después he observado que los indígenas hablan de sus nacionalidades pero ninguno se contraponen con la nación ecuatoriana como tal (Gral. José Gallardo, entrevista de noviembre, 2003).

Es decir que finalmente, ambas propuestas se resumen en un problema meramente semántico y, en esta medida, la posición de los indios no afecta a la integridad nacional, los indios dejan de ser una amenaza y más bien se convierten en aliados en la construcción de este mismo proyecto de Nación.

Un nuevo giro a la modernización y al desarrollo bajo un mismo concepto defensivo

Hasta fines de los 80, desde los cuarteles se justifica en el combate al comunismo la implementación de programas de desarrollo rural coordinados por los militares, se busca el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, con miras a frenar su avance ideológico, estrategia que a su vez, implica la preparación técnica de los habitantes del campo, con un esquema de entrenamiento que se sostiene en las propuestas del enfoque del desarrollo comunitario para la modernización del agro que se conjugan con los principios del desarrollo rural, aplicados también en las décadas pasadas. Con el uso de insumos y técnicas modernas de cultivo, la redistribución del recurso tierra, la organización de sus habitantes (Sánchez y Freidenberg, 1998: 66), los procesos

de reforma agraria apoyados por las FF. AA. durante y después de los gobiernos militares se inscriben en este contexto.

Los cambios institucionales implementados en las décadas de los 60 y 70, tendientes a conseguir procesos de desarrollo en el agro, se llevan a la práctica más sostenidamente durante las décadas posteriores, y es entonces cuando mayor relación se provoca entre las FF. AA. y los sectores indígenas.

El hito fundamental de esta relación se marca con el retorno a la democracia, con la salida del régimen dictatorial y la llegada del gobierno de Jaime Roldós. Porque las Fuerzas Armadas, que ya tenían contacto con los indígenas, empiezan a identificarse y a ampliar sus programas. (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003).

Se pierde de vista la presencia militar en el campo, involucrada en procesos de desarrollo en aquella coyuntura cuando la profusión de instituciones privadas con este mismo fin que aparecen en la década de los 80, deja pensar que se produce una suerte de “privatización del desarrollo”, con una ausencia casi total por parte del Estado, que “fue perdiendo protagonismo como agente potenciador del desarrollo rural” (Bretón 2001: 48). Afirmarlo implica o desconocer que las FF. AA. sean parte del Estado o invisibilizar su presencia en las acciones de desarrollo rural.

En concordancia con la visión anticomunista, la defensa como combate a esta amenaza toma un sesgo “económico definitivo” (Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1986: 11), y se explica así la presencia ‘modular’ de los miembros de la institución castrense en distintos campos que las involucran con la sociedad civil y que no se relacionan literalmente con el tema de la defensa del frente externo: industria, construcción de carreteras, campos de aterrizaje, puentes, escuelas, edificios estatales y militares en todas las latitudes del país, la culminación de la Carta Geográfica de la Nación, conscripción agraria, forestal y piscícola, educación, Escuela Politécnica con diversas facultades y el Instituto de Altos Estudios y se justifica como “contribución a la defensa económica definitiva en la que nos hemos comprometido todos los ecuatorianos” (Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1986:11). La intervención en ámbitos que van más allá de la guerra por parte de los militares fue trazada con oportunidad y condicionó el retorno a la democracia previa la entrega del po-

der en 1979 (García, 2005: 99), así se garantiza la presencia continua de los militares y su capacidad de control en las áreas productivas.

El 'apoyo al desarrollo': una nueva concepción de la seguridad tras la firma de la paz

La firma de la paz con el Perú (1998) resta una amenaza más a las que hasta la década pasada habían ocupado el horizonte militar y mengua a las FF. AA. campos de acción y montos presupuestarios antes destinados a la guerra; se ven abocadas a reorientar muchas de sus actividades para lo cual hallan buen destino las acciones de apoyo al desarrollo; constituye un referente importante aquel de actuar con las comunidades indígenas para que no opten por la consecución del reconocimiento de sus derechos por vías violentas, opinión que se fortalece ante los repertorios de protesta que protagonizan los indios a lo largo de la década de los 90. Es decir, ya existían todo un discurso, unas bases planteadas y las condiciones políticas para concentrar las capacidades de las FF. AA., antes destinadas a la guerra, en su proyecto de integración nacional y de fortalecimiento del frente interno, más aún ante la profundización de la crisis y la pauperización de los sectores históricamente marginados, cuya situación había empeorado y que justifica, desde el punto de vista militar, la reacción de los indios en un sentido meramente económico:

Los militares insisten en la necesidad de observar la ecuación desarrollo y seguridad y en la prioridad que merecen las medidas preventivas que corrigen las causas de la insatisfacción para evitar que las contradicciones sociales se antagonicen y se vuelvan violentas (Moncayo, P., 1993: 18).

El desarrollo, en este contexto, es fuente de homogeneidad y equilibrio porque abre, a toda la sociedad, el acceso a oportunidades (Moncayo, 1996: 77). La legitimidad de la participación por parte de la fuerza pública en acciones de auspicio al desarrollo sigue siendo un punto de énfasis en el discurso militar durante la década de los 90, al reivindicar su presencia en zonas totalmente alejadas. De ahí la cercanía que se establece entre indios y militares, porque así, estos últimos han podido conocer los problemas en que se encuentra toda la población "en especial la clase marginada como el indio, con el que ha teni-

do que en determinados momentos y lugares compartir su miseria y su angustia” (Tcrn. L. Burbano, 1991: 39).

Ante la organización indígena y su afán por ocupar espacio en la política del país, la prevención y la disuasión, basadas en el apoyo al desarrollo -guerra de baja intensidad- permanecen como instrumentos estratégicos contra una posible salida violenta al conflicto, por un lado, y como mecanismos de largo aliento para cortar el mal de raíz. En esta medida, la intervención de los militares en la sociedad continúa con su carácter de función social y se mantiene como determinación castrense; con la denominación de acción cívica, sigue ligada hasta inicios de la década de los 90, a la aspiración de conseguir el desarrollo en pos de la seguridad, principio que configura el rumbo de la actividad militar frente a la comunidad en los momentos que continúan a la etapa dictatorial, arma que había sido útil en el período desarrollista.

Con el fortalecimiento que dan en esos momentos a su participación legitiman su presencia, particularmente entre el sector indígena-campesino, con tareas desarrollistas en un marco defensivo. Este tipo de intervención constituye durante los 80, el centro de la actividad militar en lo que tiene que ver con el frente interno, y toma mayor sentido en la medida que bajo la concepción de uno de sus miembros, las FF. AA. son “nervio y músculo que permite el logro de objetivos nacionales y mejoramiento material y espiritual de la comunidad, como los mismos instrumentos legales lo reconocen y reafirman” (Myr. FFBB. O. Jarrín, 1984). Se conciben seguridad y desarrollo como conceptos unívocos:

Aquella fórmula de ‘seguridad para el desarrollo’, ha sufrido un cambio profundo en su concepción realista y de acción convirtiéndose en aquello de ‘Seguridad y Desarrollo, o sea que ambas han de marchar unidas e indestructibles (Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1986: 10).

Con la eclosión de los indios organizados desde inicios de los 90 se resignifica la función social del soldado moderno, con énfasis en la acción cívica de las décadas anteriores que se retoma como “apoyo al desarrollo”, una nueva etiqueta que dota al Ejército de una mayor cercanía con los sectores más desprotegidos y con la nación en general. A partir de su participación en este tipo de operaciones los soldados adquieren una concepción nacional muy especial, porque además de es-

tar en la frontera, en el entrenamiento militar, mantienen contacto con los “cuadros marginados” de la población en las fronteras, en las provincias, absolutamente en todo lado (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003).

Estas acciones comienzan a dar un acercamiento bastante intenso entre las fuerzas armadas y las comunidades indígenas; sobre todo, en la Sierra ecuatoriana (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003).

Ésta, se convierte en la respuesta por parte de las FF. AA. ante las actitudes políticas de los indígenas, a fines del siglo XX, ello explica que este tipo de programas se despliegue ampliamente, de manera especial en las provincias de Chimborazo y Bolívar⁹, de gran contingente indígena y focos de la organización. La Brigada Blindada “Galápagos” ejecuta proyectos y convenios de apoyo al desarrollo en beneficio de las comunidades de las provincias de Chimborazo y Bolívar, en los siguientes campos de acción: salud comunitaria, educación y capacitación, construcción, participación social, forestación y reforestación.

Para el efecto, establecen relaciones de sinergia funcional con otras entidades, y en coordinación con ellas, realizan diferentes tipos de campañas, especialmente en el tema de la salud. La Brigada Galápagos participa en el área educativa a través de la dotación de maestros militares capacitados, quienes asisten en este campo a niños y jóvenes de escasos recursos, pertenecientes especialmente a los sectores indígenas. Se instalan en las provincias de Chimborazo y Bolívar tiendas comunales con productos de primera necesidad y medicamentos.

El apoyo al desarrollo que se proyecta en la post Guerra Fría, es concebido como una doctrina, que surge y evoluciona en Ecuador, y se difunde entre los ejércitos de países centro y sudamericanos a través de los cursos de perfeccionamiento, en los que se provocan intercambios de experiencias; “se irradia en América Latina y prácticamente todos los ejércitos la aplican por el extraordinario resultado que nos dio aquí” (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003). Desde el punto de vista militar, las actividades de apoyo al desarrollo estrechan las relaciones entre indios y militares, que tampoco es que hubieran sido distantes,

Antes, cuando no había tantos adelantos tecnológicos, para internarnos en la selva requeríamos de un contacto con los indígenas,

como guías, y allí se establece ya una relación con ellos, superando las dificultades propias del idioma y de las costumbres (Gral. Homero Berrazueta, entrevista de noviembre, 2003).

Las disposiciones del Comando General del Ejército determinan que el propósito de las actividades de apoyo al desarrollo se orienten a la comunidad “en coordinación con las entidades estatales y particulares, buscan satisfacer las necesidades de la población, especialmente del área rural, en pos de un desarrollo armónico, ello con el objeto de mantener la paz social y la seguridad interna del Estado (Cfr. Fiallo, 1992: 70). Se implementan campañas de salud gratuita, higiene, letrización, asistencia técnica agropecuaria, forestación y reforestación, construcción vial, bienestar social, adecuación de vivienda, recintos escolares; capacitación en agronomía, artesanía, crianza de cuyes, técnicas de alimentación, todo ello en beneficio de la comunidad (Fiallo, 1992; Gallardo, 2003: 115).

Una vez más el enfoque de desarrollo de la comunidad, implementado ya cerca de 40 años atrás, sirve de base para la consecución del desarrollo agrario con lo que se aspira a obtener mejores resultados, gracias a la continuidad de estos programas que ya son conocidos en el medio militar. A fines de siglo, reciben mayores refuerzos dada su funcionalidad para garantizar la pervivencia institucional de las FF. AA. y del concepto de la nación unitaria. Como se puede ver, los planteamientos básicos que han regido el pensamiento militar, no cambian en lo substancial y si bien se habla de respeto al Otro, las estrategias integracionistas no varían sino que se adaptan al nuevo discurso indígena.

Se mantiene el principio de respaldar la condición agrícola del Ecuador y al indio como agente dinamizador de este potencial; desde el Ejército se ve la necesidad de que el agro, y quienes lo trabajan, se inserten de forma más efectiva en la economía de mercado. Se apoya la comercialización de los productos del campo, ya sea a través de su transporte o con la construcción de caminos y mejora de condiciones de vida rural para que sus habitantes permanezcan en sus zonas de origen, con miras a que sean quienes hagan efectivo el proceso de modernización en las tierras que habitan, especialmente a través de la “orientación y entrenamiento adecuados de la población para que optimice sus recursos y obtenga el mejor provecho de los productos y alimentos disponibles..” (General del Ejército T. Sandoval, 2000: 9).

El Servicio Militar Obligatorio

Se retoma la importancia del Servicio Militar Obligatorio porque permite inculcar en los indios los valores de la cultura que los no indios, especialmente los militares, consideran como positivos. Una acción civilizatoria dirigida al sector indígena que involucra su ciudadanía y alfabetización “ha permitido al indio aprender a leer y escribir [...] amar a su patria y su terruño [...] inculca la importancia del aseo personal [...] a ser disciplinado [...] le enseña a defender a su patria” (Tcrn. L. Burbano, 1991: 45). La conscripción agraria militar permite además, desde este ángulo, mejorar la producción del agro, con ello los campesinos no van a los cuarteles, “sino que los soldados van al campo a trabajar con los campesinos” (Tcrn. L. Burbano, 1991: 45.)

Se reconoce que en determinados momentos, la conscripción ha estado destinada “sólo para el de poncho”, y en esa medida, las FF. AA. orientan sus actividades a las necesidades de ese sector de la población y su acción social se convierte en alfabetización. El SMO da prioridad a los indígenas iletrados para alfabetizarlos y dotarlos además, de “buenas costumbres”: “asearse, usar zapatos...” (General en servicio pasivo. Cfr. Falconí, 1991: 74). Ya en su contenido real, sin embargo, la conscripción contiene un proyecto de desarrollo de largo aliento inspirado en la cultura militar, que prioriza los valores científicos y el conocimiento racional, más que el fortalecimiento del poder militar a través de su ejército de reserva (Selmeski, 2002: 7).

Una vez que la situación de los indios frente al Estado es distinta, a fines de siglo, el SMO también adquiere un nuevo perfil, cuando han variado las amenazas. Con la firma de la paz se produce un cambio radical en los programas de instrucción militar. Ante la baja de presupuesto para la defensa, los cuarteles ya no priorizan a los indígenas sino a muchachos de los estratos bajos, pero no necesariamente indígenas (Gral. José Gallardo, entrevista de noviembre de 2003). Como se expresa en líneas anteriores, la integración del indio se considera ya un hecho acabado. “Hoy se orienta contra la guerrilla, porque la amenaza es una fuerza insurgente que vendría desde Colombia, pero hay programas complementarios, dentro de las unidades militares y siempre los hubo” (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003).

¿Por qué los militares?

En este escenario defensivo, desde un punto de vista militar, el soldado se constituye en “guardián del honor patrio [...] centinela de sus fronteras, recurso en todas las horas de la vida nacional y fiel intérprete de los ideales y sentimientos ciudadanos” (Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1986: 10); así, a más de constituirse como vocero de la ciudadanía, se mira a sí mismo como “obrero de acción”, y puede serlo gracias a su ética que se dibuja en el patriotismo, en el civismo, en el cumplimiento del deber y en sus metas de libertad, justicia y derechos que se traducen en un “imperio del orden, integrado y con independencia económica” (Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 1986: 10).

Los militares se perciben a sí mismos no como “invitados de piedra”, su participación en política entra en esta lógica en la medida que tienen que ser elementos dinámicos que hagan conocer los problemas e insinúen su solución (General en servicio pasivo. Cfr. Falconí, 1991: 73). Así, si ellos por sus funciones, se hallan en contacto con la problemática de los ‘más pobres entre los pobres’, como definen a los indígenas, se ven en la obligación de participar y buscar formas de apoyo a este sector de la sociedad.

Desde su autopercepción, el conocimiento que adquieren de la realidad por las funciones que cumplen los aventaja frente a otras instituciones que al desconocer la verdadera situación de las poblaciones, “malgastan los fondos del Estado”, pues entregan insumos sin que éstos sean necesidades sentidas. Entre los militares, al contrario, se conoce la realidad de cerca y por tanto pueden darse soluciones reales a problemas reales. Articulan una autopercepción mesiánica a su misión civilizatoria frente a los habitantes de la Amazonia a quienes ‘rescatan’ de la situación de retraso en la que se hallan. Si no fuera por los militares “[...] estarían todavía con taparrabo y no saldrían de allí...” (General en servicio pasivo. Cfr. Falconí, 1991: 83). En esta medida, su participación en el desarrollo del país ha sido definitiva en cuanto a la integración de los indios se refiere.

Como ya lo manifiestan desde principios del siglo XX, los militares pueden dar cumplimiento a su función social porque a más de contar con los medios para hacerlo, los aprovechan positivamente, sin que tengan un presupuesto asignado para el efecto: vehículos, combustible

y, sobre todo, la “buena voluntad de trabajar” (Oficial coordinador de la Brigada Galápagos. Cfr. Falconí, 1991: 70). La ausencia de maestros que desde la sociedad civil acudan a suplir las necesidades educativas de la población rural se soluciona con profesores militares (Gral. José Gallardo, entrevista de noviembre, 2003). Existen entre ellos quienes cuentan con altos niveles de formación no relacionados solamente con el ámbito militar. En 1994, “el 67% ha realizado estudios secundarios, el 21% ha cursado estudios superiores y el 1% postgrados, un 12% tiene solo estudios primarios” (García, 1994: 180). Por otro lado, muchos de los miembros de la Institución tienen título de pedagogos, porque han realizados estudios en este campo en la Escuela Politécnica del Ejército.

A fines de siglo XX e inicios del XXI, pervive la idea de que las FF. AA., particularmente la fuerza terrestre, constituyen un soporte de “extraordinario valor” en el apoyo al desarrollo de los pueblos “por su capacidad, profesionalismo, solidaridad, organización, disciplina y en razón de los recursos materiales y técnicos de que disponen...” (Gral. T. Sandoval, 2000: 9).

Como queda dicho, los militares no sólo tienen que ser buenos, sino parecer buenos, de allí que sean de su interés los niveles de credibilidad que alcanzan frente al resto de la sociedad, y particularmente frente a los indios (Moncayo, P. 1993: 12). Con un manejo del tema que puede analogarse con una estrategia de *marketing*, para publicitar un producto de consumo, se resaltan los altos niveles de credibilidad que consiguen entre la ciudadanía: “el elemento militar es el más sano en nuestro medio, por eso es que tiene mayor credibilidad, y eso se ha dado en Chimborazo [...] son las comunidades las que van hacia los militares” (General en servicio pasivo. Cfr. Falconí, 1991: 80).

Durante las coyunturas que se analizan, tales argumentos los colocan en una posición de competencia por la representatividad frente a la ciudadanía con otros sectores que también se hallan en igual contienda: “después de la Iglesia y los medios de comunicación, FF. AA. tienen la mayor acogida, y hasta existen momentos que se han colocado en niveles más altos que la propia Iglesia” (Gral. José Gallardo, entrevista de noviembre, 2003).

Los militares consideran que pueden participar con la sociedad en la solución de sus problemas, porque son parte de este conglomerado –forman parte del pueblo–, y de allí su interés por fusionarse con la colectividad que se mantiene latente con una retórica que remarca en la

pertenencia de los militares a los estratos medios y populares, como factor que delimita el que “se deban” al pueblo, razón que también justifica su intervención en el desarrollo¹⁰ y sus mayores niveles de popularidad.

Surgido el Ejército de la entraña del pueblo, su actitud de evolución y de integración total, la está demostrando con su activa y eficiente participación en el desarrollo y progreso del país (Ministerio de Defensa Nacional, 1986: 9).

Desde su óptica, gracias a ello, se hallan en mayor contacto con la realidad; los políticos –que también cuentan entre la competencia– no tienen esa cercanía, en cambio el militar entra en los lugares más atrasados y está abocado no sólo a vivir “sino a absorber la problemática de esta sociedad [...] se preocupa [...] y se siente obligado a colaborar” (General en servicio pasivo. Cfr. Falconí, 1991: 72). El conocimiento de la realidad que consiguen, gracias a las funciones que cumplen, los aventaja frente a sus adversarios en esta competencia y no participan, por tanto, en igualdad de condiciones.

Resultan aventajados, como lo expresan, por la experiencia conseguida en el campo del desarrollo, que ya ha cumplido más de 50 años de tareas para su consecución, lo que demuestra que sus actividades no son improvisadas sino que parten de una experiencia, lo cual los faculta ampliamente a intervenir a favor de quienes lo requieran (General en servicio pasivo. Cfr. Falconí, 1991: 83). De esta manera, los militares asientan su efectividad en la importancia de la continuidad de sus acciones, esa continuidad no es factible entre los gobiernos civiles por su poca estabilidad en sus funciones y la escasez de tiempo que media entre un gobierno y otro. Entre los militares no ocurre aquello porque los cambios en la cúpula no hacen que la institución pierda de vista las acciones que implementa con antelación, sino que las continúa a lo largo del tiempo, porque involucran los objetivos de la entidad. Es decir que su participación en función social se halla ya institucionalizada.

La capacidad del militar para coordinar las acciones

La percepción que los militares tienen de sí les atribuye la participación como coordinadores del desarrollo frente al resto de instituciones del Estado y privadas. Igual que para la guerra, se supone que ellos están preparados para organizar y planificar la realidad. Así, fren-

te a su dedicación al desarrollo, consideran que lo que han hecho es justamente “coordinar a fin de trabajar mancomunadamente” (Oficial coordinador de la Brigada Galápagos. Cfr. Falconí, 1991: 70) y en ese sentido, el resto de instituciones del Estado han dado mucha apertura a la intervención de las FF. AA.

Hacia el año 93, la coordinación se da directamente entre los militares y las instituciones de representatividad indígena; las FF. AA. promueven un encuentro entre comunidades indígenas y militares con el fin de delimitar las necesidades reales del sector y establecer cómo se puede dar el apoyo militar, con base en acuerdos iterinstitucionales coordinados por los militares¹¹. El afán unitarista entre civiles y militares, enunciado ya por quienes les anteceden en el siglo XX temprano, se mantiene presente y se materializa también a través de la participación armada en el desarrollo nacional:

Debemos unirnos todos [...] quienes estén dispuestos a trabajar [...] campesinos y militares, indígenas y uniformados tomando en cuenta que tenemos los mismos anhelos de bienestar y que pertenecemos a una misma Patria (Ministerio de Defensa Nacional, 1993: 71).

La función militar, en este escenario, es la de generar sincronía entre las instituciones estatales del país (Myr. FFBB. O. Jarrín, 1984). Se reconfirma así su autopercepción como ente coordinador del desarrollo al interior del Estado nacional. El Programa “Alas para la Salud” trabaja coordinadamente con el Ministerio del ramo para brindar “atención de salud a las áreas marginales” o a zonas a las que el resto de instituciones del Estado no logran llegar (Crnl. S.M.S. Av. L. Machuca, 1986: 117). Se propone la participación del Ministerio de Obras Públicas para la construcción de vías de comunicación, que se coordinen y se realicen a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército¹².

Como consecuencia de la derrota del 81 en Paquisha que demanda un mayor control en la frontera Sur y bajo el paraguas de contrarrestar el posible avance del comunismo, las FF. AA. dan prioridad a las zonas fronterizas de las provincias de Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Napo, las cuatro últimas corresponden a la Amazonia, ocupadas ancestralmente por comunidades indígenas. Se propone establecer diálogos interinstitucionales a favor del desarrollo que respeten las formas jerárquicas que operan al interior de la institu-

ción armada; así, los altos mandos canalizarían las propuestas a través del Ministro de Defensa Nacional, hacia los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con el objeto de prevenir cualquier influencia extraña entre los “focos periféricos”, que dadas sus malas condiciones de vida, “pueden revelarse contra la sociedad y el Estado” (Tcnel. de EM. G. Monteverde, 1986: 125). La guerra históricamente ha permitido la militarización de la sociedad ecuatoriana, y los militares no han dejado pasar estas coyunturas para acaparar espacios de participación que legitiman su funcionalidad en el sistema y ante la ciudadanía dadas las necesidades de la defensa.

Una autopercepción mesiánica

Del pensamiento militar irradia una autopercepción de tintes mesiánicos que configura sus actividades como actos de salvataje frente a la situación de desamparo en que viven los indios, “sólo los militares lo han hecho” (Gral. Homero Berrazueta, entrevista de noviembre, 2003) y en calidad de ‘servicio’ a los ecuatorianos. En las poblaciones extremadamente apartadas, muchas veces son los destacamentos militares los únicos medios de unión de sus habitantes con el Estado y con el resto de la sociedad nacional; y solamente a través de los militares la población marginal puede formular sus demandas al Estado.

Uno llega a lugares de tres o cuatro o ninguna casa y poco a poco se forma una población alrededor del destacamento, que trae de todo, y se integra con la sociedad que habitaba allí [...] Los cuarteles atraen a la gente [...] En las zonas de población indígena, éstos también tienden a situarse en torno al cuartel (Gral. Homero Berrazueta, entrevista de noviembre, 2003).

Se consideran los únicos que conocen la verdadera situación de la pobreza ante “la falta de conciencia de la población urbana frente al problema indígena” (Tcrn. L. Burbano 1991: 48). Ante la pobreza que constatan apoyan a los pobladores desde los propios destacamentos y sus niños asisten a las escuelas creadas para los hijos de los soldados acantonados en la zona, estas escuelas tienen maestros militares y lo hacen con un espíritu de solidaridad.

Su intervención, se interpreta como un acto de sacrificio, en el que se resalta que actúan sin presupuesto entregado expresamente para el tipo de tareas en que emprenden, ¿de dónde consiguen entonces

los medios? A decir de uno de sus representantes, a comienzos de la década de 1990, a través de convenios con instituciones estatales o privadas, nacionales y extranjeras (Oficial coordinador de la Brigada Galápagos. Cfr. Falconí, 1991: 70). En todo caso, las prácticas económicas de las FF. AA. no se transparentan, manejadas bajo el secretismo, al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, “Ecuador es el único país en donde aún se excluye al parlamento de sus funciones de legislador y fiscalizador con respecto a los asuntos militares” (García, 2005: 100).

Su intervención en funciones que van más allá de sus tareas defensivas se halla envuelta en todo un discurso a favor de la Patria. El apoyo al desarrollo –función social o acción cívica– adquiere un carácter clientelar-asistencialista que ante la ausencia del Estado, vuelve a las poblaciones dependientes de los servicios de un ejército que toman un corte populista. El asistencialismo es una tendencia de ayuda a quienes lo necesitan que se relaciona con una visión humanitaria (Cfr. Ortiz, 2004) y se explica en el ideario militar a través de lo que se entiende como la “moral militar”, práctica humanista que busca la justicia social: “dar a cada uno lo que le corresponde: justicia conmutativa, distributiva y legal” (Moncayo C., 2000: 46).

Se estima que la justicia es reproductiva de Justicia Social por provenir de la formación y perfeccionamiento militar y que, a más de mostrar una preocupación del ser humano como persona, ha de reflejarse en las obras que realiza (Moncayo C., 2000: 46).

Los militares se sensibilizan cuando, al llegar a los rincones más recónditos del país, constatan las necesidades de la población. En las zonas de frontera, por ejemplo, hasta por sentido común, hacen una aproximación hacia el pueblo. En muchas oportunidades se trata de asentamientos sin ningún tipo de servicio: “Si ese pueblito no tenía médico y nosotros teníamos uno, entonces, íbamos con el médico”. Si bien, su misión específica es la de proteger la frontera, las crecientes necesidades de los ecuatorianos los llevan a asistirlos a través de los medios con los que cuentan. “Traíamos tanqueros de agua desde Arenillas y los compartiríamos con la población civil, desde luego. Eso también es acción cívica” (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003). Ellos mantienen relación con las comunidades amazónicas donde “no entra nadie”, y puede sentirse la pobreza. Estos factores humanizan al soldado frente a las necesidades del resto.

Generalmente, donde se establece un cuartel, también se establece una población, por el desarrollo que esto mismo genera, así como por los beneficios que recibe la gente que se va asentando allí, luz, agua [...] (General en servicio pasivo. Cfr. Falconí, 1991: 83).

Los indios organizados en el discurso militar de las últimas décadas del siglo

El tema de la organización indígena, en la década de los 80, provoca opiniones a favor y en contra. Los shuar que, como se ha detallado ya anteriormente, inician su aglutinación orgánica desde la década de los 60 a instancias de la comunidad religiosa de los salesianos¹³, llaman positivamente la atención de los militares. Desde sus filas critican, por un lado, la posición de este sector de la Iglesia Católica, al tratarse de “sacerdotes ‘progresistas’ más preocupados por los problemas sociales y por las necesidades terrenas de sus fieles que en el gran problema de su salvación eterna” (Mayor FF.BB O. Jarrín, 1984). “Progresismo” que resulta peligroso por su relación con el marxismo, que para ciertos militares es una ideología extraña que puede resultar dañina para los objetivos de la Nación que imaginan.

En contraste, los comentarios favorables a la acción de la Iglesia entre los indios se desprenden de los ‘adelantos’ que los shuar alcanzan gracias a la influencia religiosa, y se reconoce como legítima la organización de este grupo amazónico. Son posiciones que emergen del propio conocimiento militar de la zona oriental y de las necesidades de sus habitantes, en vista del abandono del que han sido objeto históricamente por parte de los poderes centrales o por el Estado, de allí que hubiesen contado con el apoyo de otros organismos como la Iglesia.

Aunque ello no implique que se deje de lado el discurso de su desindianización, se legitima su actitud organizativa desde una visión de nacionalismo multicultural, que plantea el respeto a los rasgos propios de la cultura, dentro de los marcos tolerables, bajo condiciones negociadas que involucran proyectos de desarrollo comunitario, tendientes a conseguir “una vida individual, familiar y social en condiciones dignas de la persona humana” (Propuesta de la Federación Shuar citada por Crnl. J. Andrade, 1984: 36).

Se reconoce que desde el sector armado hubo una actitud de “Dios y Ley”, frente a los indígenas amazónicos que ya no se da; y más

bien se ve la necesidad de que las FF. AA. mantengan una disposición favorable y se las apoye “para el desenvolvimiento de la vida de todos los ecuatorianos que habitan en las inmediaciones de las guarniciones, poniendo a la orden los servicios de que disponen: transporte aéreo, atención médica, etc.” (Crnl. J. Andrade, 1984: 57). Desde el ámbito militar se vislumbra en la participación shuar y en su organización, un medio para difundir la educación cívica entre los indígenas, para conseguir su integración completa a la sociedad nacional, con un esquema en el que los indios puedan mantener sus tradiciones y orientar sus energías hacia su beneficio individual y comunitario.

La racialización de la diferencia como contradiscurso a la organización indígena

Desde el punto de vista de uno de los miembros de la institución castrense, la condición de inferioridad de los indígenas está determinada geográficamente, “el hombre es reflejo de la tierra...” (Tcrn. EM. L. Burbano, 1991: 3)¹⁴. Desde este punto de vista, en la Sierra, la atmósfera rarificada del páramo no favorece el desarrollo mental en toda su amplitud de quienes lo habitan, por ello las facultades cerebrales de los indios de la serranía sólo alcanzan un nivel medio, de donde no han conseguido elevarse (Tcrn. EM. L. Burbano, 1991: 3). Este factor define la condición de deficiencia mental, sumado a la pobre alimentación que consiguen en los páramos, dada la poca productividad de la tierra y la escasez de caza de la zona, que transforman a quien la habita en “un hombre triste por naturaleza”; se organiza en comunidades ante la “imposibilidad de vida individual” por su “precaria vida agrícola” (Tcrn. EM. L. Burbano, 1991: 3). Con un pensamiento positivista que comprueba lo que supone con métodos científicos se avala la condición de inferioridad del Otro, argumento que justifica la acción desarrollista del Ejército en la zonas de páramo y cuestiona las capacidades organizativas de los indios.

Las tierras amazónicas, “pobres para la agricultura pero ricas en caza y pesca”, hacen del hombre “un ente nómada y con tintes especiales” (Tcrn. EM. L. Burbano, 1991: 3). Se trata de “razas primitivas” que después de siglos de conquista mantienen estas características que se han marcado más aún porque en la Colonia vivieron una etapa de “servidumbre y rezago”; en la región amazónica no existieron poblaciones

importantes (Tcrn. EM. L. Burbano, 1991: 5). Todas estas comunidades crecieron aisladas, formaron alianzas, pero no con fines políticos, sino para el intercambio de la producción. Con una comparación entre serranos y amazónicos, los pueblos de la Costa son los únicos que logran, desde esta perspectiva, algún nivel de desarrollo gracias a la cercanía del mar, según se puede notar en las avanzadas técnicas cerámicas que utilizan.

Estos argumentos explican porqué se considera a individuos en tales condiciones de ‘estancamiento racial’, como ingenuos y fácilmente manejables por ideologías extrañas que se aprovechan de la situación en que viven y los involucran en política (Cfr. Tcrn. EM. L. Burbano, 1991: 48). En este sentido la conformación del movimiento indígena se da por esa vía, “si yo tengo hambre, pido comida, qué voy a estar pensando en algo que es un concepto moderno como el de la ecología, entonces hay cosas que no están dentro del problema y entonces se ve muy clara la intromisión...” (Oficial retirado. Cfr. Falconí, 1991: 77-78).

En estas condiciones, mal pueden los indígenas por sí solos formular lo que demandan: que “el gobierno otorgue amplios territorios a varias comunidades indígenas”, que se les permita conducir sus procesos de desarrollo en cuanto a construcción de carreteras, de aeropuertos o la explotación de recursos en sus territorios (Gallardo, 1998: 25). Los indios, desde esta visión, son instrumentalizados por otros grupos con intenciones políticas que despiertan sus pretensiones, así el pensamiento militar proyecta sobre el indio una idea que puede análogarse a la del ‘buen salvaje’:

...seguramente tales pretensiones no se originaron entre los indígenas [...] ¿quiénes entonces las inspiraron y por qué?, es la pregunta que debemos desentrañar, reflexionando a fondo [...] Por supuesto no son los dirigentes indígenas sino varios políticos (Gallardo, 1998: 25).

Para los militares, esta actitud de los indios ‘manipulados’ cuestiona la visión patrimonialista que sobre sí mismas mantienen las FF. AA. al atribuirse el poder de decisión tanto sobre las necesidades de la ciudadanía en general como al interpretar desde su punto de vista particular el sistema democrático, “al considerarse los dirimientes y depositarios últimos del estado de derecho” (Rivera, 2001: 196). Manipula-

dos o no, no se tolera desde el ámbito militar que los indios propongan sus alternativas de desarrollo pues tradicionalmente éstas han sido impuestas por quienes han conducido los destinos del país con base al conocimiento de sus necesidades, de otra forma no serían efectivas.

Nuevamente se puede verificar que en torno al tema indígena no existe una posición monolítica al interior de las FF. AA. y que si existen sectores que consiguen una visión más acotada a la realidad de los indígenas para aquellos momentos, éstos conviven con otros que mantienen la mirada que de los indios se tiene hacia la primera mitad del siglo XX.

Las distintas caras de la guerra

La integración nacional es tomada como un hecho práctico, y para conseguirla, los militares recurren a los medios a su haber, desde los cuarteles se propicia la integración indígena en un plano defensivo; los indios son admitidos a enrolarse en las FF. AA., pueden aspirar a promociones y gozar de los mismos fueros que los uniformados no indios. La Brigada de Fuerzas Especiales de élite del Ejército ecuatoriano, tiene asentado su comando en la provincia de Cotopaxi con el 80% reclutas que vienen de las comunidades indígenas, se aspira de esta manera a que estos sectores se integren a través de las FF. AA. y, no solo la comunidad de la provincia del Cotopaxi, sino todos los habitantes indígenas de la Sierra. Este mayor contacto con los indios permite a las FF. AA. fomentar un “respeto profundo hacia las diferentes comunidades indígenas” (Crnl. Patricio Haro, entrevista de noviembre, 2003). Una vez que los indios integran las filas de las FF. AA., y que han participado en la defensa nacional, también la institución castrense se ha convertido en una instancia de integración en sí misma, ya no sólo a partir del SMO.

Como consecuencia de la derrota que sufren las tropas ecuatorianas en la guerra de Paquisha (1981), desde las FF. AA. se buscan nuevas alternativas que superen la debilidad de la que dan muestras sus estrategias bélicas ya desde el año 41. Se toma como importante la integración en las filas nacionales a los indígenas de la zona que la conocen, y se reactualiza así el mito épico de la defensa de la Patria india frente a los conquistadores por parte de los propios héroes indígenas, cuando se piensa en los guerreros de selva indios, y se plasma en la rea-

lidad el mito heroico de los militares indígenas que dieron sus vidas por salvar el suelo patrio. En este contexto, la relación entre indios y militares tiene cada vez mayor continuidad y ello facilita otro tipo de contactos interétnicos ausentes hasta entonces en la historia nacional.

...en la formación militar, se fomenta el reconocimiento de los valores ancestrales míticos de Atahualpa, de Rumiñahui, de Quisquis, de Calicuchima, vemos que nuestros indígenas fueron gente de mucho honor, de mucha dignidad, que defendieron su suelo ante las invasiones incásica y española, y así empieza, ya no se lo denomina 'indio', sino que se le da un título europeo, que es el de 'General Rumiñahui' [...] estudiamos muchos textos de historia militar y sobre todo, la génesis de la historia militar ecuatoriana, la encontramos en Atahualpa y Rumiñahui (Crnl. Patricio Haro, noviembre, 2003).

En término de tácticas militares, se capta la necesidad de constituir "tropas organizadas, equipadas y entrenadas para combatir en la selva" (Gral. J. Gallardo, 2003: 111); sigue vigente la idea de la 'guerra moderna', expuesta ya por los militares de la primera mitad del siglo XX, cuando se plantea la necesidad de fundir lo militar con lo civil como medio de defensa colectiva de la Nación, y de militarizar a lo civil con fines tácticos. Se fortalece la conciencia en torno a que "La voluntad del pueblo, dispuesta a contribuir de diferentes formas a la Defensa Nacional, debía ser organizada con la debida anticipación" (Gral. J. Gallardo, 2003: 111).

Se dan pasos para formar, de manera sistemática, soldados indígenas, especializados en combate de selva que se agrupan en los Batallones de *Iwias* (diablos de la selva), creados con antelación con soldados no indios. Se integran en este proyecto a indios de distintas comunidades: shuar, achuar y kichwa. Si bien cumplen con la carrera militar y sus condiciones de jerarquía: comienzan como soldados y consiguen los ascensos de acuerdo al conocimiento militar que adquieren, como cualquiera de sus compañeros, lo hacen de forma diferenciada, tanto porque la exigencia académica para ellos es "un tanto diferente", como porque su preparación pone mayor énfasis en las operaciones de guerra en la selva exclusivamente, por sus habilidades ancestrales para sobrevivir en ese medio y desplazarse en él. Pese a ser vistos como soldados excepcionales en unidades este tipo, se recalca en el trato diferenciado que se otorga a los soldados indios una vez en los cuarteles, pues

“su idiosincrasia, con tendencia a una total independencia, requiere de tratamiento especial y acondicionamiento de las normas y reglamentos militares” (Crnl. EM. J. Andrade, 1984: 25).

A los indígenas que no son selváticos, y quieren enrolarse en el Ejército, se les exige el título de bachiller y el cumplimiento del SMO (Gral. José Gallardo, entrevista de noviembre de 2003). A diferencia de los conscriptos kichwa los soldados amazónicos, especialmente los shuar, son valorados por sus destrezas bélicas y el conocimiento del medio selvático, así como por las aplicaciones militares que estas particularidades les otorgan (Selmeski, 2001: 6), así a los primeros se les entrena para los trabajos agrícolas y a los segundos para la guerra. Al interior del cuartel los soldados selváticos son vistos como “guerreros naturales” que forman “un solo cuerpo” con el medio, se cree que estos “nativos” tienen destrezas “parecidas a las de los animales” por la virtud de su condición étnica. Se reconoce como positiva su esencia “salvaje” (vista antes como negativa) y se le dota de una nueva funcionalidad en la medida que justamente aquella se torna condición positiva en cuanto al conocimiento del campo de batalla en el que regularmente habitan, lo cual los vuelve instrumento clave para la defensa en las condiciones bélicas que se producen en la región en disputa (Selmeski, 2002).

Para los indios, desde el pensamiento militar¹⁵, ésta constituye una nueva fase de ciudadanización que los integra de forma más definida¹⁶. Se resalta la buena disposición por parte de los shuar para participar en el Ejército; se reconoce al mismo tiempo, que su intervención en asuntos defensivos les da la posibilidad de sobresalir entre los suyos, de participar en lo que se suele considerar como “una forma ideal de vida [...] la forma de vivir del blanco”, lo cual les confiere “un cierto tono de autoridad de la que se rodean por el hecho de vestir un uniforme” (Crnl. EM. J. Andrade, 1984: 26).

Esta nueva modalidad de participación en la defensa de los indios amazónicos convierte a la guerra, en medio de movilidad social para los indígenas, se replica la idea de las fronteras vivas, pero con una nueva dimensión, si entonces se les entregan tierras, en la guerra se les entregan las armas a quienes dejan de ser vistos como potenciales enemigos. Atribuye, a su vez, a cada individuo una nueva situación de superioridad militar, frente al resto de connacionales y, particularmente, frente a los de su comunidad local, primero porque la propia comunidad los escoge entre “los mejores” y porque las propias FF. AA. reconoce que son “los mejores”.

A raíz de la emergencia internacional de 1981, debido a un acuerdo tomado con el Comando de la Brigada Pastaza, la Federación Shuar, en una demostración de profundo amor patrio, estimuló a sus mejores hombres para que se integren a las filas del Ejército, con el propósito de enfrentar al tradicional enemigo; de estos jóvenes surgió la base para conformar la primera unidad militar de especialistas en la guerra de selva, constituida exclusivamente con indígenas del Oriente Ecuatoriano (Crnl. EM. J. Andrade, 1984: 58)¹⁷.

La noción del “nacionalismo multicultural” (Selmeski, 2002) se expresa claramente en esta estrategia de integración desde una perspectiva triple: seguridad-desarrollo-defensa. Las FF. AA. han manifestado su eficiencia para actuar de esta forma en beneficio de la integración nacional. Se pretende excluir los prejuicios y la discriminación, tanto al interior de los cuarteles como entre la ciudadanía, y reconocer que en lo que constituye la Nación ecuatoriana se habían asentado, ya hace mucho tiempo, sociedades humanas con capacidad de dejarnos una herencia sociocultural que pueda ser fuente de orgullo patrio y fundamento para la construcción de una sociedad vigorosa (Crnl. EM. J. Andrade, 1984). De esta forma, se permite que los shuar pertenezcan a la institución, sin que dejen de lado sus costumbres características “en tanto éstas no afecten la reglamentación vigente o los derechos de sus compañeros de armas” (Tnt. Crnl. J. Andrade, 1984: 64). Se pone en práctica en este sentido, el mismo principio de tolerancia que cuando se permite el uso del *huango* a los soldados indígenas.

También la práctica de las “fronteras vivas”, aunque ya se aplica en épocas anteriores, retoma el tema de la guerra como elemento de integración y se reactualiza en esta década como consecuencia de la guerra de Paquisha. La idea, estimulada por Coronel Gonzalo Barragán¹⁸, deriva de la “Ley de las pausas expansivas de las fronteras naturales”, uno de los principios en que se basa la Geopolítica, en el que se expresa que “las fronteras naturales robustecen al Estado y facilitan su evolución, dándole eficaz protección” (Cpfg. EM. R. Espinosa, 1989: 80). La propuesta se centra en aplicar los principios de la colonización, de la acción cívica y la integración, para la ocupación de zonas de frontera con habitantes de la región¹⁹, a quienes se les entrega en propiedad el pedazo de terreno a donde se trasladan con sus familias, se los capacita militarmente con bases de patriotismo y res-

ponsabilidad cívica y en técnicas agrícolas; se retoman así los elementos propuestos para la conscripción agraria militar (CAME) y el desarrollo comunitario. Se da una simbiosis entre seguridad, desarrollo y defensa de la soberanía territorial, con un elemento más, la integración de los colonos a la sociedad dominante, concretamente a los colonos indígenas²⁰.

El conglomerado humano más apto para desarrollarse en la región Oriental está constituido por los aborígenes y, si de crear fronteras vivas en las zonas más afectadas por del diferendo limítrofe con el Perú se trata, es la comunidad shuar la que debe ser considerada (Crnl. EM. J. Andrade, 1984: 30).

Se acude a la construcción de carreteras en la Amazonia para integrar físicamente al país y fomentar la creación de fronteras vivas. En esta década, las FF. AA. obran de manera que las comunidades indígenas de la Amazonia cuenten con los “elementos necesarios para su desarrollo y comunicación” (Ministerio de Defensa Nacional, 1984: 136).

Utilización de la guerra como instrumento de integración y la presencia de un nuevo actor político

Un nuevo enfrentamiento ecuatoriano-peruano de corte territorial estalla a inicios del 95. La preparación premeditada para la guerra por parte de las FF. AA. luego de la derrota del 81 en Paquisha, da para entonces buenos resultados, el triunfo lo obtiene Ecuador, que cuenta con la participación de soldados indígenas formados a raíz de los enfrentamientos de Paquisha, 14 años atrás. A los *Iwias*, grupos integrados por soldados indios y no indios se les juntan, en esta oportunidad, los *Arutam*, que surgen ya no de la iniciativa oficial, sino de la de los propios indígenas de las etnias shuar, y achuar²¹ quienes se enrolan en el Ejército en condiciones especiales, lo que deja entrever que pese a su aparente apertura frente a los indios, los militares consideran a unos de diferente categoría que otros.

La presencia indígena entre las filas militares confiere a este episodio bélico un carácter pluricultural y multiétnico. Selmeski interpreta este episodio como una reformulación cultural de la nación, a partir de la cual se altera el proyecto mestizo al interior de las FF. AA. y los in-

dígenas son vistos más bien como “ciudadanos étnicos, cuya participación en la defensa no era solamente una aspiración sino como un factor crucial, si la patria debía ser preservada y protegida para las futuras generaciones” (Selmeski, 2001: 4). Este autor concluye que “las semillas del nacionalismo multicultural fueron detectadas al interior de los cuarteles antes de que fueran captadas entre muchos otros segmentos de la sociedad o de las entidades estatales” (2001: 4)²².

A la presencia de soldados indígenas formados militarmente, conocedores de la selva y de las disciplinas de guerra, se atribuye en gran medida, el buen término, para Ecuador, de este incidente bélico. Ello, no solamente eleva la imagen de las FF. AA., sino también la de los indígenas como grupo, lo cual los fortalece y se convierte en una evidencia más de su nivel de integración y de su interés por conseguirlo cuando “defendieron con convicción y entereza el territorio ecuatoriano” (Duchicela, 1995: 75). Expresa un lenguaje compartido en la defensa de una misma Nación, siempre a partir de su adscripción étnica. Desde este discurso se entiende lo multicultural como lo diverso, unido por un nexo nacional “una nación única dispuesta a defender su honor” un honor que se capta como “integración nacional” que parte del respeto a la diferencia étnica (Duchicela, 1995: 75).

Resulta interesante contrastar opiniones, entre 1939 y 1995, en torno a la capacidad de los indios de participar en eventos bélicos y en la defensa nacional. En 1939 se los visibiliza como “incapaces de resistencia moral para un esfuerzo prolongado, serían una tropa inepta para una defensa de larga duración” (Chirboga, L. 1939: 628). Entre tanto, hacia los 90, lo que antes pudo haberse visto como condición de inferioridad pasa a entenderse como habilidad innata que los vuelve aptos para la guerra y por tanto para su integración a la nación, “Utilizan la lanza y las trampas mortales hábilmente diseñadas con gran iniciativa [...] los indios ecuatorianos [...] formaron parte de los batallones de élite para rechazar el ataque de las fuerzas militares peruanas” (Fiallos, A., 1997: 80).

Los shuar simbolizan su milenarismo carácter guerrero que fue ratificado en la defensa nacional contra la agresión peruana” (Fiallos, A., 1997: 80). Esta nueva actitud hacia los indios reviste un “desprecio benigno” (Selmeski 2001: 1), el estereotipo racial que se asigna a varios grupos concebidos como incapaces de colaborar con las FF. AA., pero que irónicamente son reconocidos, en lo posterior, y reclutados por

las mismas razones que antaño fueran rechazados. Cuando se rompe la homogeneidad del actor indio con un funcionamiento orgánico primordial y esencial, ésta queda en entredicho, no obstante que en situaciones dadas, pueda reconstruirse como estrategia. ¿Asistimos, quizá, a una etnización épica?

Indios y militares: los estragos de fin de siglo

La etapa 80-90 representa, para la historia global y nacional, un momento de cambios radicales que coinciden con la finalización de un siglo. En ese momento de ruptura generalizada se inscribe la eclosión del movimiento indio en la escena política ecuatoriana, que recibe una respuesta en tono similar -político- por parte de las instancias de la defensa nacional. La conversión de los indios en un nuevo grupo de presión obliga a los militares a replantear -e incluso a reelaborar- su discurso integrador, que no pierde su carácter de estrategia de la defensa nacional.

El principio de mestizaje, que opera con fuerza durante la dictadura de Rodríguez Lara, pervive con nuevos rasgos a partir de la década de los 80 con otros ingredientes que tienden a una tolerancia limitada frente a las diferencias de los indígenas. Finalmente, el 21 de enero de 2000, los indios organizados encabezados por el presidente de su organización, Antonio Vargas, y los militares, representados por un grupo de coroneles encabezados por Lucio Gutiérrez, aparecen en una acción conjunta en la que defenestran al presidente de turno, episodio que merece ser leído como un acto de cooptación del movimiento indígena por parte de los coroneles que la protagonizan que, a su vez, fuera utilizada por la cúpula militar para defenestrar a Mahuad en respuesta a sus malos manejos de gobierno y a la situación de crisis que viven las FF. AA., luego de la firma del tratado de paz con el Perú.

Tres años después, el 15 de enero de 2003, indios y ex militares consiguen llegar al poder por la vía electoral (Alianza 3-18), gracias a las simpatías que atrae el movimiento indígena visto, por el resto de ciudadanos como posible alternativa a los políticos de siempre y, por parte de Gutiérrez, al prestigio que gana con la caída de Mahuad en enero de 2000. Ya en el poder, el grupo de ex militares no hace partícipes al de los indios de las decisiones del Ejecutivo y rompen esa relación, quedando los segundos al margen y en la oposición, y los prime-

ros, de tumbo en tumbo al tratar de controlar la situación del país, hasta el 20 de abril de 2005, cuando tras días de protesta, protagonizados particularmente por la ciudadanía de Quito, Gutiérrez es descalificado por el Congreso, aunque con argumentos poco convincentes.

Para mantener la línea de análisis del presente trabajo, cabe observar que la caída del gobierno gutierrista es el resultado de una serie de manejos equívocos que caen en las mismas críticas que los militares tejen contra los políticos, el populismo y la oligarquía, desde inicios del siglo XX. Bajo la idea de desplazar a los políticos tradicionales por su incapacidad de gobernar, él y el equipo de militares en servicio activo y pasivo entre los que cuentan muchos de sus familiares y allegados -que ocupan cargos en instituciones clave del Estado como son las aduanas, las de manejo petrolero o las telecomunicaciones-, tampoco dan muestras de brillantez en el ejercicio del poder.

Una vez más, asistimos a un escenario de crisis generalizada: de la política y los actores de la política, de la institucionalidad del Estado a instancias del propio gobierno de turno; por la utilización del populismo bucamista y del PRE por parte de Gutiérrez, cuyo partido conformado por militares coopta el Congreso, acude a recursos populistas para contentar a la población; hace un uso clientelar de las FF. AA. que se prestan a su juego, y salen muy vulneradas en su unidad corporativa, ya en situación endeble desde la firma de la paz con el Perú; arremete contra la institucionalidad del país al cesar a la Corte Suprema de Justicia para acomodar otra que favorece el retorno del ex presidente populista Abdalá Bucaram, defenestrado en el 97 (al igual que él en el 2005); y entre otros errores más, maneja una política entreguista al gobierno de Estados Unidos, del cual se declara el principal aliado y al pago de la deuda externa que va en detrimento de la economía y particularmente de los sectores populares²³.

Por su parte, los indios y su partido Pachakutik dan muestras del debilitamiento que les vale el paso por el poder con más pena que gloria y la CONAIE se halla preocupada en su reorganización interna también lesionada por causas afines, que han diluido el liderazgo social que consiguiera anteriormente. Los indios más bien están dando muestras de su capacidad de gobernabilidad a través de sus representantes en los gobiernos locales. Finalmente, desde una misma lógica defensiva, cabe preguntarse si los militares se suman a las amenazas que se ciernen contra la nación.

Notas:

- 1 El contexto sociopolítico de la época y su desenlace se halla expuesto en el capítulo 4 del presente trabajo.
- 2 Estas entrevistas se reproducen *in extenso* en los anexos a sus tesis de Maestría que reposa en la Biblioteca de la FLACSO, Ecuador (Falconí, 1991).
- 3 Se nota sin embargo, que los discursos de algunos miembros de las FF. AA., el caso de Luis Burbano es uno de ellos, es aún endeble, pues si por un lado ve a la cultura indígena y a los indígenas de la Sierra y Amazonia como primitivos y débiles mentales debido a una suerte de determinismo geográfico, que es la que define su condición de inferioridad, plantea, paralelamente, la necesidad de integración que respete la diferencia y las características propias de la cultura indígena; lo cual resta consistencia a los contenidos de este discurso (Tcrn. L. Burbano, 1991).
- 4 Los militares latinoamericanos realizan hacia los años 60-70 una evaluación del panorama de la historia política del hemisferio y llegan a la conclusión de que la ineptitud y corrupción de los políticos civiles era la causa para la mala situación de los países de la región, por lo cual optan por imponer dictaduras autoritarias (Love-man y Davies, 1997:3).
- 5 Esta afirmación nos remite a la época de la dictadura de los 70 cuando los militares justifican la toma del poder en la falta de atención de los políticos civiles a los problemas de envergadura nacional.
- 6 Es interesante observar que esta parte del discurso militar de la década de los 90 pierde sentido en el 2004, pues los militares se desdicen, cuando proponen se les reconozca el derecho al sufragio, lo cual implica elegir y ser elegidos, hecho que politizaría desembosadamente sus acciones a favor del desarrollo.
- 7 Para los indios, los militares no los consideran peligrosos porque, desde una perspectiva racista, los subestiman y los ven como incapaces de proponer sus propios proyectos (Dirigente de la CONAIE. Cfr. Falconí, 1991: anexos).
- 8 Los levantamientos indígenas son tratados con amplitud en el capítulo 4 del presente trabajo.
- 9 En 1991 se calcula que la población indígena en Chimborazo es del 67.3% y en Bolívar del 80.7%. En las dos provincias asciende a un total de 380.518 habitantes, por ello se escoge a esta zona para que se realice trabajo de apoyo al desarrollo con la población indígena (Tcrn. L. Burbano, 1991: 47).
- 10 En el año 1993, en el contexto de un acuerdo que se firma entre la dirigencia indígena con las instancias pertinentes de las FF. AA. también en el discurso indígena se concibe a los militares como 'pueblo' (Ministerio de Defensa Nacional, 1993)
- 11 En este encuentro propiciado por los militares se sellan acuerdos entre la FE-NOC, el Ministerio de Vivienda y la ESPE, para colaborar con el desarrollo de los indígenas.
- 12 Ya desde la primera mitad del siglo XX el Cuerpo de Ingenieros del Ejército cumple el rol de unir al país a través de vías de comunicación. Son los militares quienes trazan y construyen, a través de esta instancia, las carreteras que van a la Amazonia, dada la importancia que desde el sector armado se concede a esta región (Cfr. Dpto. de OO.PP. militares del MDN, 1946).

- 13 El tema de la organización shuar se trata con mayor detenimiento en el capítulo 3 de este trabajo.
- 14 Guerrero (1994) realiza un análisis de las formas de inferiorización hacia los indígenas que se ejercen desde las élites dominantes no indias.
- 15 El análisis sobre el significado que tiene para los indios su participación en la guerra se analiza con detenimiento en el capítulo 4. En este capítulo, se pone énfasis en lo que los militares opinan sobre ese mismo tema y otros.
- 16 Entre los principios de la Geopolítica consta aquel del Aumento de la Capacidad Ciudadana, entendido como la suma de patriotismo, más cultura, más capacidad militar de un Estado (Cpfg. EM. R. Espinosa, 1989: 79).
- 17 El discurso militar hace uso constante de esta alusión a “los mejores hombres”, cuando se refiere a quienes integran o van a integrarse a la institución armada.
- 18 También se atribuye al Crnl. Barragán la difusión de la idea de la Conscripción Agraria Militar Ecuatoriana.
- 19 Tómese en cuenta que aquí se expone el ideal de esta práctica defensiva, en la realidad no se ubicaron en la frontera sólo a colonos oriundos de la zona, sino también población de otras regiones trasladada hasta estos espacios que no necesariamente fueron indígenas, lo cual trajo tensiones por la colonización de tierras ocupadas.
- 20 Sobre el fomento de fronteras vivas se trata, con mayor detenimiento, en el capítulo 4 del presente trabajo.
- 21 “Integrados por maestros shuar que se unieron para conformar frentes de defensa civil para preservar sus territorios ancestrales, quienes obtuvieron el apoyo y el entrenamiento profesionales (Duchicela, 1995: 75).
- 22 Fueron los propios Arutam quienes escogieron esta denominación. Según Selmeski (2001: 5) este hecho es muy importante desde el punto de vista antropológico porque en la mitología shuar, los Arutam no matan por placer, sino para adquirir poder político y espiritual. Matar a los enemigos peruanos ofrece la posibilidad de adquirir un alma poderosa, acción que cuenta con la aprobación estatal, y no sería castigada, como cuando se daban las guerras intraétnicas, de carácter ritual (Selmeski, 2001: 6).
- 23 Para García (2005: 97) “sus dos años de gobierno fueron todo menos la refundación del país que prometió”.

REFLEXIÓN FINAL

La formación que los militares reciben en el cuartel en calidad de gestores de la defensa nacional define las diferencias que se establecen entre 'lo militar' frente a 'lo civil', que los vuelve un grupo aparte con características definidas entre las que sobresale su espíritu de cuerpo y su dedicación a la nación, que pueden analogarse con un sacerdocio por la patria. La dimensión de la realidad que adquieren a partir de una visión que parte de las necesidades de la guerra: la planificación, la disciplina, la defensa y el ataque, los vuelve proclives a trasladar el campo de batalla a sus relaciones cotidianas con la creación de amenazas y enemigos en situaciones de paz, que pasan a ser parte de su *habitus* y que definen su actuación en las sociedades en las que operan. Para el caso ecuatoriano, esta situación se ve fortalecida por la presencia real del enemigo que se encarna en el Perú, a causa de la falta de la definición de límites territoriales con ese país que se supera sólo a fines del siglo XX.

En el ideario militar, que se analiza en este trabajo, a partir del siglo XX temprano, y que trae a las filas las nociones de la modernidad, se identifica una profunda preocupación por la fragmentación del país, particularmente desde el punto de vista societal. La necesidad de construir una nación poderosa que base su fuerza en su cohesión interna lleva a los militares a la reflexión constante sobre la urgencia de plasmar en la realidad la integración nacional y de implementar estrategias directas con la población que consigan sacar al mundo rural del arcaísmo en el que se halla subsumido, que resta poder a la nación. Desde las FF. AA. se asume ésta como una condición para el ejercicio efectivo de la defensa y por tanto el soldado de la Patria adquiere protagonismo en la consecución del progreso como fuente de poder nacional, con una presencia multifuncional y diversa. El proceso de integración de los in-

dios a la sociedad nacional es parte de uno mayor, relativo a la introducción del país en el *ethos* de la modernización.

La política de seguridad hemisférica que implementa Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, da continuidad al pensamiento militar del período anterior al trasladar el tema de la seguridad interna como prioridad defensiva, frente a los posibles avances del comunismo que podía afincarse en las sociedades atrasadas, especialmente las indígenas en Ecuador. Es entonces cuando las aspiraciones de progreso y desarrollo social de los oficiales 'sigloventino' tempranos se materializan de manera más firme. Tales aspiraciones reciben el aporte de los fondos petroleros y de la cooperación al desarrollo que llega desde Estados Unidos, es decir que la política desarrollista fortalece la integración nacional con una presencia militar fuerte en los períodos dictatoriales y fuera de ellos y es cuando mayor impulso reciben las fórmulas para lograr la organización, educación y formación de líderes entre los indios. Ello constituye el detonante de los resultados posteriores de consolidación del movimiento indígena que se ponen de manifiesto a fin de siglo, es entonces cuando se forja el proceso de movilización indígena y se va conformando una identidad india con relación al Otro (Pallares, 1999: 159).

En estos años, una importante gama de agentes del desarrollo participa en el sector agrario: Iglesia, militares, organismos de cooperación nacionales y extranjeros, la izquierda, el propio Estado y los propios indígenas que se van convirtiendo en agentes activos de su propio desarrollo. El tipo de intervención que aplican estas entidades apunta a dotar a los indios de un perfil acorde con las reformas que se aplican en las bases de conformación agraria. Entre otros resultados, las estrategias implementadas potencian las posibilidades de liderazgo de los habitantes de campo, reorientan y fortalecen sus formas de organización para habilitarlos a funcionar con el orden jurídico dominante; a través de los proyectos de alfabetización amplían sus posibilidades de interlocución con los sectores no indios, que se fortalecen en lo posterior con la apertura a la educación superior en centros de estudio tanto civiles como militares; en definitiva, se auspicia su autonomía con respecto al sistema de hacienda para que pase a integrarse, al igual que el resto de ecuatorianos, a un proyecto que se perfila como nacional, en lo que tiene que ver con la relación de los indios con el Estado.

Los militares, por su parte, consiguen en estas coyunturas niveles de hegemonía en la consolidación de su proyecto integracionista, una vez que se articulan con el resto de agentes del desarrollo y generan con ellos relaciones de sinergia funcional, cuentan con una serie de ventajas comparativas, que fortalecen su capacidad de direccionar el proceso: tienen un proyecto nacional que busca generar la nación unitaria como objeto de defensa, lo cual los reviste de legitimidad ante el resto de la sociedad; ocupan el Poder Ejecutivo en esas coyunturas, y ello les abre la posibilidad de dar la suficiente apertura para que todos los involucrados actúen. La continuidad de sus prácticas les posibilita controlar el proceso y adaptarlo, según las necesidades del momento, pero sin perder de vista el proyecto inicial, hecho que les confiere protagonismo y les permite consolidar su propuesta con base en sus intereses. A partir de la defensa de la democracia, como mediadores de las crisis políticas o como sustitutos de las formas de actuación inoperante de las élites civiles, los militares han funcionado, en Ecuador, como una expresión de la política de acción y de intención de los intereses corporativos.

El énfasis desarrollista en Ecuador, permite otro tipo de actitud de las FF. AA., que apuntan a crear distintas formas de construcción de ciudadanía que provocan la eclosión de nuevos actores políticos: indígenas, grupos de artesanos, trabajadores, peones del campo, pequeños propietarios y pequeños industriales que se organizan, y dan lugar al apareamiento de nuevos grupos políticos. Son estos factores que marcan las diferencias de forma y fondo de las FF. AA. ecuatorianas con respecto a las de otros países, y con respecto a un esquema anticomunista de la Guerra Fría, que si bien busca imponer las decisiones de Estados Unidos, éstas se readecuan en función de las necesidades políticas y los esquemas sociales y culturales configurados históricamente en el espacio nacional, adaptados al horizonte social y simbólico en donde se desarrollan, con sus versiones propias sobre el patriotismo que se generan en el mundo militar.

La posición a la defensiva de los militares durante la primera mitad de los noventa frente a las propuestas tomadas inicialmente como separatistas de los indios organizados, equivale a su etapa de reconocimiento del terreno en una analogía con el campo de batalla. Su primera respuesta tiende al rechazo de la propuesta indígena porque aún no logran visualizarla y porque de parte de los indios también se trata de

una idea en trance de elaboración. La forma en que los militares captan el mensaje de las nacionalidades indígenas, resulta atentatoria contra la nación única como su fundamento institucional y por los peligros que emanan desde el discurso indio en torno a la autodeterminación de los pueblos. La respuesta militar inicial materializa sus propios temores que generan imágenes fantasmagóricas, ante una posible interpelación a su fuente de poder, la nación unitaria, algo así como que sacan sus 'cucos'. Sin embargo, conforme se suceden los hechos, la reacción toma distintos matices, cuando de uno y otro lado se van consolidando sus propias identidades, mientras se depura este proceso desde un plano eminentemente político y con lenguajes que tienden a tomar derroteros comunes. Así, podría decirse que la confusión inicial cae en el campo de la semántica entre la Nación/Patria de los militares y las nacionalidades indígenas de los indios organizados que busca respuesta en la unidad en la diversidad en la construcción de un imaginario nacional.

Con un esquema épico de la realidad, cuando los indios amazónicos dejan ver que la integración estaba dada y que podían defender a una misma patria, al formar parte de los soldados que resguardan la soberanía territorial en la guerra del Cenepa, los indios se insertan como peón semiótico, que se adapta a los afanes conceptuales y filosóficos del deber ser militar. Si bien los indios se ciudadanizan como soldados, al mismo tiempo, la existencia del actor indígena se vuelve conflictiva, según lo revela el propio discurso militar. De acuerdo a la estrategia y a la táctica que se empleen para el cumplimiento de los objetivos nacionales permanentes, la existencia del actor indígena se proyecta, en la práctica, en una doble situación y puede constituir aliado o enemigo. Se desprende de lo anterior, que las acciones políticas de los militares, desde su particular punto de vista, no están atravesadas por los tamices del muñequero político de los políticos y / o de la oligarquía, sino por la ética implícita y explícita en la estrategia y táctica empleadas que apuntan a alcanzar los objetivos nacionales permanentes.

La integración indígena por la vía política puede darse en la medida que desde este sector se consigue la construcción de un proyecto de inserción propio en la sociedad dominante, que se perfila como tal porque ellos piden ser quienes controlen sus demandas y las regulen; sin embargo, la política de la diferencia a la que apelan confluye con la propuesta de los no indios que al homogeneizarlos les dan un trato diferenciado con límites impuestos por ellos que incluyen lo

que se adapta a su esquema y desechan lo disfuncional. Indios y no indios demuestran compartir una misma matriz en lo que a su cultura política se refiere.

Cuando los indios se involucran en la pugna por el Ejecutivo de forma intempestiva, en el 2000, y por la vía democrática en el 2002, lo hacen con sus “aliados históricos”. Esta relación de larga data, más cercana que distante y en constante negociación, adquiere una nueva dimensión. En esta medida, ni los indios arrastran a los militares ni viceversa; son dos fuerzas en pos del poder con sus propios intereses en una alianza coyuntural, como lo prueba poco tiempo después la marginación de la que son objeto los representantes de los indios en el poder, cuando luego del triunfo electoral en el 2002 comparten el Ejecutivo. La alianza 3-18 puede ser vista como una forma de utilización situacional de los distintos actores que, a diferencia de aquellas acciones que están dentro de la exclusiva potestad militar, no son proyectadas a la luz pública, en donde pueden atravesarse la aprobación o la censura. Así, se devela una tradicional práctica política de la institución militar en sus diferentes instancias de decisión que ha estado atravesada por la discreción y el secreto militares y por formas de acción autónomas que forman parte del funcionamiento institucional.

Sin embargo, la alianza 3-18, pese a que aspira a encarnar una suerte del pensamiento político militar, no representa políticamente a esta institución, pues el partido no está atravesado por los exclusivos intereses de los ex miembros de las FF. AA, quienes una vez fuera de sus filas, pierden injerencia y sobre todo autoridad, entre los distintos miembros del orgánico funcional castrense; de hecho, las alianzas con otros partidos políticos así lo demuestran.

En este juego de contradicciones, sería equívoco pensar que las FF.AA, como institución, entran en política a través de la participación de Gutiérrez y sus aliados en el Poder Ejecutivo; sin embargo, la condición de militar de Gutiérrez sí puede traer un peligro de desgaste de la imagen militar, habida cuenta, entre otras causas, que la relación de Gutiérrez con el movimiento indígena sí nace de un contacto entre indios y militares y que su triunfo electoral es el resultado de la presencia indígena en las elecciones del 2002. Todo ello muestra que a fin de siglo, se verifican reajustes en una relación histórica que toma nuevas características, muchas de ellas insospechadas, habida cuenta de la linealidad que había mantenido a lo largo del tiempo.

El tema de la participación de los militares en ámbitos que superan aquello que compete a sus obligaciones tradicionales, la defensa del frente externo y el control del orden interno -en ocasiones específicas- forma parte consubstancial del proceso de conformación de la cultura política ecuatoriana y debe ser visto como tal; sin embargo, existe a este respecto un doble discurso que emana tanto a la población civil como de los propios militares. En el primer caso, si bien las élites políticas civiles son las primeras en demandar el cumplimiento de los límites del ámbito de participación castrense, también han sido ellas las primeras en estimular el irrespeto a estos límites, al solicitar la intervención castrense en situaciones de conflicto, como lo muestra la toma de posición conjunta entre los indios encabezados por el Presidente de la organización que los aglutina la CONAIE y el grupo de coroneles el 21 de enero de 2000. Los militares por su parte, expresan a través de su discurso, la necesidad de justificar su presencia en actividades que no son parte de sus obligaciones netamente profesionales, y argumentan a favor de la aceptación de esta intervención que, de todas formas, no deja de ocurrir.

Queda decir por último que el tema de la presente investigación, deja abiertas otras puertas de entrada para la profundización de la historia de la participación de las FF. AA. en Ecuador. Pese a que, como pretende probar el presente trabajo, su intervención en los procesos de modernización del país es indiscutible, el pensamiento militar, en general, tampoco su concepción sobre el Otro han sido objeto de estudio específico, salvo raras excepciones. No se ha rebuscado en ese ideario, la nación que imaginan los militares que actúan con anterioridad a las dictaduras del período desarrollista o la ubicación que quieren para el indio, ni en esa ni en otras coyunturas. Cabe cuestionarse esta ausencia, más aún si se toma en cuenta la continua participación de los militares en política en Ecuador desde su nacimiento como República, que pese a que no consta entre los hechos admitidos desde el deber ser, constituye una constante en nuestra historia.

Se abren, así mismo, muchas otras perspectivas de análisis relacionadas con las conexiones entre las FF. AA. y otros gestores del desarrollo, como la Iglesia o la izquierda, en distintos momentos de la historia nacional, que resultan sugerentes temas de estudio.

BIBLIOGRAFÍA

Abrahamsson, Bengt

1972 *Military professionalization and political power*. Beverly Hills: Sage.

Adams, A.

1993 "Dyke to dyke: ritual reproduction at US men's military college". *Anthropology today* 9 (5): 3-6.

Alfaro, Fernando. Cptn. de Cbta.

1971 "Participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo socioeconómico del Ecuador". *Revista de las Fuerzas Armadas* N. 44. Quito: Ministerio de Defensa Nacional

Almeida, José

1990 "Luchas campesinas del siglo XX". En Enrique Ayala, edit. *Nueva Historia del Ecuador* vol. 10. Quito: Corporación Editora Nacional/Grijalbo.

Almeida, Ileana

1984 "Cultura nacional. Cultura nacional popular. Culturas nacionales oprimidas". *Cultura* 18a. Quito: Banco Central del Ecuador.

Altamirano, Hernán. Tnte. Crnl.

1999 "La identidad histórica del Estado ecuatoriano y sus Fuerzas Armadas jamás pueden rescribirse". *Tarqui: Fuerza Terrestre* 4:18-1.

1991 "El imperio de los Incas". En *El porqué del ávido expansionismo del Perú*. Quito: IGM.

Anderson, Benedict

1991 *Comunidades imaginadas*. México: Fondo de Cultura Económica.

Andrade, Xavier y Fredy Rivera

1991 "El movimiento campesino e indígena en el último período: fases,

- actores y contenidos políticos”. En Enrique Ayala, ed. *Nueva Historia del Ecuador* vol. 11. Quito: Corporación Editora Nacional/Grijalbo.
- Arcos, Carlos
 1984 “El espíritu de progreso: los hacendados en el Ecuador del 900”. *Cultura* 19: 107-134. (Mayo-agosto). Quito: Banco Central del Ecuador.
- Arditi, Benjamín
 2000 “El reverso de la diferencia”. En Benjamín Arditi, ed. *El reverso de la diferencia. Identidad Política*. Caracas: Nueva Sociedad.
- Argones, Nelson
 1985 *El juego del poder de Rodríguez Lara a Frebres Cordero*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Arkin y Dobrofsky
 1990 “Military socialization and masculinity”. En Cancian y Gibson, comp. *Making War making peace*. Wadsworth: Publishing Company.
- Armendáriz, Publio
 1990 “A propósito del levantamiento indígena y la celebración de los 500 años del descubrimiento de América”. *Revista de las Fuerzas Armadas* (octubre). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Asamblea Nacional Constituyente
 1998 *Constitución Política de la República del Ecuador*. Quito: s/e.
- Aulestia Mier, Víctor. Gral. de Div. (r)
 1972 “Seguridad Nacional”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 45. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
 1971 “La política de Seguridad Nacional”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 44. Quito: Ministerio de Defensa Nacional
 1969 “Aspectos generales de la Seguridad Nacional”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 38. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Auyero, Javier
 2003 “Repertorios insurgentes en Argentina contemporánea”. *Iconos* 15: 44-61. Quito: FLACSO.
- Ayala, Enrique
 1994 *Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana*. Quito: CEN- Tehis.
 1982 *Lucha política y origen de los partidos políticos en el Ecuador*. Quito: Ediciones de la Universidad Católica.
 1983 “De la Revolución Alfarista al Régimen Oligárquico liberal”. *Nueva Historia del Ecuador* tomo 9. Quito: CEN-Grijalbo.

- Balladares, Hugo
1991 “El movimiento indígena en el Ecuador”. *Revista de las Fuerzas Armadas* (febrero). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Barrera, Augusto
2000 “Acción colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriano en los 90”. (Ponencia preparada para el Encuentro de Historia y Realidad Nacional del Ecuador y América Latina). Cuenca (mimeo).
- Barsky, Osvaldo y otros
1982 *Políticas agrarias, colonización y desarrollo rural en Ecuador*. Quito: CEPLAES.
- Bayas, Víctor
1994 “Nuevos retos a la seguridad nacional: visión estratégica”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 111.
- Ben Ari, Eyal
2002 “The Military, Anthropology and Organizational Culture” en: *Mastering soldiers: Conflict, Emotions, and enemy in an Israeli Military Unit*. New York: Berghahn Books.
- Borja, Iván
2000 “Los militares ecuatorianos y la sociedad”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 128 (mayo). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Bourdieu, Pierre
1994 *El sentido práctico*. Madrid: Taurus.
- Bretón, Víctor
2001 *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes Ecuatorianos*. Quito: FLACSO.
- Burbano de Lara, Felipe
2000 “La producción de lo étnico en Ecuador”. En Fernando García, coord. *Las sociedades interculturales: un desafío para el siglo XXI*. Quito: FLACSO/ IBIS.
- Bustamante, Fernando
2003 “Tensiones en la relación civil-militar en el Ecuador del siglo XXI”. *Univérsitas* 3 (septiembre). Quito: Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador.
2002 “La crisis de profesionalismo militar”. *Mundo Diners* 240. Quito: Dinediciones.
2001 “Economía política y economía moral: reflexiones en torno a un levantamiento”. *Ecuador Debate* 52. Quito: CAAP.
2000 “¿Y después de la insurrección qué...?”. *Ecuador Debate* N. 49. (abril). Quito: CAAP.

- 1999 "Las FF.AA ecuatorianas y la coyuntura político-social de fin de siglo". En Rut. Diamint, comp. *Control Civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias latinoamericanas*. Buenos Aires: Grupo editor latinoamericano.
- 1998 "Democracy, civilizational change and the Latin American Military". En Felipe Agüero y Jeffrey Stark. *Fault Lines of Democracy in Post-Transition Latin America*. Miami: North South Center Press, University of Miami.
- 1996 "Fuerzas Armadas, democracia y ciudadanía: una reflexión preliminar". En *Fuerzas Armadas, Desarrollo y Democracia*. Quito: Abya-Yala, CELA, Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre.
- 1993 "Algunas reflexiones en torno a las raíces de la escisión cultural entre civiles y militares en América Latina y en el Ecuador" (mimeo).
- 1992 "La crisis del profesionalismo militar". *Mundo Diners* 240: 22.
- 1991 "Economía política y economía moral". *Ecuador Debate* 52. Quito: CAAP.
- 1988 "Fuerzas Armadas en Ecuador: ¿puede institucionalizarse la subordinación al poder civil?". En *Democracia y Fuerzas Armadas en Sudamérica*. Quito: CORDES. Pp. 129-160.
- 1986 "Los paradigmas en el estudio del militarismo en América Latina". Documento de Trabajo Progrmama FLACSO-Santiago de Chile.
- Calhoun, Craig
- 1999 "El problema de la identidad en la acción colectiva". En Javier Auyero, ed., *Caja de herramientas*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Cárdenas, José Corsino
- 1958 "Reforma agraria y desarrollo económico en el Ecuador". *Boletín Trimestral de Información Económica* N. 36-37. Quito: Facultad de Ciencias Económicas e Instituto de Investigaciones Económicas de la U. Central.
- Cardoso, Byron
- 1991 "El panorama mundial contemporáneo (1960-1988)". En Enrique Ayala, ed. *Nueva Historia del Ecuador* vol 11. Quito: Corporación Editora Nacional / Grijalbo.
- 1990 "Marco internacional de los años veinte a los sesenta". En Enrique Ayala, ed. *Nueva Historia del Ecuador* vol 10. Quito: Corporación Editora Nacional / Grijalbo.
- Carrera, Raúl
- 1997 "Los temas de seguridad en la política exterior del Ecuador: Fragmentación de la nación, el Estado y el sistema internacional" (mimeo).

- Castro Jijón, Ramón, Capt. de Navío
1963 “Discurso”. *Revista del Consorcio de Centros Agrícolas de Manabí* N. 104. Portoviejo
- Cervone, Emma
1999 “Introducción”. En Emma Cervone y Fredy Rivera, eds. *Ecuador Racista*. Quito: FLACSO.
- Chacón, Galo
1994 *Rumiñahui y la batalla de Tiocajas*. Quito: Dirección de operaciones del Ejército.
- Chancoso, Blanca
2000 “Aportes a la discusión”. En Fernando García, coord., *Las sociedades interculturales: un desafío para el siglo XXI*. Quito: FLACSO/IBIS.
- Chiriboga, Ángel Isaac
1939 “Ejército y Marina del Ecuador”. En J. Gonzalo Orellana. *El Ecuador en cien años de independencia 1830-1930*. Quito: Editorial Salesiana.
- Chiriboga, Leonardo
1939 “Problema del indio examinado desde el punto de vista de la organización militar”. Quito: Ministerio de Previsión Social.
- Chiriboga, Manuel
1987 “Movimiento campesino e indígena y participación política en Ecuador: la construcción de identidades en una sociedad heterogénea”. *Ecuador Debate* 13. Quito: CAAP.
1982 “La pobreza rural y la producción agropecuaria”. En Sohel Riffka, coord. *Ecuador: el mito del desarrollo*. Quito: El Conjeo/ILDIS.
- Clausewitz, Karl von
1973 *De la guerra*. México, Diógenes ed. S.A.
- Connor, Walker
1998 *Etnonacionalismo*. Madrid: Trama editorial.
- Coral, Héctor
1988 *Alberto Enríquez Gallo*. Quito: Banco Central del Ecuador.
- Cuesta, Salomón
2002 “Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas: una visión especular de la Identidad”. (Monografía presentada para el curso Fuerzas Armadas Latinoamericanas una visión sociocultural. Maestría en Ciencias Sociales con mención en Antropología – FLACSO, Ecuador (2000-2002).
- Cuesta, Salomón y Desider Gómez
2000 *La situación de las minas antipersonales en el Ecuador*. Quito: FLACSO-Landmines Monitor.

Cueva, Agustín

- 1991 “El Ecuador de 1960 a 1979”. En Enrique Ayala, edit. *Nueva Historia del Ecuador* vol. 11. Quito: Corporación Editora Nacional / Grijalbo.
- 1990 “El Ecuador de 1925 a 1960”. En Enrique Ayala, ed. *Nueva Historia del Ecuador* vol. 10. Quito: Corporación Editora Nacional/ Grijalbo.
- 1981 *El proceso de dominación política en Ecuador*. Quito: Editorial Alberto Crespo Encalada.
- 1976 “La crisis de los años 60”. En *Ecuador pasado y presente*. Quito: Instituto de Investigaciones Económicas.

Dávila Flores, Luis E., Tcnrl. Ing.

- 1971 “Informativo de la Dirección General de Acción Cívica de las FFAA, en relación a las actividades que realiza en beneficio de las comunidades ecuatorianas”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 42. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.

Dávila Loor, Jorge

- 2000 “El salto al vacío y el asalto al cielo. Reflexión sobre los acontecimientos del viernes 21 y sábado 22 de enero de 2000”. *Ecuador Debate* 49. (Abril). Quito: CAAP.

De la Peña, Guillermo

- 1999 “Territorio, ciudadanía étnica en la nación globalizada”. *Desacatos*. (Primavera). México D.C: Ciesas/Sep/CONACYT.

De la Torre, Carlos

- 2003 “Movimientos étnicos y cultura política en Ecuador”. *Iconos* 15. Quito: FLACSO.

Departamento de Obras Públicas Militares

- 1946 *Inauguración de la carretera al Puyo*. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.

Diamint, Rut

- 1999 “Las relaciones cívico-militares en las nuevas democracias de América Latina”. En R. Diamint, ed., *Control civil y Fuerzas Armadas en las nuevas democracias latinoamericanas*. Buenos Aires: Universidad Torcuato di Tella.

Díaz Polanco, Héctor

- 1998 “La autonomía, demanda central de los pueblos indígenas”. En V. Alta, D. Iturralde y M.A. López-Bassols, comp. *Memoria del coloquio Pueblos indígenas y Estado en América Latina*. Quito: Abya-Yala.

Dieterich, Heinz

- 2000 “Introducción”. En *La cuarta vía al poder, el 21 de enero desde una perspectiva latinoamericana*. Quito: Abya-Yala.

- Dirección de Industrias del Ejército S.A.
2003 *30 años*. Quito: Holding DINE S.A.
- Dirección de Inteligencia de la Fuerza Terrestre
1998 “Plurinacionalidad y territorialidad”. *Tarqui: Fuerza Terrestre* 3 (3).
- Dobronsky, Fernando
2000 “Objetivos nacionales permanentes”. *Revista de las Fuerzas Armadas del Ecuador*, 129. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Dobronsky, Fernando Crnl.
1971 “Valores de una sociedad”. *Revista de las Fuerzas Armadas*, 44. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Dos Santos, Theotonio
1999 “La Teoría de la Dependencia: un balance histórico y Teórico”. En Francisco López, ed. *Los retos de la globalización. Ensayos en homenaje a Theotonio dos Santos*. UNESCO.
- Duchicela, L.
1995 “El conflicto como un ejemplo de integración pluricultural en defensa de la integración nacional”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 114. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Endara, Lourdes
1999 “Ciudadanos vs. caníbales: la construcción de la identidad Mestiza”. En Emma Cervone y Fredy Rivera, eds., *Ecuador racista, imágenes e identidades*. Quito: FLACSO.
1998 *El marsiano de la esquina. Imagen del indio en la prensa ecuatoriana durante el levantamiento de 1990*. Quito: Abya-Yala.
- Enloe, C.
1994 “The military uses of ethnicity”. *Millenium* 4 (3): 220-234.
- Escalante, Fernando
1992 *Ciudadanos imaginarios*. México: El Colegio de México.
- Escudé, Carlos
1999 “Nacionalismo territorial argentino”. *Journal of Latinamerican Studies* 29.
- Espinosa, Simón
1998 *Presidentes del Ecuador*. Guayaquil: Editores Nacionales S.A.
- Espinosa, Raúl. Cps. EM.
1989 “Consideraciones geopolíticas a la realidad ecuatoriana”. *Revista de las Fuerzas Armadas*. (Octubre). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
1986 “Editorial”. *Revista de las Fuerzas Armadas* N.4. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.

- Falconí, Fidel
 1991 “Fuerzas Armadas y movimiento indígena: la visión de las Fuerzas Armadas sobre el problema indígena en el Ecuador”. (Tesis para la obtención de la Maestría en Ciencias Políticas). Quito: FLACSO.
- Fiallos, Alfredo. Gral.
 1997 “Los Arutam en el conflicto del Alto Cenepa”. *Tarqui: fuerza terrestre*. Quito.
- Fitch, John Samuel
 1988 “Hacia un modelo democrático en las relaciones civiles-Militares”. En *Democracia y Fuerzas Armadas en Sudamérica*. Quito: CORDES.
 1977 *The military coup d'Etat as a political process. Ecuador 1948-1966*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Foucault, Michel
 1988 *La arqueología del saber*. Madrid: Sigloveintiuno editores.
- Frank, Wilson
 1993 “Neocorporativismo y auge de los nuevos movimientos sociales”. En Dalton Kuechner, comp., *Los nuevos movimientos sociales*. Valencia: Ediciones Alberto de Magnanim. Pp. 101-122.
- Friedman, Jonathan
 1994 *Cultural Identity and Global Process*. London: Sage Publications.
- Galindo, Luciano
 1995 *Diccionario de Sociología*. Madrid: Siglo XXI.
- Gallardo, José. Gral. del Ejército (r)
 2003 “El Ejército: de Paquisha al Alto Cenepa”. *Presencia* 19. Quito: Asociación de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
 1999 “Apoyo de las Fuerzas Militares en el desarrollo económico-social de las naciones”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 124. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
 1998 “Nación ecuatoriana o Plurinacionalidad”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 123. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Gándara, Marcos. Gral. (r).
 1980 “Los militares y la política en el Ecuador”. En Luis Mora, coord. *Política y Sociedad*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- García, Bertha
 2005 “El 20 de abril: presente y pasado de un proyecto militar Corporativo”. *Iconos*, N. 23: 93-100. Quito: FLACSO, Ecuador.
 2003a “¿Por qué no prospera al diálogo civil-militar en el Ecuador?” *Universitas* 3 (septiembre). Quito: Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador.

- 2003b “Los militares no comprenden lo complejo de la vida civil”. *Diario El Comercio*. (2 de febrero).
- 2002 “El carnavalazo”, en *Vistazo* 828: 34-39. Guayaquil: Editores Nacionales S.A.
- 1999 “¿Qué esperamos hoy de las Fuerzas Armadas ecuatorianas?” *Aportes para la paz* 9: 23-34.
- 1997 “El concepto de seguridad interna en el marco de las relaciones sociales-Fuerzas Armadas”. En *Diálogo civil-militar*. Quito: PUCE.
- 1996 “Fuerzas Armadas, soberanía y seguridad nacional en Ecuador”. En *Fuerzas Armadas, desarrollo y democracia*. Quito: ILDIS, CELA, Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre.
- 1991 “El Estado y las FFAA”. *Ecuador Debate* N. 24. Quito: CAAP.
- 1994 “Las dimensiones societales de la reconversión militar en el Ecuador”. *Ecuador Debate* N. 32. Quito: CAAP.
- 1989 “Autonomía militar y democracia”. *Ecuador Debate* 17. Quito: CAAP
- 1987 “Militares, economía y lucha política: Ecuador en los años 70”. (Tesis para la obtención de Maestría, Colegio de México) Quito: CONUEP/PUCE.
- García, Fernando
- 2000 “Introducción”. En Fernando García, coord., *Las sociedades Interculturales: un desafío para el siglo XXI*. Quito: FLACSO/ IBIS Dinamarca.
- Gellner, Ernest
- 1988 *Naciones y nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gill, L.
- 1977 “Un día en el cuartel”. *Cuadro Intermedio* N. 42.
- Gobierno Revolucionario y Nacionalista del Ecuador.
- 1972 *Filosofía y Plan de Acción*. Quito.
- Goffman, Erving
- 2001 *Internados*. Buenos Aires: Amorrortu.
- González A., Raúl. Gnrl. (r)
- 1982 “Seguridad Económica”. *Revista de las Fuerzas Armadas* (Julio). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- González A., Raúl. Tcnrl. EM.
- 1971 “Contrainsurgencia y comunismo”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 42. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- González Suárez, Federico.
- 1881 “Discurso pronunciado el 10 de agosto de 1881 en la Catedral de Quito”. Quito.

- 1904 “Discurso pronunciado el 10 de agosto de 1904 en la Catedral de Ibarra”. Quito.
- [1911] 1980 “Quinta instrucción pastoral sobre la evangelización a los indios, en Enrique Ayala, ed. *Federico González Suárez y la polémica sobre el estado laico*. Quito: CEN-BCE.
- 1913 *Elementos de historia general de la República del Ecuador*. Quito: Pensionado Elemental Pedro Pablo Borja Yerovi.
- Gorman, Stephen M.
- 1997 “Antipolitics in Peru”. En B. Loveman y T. Davies. *The politics of antipolitics*. Wilmington: SR Books. Pp. 300-326.
- Gross, Christian
- 2000 *Políticas de la etnicidad: identidad, Estado y modernidad*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Guerrero, Andrés
- 2000 “El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventriloquía y transescritura”. En Andrés Guerrero, comp. *Etnicidades*. Quito: FLACSO/ILDIS.
- 1998 “Ciudadanía, frontera étnica y binaridad compulsiva. Notas de lectura de una investigación antropológica”. En Cristóbal Landázuri N., comp.; *Memorias del Primer Congreso Ecuatoriano de Antropología*. Quito: Depto. Antropología PUCE/ Asociación Escuela de Antropología PUCE/ Marka.
- 1995 “El levantamiento nacional de 1994: discurso y representación política”. *Memoria 5*. Quito: Marka.
- 1994 “Una imagen ventrílocua: el discurso liberal de la ‘desgraciada raza indígena’ a fines del siglo XIX”. En Blanca Muratorio, ed. *Imágenes e imagineros*. Quito: FLACSO.
- 1983 *Haciendas, capital y lucha de clases andina*. Quito: El conejo.
- Guerrero, Carlos A. Cptn.
- 1924 “Función social del Oficial”. *El Ejército Nacional* 18. Quito.
- Guevara V., Arturo. Tnte. Plto. Avc.
- 1967 “La Cooperativa de Producción Agrícola de Ahorro y Crédito ‘Taura’”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 2. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Gupta, Akhil y otros
- 1997 “Beyond ‘culture’, space, identity and the politics of Difference. En Akhil Gupta y James Ferguson, ed. *Culture, power, place: explorations in critical anthropology*. N.Y.
- Haro, Patricio. Crnl. EM.
- 1997 *La influencia del poder militar en la historia del Ecuador*. Quito: s/e.

- Hepple, L.
1992 "Methaphor, geopolitical discourse and Military in South America".
En Brines y Duncan, comp. *Writings World*. Londres: Routledge.
- Hernández, José y otros
2000 *21 de enero, la vorágine que acabó con Mahuad*. Quito. C.A. El Comercio.
- Hobsbawm, Eric
1994 "Identidad", en *Revista internacional de filosofía política* 3. Madrid:UNED.
1991 "Inventando tradiciones". *Memoria* 2 (2). Quito: Marka.
- Huntington, Samuel P.
1995 *El soldado y el Estado*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
- Hurtado, Osvaldo
1988 "Introducción". En *Democracia y Fuerzas Armadas en Sudamérica*. Quito: CORDES.
1977 *El poder político en el Ecuador*. Quito: Educ.
- Ibarra, Alicia
1987 *Los indígenas y el Estado en Ecuador*. Quito: Abya-Yala.
- Ibarra, Hernán
2002 "El triunfo del General Gutiérrez y la alianza indígena-militar". *Ecuador Debate* 57. Quito: CAAP.
2001 "Caducidad del Estado nacional, demandas étnicas y conflicto regional, entrevista a Andrés Guerrero". *Ecuador Debate* 52. Quito: CAAP.
1998 *La otra cultura. Imaginarios, mestizaje y modernización*. Quito: Marka/Abya-Yala.
1995 "Los movimientos étnicos y la definición de las relaciones indígenas-estado en Ecuador y México". Papeles de trabajo. Madrid: Instituto Ortega y Gasset.
- Isaacs, Anita
1993 "Military, rule and transition in Ecuador 1972-1992". Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh Press.
- Iturralde, Diego
2000 "Aportes a la discusión". En Fernando García, coord., *Las sociedades interculturales: un desafío para el siglo XXI*. Quito: FLACSO/IBIS.
- Jaffrelot, Christophe
1993 "Los modelos explicativos del origen de las naciones y el nacionalismo. Revisión crítica". En Gil Delannoi y Pierre-André Taguief, comp. *Teorías del nacionalismo*. París: Kimme.
- Jaramillo, Raúl. Vcalm.
2003 "Aniversario de la Asociación de Generales y Almirantes". *Presencia*

19. Quito: Asociación de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
- Jarrín M., Oswaldo. Mayor FF.B.B.
 1984 “Las Fuerzas Armadas, nervio del desarrollo, frente a un enemigo común de Latinoamérica”. *Revista de las Fuerzas Armadas*. (Febrero). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Jenkins, Craig
 1994 “La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales”. *Zona abierta* 69. Madrid.
- Jijón y Caamaño, Jacinto
 [1929] 1980 “El alma religiosa de la Patria”. En Ricardo Muñoz comp. *Política Conservadora*. Quito: BCE-CEN.
- Karakras, Ampam
 1984 “Las nacionalidades indias y el estado ecuatoriano”. *Cultura* 18a. Quito: Banco Central del Ecuador.
- Katz, P.
 1990 “Emotional Metaphors, socialization and roles of drill sergeants”. *Ethos* 18: 457-480.
- Keegan, John
 1993 *A history of warfare*. New York: Vintage books.
- Kimlicka, Bill
 1996 *Ciudadanía multicultural: una teoría liberal de los derechos de las Minorías*. Buenos Aires: Paidós.
- Laclau, Ernesto
 1990 *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe
 2000 “Posición de sujeto y antagonismo: la plenitud posible”. En Benjamín Arditi, ed. *El reverso de la diferencia. Identidad y política*. Venezuela: Nueva Sociedad.
- Larrea Alba, Luis. Gral. EM. (r).
 1971a “El desarrollo económico y su ordenación técnica”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 42. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
 1971b “El Armamentismo en América Latina y la Política pacifista que se impone”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 44. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
 1969 “La política norteamericana y América Latina”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 38. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
 1938 “Espíritu profesional”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 3. Quito: Jefatura del Estado Mayor General.

Larrea, Carlos

2005 “Destrucción, etnicidad y pobreza”. Ponencia presentada en el Foro permanente por el Bienestar, la democracia y el desarrollo económico. Quito: FLACSO - UNICEF (Mimeo).

1991 “La estructura social ecuatoriana entre 1960 y 1979”. En Enrique Ayala, ed. *Nueva Historia del Ecuador* vol. 11. Quito: Corporación Editora Nacional /Grijalbo.

Larrea, Salomón

1928 “El servicio militar obligatorio conceptuado bajo los siguientes puntos para que este acuerdo esté con los intereses del Estado”. *Revista de Estudios Históricos Militares* VII (41), Quito.

Larrea, Silvana y Ernesto Trujillo

2000 “Resurgimiento del pueblo indígena”. *Mundo Diners* 214. (Marzo).

Larreátegui, Julio. Mayor. Snd. Avc.

1989 “Alas para la salud”. *Revista de las Fuerzas Armadas*. (Octubre). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.

Lovato, Juan Isaac

1980 “La Izquierda en el Ecuador: 1830-1980”. En Luis Mora, Coord., *Política y Sociedad 1830-1980*. Quito: Corporación Editora Nacional.

Loveman, Brian

1999 *For la Patria: politics and the armed forces in Latin America*. Wilmington: Scholarly Resources.

1997 “Protected democracies: antipolitics and political transitions in Latin America, 1978-1994”. En Brian Loveman y Thomas Davies Jr., *The politics of antipolitics, the military in Latinamerica*. Wilmington: SR Books.

Loveman, Brian y Thomas Davies Jr.

1997 “The politics of antipolitics”. En B. Loveman y T. Davies edit.; *The politics of antipolitics the military in Latinamerica*. Wilmington: SR Books.

Llobera, Josep R.

1996 *El dios de la modernidad*. Barcelona: Anagrama.

Loor, Wilfrido

1956 *Cartas de García Moreno*, tomo I. Quito: La Prensa Católica.

Lynch, John

1975 *Las revoluciones hispanoamericanas: 1808-1826*. Barcelona: Ariel-Historia.

Macas, Luis

2001 “CONAIE: 8 momentos vitales”. *Diario El Comercio*. (17 de noviembre).

- Macías, Edison. Tnte. Crnl. (r)
 2003 “Los ejércitos aborígenes”. *Revista de las Fuerzas Armadas del Ecuador* 135. (Mayo). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Macías, Pablo Emilio
 1963 “La Reforma Agraria y la Alianza para el Progreso”. *Boletín del Consorcio de Centros Agrícolas de Manabí* (Mayo-diciembre). Portoviejo.
- Maiguashca, Juan
 1988 “Las clases subalternas en los años 30” Ponencia para el II Encuentro de Historia Económica-Quito: BCE.
- Machuca, Luis A. Crnel. SMS. Av.
 1986 “Programa Alas para la Salud y su proyección”. *Revista de las Fuerzas Armadas*. (Octubre). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Marchán, Carlos
 1986 “Estudio Introductorio”. En *Pensamiento agrario ecuatoriano*. Quito. Banco Central del Ecuador/Corporación Editora Nacional.
 1984 “El sistema hacendario serrano, movilidad y cambio agrario”. *Cultura* 19: 63-106. (Mayo-Agosto). Quito: Banco Central del Ecuador.
 1982 “La hacienda serrana: racionalidad de producción y desarrollo capitalista”. *Cultura* 13. (Mayo-agosto). Quito: Banco Central del Ecuador.
- Martz, John D.
 1988 “The military in Ecuador: policies and politics of authoritarian Rule”. *Occasional Paper Series* N. 3 (June).
- McSherry, Patrice
 2000 “Preservando la hegemonía: la doctrina de seguridad nacional en la era después de la Guerra Fría”. *NACLA Report of the Americas* 34(3).
- Melucci, Alberto
 1994 “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”. *Zona Abierta* 69. Madrid.
- Mendoza, Carlos. Grab.
 1996 “Amenazas y retos que deben enfrentar en el futuro del Estado Ecuatoriano y las Fuerzas Armadas”. *Tarqui, fuerza terrestre*. Quito.
- Meneses, Aldo
 1996 “La relación cívico-militar: una perspectiva socio-histórica”. www.Ser2000.org.ar/articulos-revista-ser-9/meneses.htm.
- Merino N., Jorge. Cap. de I.
 1971 “El cooperativismo, breve historia e importancia”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 44. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Ministerio de Defensa Nacional
 1969 “24 de Mayo”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 38. Quito.

- 1973a “El IERAC trabaja para los campesinos y por la Patria”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 47. (Mayo). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- 1973b “Seguro del campesino, plan del IESS”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 47. (Mayo). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- 1984 “Fronteras vivas en la Región Amazónica establecidas por el Ejército”. *Revista de las Fuerzas Armadas*. (Febrero). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- 1986 “Ejército, seguridad y desarrollo”. *Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas* 4. (Febrero).
- 1999 “La 11-BCB Galápagos”, en beneficio de las comunidades de las provincias de Chimborazo y Bolívar. *Revista El Pueblo y su Ejército*. Quito.
- 1993 “Fuerzas Armadas y movimiento indígena realizaron histórico encuentro”. *Revista de las Fuerzas Armadas* N. 110. (Octubre). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Molina, Alberto
- 1993 *Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas paz y desarrollo*. Quito: ALDHU.
- Moncayo, Abelardo
- 1896 “El concertaje de indios” en *Añoranzas*, Quito: Talleres Tipográficos nacionales.
- Moncayo, Carlos. Grab.
- 2000 “Los valores militares en las Fuerzas Armadas del Siglo XXI”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 127. (Diciembre). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Moncayo, Paco. Gral. del Ejército (r).
- 1996a “Fuerzas Armadas y Desarrollo”. En Varios autores. *Fuerzas Armadas Desarrollo y Democracia*. Quito: ILDIS/CELA/Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre/Abya Yala.
- 1996b “Geopolítica americana en la post-Guerra Fría”. En *Ensayos sobre seguridad nacional*. Quito.
- 1995 “Las Fuerzas Armadas en la Política Ecuatoriana”. En *Fuerzas Armadas y Sociedad*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/ Corporación Editora Nacional.
- 1994 “Las Fuerzas Armadas hacia el siglo XXI”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 113. (Octubre). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- 1990a “Geopolítica, poder y seguridad”. *Revista de las Fuerzas Armadas* (julio). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- 1990b “Poder militar, partidos políticos y grupos de poder”. *Revista de las Fuerzas Armadas* (febrero). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- 1993 “Seguridad y relaciones cívicomilitares en Ecuador” (mimeo.)

- Monteverde, Galo
 1992 "A propósito de la reducción de las Fuerzas Armadas". *Revista de las Fuerzas Armadas*. (Julio). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Monteverde, Galo Tnte Crnl. de EM.
 1986 "La revolución social". *Revista de las Fuerzas Armadas*. (Octubre). Quito: Ministerio de Defensa Nacional
- Moreano, Alejandro
 1991 "El sistema político en el Ecuador contemporáneo". En *Nueva Historia del Ecuador*. vol. 11. Quito: CEN, Grijalbo.
 1976 "Capitalismo y lucha de clases en la primera mitad del siglo XX". En *Ecuador: pasado y presente*. Quito: Instituto de Investigaciones Económicas.
- Moscoso, Oswaldo. Subtite. Trs.
 1969 "Rumiñahui, patrono del Batallón de Transmisiones". *Revista de las Fuerzas Armadas* 40. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Mouffe Chantal
 1985 "Hegemonía política e ideología". En Julio Labastida y Martín del Campo, coord. *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*. México: Siglo XXI editores-Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM.
- Muñoz, Julio H. Tnte. Crnl. EM.
 1949 *Doctrinas militares aplicadas en el Ecuador*. Quito: s/e.
- Muñoz Borrero, Eduardo
 1974 *Con los pies torcidos por el camino recto*. Quito: Editorial Santo Domingo.
- Muñoz Vega, Pablo. S.J.
 1968 "La meta de la paz social por el camino del desarrollo". *Revista de las Fuerzas Armadas* 2. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Muratorio, Blanca
 1994a "Discursos y silencios sobre el indio en la conciencia nacional". En Blanca Muratorio, ed. *Imágenes e imagineros*. Quito: FLACSO.
 1994b "Nación, identidad y etnicidad: imágenes de los indios ecuatorianos y sus imagineros a fines del siglo XIX. En Blanca Muratorio, ed., *Imágenes e imagineros*. Quito: FLACSO.
 1982 "Protestantismo, etnicidad y clase en Chimborazo". En *Etnicidad, evangelización y protesta en Ecuador. Una perspectiva antropológica*. Quito: CIESE.
- Nunn, Frederick
 1997 "An overview of the european military missions in Latin America". En Brian Loveman y Thomas Davies Jr., eds. *The politics of antipolitics*. Wilmington: SR Books.

- O' Donell, Guillermo
 1984 "Apuntes para una teoría del Estado". En Oscar Oslak (comp.). Argentina: Paidós.
- Orellana, J. Gonzalo
 1990 "El determinismo geopolítico en el antiguo Ecuador". *Revista de las Fuerzas Armadas* (octubre). Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Ortiz, Cecilia
 2004 "Historia del Hospital San Juan de Dios". Investigación realizada para el Museo de la Ciudad. Quito (inédita).
 2001a "Identidad mestiza y movimiento indígena en Ecuador" (Monografía final para el curso Actores y Movimientos Sociales. Maestría en Ciencias Sociales). Quito: FLACSO (inédita).
 2001b "La mirada del otro: la visión del mundo indígena en la Revista *Vis-tazo*: 1980- 2000" (Monografía final para el curso Comunicación y Cultura Política. Maestría en Ciencias Sociales). Quito: FLACSO (inédita).
 2001c "Liberales y conservadores y su imagen del 'otro' indio en la construcción de la cultura política ecuatoriana: segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX" (monografía presentada en el curso de Cultura Política. Maestría en Ciencias Sociales 2000-2002, FLACSO-Ecuador (inédita).
 2000 "Textos escolares e identidad: la visión del mundo indígena en los textos escolares para la educación básica". *Memoria* 8: 153. Quito: Marka.
- Ortiz, Cecilia y Patricio Crespo
 1998 "Aportes para una historia de la educación municipal en Quito". En Carlos Paladines, ed. *La Educación Municipal*. Quito: UPS, ICAM, I. Municipio de Quito. Pp. 13-68.
- Ortiz, Gonzalo
 2002 "Militares: ¡Media vuel...ta, mar!, en *Mundo Diners* 240: 16-21
- Ortiz, Jorge
 2002 "Los militares esos desconocidos", en *Mundo Diners* 240: 15.
- Oslak, Óscar
 1999 "Formación histórica del Estado en América Latina: elementos teórico metodológicos para su estudio". Argentina: Paidós.
- Pacari, Nina
 1984 "Las culturas nacionales en el Estado multinacional ecuatoriano". *Cultura* 18a. Quito: Banco Central del Ecuador.
- Páez, Alexei
 2001 *Los orígenes de la izquierda ecuatoriana*, Quito: FIAAM - Abya-Yala.
 1990 "El movimiento obrero ecuatoriano en el período 1925-1960". En

- Enrique Ayala, ed. *Nueva Historia del Ecuador* vol. 10. Quito: Corporación Editora Nacional/ Grijalbo.
- Pallares, Amalia.
- 2000 “Bajo la sombra de Yaruquíes: Cacha se reinventa”. En A. Guerrero, comp. *Etnicidades*. Quito: FLACSO-ILDIS. Pp. 267-314.
- 1999 “Construcciones raciales, reforma agraria y movilización”. En Emma Cervone y Fredy Rivera, eds. *Ecuador racista*. Quito: FLACSO.
- Paz, Clotario
- 1938 *Larrea Alba (nuestras izquierdas)*. Guayaquil: Tribuna Libre.
- Paz y Miño, Juan J.
- 2001 *Golpe y contragolpe. La ‘Rebelión de Quito’ del 21 de enero de 2000*. Quito: Editorial Abya Yala.
- Peralta, José
- 1911 *El régimen liberal y el régimen conservador, juzgados por sus obras*. Quito: Tipología de la Escuela de Artes y Oficios.
- 1901 *La cuestión religiosa y el poder público en el Ecuador*. Quito: Tipología de la Escuela de Artes y Oficios.
- Pérez, Diego
- 2004 “FF.AA.: un actor político permanente”. *Diario El Comercio*. (25 de enero).
- Presidencia de la República del Ecuador
- 2003 *Fuerzas Armadas Ecuatorianas honor, tradición y gloria*. Quito: Secretaría General de Comunicación y Ciudadanía/Secretaría General de la Administración.
- Prieto, Mercedes
- 2004 *Liberalismo y temor: imaginando los sujetos indígenas en el Ecuador postcolonial, 1895-1950*. Quito: FLACSO-Abya Yala.
- Proaño, Leónidas
- 1989 “Compartiendo los sufrimientos y las esperanzas de los pobres”. En *Monseñor Proaño, luchador de la paz y de la vida*. Quito: FEPP/CE-DIS.
- 1980 “La Iglesia y los sectores populares: 1830-1980”. En Luis Mora, coord., *Política y Sociedad*. Quito: Corporación editora nacional.
- Quintana, J.
- 1996 “El ambiguo mundo del servicio militar obligatorio”. *Cuarto Medio* N. 42.
- Radcliffe, Sara y Sallie Westwood
- 1999 *Reconstruyendo la Nación*. Quito: Abya-Yala.
- Ramírez, Franklin
- 2000 “Impugnación regional. Demanda autonómica e identidades regionales y nacionales en el Ecuador post-firma de la paz” (Tesis pa-

ra la obtención de la Maestría en Flacso). Quito: FLACSO (mimeo).

Rial, Juan

- 1998 “Legitimidad social y nuevos roles de las Fuerzas Armadas en América Latina”. En *Estrategias civil-militares para el Ecuador del siglo XXI*. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, American University, ILDIS, CONUEP.

Rival, Laura

- 2000 “La escolarización formal y la producción de ciudadanos modernos en la Amazonía ecuatoriana”. En Andrés Guerrero, comp. *Etnicidades*. Quito: FLACSO, ILDIS.
- 1994 “Los indígenas huaorani en la conciencia nacional: alteridad representada y significada”. En Blanca Muratorio, ed. *Imágenes e imagineros*. Quito: FLACSO.

Rivera, Fredy

- 2001 “Democracia minimalista y ‘fantasmas’ castrenses en el Ecuador contemporáneo”. En Martín Tanaka, director de la investigación. *Las Fuerzas Armadas en la Región Andina, ¿no deliberantes o actores políticos?* Lima: Comisión Andina de Juristas/ Embajada de Finlandia.
- 1999 “Las aristas del racismo”. En Emma Cervone y Fredy Rivera, eds. *Ecuador Racista*. Quito: FLACSO.
- 1998a “Los indigenismos en el Ecuador: de paternalismos a otras representaciones”. *América Latina Hoy* 19. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- 1998b “El ocaso de las representaciones: estado, nación y etnicidad en el Ecuador”. En Cristóbal Landázuri, Comp. *Memorias del Primer Congreso Ecuatoriano de Antropología Vol.II*. Quito: Dpto. de Antropología / Escuela de Antropología PUCE, MARKA.

Rivera, Fredy y Xavier Andrade

- 1990 “El movimiento campesino e indígena en el último período: fases, actores y contenidos políticos”. En Enrique Ayala, ed., *Nueva historia del Ecuador* tomo 11. Quito: Grijalbo-CEN.

Robertson, Roland

- 1998 “Identidad Nacional y globalización”. *Revista Mexicana de Sociología* vol. 60. (Enero marzo).

Rodríguez Lara, Guillermo. Gral. del Ejército

- 2003 “Dine: una feliz, fructífera e incontrastable realidad”. En *30 años 1973-2003*. Quito: Dirección de Industrias del Ejército.
- 1973a “Estamos Trabajando”. *Revista de las Fuerzas Armadas* 47. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.

- 1973b “Reforma Agraria. Ley de Aguas y su reglamento”. Quito: Editorial Cirjue.
- Rojas, F. y R. Ayara
 1998 “Visión comparada del servicio militar en las Américas”. Ponencia presentada en el Foro Nacional Sobre el Servicio Militar Obligatorio del Ministerio de Defensa Nacional. Santiago de Chile. (Mayo – julio).
- Rostov, W. W.
 1997 “The United States and the American Military”. En: Loveman y Davies eds. *Politics of Antipolitics*. Wilminston: SR Books.
- Rouquié, Alain
 1981 “Dictadores, Militares y Legitimidad en América Latina”. *Dictaduras y dictadores. Crítica y utopía latinoamericana de Ciencias Sociales* 5. Buenos Aires.
 1984 *El estado militar en América Latina*. México: Sigloveintiuno Editores.
- Salman, Ton
 2003 “Clavar gelatina contra la pared, la cultura política: entre sondeo y excusa mayor”. *Iconos* 15: 28-29. Quito: FLACSO.
- Samaniego, Juan
 1999 “El conflicto territorial Ecuador-Perú en la cotidianidad y en los textos escolares”. En Adrián Bonilla, ed., *Ecuador-Perú horizontes de la negociación y el conflicto*. Quito: FLACSO.
- Samaniego, Pablo
 2004 “La política fiscal en dolarización: una reflexión”. En Fánderson y Julio Oleas, ed. *Antología de Economía Ecuatoriana*. Quito: FLACSO.
- Sánchez, Abelardo
 2001 “El movimiento indígena en el Ecuador es protagonista”. En *Qué Hacer* 133: 30-35. Lima: Desco.
- Sánchez, Francisco y Flavia Freidenberg
 1998 “El proceso de incorporación política de los sectores indígenas en el Ecuador”. *América Latina Hoy* 19. Salamanca: Universidad de Salamanca. Pp. 65-79.
- Sandoval Barona, Telmo. Gral. del Ejército
 2000 “La Fuerza Terrestre en apoyo al desarrollo económico y social y en la seguridad interna del Ejército”. *Tarqui Fuerza Terrestre*. Quito.
- Saona, Miguel, Alm.
 2002 “Somos deliberantes, pero...”. *Mundo Dinero* 240. Quito: Dinediciones.
- Selmeski, Brian
 2001a Syllabus para el curso “Las Fuerzas Armadas Latinoamericanas: una

- vista sociocultural”, noviembre 2001-enero 2002. Quito: FLACSO (mimeo.)
- 2001b “Warriors and citizens: racial stereotypes and military roles of Ecuadorian indigenous conscripts”. Paper prepared for REDES 2001. N.Y: Syracuse University. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- 2002 “Marginal soldiers, new men, Patriotic citizens: gender, ethnicity and nationalism in Ecuador’s multicultural army”. Draft Dissertation outline (mimeo).
- 2003 “Multicultural Citizens, Monocultural Men: Indians, conscription, and development in the Ecuadorian Army”. Dissertation abstract, summary, and outline (mimeo).
- Serrano B., Obdulio, Tnte. Crnel. A.
1946 *Inauguración de la Carretera al Puyo*. Quito: Departamento de Obras Públicas Militares del Ministerio de Defensa Nacional.
- Schirmer, Jennifer
2001 *Intimidaciones del proyecto político de los militares*. Guatemala: FLACSO.
- Schoultz, Lars
1994 “U.S Values and approaches to hemispheric security issues”. En L.Schoultz, W. C. Smith y Augusto Varas, ed. *Security, democracy and development in U.S - Latin American Relations*. New Brunswick-London: Transaction Publishers.
- Smith, Anthony
1993 “La legitimación dualista, matriz del nacionalismo étnico”, en Gil Delanno y J. Taguief, París: Kime.
- Smith, Linda y Jim Belote
2000 “Fuga desde abajo: cambios individuales e identidad étnica en el sur del Ecuador. En Andrés Guerrero, comp. *Etnicidades*. Quito: FLACSO/ILDIS.
- Stedman Jones, Gareth
1984 “Reconsideración del socialismo utópico”. En Raphael Samuel, ed. *Historia popular y teoría socialista*. Barcelona: Grijalbo Crítica.
- Sylva, Erika
1995 *Los mitos de la ecuatorianidad*. Quito: Abya-Yala.
- Sylva, Paola
1991 *La organización rural en el Ecuador*. Quito. Cepp - Abya Yala.
- Tarrow, Sydney
1997 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Universitaria.
- Tehis-Cen
1993 *Cronología comparada de la historia ecuatoriana*. En Enrique Ayala,

- ed. *Nueva Historia del Ecuador* Vol. 14. Quito: Corporación Editora Nacional/Grijalbo.
- Tilly, Charles
2000 "Acción colectiva". *Apuntes de Investigación* 6: 9-32.
- Tobar Donoso, Julio
1930 "La instrucción pública en el Ecuador de 1830 a 1930". En J. Gonzalo Orellana *El Ecuador en cien años de independencia 1830-1930*. Quito: Salesiana.
- Torres Rivas, Edelberto
1977 "La nación: problemas teóricos e históricos". En Norbert Lechner, ed. *Estado y política en América Latina* México: Sigloveintiuno.
- Trujillo, Patricio
2001 *De buenos salvajes a salvajes modernos*. Quito: FIAAM – Abya Yala.
- Ulcuango, Ricardo
2000 "Las transformaciones políticas actuales del movimiento indígena ecuatoriano". Mimeo.
- Vaca Rodas, Eduardo
1999 "El reto de preservar el estado nacional". *Revista El pueblo y su Ejército*. Quito.
- Vallejo, Margarita (1991). "Los roles de las Fuerzas Armadas en el post retorno". (Tesis para la obtención de la Maestría en Ciencias Políticas). Quito: FLACSO.
- Varas, Augusto
1978 "Hegemonic crisis and military governments". Paper presented in the 9th. World Congress of Sociology. Upsala.
- Varas, Augusto y Bustamante, Fernando
1978 *Fuerzas Armadas y Política en Ecuador*. Quito: Ediciones Latinoamérica.
- Velasco, Fernando
1979 *Reforma agraria y movimiento campesino indígena de la sierra*. Quito: El Conejo.
1978 "Líneas básicas para un programa de desarrollo de los sectores marginales del campo". *Cultura* 1: 26-39. Quito: Banco Central del Ecuador.
- Verduga, César
1977 "El desarrollo económico ecuatoriano contemporáneo: una aproximación (análisis del período 1972-1975)". *Revista de Ciencias Sociales* 3-4. Quito: Universidad Central del Ecuador.
- Vicuña, Leonardo
1987 "Estudio Introductorio". En *La Planificación en el Ecuador*. Quito: Banco Central del Ecuador/Corporación Editora Nacional.

- Von Treintschke, Heinrich
 1996 “El nacionalismo en la teoría clásica”. En Montserrat Guibernau, ed., *Los nacionalismos*. Barcelona: Ariel.
- Wade, Meter
 2000 *Raza y etnicidad en Latinoamérica*. Quito: Abya-Yala.
- Wallerstein, Immanuel y Etienne Balibar
 1986 “La construcción de los pueblos: racismo, nacionalismo, etnicidad”. En Immanuel Wallerstein y Etienne Balibar. *Raza, nación y clase*. Madrid: IEPALA.
- Weber, Max
 [1922] 1977 *Economía y Sociedad*. México: FCE.
- Yáñez Cossío, Consuelo
 1996 *La educación indígena en el Ecuador*. Quito: I. Municipio de Quito.
- Zamosc, León
 1995 *Estadística de las áreas de predominio étnico en la sierra ecuatoriana*. Quito: Abya-Yala.

Trabajos de investigación individual de estudiantes, miembros de las FFAA, del Curso Superior de Seguridad Nacional y Desarrollo del Instituto de Altos Estudios Nacionales

(Inéditos)

- Andrade, Jaime. Crnl. EM.
 1984 “La Federación Shuar y la nacionalidad ecuatoriana”. Quito: IAEN.
- Andrade, Rafael. Crnl. EM.
 1973 “Análisis y sugerencias sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo integral del país”. Quito: IAEN.
- Burbano, Luis. Tcrn. EM.
 1991 “Las fuerzas armadas y la problemática indígena en el Ecuador”. Quito: IAEN.
- Estrada, Vicente. Crnl.
 1979 “La seguridad fronteriza. Asentamiento de colonos militarmente organizados”. Quito: IAEN.
- Fiallo F., Fernando. Tcrn. EM.
 1992 “El problema indígena y su influencia en la estabilidad política del país”. Quito: IAEN.
- Gudiño B., Nelson.
 1991 “El problema indígena frente a la integración nacional”. Quito: IAEN.

- Hernández, Jorge. Crnl., Julio Burgos Tcrn. Avc. y Miguel Rosero
1993 “Las fuerzas armadas y los nuevos problemas de seguridad en Ecuador. Quito: IAEN.
- Pazmiño Fierro, J. Arturo. Crnl. Policía (1976). “¿Tiene vigencia la sociedad rural y agraria en Ecuador?”. Quito: IAEN.
- Suárez, Manuel E., Crnl. EM.
1988 “Presencia del Ejército en el desarrollo educativo de las provincias de Loja y el Oriente”. Quito: IAEN.
- Velasco, Fernando
1990 Tcrn. EM. “La política y las fuerzas armadas: análisis crítico a partir de la Revolución Juliana”. Quito: IAEN.
- Viteri, Fernando, Crnl. EM.
1995 “La teología de la liberación y su incidencia en la seguridad nacional”. Quito: IAEN.

Entrevistas de noviembre, 2003

- Gral. (r) José Gallardo Román
Gral. (r) Homero Berrazueta
Crnl. Patricio Haro Ayerve